

ACTUALIZADA AL 29 DE JUNIO DE 2021

**Ley Nº 7557 de 20 de octubre de 1995
Publicada en La Gaceta No. 212 de 8 de noviembre de 1995,
y sus reformas.**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES**

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. La presente ley regula las entradas y las salidas, del territorio nacional, de mercancías, vehículos y unidades de transporte; también el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de él o de las entradas y salidas, de conformidad con las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.

ARTÍCULO 2.- Alcance territorial .El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional.

Los vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero.

CPOL. 6

LGA 79-211-238 b)-266

RLGA 211

Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, "Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá".

ARTÍCULO 3.- División del territorio aduanero. El territorio aduanero se divide en zona primaria o de operación aduanera y zona secundaria o de libre circulación.

Se denomina **zona primaria aduanera o de operación aduanera** toda área donde se presten o se realicen, temporal o permanentemente, servicios, controles u operaciones de carácter aduanero.

La parte restante del territorio aduanero constituye **zona secundaria o de libre circulación**.

Ley del Régimen de Zonas Francas. "ARTÍCULO 13.- Declárase Zona Aduanera Primaria, las áreas donde se ubiquen las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas." (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1º, inciso c), de la ley No.7830 de 22 de setiembre de 1998)

ARTÍCULO 4.- Fuentes del régimen jurídico aduanero. La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se sujetará al siguiente orden:

- a) La Constitución Política.
- b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana.
- c) Las leyes y los demás actos con valor de ley.
- d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia.
- e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo.
- f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos.

Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.

Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.

LGA 266
CNPT 2
LGAP 6-7

Convenios Internacionales

Anexo del Convenio que establece un Consejo de Cooperación Aduanera, Personería Jurídica, Privilegios e Inmunidades del Consejo, Ley 8112 - A del 18/07/2001, LG 152 del 9 de agosto de 2001.

Doctrina

Tribunales Supranacionales. La Corte Centroamericana de Justicia. Alejandro Daniel Perotti, EN Revista Costarricense de Derecho constitucional, Tomo III, San José, Instituto Costarricense de Derecho Constitucional, Investigaciones Jurídicas S. A., 2002, 153-252

Apuntes sobre la enseñanza del Derecho Comunitario Centroamericano, José Miguel Alfaro Rodríguez, EN Revista de Ciencias Jurídicas, X-143

El estatus del CAUCA y de los organismos centroamericanos a la luz de la formación de política aduanera, David Gantz, EN Revista de Ciencias Jurídicas, XVI-199

ARTÍCULO 5.- Interpretación del régimen jurídico aduanero. El régimen jurídico aduanero deberá interpretarse en la forma que garantice mejor el desarrollo del comercio exterior de la República, en armonía con la realidad socioeconómica imperante al interpretarse la norma y los otros intereses públicos, a la luz de los fines de este ordenamiento.

La analogía es un método admisible para integrar el régimen jurídico aduanero; pero, en virtud de ella, no podrán crearse tributos, franquicias ni exenciones.

LGA	266
CNPT	6-7-8
LGAP	10

Artículo 5 bis.- Consignación de impuestos recuperados. La ley de presupuesto de la República de cada año, consignará al Servicio Nacional de Aduanas, además del presupuesto ordinario asignado anualmente a esa dependencia, un crédito presupuestario equivalente a un veinte por ciento (20%) de los impuestos recuperados por las autoridades aduaneras, por concepto de contrabando y defraudación fiscal aduanera. Estos recursos serán utilizados por el Servicio para financiar sus gastos de gestión, fiscalización e incentivos salariales y se girarán mediante transferencia. (Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

Artículo 6.- Fines. Los fines del régimen jurídico aduanero serán:

- a) Aplicar todos los Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales vigentes, así como la normativa nacional al respecto.
- b) Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior.
- c) Facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y de comercio exterior.

Cualquier acto que viole los fines del régimen jurídico aduanero constituirá una desviación de poder. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 266

Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 1994, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

Objetivos del Acuerdo de Asociación entre Panamá y Costa Rica

Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, “Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá”.

El texto original del artículo era el siguiente:

“Artículo.- Fines. Son fines del régimen jurídico aduanero:

- a) Facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y de comercio exterior.*
- b) Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior.*
- c) Desarrollar y permitir la ejecución de los preceptos de la legislación comunitaria centroamericana y de los convenios y tratados internacionales de los que Costa Rica forme parte.*

Cualquier acto que viole los fines del régimen jurídico aduanero constituirá una desviación de poder.”

TÍTULO II

SISTEMA ADUANERO NACIONAL

CAPÍTULO I CONCEPTO

ARTÍCULO 7.- Sistema Aduanero Nacional. El Sistema Aduanero Nacional estará constituido por el Servicio Nacional de Aduanas y las entidades, públicas y privadas, que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito previsto por el régimen jurídico aduanero.

LGA 266

CAPÍTULO II SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Ver CNPT Título VI Derechos y Garantías del Contribuyente. Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.

“Artículo 166.- Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo regula los derechos y las garantías fundamentales de los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea en su condición de contribuyentes, responsables y de toda persona física o jurídica a la cual la ley creadora del tributo le asigne el cumplimiento de deberes u obligaciones, sea como retenedores, obligados a ingresar a cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a las direcciones generales de Aduanas, Hacienda, Tributación, así como de la Dirección General de Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, todos los cuales se denominan en el presente título como “contribuyentes”.

Los derechos y las garantías contenidos en el presente Código se entienden sin perjuicio de los demás reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico.

Para los fines de aplicación e interpretación del presente título se entenderá por “Administración Tributaria” el órgano, sea la Dirección General de Tributación, la **Dirección General de Aduanas**, así como la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Policía de Control Fiscal, a la cual la ley le atribuye las competencias de gestión, normativa, fiscalización y recaudación del tributo”. (Incluido por Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

Ver CNPT definición de Administración Tributaria.

“Artículo 99.- Concepto y facultades

Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código.

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Las normas generales serán emitidas mediante resolución general y consideradas criterios institucionales. Serán de acatamiento obligatorio en la emisión de todos los actos administrativos y serán nulos los actos contrarios a tales normas.

Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando el presente Código otorga una potestad o facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a la Dirección General de la Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de competencia.” CNPT reformado por Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

DE 41198-H de 1 de junio de 2018, Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Asesora de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda, modificación y adición al Decreto No. 35366 de fecha 24 de junio del 2009, adición a los Decretos No. 35688 de fecha 27 de noviembre del 2009, No. 25270 de fecha 14 de junio de 1996, 35940 de fecha 12 de marzo del 2010 y derogatoria del inciso c) del artículo 17 al Decreto No. 35366. Publicado La Gaceta 127 del 13 de julio de 2018. En concordancia con el artículo 15 de la Ley No. 9416 “Ley para

Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal” del 14 de diciembre de 2016, que crea la Dirección de Asuntos internos en el Ministerio de Hacienda que contará con un régimen especial de contratación.

Artículo 8.- Servicio Nacional de Aduanas. Servicio Nacional de Aduanas será el órgano de control del Comercio Exterior y de la Administración Tributaria; dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a su cargo la aplicación de la legislación aduanera.

El Servicio estará constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros; dispondrá de personal con rango profesional y con experiencia en el área aduanera y/o de comercio exterior, pertinentes conforme a los acuerdos, convenios y tratados internacionales vigentes.

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior establecerán una instancia de coordinación interinstitucional, cuya por función será velar por la correcta aplicación de los controles de comercio exterior aptos para ejercer la gestión aduanera.

Para establecer **actividades integrales de fiscalización**, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Hacienda y los demás órganos de la Administración Tributaria Aduanera, adscritos al Ministerio de Hacienda, estarán facultados legalmente para intercambiar la información tributaria o aduanera que obtengan, por cualquier medio lícito, de los contribuyentes, responsables, terceros, auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores, productores y consignatarios. Dichas autoridades deberán guardar **confidencialidad** de la información suministrada, en los términos ordenados por la legislación tributaria y, en caso de incumplimiento, quedarán sujetas a las responsabilidades legalmente establecidas. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)*

LGA 20
CNPT 99
LGAP 83
RLGA 5-20 r)

El texto original del artículo era el siguiente:

“Artículo 8.- Servicio Nacional de Aduanas El Servicio Nacional de Aduanas es el órgano de la Administración Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene a su cargo la aplicación de la legislación aduanera.

El Servicio estará constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros y dispondrá de personal con rango profesional, especializado para ejercer la gestión aduanera.

Los órganos del Ministerio de Hacienda que administren los tributos, podrán establecer planes conjuntos de fiscalización que incluyan la coordinación de funciones y el intercambio de información tributaria de sujetos pasivos para lograr una eficiente recaudación tributaria.”

Concordancias

Ley 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

“Artículo 79-Libre acceso a la información. Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar la efectividad de la presente Ley, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. No obstante, la Contraloría General de la República solo podrá revisar documentos de carácter privado según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la presente Ley.”

CGR R-DC-2019 de 14 de octubre de 2019. “Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares”, los cuales serán de acatamiento obligatorio para las Auditorías Internas del Sector Público.

CGR Resolución R-DC-75-2017 de 9 horas del 20 de diciembre de 2017, Directrices para el Manejo de Información de Acceso Restringido en la Contraloría General de la República. LG 74 de 27 de abril de 2018.

“Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la aplicación de las presentes políticas se entenderá por:

***a. Derecho de acceso a la información de interés público:** se refiere al derecho fundamental establecido en el artículo 30 constitucional que confiere a toda persona el libre acceso a la información de interés público, incluida aquella bajo el control de la Contraloría General y las dependencias públicas, y la obligación de éstas de suministrarla, independientemente de su soporte.*

***b. Información de interés público:** comprende toda la información que se encuentre en las dependencias públicas o entidades privadas que por su trascendencia para el interés público es susceptible de ser suministrada a cualquier persona así como aquella que contempla el artículo 7 de la Ley N° 8422, por el interés que tiene para la colectividad, siempre que no existan restricciones constitucionales y/o legales que impidan el acceso a la misma.*

***c. Información confidencial:** comprende toda aquella información cuyo manejo debe ser de acceso restringido frente a terceras personas en virtud de que por Constitución, por ley o conforme a la ley se haya declarado como secreto de Estado, confidencial o ser considerada de interés privado, pero no de interés público.*

***d. Identidad del denunciante:** Se entenderá por este término, toda aquella información contenida en los documentos de una investigación que pudieran servir para la identificación de la persona física o jurídica que denuncia.*

***e. Información privada:** comprende toda aquella información protegida por el derecho a la intimidad y a la vida privada establecido por el artículo 24 de la Constitución, abarcando las comunicaciones y los documentos privados -salvo que sean de interés público-, así como los datos sensibles y los datos personales de acceso restringido según los términos de la **Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968 de 07 de julio de 2011**. La información mantiene su carácter privado cuando haya sido suministrada únicamente con un fin determinado y no para ser difundida a terceros.*

***f. Secreto de Estado:** comprende aquella información atinente a la seguridad nacional (interna o externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional Público.”*

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968 de 07 de julio de 2011. La información mantiene su carácter privado cuando haya sido suministrada únicamente con un fin determinado y no para ser difundida a terceros.

Ley 9416 para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Capítulo II, Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Ver intercambio de información con autoridades extranjeras, intercambio de información entre órganos de la Administración Tributaria, utilización en procesos de verificación y fiscalización.

Artículo 9.- Funciones del Servicio Nacional de Aduanas. Las funciones del Servicio Nacional de Aduanas serán:

- a) Aplicar todos los Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales debidamente ratificados por el Gobierno de Costa Rica, que estén vigentes en el plano internacional, así como la normativa nacional en materia aduanera.
- b) Ejercer el control del territorio aduanero establecido en el artículo 2 de esta Ley.
- c) Cumplir, dentro del marco de su competencia, los lineamientos y las directrices que se deriven de la política económica del Gobierno de la República.
- d) Ejecutar el control aduanero de las políticas de comercio exterior vigentes.
- e) Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y tecnológicos y a los requerimientos del comercio internacional.
- f) Aplicar, en coordinación con las demás oficinas competentes, las regulaciones no arancelarias que norman las entradas y salidas del territorio aduanero de vehículos, unidades de transporte y mercancías.
- g) Ejercer, en coordinación con las demás oficinas tributarias, las facultades de administración tributaria respecto de los tributos que generan el ingreso, la permanencia y salida de mercancías objeto del comercio exterior.

h) Generar estadísticas de Comercio Internacional.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 9.- Objetivos del Servicio Nacional de Aduanas. Son objetivos del Servicio Nacional de Aduanas:

- a) Ejercer, en coordinación con las demás oficinas tributarias, las facultades de administración tributaria, respecto de los tributos que generan el ingreso, la permanencia y salida de mercancías objeto del comercio exterior.*
- b) Apoyar el desarrollo del comercio exterior.*
- c) Aplicar las regulaciones no arancelarias que norman las entradas y salidas de vehículos, unidades de transporte y mercancías del territorio aduanero, en coordinación con las demás oficinas competentes.*
- d) Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, para adaptarlos a los cambios técnicos y tecnológicos y a los requerimientos del comercio internacional.*
- e) Generar las estadísticas del comercio exterior.*
- f) Cumplir, dentro del marco de su competencia, con los lineamientos y las directrices que se deriven de la política económica del Gobierno de la República.”*

ARTÍCULO 10.- Organización administrativa. La organización y reglamentación de la estructura organizadora del Servicio Nacional de Aduanas estará a cargo del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de los órganos creados por esta ley y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano.

La organización interna se establecerá con fundamento en los principios del **servicio al usuario**, la armonización de los procedimientos, la simplificación, flexibilidad y eficiencia en el control y la fiscalización.

RLGA 29 y ss.

ARTÍCULO 11.- Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta competencia, le corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al Servicio Nacional de Aduanas; la emisión de políticas y directrices para las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo; el ejercicio de las atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones interpuestas ante ella por los administrados.

Asimismo, la Dirección coordinará y fiscalizará la actividad de las aduanas y dependencias a su cargo, para asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero, acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la emisión de directrices y normas generales de interpretación, dentro de los límites de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

LGA	142 (Golfito), 267
CNPT	99
RLGA	4-6 y ss.

- Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), DE 42196-H de 12 de febrero de 2020, publicado en Alcance 22 a La Gaceta 30 de 14 de febrero de 2020.

-Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito No. 26999-H-MEIC-MP de 5 de mayo de 1998. Art. 8 Atribuciones de la Dirección. DEROGADO POR DE 42196-H publicado 14 febrero 2010
-Directriz DVMI-D-002-2018 de 24 de abril de 2018, Mecanismos de control para la identificación de bebidas de contenido alcohólico (vinos, cervezas, aguardientes y licores), importadas o nacionales, en el Depósito Libre Comercial de Golfito". La Gaceta 76 de 2 de mayo de 2018. Entre otras disposiciones, establece la posibilidad del decomiso en su artículo 3.

Artículo 12.- Titular de la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas estará a cargo de un director general y de un subdirector. Este último sustituirá al primero durante sus ausencias; tendrá las mismas atribuciones y desempeñará las funciones que se le otorguen por reglamento, así como las demás que el superior le delegue. El nombramiento del director general corresponderá al titular del Ministerio de Hacienda.

El director general y el subdirector de aduanas deberán tener, por lo menos, el grado académico de licenciatura universitaria con experiencia profesional en el área aduanera y/o de comercio exterior.

A esos funcionarios se les prohíbe:

- 1) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.
- 2) Desempeñar otro cargo público o prestar otros servicios a los sujetos sometidos a su autoridad. De esta prohibición se exceptúa el ejercicio de la docencia universitaria.
- 3) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que, directa o indirectamente, tengan interés personal o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o afinidad.

El **director general de Aduanas** podrá **delegar**, en los órganos que él designe, el **inicio** y la **instrucción** de los procedimientos en materia técnica y administrativa.

La delegación establecida en el párrafo anterior deberá seguir todos los procedimientos que dispone la Ley de Administración Pública.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA 6-7-8

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 12.-Titular de la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas estará a cargo de un director general y un subdirector general, quien lo sustituirá en su ausencia y tendrá las funciones que se le otorguen por reglamento, en los campos técnico y administrativo, así como las demás que el superior le delegue. El nombramiento del director general corresponderá al titular del Ministerio de Hacienda.

El director y subdirector generales de aduanas deben tener, por lo menos, el grado académico de licenciatura en economía, administración pública, derecho o comercio exterior y experiencia reconocida en el ramo del comercio exterior.

A esos funcionarios se les prohíbe:

- 1) *Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.*
- 2) *Desempeñar otro cargo público o prestar otros servicios a los sujetos sometidos a su autoridad. De esta prohibición se exceptúa el ejercicio de la docencia universitaria.*
- 3) *Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que, directa o indirectamente, tengan interés personal o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o afinidad.*

La violación de las prohibiciones anteriores constituirá falta grave del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa, sin perjuicio de otras responsabilidades que le quepan.”

Ley General de la Administración Pública
Delegación de funciones

Artículo 13.- Aduana. La aduana es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, así como de la **coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.**

Las aduanas tendrán la facultad de aplicar las exenciones tributarias que la ley indique expresamente y las relativas a materia aduanera creadas por acuerdos, convenios y tratados internacionales.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CNPT 61 a 64

Puestos Aduaneros Ver Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Puesto de **Golfito**, Ver Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito, 26999-H-MEIC-MP de 5 de mayo de 1998, Art. 9. DEROGADO POR Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), DE 42196-H de 12 de febrero de 2020, publicado en Alcance 22 a La Gaceta 30 de 14 de febrero de 2020, modificado por DE 42823-H-MEIC del 1 de febrero de 2021.

Puesto **Las Tablillas**, resolución RES-DGA-119-2015, La Gaceta 112 del 11 de junio de 2015.

Ver delegación de funciones de los Gerentes de la Aduana a los subgerentes de la Aduana:
por ejemplo:

Aduana Central

RES-AC-DN-2045-2018 de 18 de setiembre de 2018: “VI.—Rige a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta y **hasta el 14 de noviembre de 2018.**” Publicada LG 210 del 13 de noviembre de 2018.

RES-AC-DN-1043-2018 del 03 de mayo del 2018, publicada LG 87 del 18 de mayo del 2018.

RES-AC-DN-2070-2013 de 28 de octubre de 2013 publicada en La Gaceta 46 de 6 de marzo de 2014. Rige por un año contado a partir de la fecha de publicación.

RES-AC-DN-2892-2018 de 4 de diciembre de 2018: “VI.—Rige a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta y **hasta el 02 de mayo del 2019.**” Publicada LG 43 del 1 de marzo de 2019.

Dirección General de Aduanas. Atención y firma de trámites será competencia del Gerente y/o Subgerente de la **Aduana de Caldera**, esto por el **plazo de 2 años**. LG 219. 13-11-14. Lista taxativa en de los trámites que serán competencia del Gerente y/o Subgerente. Disponer que para aquellos casos en que actué el subgerente, en los casos antes mencionados se deberá indicar expresamente en los actos administrativos.

Aduana Santamaría

RES-AS-DN-1397-2019 de las 08:15 horas del 22 de abril de 2019. Publicada en La Gaceta 187 de 3 de octubre de 2019, rige por 1 año.

RES-AS-DN-1848-2020 de las 13:45 horas del 21 de abril de 2020, Publicada en La Gaceta 176 de 19 de julio de 2020, rige por 1 año.

Aduana de Limón

RES-AL-2434-2019. Publicada Alc 246 a LG 211 de 6 de noviembre de 2019

Aduana de Peñas Blancas

RES-APB-DN-0345-2021 DE LAS 11 horas del 16 de marzo de 2021, Publicada en La Gaceta 71 de 14 de abril de 2021, RIGE POR TIEMPO INDEFINIDO (¿) a partir de la publicación. Confrontar LGAP

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- Aduana. La aduana es la oficina técnica administrativa encargada de las gestiones aduaneras, el control de las entradas, permanencia, salidas de las mercancías y la coordinación de la actividad aduanera que se desarrolle en su zona de competencia territorial o funcional.

Las aduanas tendrán la facultad de aplicar las exenciones tributarias que expresamente indique la ley; además, podrán autorizar las relativas a materia aduanera, creadas por convenios internacionales o leyes, según las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda.”

ARTÍCULO 14.- Competencia territorial. El Ministerio de Hacienda definirá los asientos geográficos y determinará la competencia territorial de las aduanas, así como la creación, el traslado o la supresión de estas y de sus funciones, atendiendo a razones de oportunidad, control, racionalización o eficiencia del servicio y del comercio exterior.

Las aduanas prestarán sus servicios durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, salvo que la Dirección General de Aduanas defina y justifique, ante el Ministerio de Hacienda, en casos excepcionales y/o de fuerza mayor, horarios especiales para determinadas aduanas.

Las autoridades aduaneras podrán ejercer sus funciones fuera de los locales donde normalmente se llevan a cabo las formalidades aduaneras, con el fin de atender las necesidades de los usuarios del servicio aduanero.

La competencia de una oficina de aduanas puede especializarse en determinadas operaciones, regímenes aduaneros o clases de mercancías.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA 3

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- Competencia territorial. El Ministerio de Hacienda definirá los asientos geográficos y determinará la competencia territorial de las aduanas, así como la creación, el traslado o la supresión de estas y de sus funciones, atendiendo a razones de oportunidad, control, racionalización o eficiencia del servicio y del comercio exterior.

Las aduanas prestarán sus servicios durante las veinticuatro horas, todos los días del año, salvo que la Dirección General de Aduanas defina horarios especiales para determinadas aduanas.

Las autoridades aduaneras podrán ejercer sus funciones fuera de los locales donde normalmente se llevan a cabo las formalidades aduaneras, con el fin de atender las necesidades de los usuarios del servicio aduanero.

La competencia de una oficina de aduanas puede especializarse en determinadas operaciones, regímenes aduaneros o clases de mercancías.”

ARTÍCULO 15.- Aduanas yuxtapuestas. En virtud de lo previsto en convenios internacionales, podrán crearse aduanas yuxtapuestas, donde se realicen, conjuntamente, los controles que deben efectuar los servicios aduaneros de los estados vecinos, en un solo lugar ubicado en la zona fronteriza, para facilitar y acelerar el cumplimiento de las formalidades aduaneras.

CAPÍTULO III DEL PERSONAL ADUANERO

Artículo 16.—Personal aduanero. El personal aduanero deberá conocer y aplicar la legislación atinente a la actividad aduanera. En el desempeño de los cargos, los funcionarios aduaneros serán personalmente responsables ante el Fisco por las sumas que este deje de percibir debido a acciones u omisiones dolosas o por

culpa grave, **sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurran**. Igualmente, serán responsables por no efectuar los controles respectivos de las mercancías objeto de comercio exterior, de conformidad con el artículo 93 de esta Ley, los que se establezcan por vía reglamentaria o los que estipule la Dirección General. **La responsabilidad civil prescribirá en el término de cuatro años, contados a partir del momento en que se cometa el delito.**

Constituirán **falta grave de servicio**, sancionable conforme al régimen disciplinario, el **retraso injustificado** en los procedimientos en los cuales intervengan los funcionarios aduaneros, así como el **recibir obsequios** de mercancías de cualquier clase que se encuentren a bordo de los vehículos o las unidades de transporte que ingresen al territorio aduanero nacional o se hallen bajo control aduanero.

Durante la sustanciación del **procedimiento administrativo** tendiente al despido por actuaciones irregulares de los servidores del Servicio Nacional de Aduanas, que puedan producir perjuicio económico al Fisco, el director general de Aduanas deberá solicitar al Ministro de Hacienda la suspensión provisional de labores, con goce de salario; lo anterior mientras dure el procedimiento de gestión de despido, para lograr el éxito de la investigación que se realiza y salvaguardar las relaciones de servicio, documentación e información. El Ministro de Hacienda deberá comunicar a la Dirección General de Servicio Civil, la decisión acordada. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGAP 199 y ss.-203 y ss.-211 y ss.
RLGA 238

Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220 de 4 de marzo de 2002, Alcance 22 a La Gaceta 49 de 11 de marzo de 2002

*DE 41198-H de 1 de junio de 2018, **Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Asesora de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda**, modificación y adición al Decreto No. 35366 de fecha 24 de junio del 2009, adición a los Decretos No. 35688 de fecha 27 de noviembre del 2009, No. 25270 de fecha 14 de junio de 1996, 35940 de fecha 12 de marzo del 2010 y derogatoria del inciso c) del artículo 17 al Decreto No. 35366. Publicado La Gaceta 127 del 13 de julio de 2018*

El texto original del artículo era el siguiente:

*“ARTÍCULO 16.- **Personal aduanero.** El personal aduanero está obligado a conocer y aplicar la legislación atinente a la actividad aduanera. En el desempeño de sus cargos, los funcionarios aduaneros serán personalmente responsables ante el fisco por las sumas que deje de percibir por acciones u omisiones dolosas o por culpa grave, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurran. La responsabilidad civil prescribe en el término de cuatro años contados a partir del momento en que se cometió el delito.*

Constituirá falta grave de servicio, sancionable conforme al régimen disciplinario, el retraso injustificado en los procedimientos en los cuales intervengan los funcionarios aduaneros.”

CONCORDAR CAUCA IV.

“Artículo 13. Responsabilidades de los funcionarios y empleados. Los funcionarios y empleados del Servicio Aduanero, serán responsables por su actuación, culposa o dolosa en el desempeño de sus cargos y funciones.”

ARTÍCULO 17.- Admisión. Para ingresar al Servicio Nacional de Aduanas, tanto en el nivel técnico básico como en niveles superiores, se exigirán los perfiles ocupacionales requeridos según lo determine el puesto por desempeñar y los conocimientos documentados en títulos académicos reconocidos por las autoridades educativas nacionales.

Ley No. 7485 de 6 de abril de 1995, Alcance No. 18 a La gaceta No. 99 de 24 de mayo de 1995
Ley aprobatoria del CAUCA 3

ARTÍCULO 18.- Carrera administrativa. La carrera administrativa aduanera estará constituida por el conjunto de clases de los niveles necesarios para realizar la gestión aduanera, así como por las normas reguladoras de las funciones, los requisitos y la retribución de cada clase.

Los requisitos académicos y legales de ingreso, así como los perfiles profesiográficos de los puestos del Servicio Nacional de Aduanas, serán determinados conjuntamente por la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Servicio Civil.

Artículo 19.—Rotación del personal. Los funcionarios técnicos y profesionales del Servicio Nacional de Aduanas deberán prestar sus servicios en cualquiera de las dependencias ubicadas en el territorio aduanero, según los criterios técnicos de rotación, determinados por la Dirección General de Aduanas. Los funcionarios técnicos estarán sujetos a desempeñar diversas tareas dentro de la misma clase de puesto, a fin de garantizar el conocimiento integral de las operaciones aduaneras.

Los funcionarios encargados de prestar en forma domiciliaria los servicios personalizados, serán designados por distribución aleatoria y por turno riguroso; así se evitará que visiten de manera consecutiva o regular a un mismo auxiliar de la función pública y/o usuario del Sistema Nacional de Aduanas. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- Rotación del personal. Los funcionarios técnicos y profesionales del Servicio Nacional de Aduanas deberán prestar sus servicios en cualquiera de sus dependencias, según los criterios técnicos de rotación determinados por la Dirección General de Aduanas. Los funcionarios técnicos estarán sujetos a prestar servicios en diferentes tareas dentro de la misma clase de puesto, a fin de garantizar el conocimiento integral de las operaciones aduaneras.”

ARTÍCULO 20.- Auxilio y denuncia a cargo de otras autoridades. Los funcionarios de otras dependencias públicas distintas de las aduaneras, dentro del marco de su competencia, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el cumplimiento de sus funciones. Están igualmente obligados a comunicar de inmediato a las autoridades aduaneras, los hechos y actos sobre presuntas infracciones al régimen jurídico aduanero y a poner a su disposición, las mercancías objeto de tales infracciones, si están en su poder.

Cuando una autoridad diferente de la aduanera requiera inspeccionar mercancías, vehículos y unidades de transporte sujetos al control aduanero, deberá obtener autorización previa de la autoridad aduanera, la cual podrá asignar un funcionario competente para que presencie la inspección. Podrá prescindirse de la autorización previa si las circunstancias lo exigen en el ejercicio del control de drogas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas, por razones de seguridad nacional, en casos de desastres naturales o emergencias. No obstante, la realización de la inspección deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad aduanera.

LGA	8
CNPT	132

ARTÍCULO 21.- Coordinación para aplicar controles. Las autoridades aduaneras, migratorias, de salud, de policía y todas las que ejerzan control sobre los ingresos o las salidas de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional, deberán ejercer sus competencias en forma coordinada, colaborando entre sí, para la aplicación correcta de las disposiciones legales y administrativas.

Cuando en una operación aduanera deban aplicarse controles especiales correspondientes a otras entidades, las autoridades aduaneras deberán informar a la oficina competente y no aceptarán la declaración aduanera hasta tanto no se cumplan los requisitos respectivos. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)*

Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, “Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá”.

Control Integrado, Control Integrado, Control Integrado con procedimiento secuencial, Control Integrado con procedimiento yuxtapuesto. Ver Ley 9678.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 21.- Coordinación para aplicar controles. Las autoridades aduaneras, migratorias, de salud, de policía y todas las que ejerzan control sobre los ingresos o las salidas de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional, deberán ejercer sus competencias en forma coordinada, colaborando entre sí, para la aplicación correcta de las disposiciones legales y administrativas.

Cuando, en una operación aduanera, deban aplicarse controles especiales correspondientes a otras entidades, las autoridades aduaneras deberán informar a la oficina competente.”

CAPÍTULO IV ATRIBUCIONES ADUANERAS

Artículo 22.- Control aduanero. El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 22.- Control aduanero. El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas en la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional y la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.”

Confrontar CAUCA IV

*“Artículo 9. **Control aduanero.** El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación de cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este Código, su Reglamento y las demás normas reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.*

Los Servicios Aduaneros podrán utilizar equipos de inspección no intrusivo o invasivo que permitan realizar inspecciones cuando sea necesario y de conformidad con los resultados del análisis de riesgo, con el fin de facilitar la inspección de la carga o de los contenedores de alto riesgo sin interrumpir el flujo del comercio legítimo, sin perjuicio de otras medidas de control que el Servicio Aduanero pueda aplicar.

*El ejercicio de las facultades de control del Servicio Aduanero podrá ser en forma **permanente, previa, inmediata o posterior al levante** de las mercancías y las mismas se ejercitarán conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento.”*

Artículo 23.—Clases de control. El control aduanero podrá ser inmediato, a posteriori y permanente.

El **control inmediato** se ejercerá sobre las mercancías desde su ingreso al territorio aduanero o desde que se presenten para su salida y hasta que se autorice su levante.

El **control a posteriori** se ejercerá respecto de las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en las operaciones de comercio exterior, dentro del plazo referido en el artículo 62 de esta Ley.

El **control permanente** se ejercerá en cualquier momento sobre los auxiliares de la función pública aduanera, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Se ejercerá también sobre las mercancías que, con posterioridad al levante o al retiro, permanezcan sometidas a alguno de los **regímenes aduaneros no definitivos**, mientras estas se encuentren dentro de la relación jurídica aduanera para fiscalizar y verificar el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)

LGA 62-266

RLGA 46-537

Control Integrado, Control Integrado, Control Integrado con procedimiento secuencial, Control Integrado con procedimiento yustapuesto. Ver Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, "Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá".

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 23.- Clases de control. El control aduanero puede ser inmediato, a posteriori y permanente. El control inmediato se ejerce sobre las mercancías desde su ingreso en el territorio aduanero o desde que se presentan para su salida y hasta que se autorice su levante.

El control a posteriori se ejerce respecto de las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en las operaciones de comercio exterior, dentro del plazo al que se refiere el artículo 62 de esta ley.

El control permanente se ejerce, en cualquier momento, sobre los auxiliares de la función pública aduanera, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. También se ejerce sobre las mercancías que, con posterioridad a su levante o retiro, permanecen sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras estas se encuentren, dentro de la relación jurídica aduanera, fiscalizando y verificando el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino."

ARTÍCULO 24.- Atribuciones aduaneras. La autoridad aduanera, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden como administración tributaria previstas en la legislación tributaria, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la obligación tributaria aduanera como naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, requisitos y obligaciones derivados de la entrada, permanencia y salida de las mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional.
- b) Exigir y comprobar el pago de los tributos de importación y exportación.
- c) Verificar que las mercancías importadas con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, **exención** o reducción de tributos, estén destinadas al propósito para el que se otorgó el beneficio, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas a quienes les fue concedido. Esa verificación se realizará cuando el beneficio se haya otorgado en razón del cumplimiento de esos requisitos o a condición de que se cumplan.
- d) Requerir, en el **ejercicio de sus facultades de control y fiscalización**, de los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores, productores, consignatarios y terceros

la presentación de los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables y otra información de trascendencia tributaria o aduanera y sus archivos electrónicos o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa información.

- e) Verificar la documentación, la autorización, el contenido y las cantidades de mercancías sujetas al control aduanero **que se transporten** por cualquier medio.
- f) **Fiscalizar los depósitos** bajo control aduanero, exigir la presentación de las mercancías depositadas y sus registros, comprobar los inventarios y realizar cualquier otra verificación que considere necesaria.
- g) Exigir las pruebas necesarias y comprobar el cumplimiento de las reglas sobre el origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales de los que forme parte Costa Rica y las normas derivadas de ellos.
- h) Exigir y comprobar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por las autoridades competentes, relativas a los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional, medidas de salvaguardia y demás regulaciones, arancelarias y no arancelarias, de comercio exterior.
- i) Investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones administrativas y tributarias aduaneras correspondientes.
- j) Verificar que los auxiliares de la función pública aduanera cumplan con sus requisitos, deberes y obligaciones.
- k) Dictar las medidas administrativas que se requieran en caso de accidentes, desastres naturales o naufragios que impidan el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.
- l) Establecer, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus envases destinados a zonas libres.
- m) Otorgar y suspender, cuando le corresponda, las autorizaciones de los auxiliares de la función pública aduanera.
- n) Las que le correspondan de conformidad con los tratados, convenios o acuerdos internacionales de los que Costa Rica forme parte.
- o) Establecer registros de importadores, exportadores, auxiliares de la función pública aduanera y otros usuarios.
- p) Visitar empresas, centros de producción o recintos donde se realicen operaciones aduaneras, con el fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones legales, de conformidad con los planes y programas de control y fiscalización establecidos por la Dirección General de Aduanas.
- q) **Decomisar las mercancías** cuyo ingreso o salida sean prohibidos, de acuerdo con las prescripciones legales o reglamentarias.

- r) Suscribir convenios con auxiliares o instituciones públicas o privadas, para implementar proyectos de mejoramiento del servicio aduanero, incluyendo la introducción de nuevas técnicas aduaneras y el uso de infraestructura y capacitación.
- s) Las demás atribuciones señaladas en esta ley, sus reglamentos y en otras leyes.

LGA 25-69-70-215 a)-246-266
 CNPT 99 y ss.-103-104-105-108-128
 RLGA 7 n)-15-20 s)- 57-192

Reglamento para el Desarrollo, el Fomento y la Gestión de Alianzas Público Privadas, Decreto Ejecutivo 40933-MEIC-MIDEPLAN, publicado LG 2 de mayo de 2018

Jurisprudencia

Inciso c) Prescripción verificación exenciones. 11733-11. PRESCRIPCIÓN. SE ALEGA QUE PODER PUNITIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NO TIENE PLAZO. Acción de Inconstitucionalidad contra Artículo 47 de la Ley Reguladora de todas las Exenciones Vigentes, No. 7293. Considera el accionante que las normas son contrarias a los principios de seguridad jurídica, de inviolabilidad de la propiedad y el principio de interdicción de las confiscaciones, pues su aplicación obliga al intérprete a darle un contenido perpetuo a las obligaciones tributarias exentas, así como al poder punitivo de la Administración para sancionar y cobrar las obligaciones. Señala la Sala que en reiteradas ocasiones, se ha indicado que no existe un derecho fundamental a la prescripción, pues ello es un asunto propio del legislador, quien en uso de su libertad de configuración, se encarga de diseñar los diferentes procesos, los plazos de prescripción para cada caso, así como las causas de interrupción, suspensión o terminación. En ese sentido, no corresponde a esta Sala determinar cuál debería ser el plazo de prescripción que procede en los casos de exoneraciones tributarias, o bien, determinar cuándo debería suspenderse y cuando no, por cuanto esto no involucra ningún conflicto de constitucionalidad. Con respecto al alegato del contenido perpetuo a los poderes punitivos de la Administración Tributaria para aplicar la sanción que corresponde por cometer el hecho descrito en las normas, se indica que de la simple lectura, se colige que no lleva razón el accionante, pues las normas no hacen referencia alguna a plazos de prescripción.
 RF

Artículo 24 bis.- Regularización. Cuando el órgano fiscalizador de la Dirección General de Aduanas, en el ejercicio de sus atribuciones aduaneras, establezca que no se cancelaron los tributos debidos, deberá proponer al sujeto pasivo la regularización de su situación, **de conformidad con los procedimientos definidos por el reglamento de esta ley y el Servicio Aduanero.**

Los **casos excepcionales** para los cuales **no será obligatoria** la propuesta de regularización se establecerán mediante el reglamento de esta ley.

La conformidad total o parcial del sujeto pasivo, con la propuesta de regularización, constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los **adeudos tributarios y sus intereses, determinados por el órgano fiscalizador.**

En caso de que el sujeto pasivo manifieste su conformidad con la propuesta, él mismo deberá realizar el pago por la totalidad del monto adeudado, **por los medios acordados en la audiencia de regularización** y en el **plazo de cinco días hábiles posteriores** a la realización de dicha audiencia. Caso contrario, por tratarse de una obligación líquida y exigible, la autoridad aduanera procederá a la **ejecución del cobro correspondiente, sin necesidad de ulterior procedimiento.**

En el supuesto de que el sujeto pasivo **no acepte** regularizar su situación, la autoridad aduanera **seguirá el procedimiento administrativo ordinario** establecido en esta ley. (Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

ARTÍCULO 25.- Investigación de los delitos e infracciones aduaneras. Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan como administración tributaria, previstas en la legislación tributaria, la autoridad aduanera tendrá

las siguientes atribuciones para prevenir e investigar **infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros**:

a) Realizar investigaciones, inspecciones y controles **en las vías de comunicación y lugares habilitados o no habilitados** como recintos aduaneros y practicar reconocimientos de mercancías, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias.

b) Diligenciar y procurar las pruebas que fundamenten las denuncias o acciones legales en materia de delitos aduaneros e infracciones administrativas y tributarias aduaneras.

c) Requerir la asistencia y colaborar con autoridades nacionales e internacionales para investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros.

d) **Detener** a los presuntos responsables en **flagrante delito** y decomisar, preventivamente, las mercancías objeto del delito, a fin de ponerlas a la orden de la autoridad judicial competente en el término de veinticuatro horas.

e) **Denunciar**, ante la autoridad judicial competente los delitos aduaneros. Esta obligación corresponde a cualquier funcionario aduanero. **La omisión de este deber constituye una falta grave de servicio.**

LGA 224-24 q)-248

CNPT 114

Ley General de Policía, Ley 7410 de 26 de mayo de 1994, La Gaceta ____ de ____ de ____

RLGA 15-190-192-274 y ss.

Reglamento de la Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda, Decreto 29663-H de 15 de mayo de 2001, La Gaceta ____ de 6 de agosto de 2001, Decreto 35940-H de 12 de marzo de 2010, Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Policía Fiscal. Decreto Ejecutivo 29663-H, reglamento original, actualmente derogado. Ver al respecto las reformas al RLGA sobre la Policía Fiscal.

Dirección General de Tributación. DGT-R-021-2019 de 26 de abril de 2019. LG 21 de mayo de 2019. “...**Artículo 1o**—Delegar en la Dirección de Fiscalización, a través de la Subdirección de Investigación y Represión del Fraude Tributario, la competencia sobre el análisis, decisión y presentación de la denuncia y/o notitia criminis al Ministerio Público o al Juzgado Contencioso Administrativo por delitos disidentes a los tipificados en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, detectados por los funcionarios tributarios en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto. En ese sentido, se puede estar ante la presencia de los siguientes delitos:

A. Código Penal, Ley N°4573.

Artículo 247. Publicación y autorización de balances falsos.

Artículo 311. Atentado

Artículo 347. Cohecho impropio

Artículo 348. Cohecho propio

Artículo 352. Penalidad del corruptor

Artículo 368. Falsificación de documentos privados

Artículo 369 bis. Venta o distribución de documentos públicos o privados

Artículo 372. Uso de falso document.

B. Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley N°8754.

Artículo 20 Causa del patrimonio

Artículo 22. Sanciones.

C. Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N° 7786 y sus reformas (Ley N° 8204 denominada reforma integral a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y Ley N° 8719 Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo).

Artículo 69. Tipifica el delito de lavado de activos.

Artículo 69 bis. Tipifica el delito de financiamiento del terrorismo.

Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que eventualmente puedan detectarse, en función de los hechos descubiertos o bien, por reformas o nuevas aprobaciones legales

.../

Convenios de Cooperación Técnica y Asistencia Mutua:

Convenio para el establecimiento de un Consejo de Cooperación Aduanera, Ley 8112 del 18/07/2001, LG 152 de 9 agosto 2001

Aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas y su Protocolo de Modificación, Ley 8887 del 03/11/2010, LG 239 del 9 de diciembre de 2010

Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas y su Protocolo de Modificación, Ley 8887 - A del 03/11/2010, LG 239 del 9 de diciembre de 2010

Apéndices de modificación al Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, Ley 8887 - C del 03/11/2010, LG 239 del 9 de diciembre de 2010

Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, Ley 8880 del 01/11/2010, L. G. 243 del 15 de diciembre de 2010.

Acuerdo con el Gobierno de los **Estados Unidos de América** relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras, D. E. 40341-H-RE-COMEX del 13 de diciembre de 2016, Alc. 98 a La Gaceta 85 del 8 de mayo de 2017.

Acuerdo entre la República de Costa Rica y los **Estados Unidos Mexicanos** sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, D.E. 41255-H-RE-COMEX de 16 de mayo de 2018, promulgación teniéndolo como vigente para los efectos internos y externos. Alc. 170 a La Gaceta 176 del 25 de setiembre de 2018.

Control Integrado, Control Integrado, Control Integrado con procedimiento secuencial, Control Integrado con procedimiento yuxtapuesto. Cap. V. Delitos e Infracciones en los Centros de Control Integrado. Cap. VIII. Disposiciones Relativas al Control Aduanero. Ver Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, "Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá".

Artículo 26.- Responsabilidad por daño, pérdida o sustracción de mercancía. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los funcionarios y los **auxiliares de la función pública aduanera**, que por cualquier título, reciban, manipulen, procesen, transporten o tengan en custodia mercancías sujetas a control aduanero, serán responsables por las consecuencias tributarias producidas por el **daño, la pérdida o la sustracción** de las mercancías, **salvo caso fortuito o fuerza mayor. Esta disposición se aplicará a todas las empresas de estiba y a las autoridades o empresas portuarias y aeroportuarias, públicas o privadas.** (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 31-64
RLGA 274 y ss.

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 26.- Obligaciones generales de receptores y custodios de mercancías objeto de control aduanero. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, por cualquier título, reciban, manipulen, procesen o tengan en custodia mercancías sujetas a control aduanero, serán responsables por las consecuencias tributarias aduaneras producto del daño, la pérdida o sustracción de las mercancías. Esta disposición es extensiva a las empresas de estiba y autoridades o empresas portuarias y aeroportuarias."

ARTÍCULO 27.- Recepción de pruebas en el extranjero. En casos calificados y previamente autorizados por el Director General de Aduanas, los funcionarios competentes del Servicio Nacional de Aduanas, en el ejercicio de funciones de verificación, fiscalización y control, podrán realizar visitas a instalaciones de productores, exportadores y otras personas, así como a oficinas, públicas o privadas, localizadas en territorio extranjero, con el fin de recibir testimonio y recabar información y documentación, respetando las normas internacionales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Costa Rica forme parte. Los funcionarios designados, que gocen de fe pública, levantarán las **actas correspondientes y certificarán la información y documentación**, con el propósito de que se incorporen como **prueba admisible en cualquier procedimiento administrativo o judicial, sin requisito o formalidad ulterior.**

La Dirección General de Aduanas queda habilitada para contactar, desde Costa Rica y por cualquier medio tecnológico, a proveedores o exportadores extranjeros, con el fin de recabar pruebas, tales como facturas proforma, precios de venta, promedios, valores FOB y CIF, descuentos aplicables y cualesquiera otras que den

como resultado la certeza del precio respectivo de la mercancía en el mercado internacional. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA 15 h)-20 s)

Legislación conexas

"ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA

1 Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación

2 Intercambio de información

3 Verificación

4 Solicitud

5 Protección y confidencialidad

6 Facilitación de información

7 Aplazamiento o denegación de una solicitud

8 Reciprocidad

9 Carga administrativa

10 Limitaciones

11 Utilización o divulgación no autorizadas

12 Acuerdos bilaterales y regionales

12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros, con inclusión de información y datos proporcionados sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma automática o antes de la llegada del envío.

12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere o afecte los derechos y obligaciones que correspondan a un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza." Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio). Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

TÍTULO III

AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Concepto de auxiliares. Se considerarán auxiliares de la función pública aduanera, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera.

Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco por las consecuencias tributarias derivadas de los **actos**, las **omisiones** y los **delitos** en que incurran sus **empleados acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas**,

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden sujetos legalmente. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA Título IV

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 28.- Concepto. Son auxiliares de la función pública aduanera las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en representación de terceros, ante el Servicio Nacional de Aduanas.”

Concordancias

- Concesionario de Aeropuerto Juan Santamaría
- Concesionario de Puerto Caldera
- Autorización a la empresa APM TERMINALS MOIN S. A. como Auxiliar en la categoría de Gestor Interesado de los Servicios Públicos de la Terminal de Contenedores Moín. RES-AUT-DGA-250-2018 de las 10:05 horas del 16 de julio de 2018.
- Reconocimiento de Auxiliar de la Función Pública Aduanera para Concesionario de TCM Moín.
- Ley 9764 publicada LG 17 octubre 2019, Reforma Ley 3091 Ley Orgánica de JAPDEVA, (ver. Art. 18)

CONFRONTAR CAUCA IV. SOLIDARIDAD DE LOS AUXILIARES.

*“Artículo 20. **Responsabilidad solidaria de los auxiliares.** Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco, por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran personalmente o sus empleados acreditados ante el Servicio Aduanero, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales, a que dichos empleados queden legalmente sujetos.”*

Artículo 29.- Requisitos generales. Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar; estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; **mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, sus intereses, las multas y los recargos de cualquier naturaleza;** cumplir los requisitos estipulados en esta ley, sus reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que las autorice como auxiliares.

El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o específico, **no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento.** (Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGA	225-241 c)
CNPT	128
RLGA	77-82 a 93

El texto anterior del artículo era el siguiente:

*“ARTÍCULO 29.- **Requisitos generales.** Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar, estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, cumplir los requisitos estipulados en ésta Ley, sus Reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que los autorice como auxiliares.*

El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento”. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

Anteriormente había sido reformado por Ley 7900 de 3 de agosto de 1999, La Gaceta No. 159 de 17 de agosto de 1999, artículo 4, inciso b). de la siguiente forma)

ARTÍCULO 29.-Requisitos generales. *Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar, estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, cumplir los requisitos establecidos en esta ley, sus reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que los autorice como auxiliares. El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito, general o específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento. Dentro de esos requisitos, no se exigirá la presentación de constancia o certificaciones tributarias.*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 29.- Requisitos generales. Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar y estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; además, deberán encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, multas y demás cargos y cumplir con los requisitos específicos establecidos en esta ley, sus reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que los autorice como auxiliares.

El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir con algún requisito, general o específico, no podrá operar como tal hasta que no demuestre haber subsanado el incumplimiento.”

Jurisprudencia y antecedentes administrativos:

- a. **Tema: Derechos Adquiridos y Situaciones Jurídicas Consolidadas:**
 - i. **TAN 51-2000**
 - ii. **SC voto 2732-1997**
 - iii. **RES-DN-1817-2012- Exp. DN-132-2006 (1) CCC- (depositarios aduaneros)**

Artículo 29 bis.- Impedimentos. No podrán ser auxiliares de la función pública:

- a) Los funcionarios y empleados del Estado o de sus instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas.
- b) Las personas que estén inhabilitadas, por sentencia judicial firme, para ejercer cargos públicos.

(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CONFRONTAR RECAUCA IV.

“Artículo 67. Inhabilitación. Son causales de inhabilitación, entre otras:

- a) *Que el auxiliar adquiera la calidad de funcionario o empleado público;*
- b) *El vencimiento de la garantía de operación;*
- c) ***El incumplimiento de obligaciones tributarias debidamente notificadas y no pagadas en el plazo establecido; o***
- d) *El incumplimiento en la presentación anual de la certificación de solvencia tributaria extendida por las autoridades competentes.”*

ARTÍCULO 30.- Obligaciones. Son obligaciones básicas de los auxiliares:

- a) Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas. Los registros estarán a

disposición de las autoridades aduaneras competentes cuando los soliciten, en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.

- b) Conservar, durante un **plazo de cinco años**, los documentos y la información **fijados reglamentariamente para los regímenes en que intervengan**, salvo que exista regulación especial en contrario que exija un plazo mayor. Los documentos y la información deberán conservarse aún después de ese plazo, hasta la finalización del proceso judicial o administrativo cuando exista algún asunto pendiente de resolución.
- c) (*Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.*) **El texto derogado indicaba:** “Proporcionar la información sobre su gestión, en la forma y por los medios que establezca la Dirección General de Aduanas, mediante disposiciones de carácter general”.)
- d) Efectuar las operaciones aduaneras por los medios y procedimientos establecidos, de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente.
- e) Realizar los actos según esta ley y las demás disposiciones legales, empleando el sistema informático una vez que le hayan sido autorizados el código de usuario y la clave de acceso. Para ese fin, deberá contar con el equipo y los medios necesarios para realizar sus operaciones, mediante la transmisión electrónica de datos, conforme a las reglas de carácter general que emita la Dirección General de Aduanas.
- f) **Mantener su inscripción y el registro de firmas autorizadas** en él para las operaciones que la autoridad aduanera establezca.
- g) Asumir la responsabilidad por cualquier diferencia entre los datos transmitidos a la autoridad aduanera y los recibidos efectivamente por ella, cuando se utilicen medios de transmisión electrónica de datos.
- h) Cumplir con las demás obligaciones que les fijan esta ley y sus reglamentos y con las disposiciones que establezca la autoridad aduanera, mediante resolución administrativa o convenio.
- i) Comunicar a la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de daños, pérdidas, hurtos, robos u otras circunstancias que afecten las unidades de transporte o las mercancías bajo su custodia.
- j) Entregar, en el plazo de diez días hábiles, la información requerida por la autoridad aduanera en el ejercicio de las facultades de control, en el lugar, la forma, las condiciones y por los medios que esta disponga.
- k) Extender facturas por la prestación de sus servicios, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la administración tributaria competente.
- l) Entregar, ante requerimiento de la autoridad aduanera con la debida fundamentación legal, información de trascendencia tributaria o aduanera, que permita verificar la veracidad de la declaración aduanera, según los requisitos establecidos al efecto en el artículo 86 de esta Ley, sobre hechos o actuaciones de terceros con los cuales mantenga relaciones económicas y/o financieras.

- m) Indicar a la Dirección General, bajo **declaración jurada** rendida ante notario público, el lugar donde se custodian los **documentos originales** y la información fijados reglamentariamente, para los regímenes en que intervengan. En el caso de personas jurídicas, dicha declaración deberá ser realizada por el representante legal.
- n) Coadyuvar con las autoridades aduaneras para el esclarecimiento de cualquier **delito** cometido en perjuicio del Fisco y comunicar inmediatamente, por escrito, a la autoridad aduanera, cualquier delito del que tengan conocimiento.

(Incisos i), j), k), l), m) y n) adicionados por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)

La Gaceta N° 241 del 15-12-14 Mediante RES-DGA-305-2014 del 24 de octubre de 2014 se añade al **Manual de Procedimientos Aduaneros** la **“Solicitud de Eliminación de Documentos”** dentro del Procedimiento para la Eliminación de Documentos Aduaneros. Rige a partir de su publicación.

LGA 26-31-32-33-64-235 h)-236 e)-239 a)-241 d)
CNPT 128
RLGA 94 a 103

ARTÍCULO 31. Responsabilidad general de auxiliares receptores de mercancías, vehículos y unidades de transporte. Cuando a los auxiliares les corresponda recibir mercancías, vehículos y unidades de transporte bajo control aduanero o se les autorice para eso, deberán comunicar la información que les solicite la autoridad aduanera, por los medios que esta determine y tendrán la **responsabilidad de comprobar las condiciones y el estado de los embalajes, sellos y precintos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 26 de esta ley.**

LGA 26-237 a)-241 e)

ARTÍCULO 32.- Conservación de la información. Cuando se haya establecido un sistema informático para la gestión aduanera, en forma general o en particular para un régimen o determinadas operaciones, la información que deben conservar en archivo los auxiliares de la función pública aduanera debe mantenerse en discos ópticos, cintas magnéticas, disquetes, cilindros o cualquier otro medio similar que cumpla con las condiciones exigidas para esos efectos. **Esa información estará disponible para las autoridades aduaneras competentes cuando la soliciten en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.**

La **conversión de la información** a alguno de esos medios debe realizarse en el plazo que establezca el reglamento y siguiendo las prescripciones de la Dirección General de Aduanas.

LGA 30 b)-103 y ss.

Legislación conexas:

D.E. 40623-COMEX Expedición certificados de circulación mercancías importadas definitivamente en un país CA y exportadas a otro país CA. Conservación de información 3 años. Resolución No. 384-2017 (COMIECO-EX) de fecha 27 de abril de 2017.

CAPÍTULO II AGENTE ADUANERO

Artículo 33.- Concepto. El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y los requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en esta Ley, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras.

El agente aduanero **rendirá la declaración aduanera bajo fe de juramento** y, en consecuencia, los datos consignados en las declaraciones aduaneras que formule de acuerdo con esta Ley, incluidos los relacionados con el cálculo aritmético de los gravámenes que guarden conformidad con los antecedentes que legalmente le sirven de base, podrán tenerse como ciertos por parte de la aduana, sin perjuicio de las verificaciones y los controles que deberá practicar la autoridad aduanera dentro de sus potestades de control y fiscalización.

El agente aduanero será el **representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que se deriven de él**. En ese carácter, será el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

NOTAS:

20170202 Ver

- i. Exp. Contencioso Administrativo 10-004056-1027-CA, en primera instancia se indicó que era necesario haber notificado al importador. Sala Primera casó por el fondo (recurso de casación 1184-S1-16) y acogió la Excepción de Falta de Derecho, **Voto 3565-2019** de 7 de noviembre de 2019.
- ii. Sentencia 084-2017-VII de 9 de noviembre de 2017 Expediente 16-000881-1027-CA
- iii. TAN 3348-2017

Antecedentes

Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 03565 – 2019 de 07 de Noviembre del 2019, representación actos derivados del despacho.

*“IV.- Sobre el particular, es criterio reiterado de esta Cámara, que el Agente Aduanero, es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, para lo cual requiere autorización del Ministerio de Hacienda. En efecto, dicho auxiliar, efectuada la retención o percepción del tributo, es el único responsable ante el fisco por dicho importe. De tal suerte, una vez que el obligado realiza el pago, se descarga ante el fisco. Asimismo, el Agente Aduanero asume una responsabilidad solidaria junto al sujeto pasivo cuando deja de retener los impuestos. Por ello, el comitente se descarga, ya que el agente se desenvuelve como auxiliar de comercio y estatal (Fallo 298-2008, de las 9 horas 50 minutos del 25 de abril de 2008). Desde esa óptica, para esta Sala, del mandato 33 de la LGA se extrae con claridad, el agente aduanero es el representante legal del importador, para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que este deriven. En ese carácter, es además el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato. Evidentemente, aún y cuando el numeral 266 ibídem, establece que el despacho aduanero concluye con el levante de la mercancía, resulta innegable, las consecuencias del mandato se extienden mas allá de dicho acto, por cuanto el auxiliar aduanero de estudio, según la ley de cita (Art. 33 LGA), también representa al importador en los actos que sean consecuencia del despacho aduanero. Por consiguiente, si bien el despacho aduanero, -según el canon 266 de la LGA-, concluye con el levante, el agente aduanal mantiene sus responsabilidades como representante del importador y auxiliar de la Administración Aduanera (en su carácter de munera pública), aún respecto de los actos que eventualmente se generen con posterioridad al despacho aduanero, lo cual evidentemente incluye el recibir notificaciones a nombre del importador. De esa suerte, si bien en el caso concreto, el procedimiento administrativo fue iniciado tanto en contra del importador Distribuidora Gadel S.A. como de la actora, -de lo cual, solo fue notificada la Agencia Aduanal Logos(hechos tenido por acreditados 1 y 2), es claro, la actora, mantenía a ese punto su responsabilidad como mandante y auxiliar público en materia aduanera, respecto de cualesquiera actos sucedidos durante el despacho aduanero. Acorde a lo anterior, es evidente la violación por indebida interpretación y desaplicación de los numerales 33 y 266 de la LGA, en la cual incurre la sentencia atacada, en tanto considera, el mandato deja de surtir efectos con el levante, motivo por el cual, el cargo deberá ser acogido. V.- En mérito de lo expuesto, se declarará con lugar el recurso interpuesto por la accionante. Se casará la sentencia. Fallando por el fondo, se acogerá la defensa de falta de derecho. Se declarará sin lugar la demanda. Son las costas a cargo de la accionante, conforme al precepto 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Demás está indicar que por la forma cómo se resuelve, se omite pronunciamiento sobre el restante agravio formulado por el Estado. **POR TANTO** Se acoge el recurso de casación. Se casa la sentencia. Fallando por el fondo, se acoge la defensa de falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda. Son las costas a cargo de la accionante.”*

Concordancias

LGA 30-31-35 a)-138-236 c)-239 h)-268-269-
RLGA 104 A 122

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 33.- Concepto. El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera, autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y esta ley, en la prestación habitual de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras.

El agente aduanero es el representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que deriven de él. En ese carácter, es responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato.

El agente aduanero y demás auxiliares serán responsables, patrimonialmente, ante el fisco, por las infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes acreditados ante la Dirección General de Aduanas.”

ARTÍCULO 34.- Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta Ley, para ser autorizadas como agentes aduaneros, las personas físicas requerirán haber obtenido al menos el grado universitario de licenciatura en Administración Aduanera y contar con experiencia mínima de dos años en materia aduanera. Igualmente, podrán ser autorizadas personas con el grado **de licenciatura en Comercio Internacional, Derecho o Administración Pública**, previa aprobación de un examen de competencia en el área aduanera, que el Ministerio de Hacienda deberá aplicar anualmente en coordinación con la Dirección General de Aduanas.

Ninguna persona física será autorizada, reconocida ni podrá ejercer la correduría aduanera ante el Servicio Nacional de Aduanas, si no ha caucionado su responsabilidad con el fisco. La Dirección General de Aduanas fijará el monto global de la caución, de acuerdo con la siguiente base de cálculo:

a) Por la aduana en que se preste o se vaya a prestar el mayor servicio, diez mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

b) Por las demás aduanas ante las cuales actúe o vaya a actuar, no menos de cinco mil ni más de ocho mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. En este caso, la fijación deberá contar con la aprobación o el refrendo del Ministerio de Hacienda.

c) *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)* El inciso señalaba: “Cuando el agente aduanero solicite autorización para la declaración del tránsito aduanero interno, adicionalmente deberá rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las responsabilidades tributarias eventuales derivadas de su operación, por un monto de cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.”

El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 29

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 34.- Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, para ser autorizadas como agentes aduaneros, las personas físicas requieren haber obtenido como mínimo el grado universitario de bachillerato en administración aduanera. Igualmente, podrán serlo personas con el grado de licenciatura en comercio internacional, derecho o administración pública, previa aprobación de un examen de competencia en el área aduanera que el Ministerio de Hacienda deberá aplicar anualmente en coordinación con la Dirección General de Aduanas.

Ninguna persona física será autorizada, reconocida ni podrá ejercer la correduría aduanera ante el Servicio Nacional de Aduanas, si no ha caucionado su responsabilidad con el fisco. La Dirección General de Aduanas fijará el monto global de la caución, de acuerdo con la siguiente base de cálculo:

- a) Por la aduana en que se preste o se vaya a prestar el mayor servicio, diez mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.*
- b) Por las demás aduanas ante las cuales actúe o vaya a actuar, no menos de cinco mil ni más de ocho mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. En este caso, la fijación deberá contar con la aprobación o el refrendo del Ministerio de Hacienda.*
- c) Cuando el agente aduanero solicite autorización para la declaración del tránsito aduanero interno, adicionalmente deberá rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las responsabilidades tributarias eventuales derivadas de su operación, por un monto de cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.*

El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.”

ARTÍCULO 35.- Obligaciones específicas. Además de las obligaciones establecidas en el Capítulo I de este Título, son obligaciones específicas de los agentes aduaneros:

- a)** Actuar personalmente en las actividades propias de su función y representar a su mandante, en forma diligente y con estricto apego al régimen jurídico aduanero.
- b)** Acreditar, ante la Dirección General de Aduanas, a los **asistentes** de agentes de aduanas que deberán ostentar, por lo menos, el diplomado en aduanas, reconocido por la autoridad educativa competente. En caso de inopia, bastará el título de técnico en aduanas. Los **asistentes** de agentes de aduana deberán cumplir con las funciones, obligaciones y los demás requisitos que se establezcan mediante reglamento.
CONFRONTAR CON RECAUCA IV. ARTICULO 98. (NOTA: SE DEBE DEMOSTRAR EL CONTRATO LABORAL EXISTENTE Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS QUE EL SERVICIO ADUANERO DE CADA ESTADO PARTE ESTABLEZCA. Y DEBE COMUNICARSE EL CESE DEL A”
- c)** Tener oficinas abiertas en la jurisdicción de las aduanas en que presten sus servicios.
- d)** Evitar que, al amparo de su autorización, agentes aduaneros que estén suspendidos de su ejercicio actúen directa o indirectamente.
- e)** *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “Recibir anualmente un curso de actualización, impartido por la Dirección General de Aduanas.”)*
- f)** Dar aviso previo del cese de operaciones a la Dirección General de Aduanas, así como entregar, a la aduana de control, los documentos originales y la información fijados reglamentariamente para los regímenes en que intervengan.
- g)** Entregar a sus comitentes copia o impreso de cada una de las declaraciones aduaneras a su nombre, o reproducción de los documentos que comprendan el despacho en que han intervenido, **debidamente certificados**, deberán indicar la fecha, estampar su sello y firma, y señalar que se trata de copias fieles y exactas de las registradas ante la aduana correspondiente.

(Incisos f) y g) adicionados por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 33-236 c)-237 e)-239 d) y h), 239 f)-240 a), 247-Transitorio I
RLGA 105 y ss.-110 a 122

Artículo 36.- Solidaridad. Ante el Fisco, el agente aduanero será solidariamente responsable con el declarante, por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de los trámites, los regímenes o las operaciones en que intervenga, así como por el pago de las diferencias, los intereses, las multas, los recargos y los ajustes correspondientes. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 86
CNPT 16-20

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 36.-Solidaridad. Los agentes aduaneros serán solidariamente responsables por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de las operaciones aduaneras en las cuales intervengan y por el pago de las diferencias, intereses, multas y demás recargos correspondientes.”

CONFRONTAR CAUCA IV.

*“Artículo 23. **Solidaridad del agente aduanero.** El Agente aduanero será solidariamente responsable con el declarante ante el Fisco, por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de los trámites, regímenes u operaciones en que intervenga y por el pago de las diferencias, intereses, multas, recargos y ajustes correspondientes.”*

CONFRONTAR RECAUCA IV.

*“Artículo 91. **Responsabilidad.** El agente aduanero será solidariamente responsable con el declarante ante el Fisco en los términos del Artículo 23 del Código.”*

Artículo 37.- Intervención. La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los regímenes aduaneros y será optativa en los siguientes regímenes o modalidades aduaneras: zonas francas, exportación, depósito fiscal, provisiones de a bordo y perfeccionamiento pasivo, así como en las siguientes modalidades: equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o “courier”, envíos postales, tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y comercial, e importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en general, en los despachos de mercancías sujetas a regímenes o procedimientos sin intervención del agente aduanero que esta Ley autoriza. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

CAUCA 30

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 37.-Intervención. La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los regímenes aduaneros y optativa para las mercancías sujetas al régimen de zonas francas, mercancías de exportación no sujetas a un régimen de fomento de la exportación, mercancías sujetas a depósito fiscal, provisiones a bordo, perfeccionamiento pasivo y las siguientes modalidades: equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes, envíos postales, tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en general, en los despachos de mercancías sujetas a regímenes o procedimientos que esta ley autoriza sin esa intervención.”

ARTÍCULO 38.- Sustitución del mandato. Los agentes aduaneros no podrán sustituir el mandato que se les ha conferido, transmitir ni transferir derechos de ninguna clase correspondientes a sus mandantes.

El **mandante** podrá sustituir, el mandato, en forma **escrita** en cualquier momento. Deberá comunicar de esta circunstancia a la autoridad aduanera y demostrar **la comunicación previa** al agente sustituido. El nuevo agente asume la responsabilidad por los actos realizados **a partir de la comunicación escrita a la autoridad** aduanera, sobre la sustitución del agente anterior.

LGA 239 h)
RLGA 116

Artículo 39.- Subrogación. El agente aduanero que realice el pago de tributos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de su mandante, se subrogará frente a él por las sumas pagadas. Para este efecto, la certificación expedida conforme al artículo 70 de la presente Ley, tendrá carácter de título ejecutivo. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

CONCORDAR RECAUCA IV.

*“Artículo 93. Subrogación. El agente aduanero que realice el pago de derechos e impuestos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de su mandante, **se subrogará en los derechos privilegiados del Fisco** por las sumas pagadas.*

Para ese efecto, la certificación del adeudo expedida por la autoridad aduanera superior del Servicio Aduanero constituirá título ejecutivo para ejercer cualquiera de las acciones correspondientes.

CNPT 16 f)-35

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 39.-Subrogación. El agente aduanero que realizare el pago de tributos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de su mandante, se subrogará frente a él por las sumas pagadas. Para este efecto, la certificación que expida la Dirección General de Aduanas tiene carácter de título ejecutivo.”

Sobre solicitud de certificación por subrogación de deuda. DGT-R-39-2019 de 8 de julio de 2019, LG de 13 de setiembre de 2019. “Artículo 1o— Emisión de la certificación. La Administración Tributaria emitirá certificación con carácter de título ejecutivo a favor de aquel tercero, extraño a la obligación tributaria de que se trate, que haga pago de la misma, siempre y cuando compruebe que ha efectuado dicho pago conforme a los requisitos establecidos en el artículo siguiente.” (Anteriormente, DGT-R-22-2019 de 7 de mayo de 2019)

CAPÍTULO III TRANSPORTISTA ADUANERO

ARTÍCULO 40.- Concepto. Los transportistas aduaneros personas, físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública aduanera; autorizados por la Dirección General de Aduanas. Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.

Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, Formulario de Declaración e Instructivo, Resolución No. 65-2001 (COMRIEDRE), Decreto Ejecutivo No. 29441-COMEX de 30 de marzo de 2001, Alcance No. 33-B a La Gaceta No. 91 de 14 de mayo de 2001.

Resolución No. 63-2000 (COMIECO) del Consejo de Ministros de Integración Económica, 27 de setiembre de 2000, Decreto Ejecutivo No. 29085-COMEX de 3 de octubre de 2000, La Gaceta No. 225 de 23 de noviembre de 2000.

LGA 212 a)-218-266
RLGA 123 y ss.

DGT-R-032-2014 Resolución sobre la Renta Líquida Presuntiva de Empresas No Domiciliadas de Transporte y Comunicaciones Internacionales con Establecimiento Permanente en Costa Rica, de 8 horas del 6 de agosto de 2014, La Gaceta 195 de 10 de octubre de 2014.

Circular DGA-CIR-012-2019 de 5 de junio de 2019, "Recordatorio sobre lo establecido en la normativa aduanera en cuanto al acceso, la entrada y salida de mercancías de las terminales portuarias, por transportistas aduaneros y transportistas no caucionados"

"Conclusiones:

- *El retiro de unidades contenedoras amparadas a un Documento Único Aduanero (DUA) de importación con trámite de despacho anticipado, y a cuyas mercancías les corresponde reconocimiento físico (semáforo rojo) es obligatorio que el transportista sea autorizado por la Dirección General de Aduanas.*
- *Para el retiro de mercancías con despacho anticipado sin revisión (semáforo verde), y por las cuales ya se han cancelado los tributos correspondientes, éstas podrán ser retiradas por transportistas caucionados, así como también podrán ser retiradas por transportistas no caucionados.*
- *En el caso de exportación de bultos sueltos, los mismos deberán estar contemplados en un DUA de exportación con forma de despacho normal, indicándose en el mismo el número de matrícula o identificación del vehículo que movilizará las mercancías hasta el costado del buque, pudiendo ser un transportista no registrado ante la DGA.*
- *Para el supuesto, de la movilización de unidades contenedoras sin mercancías, debe ser realizada por un transportista autorizado por la DGA."*

Artículo 40 bis.- Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque emitido por el transportista, constituirá título representativo de mercancías. Su traslado, cuando sea total, deberá realizarse mediante endoso y cuando sea parcial, mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales y autenticada por abogado; además, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de Aduanas.

(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

Circular DGT-014-2005 de 14 de setiembre de 2005, "**formato de cesión de derechos a utilizar por los usuarios**". LG 217 de 10 de nov. 2005

ARTÍCULO 41.- Requisitos. Para operar como transportista aduanero, además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, se exigirán los siguientes:

- a) Acreditar el domicilio de las oficinas centrales de la empresa.
- b) Nombrar un agente residente con facultades para atender notificaciones judiciales y administrativas en nombre del transportista, cuando él o ninguno de sus representantes tenga su domicilio en Costa Rica.
- c) Mantener inscritos los **vehículos y las unidades de transporte utilizados** en el giro de su actividad, conforme lo disponga la Dirección General de Aduanas, los que deberán cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad fijadas en la reglamentación correspondiente.
- d) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado, por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar. Esa garantía será por un monto de cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento, otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía, otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el Reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.

- e) Presentar, a la Dirección General de Aduanas, documento legítimo que compruebe la representación legal de la persona, cuando actúe en nombre del **transportista internacional** para efectos aduaneros, salvo lo dispuesto en los preceptos de la legislación comunitaria centroamericana, de los convenios y tratados internacionales de los que Costa Rica forme parte, y de las normas reglamentarias sobre tránsito terrestre.

(Inciso e) adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 29-236 q)-237 f)
RLGA 124

ARTÍCULO 42.- Obligaciones específicas. Además de las obligaciones generales establecidas en el Capítulo I de este Título son obligaciones específicas de los **transportistas aduaneros**, en cuanto les sean aplicables de acuerdo con el giro de su actividad:

- a) Permitir y facilitar la inspección aduanera de mercancías, vehículos y unidades de transporte, sus cargas y la verificación de los documentos o las autorizaciones que las amparen.
- b) Asignar personal para la carga, descarga o transbordo de mercancías.
- c) Reportar, por los medios que se establezcan reglamentariamente, las diferencias que se encuentren entre la cantidad de bultos u otros elementos de transporte realmente descargados o transportados y las cantidades manifestadas, las mercancías, los bultos u otros elementos de transporte dañados o averiados como consecuencia del transporte y cualquier otra circunstancia que afecte las declaraciones realizadas ante las autoridades aduaneras.
- d) Mantener intactos los mecanismos de control y seguridad colocados en bultos, vehículos y unidades de transporte.
- e) Transportar las mercancías por las rutas legales habilitadas y entregarlas en el lugar autorizado, dentro de los plazos que señalen las disposiciones administrativas, en vehículos y unidades de transporte que cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad.
- f) Comunicar a la aduana, con anticipación al arribo de la unidad de transporte, la existencia de mercancías inflamables, corrosivas, explosivas o perecederas o de las que, por su naturaleza, representen un peligro para otras mercancías, personas o instalaciones, con el fin de darles un tratamiento especial.
- g) Transmitir, por vía electrónica o por otro medio autorizado, antes del arribo de la unidad de transporte, los datos relativos a las mercancías transportadas. Esta información podrá sustituir el manifiesto de carga, para la recepción de las mercancías en las condiciones y los plazos que se establezcan por medio de reglamento.
- h) Emitir el título representativo de mercancías.
- i) Comunicar al estacionamiento transitorio respectivo la fecha de arribo a puerto de las mercancías. Esta comunicación deberá efectuarla la empresa de transporte internacional.

- j) Trasladar los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, del estacionamiento transitorio al depósito aduanero, el día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado en el **inciso a) del artículo 56 de esta Ley**. Este traslado deberá efectuarlo la empresa de transporte internacional.
- k) No trasladar a los estacionamientos transitorios unidades de transporte que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u otras de similar naturaleza.
- l) Entregar los bultos de entrega rápida separados del resto de la carga.

(Incisos i), j), k) y l) adicionados por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 235 d), e)-236 c), j), 238 b)-239 c)-241 f)-266

Artículo 43.- Responsabilidad. Los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las unidades de transporte y/o mercancías, según corresponda al medio de transporte utilizado, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por parte del auxiliar autorizado, según las disposiciones de la Dirección General de Aduanas y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública. **Además, responde por la instalación y el adecuado uso del precinto electrónico, independientemente de la persona física o jurídica que ejecuta materialmente la movilización de la unidad de transporte y/o mercancías.** *(Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)

Artículo 43.- Responsabilidad. Los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las unidades de transporte y/o mercancías, según corresponda al medio de transporte utilizado, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por parte del auxiliar autorizado, según las disposiciones de la Dirección General de Aduanas y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 43.- Responsabilidad. Los transportistas aduaneros son responsables de cumplir con las obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las mercancías, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza o su embalaje, conforme a las disposiciones de la Dirección General de Aduanas y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública.”

CAPÍTULO IV CONSOLIDADOR DE CARGA INTERNACIONAL

ARTÍCULO 44.- Concepto. Los consolidadores de carga internacional son auxiliares de la función pública aduanera que, en su giro comercial, se dedican, principal o accesoriamente, **a contratar, en nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías que ellos mismos agrupan, destinadas a uno o más consignatarios.**

Deberán cumplir con los requisitos y las obligaciones previstos en esta ley y sus reglamentos para los auxiliares de la función pública aduanera.

LGA 126
RLGA 131-132-282-283

Artículo 44 bis.- Requisitos. Para operar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los consolidadores de carga internacional deberán rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado, por las posibles responsabilidades tributarias derivadas de la operación como auxiliar, por el monto de veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. El monto de la caución o del seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros o por otros medios que fije el Reglamento de esta Ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.

Asimismo, deberán presentar a la Dirección General de Aduanas documento legítimo que compruebe la representación legal de la persona cuando, para efectos aduaneros, actúe en nombre del consolidador de carga. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

ARTÍCULO 45.- Contrato de transporte de carga consolidada. El consolidador o su representante legal deberá transmitir la información, a la autoridad aduanera, del manifiesto de carga consolidada y entregar copias de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre.

El conocimiento de embarque emitido por un transportista o un consolidador, constituye título representativo de mercancías y su traslado deberá realizarse mediante endoso, cuando sea total, y mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales y autenticada por abogado, cuando sea parcial; asimismo, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de Aduanas.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 126-266
Circular DGT-014-2005 de 14 de setiembre de 2005, “**formato de cesión de derechos a utilizar por los usuarios**”. LG 217 de 10 de nov. 2005

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 45.-Contrato de transporte de carga consolidada. El transportista deberá entregar, al operador de carga consolidada, el conocimiento de embarque matriz, en el cual aparezca como consignatario el consolidador o su representante legal y transmitir, a la autoridad aduanera, la información relativa a ese conocimiento.

El consolidador o su representante legal deberá entregar o transmitir la información, a la autoridad aduanera, del manifiesto de carga consolidada y copia de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre ese documento.

El conocimiento de embarque expedido por el consolidador de carga podrá ser nominativo, a la orden o al portador.”

Artículo 45 bis.- Obligaciones. Además de las otras obligaciones previstas en esta Ley y sus Reglamentos para los auxiliares de la función pública aduanera, los **consolidadores de carga internacional** deberán transmitir, a la aduana de control, por vía electrónica, las diferencias encontradas en la operación de desconsolidación de mercancías efectuada en el depósito aduanero o en otro lugar autorizado, respecto de la documentación que las ampara, **dentro del plazo de tres horas hábiles** contado a partir de la finalización de la descarga. En este mismo plazo deberán transmitir la información de los conocimientos de embarque que se deriven del manifiesto de

carga consolidada y entregar copia de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre dicho documento. (Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CAPÍTULO V DEPOSITARIO ADUANERO

ARTÍCULO 46.- Concepto. Los depositarios aduaneros son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, auxiliares de la función pública aduanera que, autorizadas mediante concesión, por la Dirección General de Aduanas, custodian y conservan temporalmente, con suspensión del pago de tributos, mercancías objeto de comercio exterior, bajo la supervisión y el control de la autoridad aduanera.

LGA 24 f)-155 y ss

RLGA 133 a 141

ARTÍCULO 47.- Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, para operar como depositario aduanero se exigirán los siguientes:

- a) Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, **inspección y despacho de mercancías**, con un área mínima de diez mil metros cuadrados destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, la cual incluya una sección mínima de construcción de tres mil metros cuadrados. Cuando se cumplan las medidas de control y las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar la prestación, en esas instalaciones, de servicios complementarios al despacho y el depósito de mercancías, siempre que el prestador cuente con las autorizaciones o concesiones necesarias. En los mismos términos, los depositarios aduaneros que posean a la vez la concesión de almacén general de depósito, podrán prestar ambos servicios, con la condición de mantener bodegas separadas para cada actividad, según el régimen bajo el cual se encuentren almacenadas las mercancías.¹
- b) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción.
- c) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción específicas que fijen las autoridades competentes y con la reglamentación para el depósito

¹ (La reforma efectuada por la Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004, contiene una contradicción en cuanto al inciso que reforma, ya que indica que se reforma el inciso a) pero luego cita el inciso c). "...27. Se reforma el inciso a) del artículo 47, cuyo texto dirá:

"Artículo 47.—**Requisitos.**

[...]

c) *Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías, con un área mínima de diez mil metros cuadrados destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, la cual incluya una sección mínima de construcción de tres mil metros cuadrados. Cuando se cumplan las medidas de control y las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar la prestación, en esas instalaciones, de servicios complementarios al despacho y el depósito de mercancías, siempre que el prestador cuente con las autorizaciones o concesiones necesarias. En los mismos términos, los depositarios aduaneros que posean a la vez la concesión de almacén general de depósito, podrán prestar ambos servicios, con la condición de mantener bodegas separadas para cada actividad, según el régimen bajo el cual se encuentren almacenadas las mercancías.*

[...]".)

aduanero de mercancías **líquidas, a granel peligrosas para la salud humana, animal, o vegetal y el medio ambiente o refrigeradas**. En estos casos, las áreas de construcción y las destinadas a la actividad del depósito aduanero podrán ser menores que las señaladas en el inciso a) de este artículo, de acuerdo con el reglamento.

- d) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta lo determine, oficinas para los funcionarios aduaneros asignados al depósito aduanero.
- e) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por un monto de cien mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA	237 c)-238 c)-239 c)
RLGA	140

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 47.- Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, para operar como depositario aduanero se exigirán los siguientes:

- a) *Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías, con un área mínima de diez mil metros cuadrados, destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, que incluya una sección mínima de construcción de mil metros cuadrados. Cuando se cumpla con las medidas de control y condiciones que establezca el reglamento de esta ley, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar la prestación, en esas instalaciones, de servicios complementarios al despacho y el depósito de mercancías, siempre que el prestador cuente con las autorizaciones o concesiones necesarias. En los mismos términos, los depositarios aduaneros que, a su vez, posean la concesión de almacén general de depósito, podrán prestar ambos servicios, con la condición de mantener bodegas separadas para cada actividad, según el régimen bajo el cual se encuentren almacenadas las mercancías.*
- b) *Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción.*
- c) *Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción específicas que fijen las autoridades competentes y con la reglamentación para el depósito aduanero de mercancías líquidas, a granel peligrosas para la salud humana, animal, o vegetal y el medio ambiente o refrigeradas. En estos casos, las áreas de construcción y las destinadas a la actividad del depósito aduanero podrán ser menores que las señaladas en el inciso a) de este artículo, de acuerdo con el reglamento.*
- d) *Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta lo determine, oficinas para los funcionarios aduaneros asignados al depósito aduanero.*
- e) *Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por un monto de cien mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.*

El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y

controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.”

Jurisprudencia:

a. Tema: Derechos Adquiridos y Situaciones Jurídicas Consolidadas:

- i. **SC voto 2732-1997**
- ii. **RES-DN-1817-2012- Exp. DN-132-2006 (1) CCC- (depositarios aduaneros)**
- iii. **Derechos adquiridos. Depositarios. Solicitud de traslado no es solicitud nueva.** Exp. 12-001647-1027-CA. Res. 000408-F-S1-2019. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las diez horas treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera; por ALMACÉN FISCAL DEGENFIS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de jurídica 3-101-064965, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Carl Wilhem Jensen Pennington, casado, cédula de identidad no. 6-0109-0656, vecino de San José; contra el ESTADO, representado por su procuradora, Sandra Sánchez Hernández, soltera, vecina de Heredia, carné no. 12149; y GERARDO BOLAÑOS ALVARADO, licenciado en administración pública, cédula de identidad no. 6-0118-0040, de domicilio no indicado. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de la sociedad actora, el licenciado Jorge Iván Calvo, carné no. 2230 y del co-demandado Bolaños Alvarado, la licenciada Claudia Eugenia Reyes Silva, de estado civil y domicilio ignorados. Las personas físicas son mayores de edad y, con las salvedades hechas, abogados. VIII.- Esta Cámara observa, el fallo combatido estima, el Almacén Fiscal demandante obtuvo la concesión de funcionamiento conforme a la Ley no. 2722, Ley Reguladora del Depósito de Mercancías en Almacenes de Depósito Fiscal y su reglamento; y por ello, señala, no se le puede aplicar el numeral 47 de la LGA –vigente a partir del año 2003; donde se introduce como requisito que todo almacén fiscal debe medir como mínimo 10.000 metros cuadrados y poseer 1.000 metros cuadrados de construcción-. Pues la aplicación de los nuevos requisitos sólo aplica para casos de solicitudes nuevas o de renovación, porque de lo contrario se configuraría un quebranto al principio de irretroactividad de la ley –mandato 34 de la Constitución Política-. En criterio de esta Cámara, el anterior razonamiento es conteste con los pronunciamientos constitucionales arriba citados; y siendo esa jurisprudencia vinculante erga omnes, conforme al numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala no encuentra motivo para apartarse de ella. Aunado a lo anterior, no es cierto, que la empresa actora haya solicitado el cese de operaciones, tal y como lo expone el casacionista en el recurso. Pues de los hechos tenidos por demostrados, los cuales no lograron ser desacreditados en el recurso, se tiene que la solicitud de la empresa accionante del 2 de julio de 1999, fue el “cierre temporal de sus operaciones” como depositario aduanero, extremo autorizado por la DGA –hechos tenidos por demostrados 3 y 4-. En consecuencia, concibe este Órgano colegiado, ello fue solamente una suspensión de la concesión de la cual disfrutaba. En este asunto, lo que se discute es una autorización para el traslado al Barrio San José de Curridabat para su puesta en operación dentro de la jurisdicción de la Aduana Central, de lo cual, según lo entiende este Órgano decisor, no es una nueva solicitud ni una renovación de la existente; razón por la cual no se le pueden exigir los nuevos requisitos. Según lo estima la Sala Constitucional, sólo en las situaciones de nueva solicitud o renovación de la concesión existente, procedería exigir los nuevos parámetros. Según los hechos fundamento de este proceso, la actora no hizo más que continuar con la autorización original que le había sido otorgada mediante acuerdo no. 46-H del 20 de mayo de 1985. Por ello, la denegatoria de traslado, en virtud del incumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 47 inciso a) de la LGA, según la reforma introducida por Ley 8373 del 18 de agosto de 2003, le resultan, a juicio de esta Cámara, inaplicables, tal y como lo resolvió el A quo. En mérito de lo expuesto, considera este Órgano decisor, no se ha violentado el mandato 47 inciso a) de la LGA, ni el 34 de la Constitución Política. Tampoco estima este Órgano decisor, errónea interpretación de las sentencias de la Sala Constitucional. En consecuencia, el agravio será denegado.”

b. Resoluciones administrativas.

- i. **Congelados y refrigerados. Permanencia a Bordo. RES-DGA-049-2016 de las 12 horas del 16 de febrero de 2016,** Autorizaciones de Permanencia A Bordo (art. 296 ter., RLGA). Solo permitidas para las mercancías señaladas en **RES-DGA-198-2009 de 14 de julio de 2009**, publicada en La Gaceta 165 de 25 de agosto de 2009. Además, cumplir con RES-DGA-052-2014 de 11 de marzo de 2014 (Manual de Estiba), RES-DGA-198-2009 de 14 de julio de 2009 (Lista de los tipos de mercancías que por su naturaleza, peso, dimensión, volumen u otras características especiales, es susceptible de no decargarla de la unidad de transporte), **RES-DGA-156-2011 de 8 de julio de 2011** (Modificación al punto 64 del Procedimiento de Tránsito Aduanero, capítulo II, Procedimiento Común, de la Sección I Políticas Generales)

ii. "Lineamientos generales para la ubicación, estiba, depósito, movilización e identificación de mercancías bajo **custodia temporal** de los depositarios aduaneros." RES-DGA-052-2014 de 10:30 horas del 11 de marzo de 2014, publicada La Gaceta 65 de 2 abril de 2014.

ARTÍCULO 48.- Obligaciones específicas. Además de las obligaciones establecidas en el Capítulo I de este Título, son deberes específicos del **depositario aduanero**:

- a) Mantener y enviar, a la autoridad aduanera competente, registros de mercancías admitidas, depositadas, retiradas, abandonadas u objeto de otros movimientos, según los **formatos y las condiciones** que establezca la Dirección General de Aduanas. (*VER SANCION SUSPENSION DE 1 AÑO*)
- b) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías.
- c) Responder del pago de las obligaciones tributarias aduaneras, por las mercancías que no se encuentren y hayan sido declaradas como recibidas; **además, pagar los daños que las mercancías sufran en sus recintos o bajo su custodia.**
- d) Recibir y custodiar las mercancías que la autoridad aduanera le envíe en circunstancias especiales, de conformidad con sus programas de distribución rotativa.
- e) **Entregar únicamente con autorización de la autoridad aduanera, las mercancías custodiadas.**
- f) Comunicar al jerarca de la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de daños, pérdidas u otras circunstancias que afecten las mercancías.
- g) Cumplir las disposiciones técnico-administrativas referentes a ubicación, estiba, depósito e identificación de las mercancías bajo su custodia.
- h) Presentar a la aduana de control, por el medio autorizado, durante los **primeros quince días** de cada mes, un **listado de las mercancías** que en el mes anterior hayan cumplido **un año** de haber sido recibidas en depósito.
- i) Contar con los medios de seguridad y control de inventarios tecnológicos, que aseguren la efectiva custodia y conservación de las mercancías que deban transmitirse a la aduana, según los requerimientos ordenados por la Dirección General de Aduanas.
- j) Mantener dentro de la bodega un área mínima de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m²), destinada a depósito, para el examen previo y/o la verificación física de las mercancías.
- k) Llevar un **registro de todas las personas que se presenten con autorizaciones de levante de mercancías**, así como de todos los vehículos que se utilicen para transportar mercancías al egreso del depósito aduanero.
- l) **Verificar la validez de la autorización del levante** de las mercancías, de conformidad con los medios que la Dirección General de Aduanas defina mediante resolución razonada de alcance general.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 99-160-60-64-211 b)-218 a)-235 i)-236 d)-f)-h), 237 b), 241 e)
RLGA 134-234

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 48.- Obligaciones específicas. Además de las obligaciones establecidas en el Capítulo I de este Título, son deberes específicos del depositario aduanero:

- a) Mantener y enviar, a la autoridad aduanera competente, registros de mercancías admitidas, depositadas, retiradas, abandonadas u objeto de otros movimientos, según los formatos y las condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas.*
- b) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías.*
- c) Responder del pago de las obligaciones tributarias aduaneras, por las mercancías que no se encuentren y hayan sido declaradas como recibidas; además, pagar los daños que sufran las mercancías en sus recintos o bajo su custodia.*
- d) Recibir y custodiar las mercancías que la autoridad aduanera le envíe en circunstancias especiales, de conformidad con sus programas de distribución rotativa.*
- e) Entregar únicamente con autorización de la autoridad aduanera, las mercancías custodiadas.*
- f) Avisar, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes, la ocurrencia de daños y pérdidas de mercancías y, dentro del término que establezca el reglamento de esta ley, dar aviso del cumplimiento del plazo de abandono de las mercancías depositadas, por los medios autorizados por la Dirección General de Aduanas.*
- g) Cumplir con las disposiciones técnico-administrativas referentes a ubicación, estiba, depósito e identificación de las mercancías bajo su custodia.”*

CAPÍTULO VI OTROS AUXILIARES

ARTÍCULO 49.- Concepto. Las empresas acogidas a los regímenes o modalidades de despacho domiciliario industrial, zona franca, de perfeccionamiento activo, entrega rápida, tiendas libres y otros que dispongan los reglamentos de esta ley, tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera.

RLGA Capítulo VI-143-151 a 157-163 a 178

Concesionarios Golfito- Se establecen como Auxiliares por DE-42196-H, Alc. 22 a LG 30 de 14 de febrero de 2020, modificado por **DE 42823-H-MEIC de 1 de febrero de 2021**. Ver también referencia a la figura del Auxiliar en la Ley de Judesur.

ARTÍCULO 50.- Requisitos y obligaciones específicas. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29 y 30 de esta ley, las empresas a las que se refiere el artículo anterior deberán cumplir, en lo conducente y según el régimen aplicable, con las siguientes obligaciones, además de las que se les fijen reglamentariamente:

- a)** Obtener autorización para operar como auxiliar de la Dirección General de Aduanas, previa demostración del cumplimiento de los requisitos que exige esta ley y sus reglamentos.
- b)** Inscribir, en los registros de la empresa, las mercancías recibidas en sus recintos, según los procedimientos y medios que establezca la Dirección General de Aduanas.

- c) Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías.
- d) Permitir el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas y registros de costos de producción para el ejercicio del control aduanero.

RLGA 179 a 185

CAPÍTULO VII DESPACHOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

ARTÍCULO 51 Entidades públicas. Las entidades públicas que realicen despachos aduaneros, en nombre propio o de otra entidad pública, deberán ser autorizadas por la Dirección General de Aduanas y cumplir con los requisitos que se fijan mediante reglamento.

Estas entidades deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 30, 31 y 32 de esta ley y acreditar a los funcionarios que las representarán ante el Servicio Nacional de Aduanas, los cuales deberán contar con los requisitos señalados en esta ley y sus reglamentos para el asistente de agente aduanero.

TÍTULO CUARTO OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 52.- Relación jurídica-aduanera. La relación jurídica aduanera estará constituida por los derechos, los deberes y las obligaciones de carácter tributario aduanero, que surgen entre el Estado, los particulares y otros entes públicos, como consecuencia de las entradas y salidas, potenciales o efectivas de mercancías, del territorio aduanero.

Artículo 53.- Obligación tributaria aduanera y no tributarias. La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso o la salida de mercancías del territorio aduanero.

La **obligación tributaria aduanera** es el vínculo jurídico que surge entre el Estado y el sujeto pasivo por la realización del hecho generador previsto en la ley y está constituida por los derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de mercancías. **Salvo si se dispone lo contrario, se entenderá que lo regulado en esta Ley respecto del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, será aplicable a sus intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza.**

Las **obligaciones no tributarias** comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento sea legalmente exigible.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 61-266
CNPT 11-13

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 53.- Obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico que surge entre el Estado y el sujeto pasivo por la realización del hecho generador previsto en la ley. La obligación tributaria aduanera está constituida por los tributos exigibles en la importación y exportación de mercancías. Salvo que se disponga lo contrario, se entenderá que las disposiciones de esta ley respecto al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera son aplicables a sus intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza.”

P. G. R. OJ-055-2006 de 24 de abril de 2006 “...Además, en el ordenamiento jurídico costarricense, los derechos arancelarios constituyen un tributo. Naturaleza que deriva no sólo de la calificación legal sino de la existencia misma de los elementos definidores del tributo, como son el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, la base imponible. Además, son expresión del poder soberano del Estado y aún cuando puedan cumplir fines extrafiscales, son un medio de satisfacer los gastos públicos. ...”

Legislación conexa

INDER,

La Gaceta No. 244 de 6 de octubre de 2020. Artículo 1º—Se establece en 10,56% anual la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo, como de la Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos Nos. 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Resolución General N° 002-2017.—Ricardo Rodríguez Barquero, Director Tributario del Instituto de Desarrollo Rural, La Gaceta N° 108 de 8 de junio del 2017 Director Tributario del Instituto de Desarrollo Rural. Fija tarifas porcentuales de impuestos administrados por INDER.

ARTÍCULO 54.- Sujetos activo y pasivo. El sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, acreedor de todos los tributos cuya aplicación le corresponde a la aduana.

El sujeto pasivo es la persona compelida a cumplir con la obligación tributaria aduanera, como consignatario, consignante de las mercancías o **quien resulte responsable del pago**, en razón de las obligaciones que le impone la ley.

CNPT 5-14-15-16 A 25

Artículo 55.- Hecho generador. El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el presupuesto estipulado en la ley para establecer el tributo y su realización origina el nacimiento de la obligación. Ese hecho se constituye:

- a) Al aceptar la declaración aduanera, en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades.
- b) En el momento en que las mercancías causen abandono tácito y/o al **aceptar su abandono voluntario**.
- c) En la fecha:
 - 1. de la comisión del delito penal aduanero;
 - 2. del decomiso preventivo, cuando se desconozca la fecha de comisión, o
 - 3. del descubrimiento del delito penal aduanero, si no se puede determinar ninguna de las anteriores.
- d) Cuando **ocurra la destrucción, la pérdida o el daño** de las mercancías, **o en la fecha** en que se descubra cualquiera de estas circunstancias, **salvo si se producen por caso fortuito o fuerza mayor**.

En los regímenes temporales o suspensivos, el momento de la aceptación de la declaración al régimen determinará los derechos e impuestos aplicables, a efecto de establecer el monto de la garantía, cuando esta corresponda.

En caso de cambio de un régimen temporal o suspensivo a uno definitivo, se estará a lo dispuesto en el inciso a) anterior.

En los **delitos penales aduaneros** se aplicará el régimen tributario vigente a la fecha de comisión del delito penal aduanero, a la fecha del decomiso preventivo de las mercancías, cuando no pueda determinarse la fecha de comisión, o a la fecha en que se descubra el delito penal aduanero, cuando las mercancías no sean decomisadas preventivamente ni pueda determinarse la fecha de comisión.

Cuando las condiciones tributarias, las condiciones arancelarias o los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional sean objeto de modificaciones, después de la fecha en que las mercancías hayan sido embarcadas en el país de procedencia, según lo certifique el representante legal del transportista debidamente acreditado en el país o en el puerto de embarque, mediante instrumento otorgado ante notario público del lugar, **legalizado en la forma debida por medio del procedimiento consular**, el declarante podrá optar por el nuevo régimen tributario o por el anterior, en el momento de declarar las mercancías a un régimen aduanero definitivo, siempre que se declaren antes del plazo de quince días hábiles contado desde el arribo de las mercancías a puerto aduanero. Esta disposición no será aplicable si se trata de regulaciones no arancelarias o cambiarias. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 110-160-227-Título X
CNPT 5-31 a 34

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 55.-Hecho generador. El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Ese hecho se constituye:

- a) En los regímenes definitivos de importación y exportación, sus modalidades y en los regímenes temporales y de perfeccionamiento activo, al aceptar la declaración aduanera.*
- b) En los regímenes aduaneros o modalidades, cuya declaración sea verbal, al presentar las mercancías a despacho por parte del declarante.*
- c) En los delitos y las infracciones tributarias aduaneras, se aplicará el régimen tributario vigente en la fecha de comisión del delito o la infracción, en la fecha del decomiso preventivo de las mercancías, cuando no pueda determinarse la fecha de comisión o en la que se descubra la infracción o el delito, cuando las mercancías no sean decomisadas preventivamente ni se pueda determinar la fecha de comisión.*
- d) En la fecha de caída en abandono de las mercancías y en la de aceptación de su abandono voluntario.*
- e) En el cambio de régimen, al aceptar la declaración aduanera en el nuevo régimen.*
- f) En la destrucción o pérdida de mercancías en depósito, en la fecha en que se descubra esa circunstancia, según el artículo 64 de esta ley.*

Cuando las condiciones tributarias, arancelarias o derechos contra prácticas desleales de comercio internacional fueran objeto de modificaciones después de la fecha en que las mercancías hayan sido embarcadas en el país de procedencia, según lo certifique el representante legal del transportista en el puerto de embarque mediante instrumento otorgado ante un notario público del lugar debidamente legalizado por medio del procedimiento consular, el declarante podrá optar por el nuevo régimen tributario o por el anterior en el momento de declarar las mercancías a un régimen aduanero definitivo, siempre que se declaren antes del plazo de quince días hábiles desde el arribo de las mercancías a puerto aduanero. Esta disposición no es aplicable, si se trata de regulaciones no arancelarias o cambiarias.”

APOSTILLADO

VER Exención de apostillado para países que tienen con Costa Rica un TLC. Circular-DGA-DGT-022-2019 de 6 de mayo de 2019, Oficio DGCE-COR-CAE-0088-2019 de COMEX: "... Dado lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el país, es importante reiterar que no se deben solicitar documentos relacionados con la importación de las mercancías consularizados o apostillados, cuando con el socio comercial existe un tratado de libre comercio que contemple dicho compromiso. . . ." "Artículo III.11 del Tratado vigente con **CARICOM**, Artículo 3.11 del Tratado vigente con **Chile**, Artículo 13 del Tratado vigente con **China**, Artículo 2.10.2 del Tratado vigente con **Colombia**, Artículo 2.11 del Tratado suscrito con **Corea**, Artículo 3.17 del Tratado vigente con **México**, Artículo 3.11 del Tratado vigente con **Panamá**, Artículo 2.10 del Tratado vigente con **Perú**, Artículo 3.08 del Tratado vigente con **República Dominicana**, Artículo 2.9 del Tratado vigente con **Singapur**, Artículo 10 del Anexo 7 del Tratado vigente con los **Estados AELC** y Artículo 3.10.2 del Tratado vigente con los **Estados Unidos**."

CONCORDAR CAUCA IV.

"Artículo 79. Información y documentos de la declaración de mercancías. La información que contendrá la declaración de mercancías y los documentos necesarios para la aplicación del régimen solicitado, así como los casos en que los documentos que sustenten la declaración deban adjuntarse a ésta, y aquellos en que deban permanecer a disposición de la Autoridad Aduanera, bajo la custodia del agente aduanero o del declarante en su caso, serán establecidos por el Reglamento.

Ningún documento requerido para la recepción legal de los medios de transporte o para la aplicación de cualquier régimen u operación aduanera, estará sujeto al requisito de visado consular."

ARTÍCULO 56.- Abandono. Las mercancías serán consideradas legalmente en abandono en los siguientes casos:

- a) Cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de **quince días hábiles desde el arribo de las mercancías a un puerto aduanero**.
- b) Cuando transcurra el plazo de depósito fiscal sin que se solicite otra destinación.
- c) **Las que hubieran sido desembarcadas por error y no sean reexportadas** dentro de un mes a partir de la **fecha de su descarga**.
- d) Cuando transcurran treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que constituye **prenda aduanera** sobre las mercancías.
- e) Cuando las mercancías **se encuentren bajo depósito fiscal**, incluyendo los de las autoridades portuarias, transcurrido el plazo de un mes, a partir de la fecha de notificación de la obligación tributaria aduanera sin que se hubiere procedido al pago del adeudo tributario.
- f) Cuando transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que una empresa, acogida al régimen de zona franca o de perfeccionamiento activo, haya cesado en sus operaciones sin haber reexportado o importado definitivamente sus mercancías.

Asimismo, caerán en abandono las mercancías en el régimen de zona franca, cuando su consignatario haga renuncia expresa de ellas o cuando su abandono se establezca en forma evidente y manifiesta.

- g) Cuando transcurrido un año a partir del depósito de las mercancías, según la modalidad de tiendas libres.
- h) En los demás casos previstos por esta ley.

- i) Cuando transcurra un mes-contado a partir de la fecha de la notificación al legítimo propietario-de emitida la resolución judicial que pone a la orden de la autoridad aduanera las mercancías no sujetas a comiso, en los casos en que dicho propietario no haya solicitado su destinación.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 60-69-78-91-97-157-163-178
RLGA 233

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 56.-Abandono. Las mercancías serán consideradas legalmente en abandono en los siguientes casos:

- a) Cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de quince días hábiles desde el arribo de las mercancías a un puerto aduanero.*
- b) Cuando transcurra el plazo de depósito fiscal sin que se solicite otra destinación.*
- c) Las que hubieran sido desembarcadas por error y no sean reexportadas dentro de un mes a partir de la fecha de su descarga.*
- d) Cuando transcurran treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que constituye prenda aduanera sobre las mercancías.*
- e) Cuando las mercancías se encuentren bajo depósito fiscal, incluyendo los de las autoridades portuarias, transcurrido el plazo de un mes, a partir de la fecha de notificación de la obligación tributaria aduanera sin que se hubiere procedido al pago del adeudo tributario.*
- f) Cuando transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que una empresa, acogida al régimen de zona franca o de perfeccionamiento activo, haya cesado en sus operaciones sin haber reexportado o importado definitivamente sus mercancías.*
- g) Cuando transcurrido un año a partir del depósito de las mercancías, según la modalidad de tiendas libres.*
- h) En los demás casos previstos por esta ley.”*

Abandono en caso de reembarque

RLGA “Artículo 262.-Solicitud, autorización y ejecución del reembarque. La solicitud de reembarque o retorno de las mercancías extranjeras desembarcadas **por error**, se presentará a la autoridad aduanera que corresponda por el **transportista, el consignatario o su representante**, en los formatos y mediante transmisión electrónica de datos u otros medios autorizados.

La autoridad aduanera autorizará el reembarque solamente cuando las **mercancías no se hubieran destinado a un régimen aduanero, no se encuentren en abandono o no se haya configurado respecto de ellas presunción fundada de infracción penal**. Para conceder la autorización de reembarque, no se exigirá ninguna garantía.

Una vez autorizado el reembarque, el mismo debe realizarse dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de su autorización, salvo que por causas justificadas la autoridad aduanera otorgue un plazo mayor.

De no efectuarse el reembarque dentro de ese plazo, conforme con el artículo 73 del RECAUCA, las mercancías **se considerarán en abandono**, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan deducirse. (Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31667 de 5 de marzo de 2004)”

Artículo 57.- Base imponible. La base imponible de la obligación tributaria aduanera de los derechos arancelarios a la importación estará constituida por el valor en aduanas de las mercancías, según lo definen el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, esta Ley y la demás normativa nacional e internacional aplicable.

La base imponible de la obligación tributaria aduanera de los demás tributos de importación o exportación, será la definida por la respectiva ley de creación de cada tributo”. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CONFRONTAR CAUCA IV.

“Artículo 44. Valor en Aduana. El valor en aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios a la importación (DAI), de las mercancías importadas o internadas al territorio aduanero de los Estados Parte.

Dicho valor será determinado de conformidad con las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y las del capítulo correspondiente en el Reglamento.

El valor en aduana será aplicable a las mercancías importadas o internadas estén o no afectas al pago de tributos.”

CONFRONTAR RECAUCA IV.

“Artículo 187. Valoración aduanera. Para los efectos del Artículo 44 del Código, este Capítulo desarrolla las disposiciones del Acuerdo, así como las disposiciones procedentes del ordenamiento jurídico regional en materia de valoración aduanera de las mercancías.

Artículo 188. Elementos del valor en aduana. Además de los elementos a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 8 del Acuerdo, también formarán parte del valor en aduana, los elementos siguientes:

- a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación;
- b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y
- c) El costo del seguro.

A los efectos de los literales a) y b) del presente Artículo, se entenderá por “puerto o lugar de importación”, el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio aduanero.

Artículo 189. Tarifas. Cuando alguno de los elementos enumerados en los literales a), b) y c) del Artículo anterior fueren gratuitos, no se contraten o se efectúen por medios o servicios propios del importador, deberá calcularse su valor conforme a las tarifas normalmente aplicables.

Para los efectos del párrafo anterior, el importador deberá determinar la cantidad a adicionar en concepto de gastos de transporte, carga, descarga y manipulación, al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de valoración, conforme a las tarifas que suministrará el Servicio Aduanero, por los medios que éste establezca. Dichas tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas de transporte registradas ante el Servicio Aduanero, para el traslado de mercancías de la misma especie o clase.

Para el caso del costo del seguro, el importador deberá determinar la cantidad a adicionar al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de valoración, conforme a las tarifas que suministrará el Servicio Aduanero. Dichas tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas de seguros, a las mercancías de la misma especie o clase.

Artículo 190. Intereses devengados. Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas no se considerarán parte del valor en aduana, siempre que:

- a) Los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas mercancías;
- b) El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito; y
- c) Cuando se le requiera, el comprador pueda demostrar:
 - i. Que tales mercancías se venden al precio declarado como precio realmente pagado o por pagar; y
 - ii. Que el tipo de interés reclamado, no exceda del nivel aplicado a este tipo de transacciones en el país y en el momento en que se haya facilitado la financiación.

Esta decisión se aplicará tanto si facilita la financiación el vendedor como si lo hace una entidad bancaria u otra persona natural o jurídica. Se aplicará también, si procede, en los casos en que las mercancías sevaloren con un método distinto del basado en el valor de transacción.

Artículo 191. Descuentos o rebajas. *Para la determinación del valor en aduana, se aceptarán los descuentos o rebajas de precios que otorga el vendedor al comprador, siempre que los mismos sean **comprobables, cuantificables, no correspondan a transacciones anteriores y que el precio realmente pagado o por pagar cumpla con lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo.***

-Protocolo al Convenio legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías Anexo "B" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley No. 7984 de 3 de febrero de 2000

-Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Ley No. 7475 de 24 de diciembre de 1994 la Asamblea Legislativa ratificó el Acta que recoge los Acuerdos de la Ronda Uruguay, suscrita en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, Alcance No. 40 a La Gaceta No. 245 de 26 de diciembre de 1994.

LGA Título XII
Ley 6879 de 21 de julio de 1983, reformada por Ley 6946 de 13 de enero de 1984.

Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Reglamento a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, Ley No. 4961 de 10 de marzo de 1972, reformada por Ley No. 6820 de 3 de noviembre de 1982, Ley No. 6955 de 24 de enero de 1984, Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992. Art. 10

Reglamento a la Ley de los Impuestos Selectivos de Consumo, Decreto Ejecutivo No. 14617-H de 10 de junio de 1983. 13, 26

RLGA
Decreto Ejecutivo No. 28976-H de 27 de setiembre de 2000, La Gaceta No. 196 del 12 de octubre del 2000 (Formulario a la Declaración del Valor en Aduanas y su instructivo de llenado), Decreto No. 29128-H de 8 de diciembre de 2000, puso en vigencia y modifica el Decreto No. 28976-H. (DEROGADO POR RECAUCA IV)

Valoración de vehículos automotores: Ver Decretos Ejecutivos 29265-H de 24 de enero de 2001, La Gaceta 27 de 7 de febrero de 2001; 29346-H de 2 de marzo de 2001, Alcance 22 a La Gaceta 47 de 7 de marzo de 2001; 29367-H, de 7 de marzo de 2001, La Gaceta 49 de 9 de marzo de 2001; 29555-H de 16 de mayo de 2001, La Gaceta 110 de 11 de junio de 2001.

RES-DGA-12-2019 Cánones y Derechos de Licencia. "1.—*Al momento de la importación de mercancías asociadas a derechos de propiedad intelectual, que estén afectas al pago de un canon y derecho de licencia, el declarante deberá establecer el monto a declarar por dicho concepto, y adicionarlo al precio realmente pagado o por pagar declarado, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones establecidas en el artículo 8.1.c del Acuerdo.*" Art. 2.- Trazabilidad, Art. 3.- Registros

Dirección General de Tributación. DGT-12-2020 Actualización del nivel de tributación mínimo de los impuestos sobre el tabaco, establecidos en la ley 9028, "Ley general de control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud", para el período 2020-2021. LG 131 de 4 de junio de 2020

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 57.-Base imponible. La base imponible de la obligación tributaria aduanera de los derechos arancelarios a la importación está constituida por el valor aduanero de las mercancías y, en los demás tributos de importación o exportación, por lo que establece su respectiva ley de creación."

CAPÍTULO II DETERMINACIÓN

ARTÍCULO 58.- Determinación. Determinar la obligación tributaria aduanera es el acto por el cual la autoridad o el agente aduaneros, mediante el sistema de autodeterminación, fija la cuantía del adeudo tributario. Este

adeudo deviene exigible al día siguiente de la fecha de notificación para determinar la obligación tributaria aduanera.

Cuando no se encuentren las mercancías, se hubieran destruido, ocultado o imposibilitado su inspección, o no estén disponibles los elementos necesarios para determinar fehacientemente la obligación tributaria aduanera, la autoridad aduanera determinará, **cumpliendo el debido procedimiento administrativo**, el monto prudencial de los tributos sobre la base de la información disponible.

LGA 61-86-98-102-227-264

CNPT 121-122-124-125-126-128-144

Sentencia 2014 - 001226. Expediente 10-012093-0007-CO. A las dieciséis horas con veinte minutos. Acción de inconstitucionalidad. Contra Artículos 124 Y 116. b) Del Código De Normas Y Procedimientos Tributarios. Se declara sin lugar la acción planteada. TRIBUTARIO. 10-12093 / 1226-14. **DETERMINACIÓN DE OFICIO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (RENTA PRESUNTA)**. Acción de Inconstitucionalidad contra los **artículos 124 y 116. b) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios**. Las normas se impugnan en cuanto se delega en la administración tributaria elementos esenciales de los tributos, que están reservados a la ley en materia tributaria; como son los criterios para determinar la base imponible del impuesto sobre la renta. Esa delegación inconstitucional permite la más absoluta discrecionalidad a la administración tributaria para desechar la prueba contable cierta, oficial y auditada (exigida por los artículos 24, 25 y 116 a) del código tributario) y en su lugar adoptar cualquier renta líquida gravable "a juicio de la administración". Con base en las consideraciones expuestas por la Sala en la sentencia se declara sin lugar la acción. SL

ARTÍCULO 59.- Revisión de la determinación. En ejercicio de los controles inmediatos, a posteriori o permanentes, la autoridad aduanera podrá revisar la determinación de la obligación tributaria aduanera bajo criterios de selectividad, aleatoriedad o ambos. La determinación podrá ser modificada, en el plazo establecido en el artículo 64 de esta ley. Cuando se haya determinado definitivamente uno o varios de los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera, como resultado final del **procedimiento ordinario** establecido en los artículos 192 y siguientes de esta ley o por sentencia judicial en firme, estos elementos no se podrán modificar posteriormente, salvo que se haya cometido un **delito** que haya incidido en la determinación definitiva.

LGA 98-102

CNPT 121-124

CAPÍTULO III MEDIOS DE EXTINCIÓN

Artículo 60.- Medios de extinción de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera se extinguirá por los medios siguientes:

- a) Pago, sin perjuicio del pago de los ajustes que puedan realizarse con ocasión de verificaciones de la obligación tributaria.
- b) Compensación.
- c) Prescripción.
- d) **Aceptación del abandono voluntario de mercancías.**
- e) Adjudicación, en subasta pública o mediante otras formas de disposición legalmente autorizadas, de las mercancías abandonadas.
- f) **Pérdida o destrucción total** de las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o por **destrucción de las mercancías bajo control aduanero.**

- g) Confusión, cuando quede colocado en la situación de deudor el sujeto activo de la obligación tributaria aduanera, como consecuencia de la transmisión de las mercancías o derechos afectos a los tributos de importación o exportación.
- h) Otros medios legalmente establecidos.

CNPT 5-35 a 56

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 60.- Medios de extinción. La obligación tributaria aduanera se extingue por alguno de los siguientes medios:

- a) Pago, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la modificación de la obligación tributaria aduanera.*
- b) Prescripción.*
- c) Compensación.*
- d) Destrucción o pérdida de sus mercancías.*
- e) Aceptación del abandono voluntario de las mercancías.*
- f) Adjudicación de las mercancías consideradas legalmente como abandonadas.*
- g) Confusión.”*

Artículo 61.- Pago. La obligación tributaria aduanera deberá pagarse en el momento en que ocurre el hecho generador. El pago efectuado fuera de ese término produce la obligación de pagar un interés, junto con el tributo adecuado. En todos los casos, los intereses se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera.

En los casos en que la resolución determinativa de la obligación tributaria o la que resuelva recursos contra dichas resoluciones se dicte fuera de los plazos establecidos, el cómputo de los intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la emisión de dichos actos.

Los medios de pago admisibles serán la vía electrónica u otros autorizados reglamentariamente.

La administración aduanera, mediante resolución, fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, **podrá exceder en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha tasa deberá actualizarse al menos cada seis meses.**

Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera, resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los **artículos 43 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.** (Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGA 53-58-65-70-74-100-102-227-195-266

CNPT 18-36-40-57-58

Versión anterior

ARTICULO 61.- Pago

El adeudo tributario no pagado en cinco días hábiles contados a partir de su notificación se incrementará con un interés igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de vencimiento del plazo, más quince puntos. Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 47 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Las formas de pago admisibles serán la vía electrónica u otras autorizadas reglamentariamente.
(Así reformado por artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003).

Versión original

ARTICULO 61.- Pago. El adeudo tributario no pagado en cinco días hábiles contados a partir de su notificación se incrementará con un interés igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de vencimiento del plazo, más quince puntos. Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 47 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La reglamentación determinará los medios de pago admisibles y los lugares donde ha de efectuarse.

Directriz DGA-012-2020 de 26 jun. 2020. Asunto: Directriz sobre suspensión del cómputo de intereses cuando se emitan fuera de plazo resoluciones determinativas de la Obligación Tributaria o que atiendan recursos.

CNPT. Pago bajo protesta

“Artículo 144.-Vista inicial. Para realizar la determinación citada en el artículo 124 de este Código, deberán efectuarse las actuaciones fiscalizadoras o de comprobación abreviada que se entiendan necesarias. Concluidas estas actuaciones, los órganos actuantes de la Administración deberán proponerle al sujeto pasivo, mediante el procedimiento definido por reglamento, la regularización que corresponda. En el supuesto de que este sujeto pasivo no regularice su situación, se continuará el procedimiento trasladándole las observaciones o los cargos que se le formulen.

(Así reformado su párrafo anterior por el inciso m) del artículo 27 de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria de 4 de julio del 2001).

*El contribuyente podrá pagar, **bajo protesta**, el monto del tributo y sus intereses determinados en **el traslado de cargos u observaciones**. Por ninguna circunstancia, dicho pago se considerará como una rectificación de la declaración ni como una aceptación de los hechos imputados en el traslado. **En este caso, el contribuyente podrá impugnar el traslado de cargos en los términos de los artículos 145 y 146 de este Código.** En el evento de que **la impugnación** del contribuyente sea declarada, total o parcialmente, con lugar en sede administrativa o jurisdiccional, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas pagadas **bajo protesta**, junto con los **intereses generados** por estas desde la fecha del pago hasta la fecha del crédito, o desde el día en que se ponga a disposición del sujeto pasivo. La tasa de interés que deberá reconocer la Administración será la establecida en el artículo 57 de este Código.”* (Así corregida su numeración por el artículo 6 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 139 al actual) (Así reformado por el artículo 1° de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999) (Mediante resolución N° 12496 del 31 de agosto de 2016, se anuló la reforma practicada a este numeral por el artículo 1° de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del 2012, "Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria", volviendo su texto al estado anterior a dicha reforma, según los términos señalados en la propia sentencia)

NOTAS:

RES-DGH-008-2021, DGH, 7 de abril de 2021, **REQUISITOS PARA QUE UN ADMINISTRADO CON DERECHO LEGAL A UNA EXENCIÓN QUE HAYA PAGADO TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN SOLICITE LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EXENCIONES COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA.** Publicada en La Gaceta 117 de 18 de junio e 2021.

Ineficacia de exenciones: D. E. 23862-H de 22 de noviembre de 1994. “**Considerando:** 1- Que en los artículos 37 al 41 de la Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992 se estipula el procedimiento a seguir para declarar la ineficacia total o parcial de una nota de exención, para el cobro de los tributos emergentes y para el pago de los mismos. 2- Que el artículo 41 de la citada Ley 7293 establece, entre otros aspectos, que además de aplicar lo atinente del artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, una vez confirmada o modificada la resolución respectiva, el contribuyente pagará también un interés anual igual a la tasa básica pasiva del Banco Central o, a falta de ésta, otra similar que fije el Ministerio de Hacienda; más un diferencial de hasta diez (10) puntos porcentuales. **Por tanto**, Con fundamento

en las atribuciones que le conceden los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política y la Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992, **DECRETAN: Artículo 1** – Para efectos de lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992, la tasa de interés a aplicar será igual a la **tasa básica pasiva que establece el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha en que se dicta la resolución determinativa más cinco (5) puntos porcentuales**. Para el caso de las **importaciones exoneradas**, dicho interés se aplicará por el plazo transcurrido desde el **primer día del mes siguiente de la fecha en que se desalmacenó, hasta la fecha en la que se dicte la resolución final, determinativa o resolutoria**. Esta tasa de interés se aplicará en aquellos casos cuyas fechas de aceptación de la póliza de desalmacenaje sean posteriores al 3 de abril de 1992. **Artículo 2** – Igual interés al indicado en el artículo anterior se cobrará para las deudas tributarias por **compras locales o con anterior exención**, cuando se establezca que dicha deuda es igual al monto de los tributos inicialmente exonerados. El citado interés correrá desde la fecha de la compra exonerada hasta la fecha de la resolución determinativa. Esta tasa de interés se aplicará para aquellas compras exoneradas que se hayan efectuado a partir del 3 de abril de 1992. .”

Resolución RES-DGH-45-2015. Dirección General de Hacienda. 8 set. 2015. La Gaceta No. 186 de 24 de setiembre del 2015. Requisitos para que un solicitante con Derecho Legal a una Exención que haya pagado tributos de importación solicite la Autorización del Departamento de Gestión de Exenciones como insumo para la Gestión de Devolución de Tributos ante la Administración Aduanera.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. **Resolución Procedimiento para solicitudes de devolución de saldos acreedores**, N°DGT-R-028-2018. -San José, a las ocho horas cinco minutos del siete de junio de dos mil dieciocho.

Intereses

Julio 1, 2021		10.20%
Enero 1, 2021	-	10.31%
Octubre 1, 2020	-	10.54%
Abril 1, 2020	-	12.20%
Octubre 1, 2019	-	12.11%
Abril 1, 2019	-	13.16%
Oct 1, 2018	-	13.01%
Abril 1, 2018	-	13.73%
Oct 1, 2017	-	12.80%
Abril 1, 2017	-	11.73%
Oct 1, 2016	-	12.37%
Mar 1, 2016	-	12.92%
Oct.1,2015 -	13.38%	
Mayo 1, 2015	-	14.00%
Oct. 1, 2014	-	12.68%
Abril 1, 2014	-	12.74%
Oct. 1, 2013	-	12.56%
Marzo 29, 2013	-	13.70%
Set. 28, 2012	-	19.00%

Resolución DGH-010-2021 / DGA-222-2021, mediante la cual se establece en 10.20%, a partir del 1 de julio de 2021.

Resolución DGH-054-2020 / DGA-542-2020, mediante la cual se establece en 10.31% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 61 de la Ley General de Aduanas, a partir del 1 de enero de 2021. Publicada 18 de diciembre de 2020.

Resolución conjunta RES-DGH-042-2020 / DGA-425-2020, mediante la cual se establece en 10.54 % la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración Tributaria, a partir del 1 de octubre de 2020. Publicada 16 de setiembre de 2020.

Resolución conjunta RES-DGH-013-2020 / DGA-066-2020, mediante la cual se establece en 12.20% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración Tributaria, a partir del 1 de abril de 2020. Publicada 03 de marzo de 2020.

Resolución conjunta RES-DGH-054-2019 / DGA-230-2019, mediante la cual se establece en 12.11% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración Tributaria, a partir del 1 de octubre de 2019. Publicada 19 de setiembre de 2019.

Resolución conjunta: Resoluciones Resolución DGH-016-2019 y DGA-DGT-008-2019. Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas. Publicada en La Gaceta N° 61 del 27 de marzo del 2019. “Artículo 1—Se establece en 13.16% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración Tributaria...” Artículo 6º-Rige a partir del 01 de abril de 2019.

Resolución conjunta: Resoluciones DGH-063-2018 Y DGA-DGT-026-2018. Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas. Publicada en La Gaceta N° 168 del 13 de setiembre del 2018. “Artículo 1º-Se establece en 13.01% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo...” Artículo 6º-Rige a partir del 01 de octubre de 2018.

Resolución conjunta: Resoluciones DGH-017-2018 Y DGA-DGT-008-2018. Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas. Publicada en el Alcance Digital N° 58 a La Gaceta N° 50 del 16 de marzo del 2018. “Artículo 1º-Se establece en 13.73% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo...” Artículo 5º-Rige a partir del 01 de abril de 2018.

Resolución conjunta: RESOLUCIÓN DGH-072-2017 y DGA-DGT-024-2017. Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas. Publicada en el Alcance Digital N 238 de La Gaceta 185. “Artículo 1º- Se establece en 12.80% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo...” Artículo 8º-Rige a partir del 1 de octubre de 2017.

Resolución conjunta: Resoluciones RES-DGH-016-2017 y RES-DGA-DGT-006-2017. Dirección General de Hacienda y Aduanas, Publicada en La Gaceta 61, del 27 de marzo del 2017. “Artículo 1º-Se establece en 11.73% la tasa de interés... Artículo 5º-Rige a partir del 1 de abril de 2017.” **(Adjuntado el 27 de marzo del 2017).**

Resolución conjunta: Resoluciones RE-DGH-044-2016 y RES-DGA-DGT-002-2016. Dirección General de Hacienda y Aduanas, Publicada en La Gaceta 179, del 19 de setiembre del 2016. “Artículo 1º-Se establece en 12.37% la tasa de interés... Artículo 5º-Rige a partir del 1 de octubre de 2016.” **(Adjuntado el 21 de setiembre del 2016)**

Resolución conjunta: Resoluciones Res. RES. DGH-008-2016 y DGA-033-2016.—Dirección General de Hacienda y Aduanas, Publicada La Gaceta 42 del 1 de marzo de 2016. “Artículo 1º—Se establece en 12.92% la tasa de interés ... Artículo 5º—Rige a partir del 1 de marzo de 2016”. **(ADJUNTADO EL 8 DE MARZO DEL 2016)**

Resolución conjunta: Resoluciones Res. RES. DGH-042-2015 y DGA-269-2015.—Dirección General de Hacienda y Aduanas, Publicada La Gaceta 186 del 24 de setiembre de 2015. “Artículo 1º—Se establece en 13.38% la tasa de interés ... Artículo 5º—Rige a partir del 1 de octubre de 2015”

Resolución conjunta: Resoluciones RES. DGH-009-2015 y SUB- DGA-055-2015 “14%” Rige a partir del 1 de mayo de 2015.

Resolución conjunta: Resoluciones Res. RES. DGH-038-2014 y DGA-0243-2014.—Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, Publicada La Gaceta 178 de 17 de setiembre de 2014. “Artículo 1º—Se establece en 12.68% la tasa de interés ... Artículo 5º—Rige a partir del 1º de octubre de 2014”.

Resolución conjunta: Resoluciones Res. N° DGH-014-2014 y DGA-249-2014.—Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, Publicada La Gaceta 51 de 13 de marzo de 2014. Artículo 1º—Se establece en 12.74% la tasa de interés ... Artículo 5º—Rige a partir del 1 de abril del 2014”.

Resolución conjunta: Resoluciones Res. N° DGH-034-2013 y DGA-272-2013.—Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas.—San José, a las 10:00 horas del día 29 de agosto del dos mil trece, Publicada La Gaceta 186 de 27 de setiembre de 2013. ... Artículo 1º—Se establece en 12.56% la tasa de interés... **Artículo 5º—Rige a partir del 1 de octubre de 2013**

Resolución de alcance general **RES-DGA-063-2013 de las diez horas del 12 de marzo de 2013**, publicado en La Gaceta N 109 del 07.06.2013, resuelve: **“POR TANTO. ... EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, RESUELVE:** Artículo 1º- Se establece que la tasa de interés en caso de pagos de la obligación tributaria aduanera realizados posteriores al momento del hecho generado o cobros indebidos de tributos realizados por la administración aduanera es de **13,70% ... Artículo 5º- Rige a partir del 29 de Marzo de 2013. ...”**

Resolución de alcance general **RES-DGA-298-2012 de 8 horas del 28 de setiembre de 2012**, resuelve: **“POR TANTO.** Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho de cita, potestades y demás atribuciones aduaneras que otorgan los artículos 6, 7 y 8 del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 3, 5, de su Reglamento así como los ordinales 6, 9, 11, 61 y 231 de la Ley General de Aduanas, N° 7557 y su reforma, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Ley N° 9069, publicada en el Alcance Digital No. 143 a La Gaceta No. 188 del 28 de setiembre de 2012. **EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, RESUELVE:**

Ajuste del TICA

Resolución de alcance general **RES-DGA-313-2012 de 1 de octubre de 2012** resuelve:

- “1. Comunicar que se están realizando los ajustes requeridos en la aplicación informática **TIC@**, con el fin de que el sistema realice en forma automática el cálculo y cobro de los intereses en caso de que en el ejercicio del control inmediato se realice un cambio o modificación de la obligación tributaria aduanera siempre que el ajuste sea aceptado y no haya impugnación.
2. Informar que la fórmula para calcular los intereses, en caso de ajustes de la obligación tributaria aduanera durante el control inmediato, es la siguiente:

Tasa de interés semestral fijada por la Dirección General de Aduanas dividida entre 365 días, obteniéndose la tasa de interés diaria en términos nominales, factor que se debe multiplicar por el monto de la diferencia de la obligación tributaria aduanera y el resultado obtenido por el número de días naturales contabilizados a partir del día del hecho generador, que en el régimen de importación se da a partir de la aceptación de la declaración aduanera y hasta la fecha en que se paga la diferencia adeudada de la obligación tributaria.

Ejemplo. . . .

3. *Informar que a partir de la vigencia de esta resolución y mientras se realiza el ajuste al sistema informático TICA, el cálculo y pago de los intereses establecido en el artículo 61 de la Ley General de Aduanas y sus reformas, cuando se trate de ajustes a la obligación tributaria aduanera realizados en el ejercicio del control inmediato y siempre que el ajuste sea aceptado y no haya impugnación, lo realizará el declarante aplicando el siguiente procedimiento:*

...

Instituto de Desarrollo Rural

La Gaceta N° 108 de 8 de junio del 2017, Resolución General N° 003-2017.—Dirección Tributaria.—San José, a las 10:00 horas del 26 de mayo del 2017.

“Artículo 1º—Se establece en 10,92% anual la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo, como de la Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos N° 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 2º—Se deja sin efecto la publicación efectuada en La Gaceta N° 236 del 08 de diciembre del 2016.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.”

La Gaceta de 7 de enero de 2020. IFAM DE-1278-2019.—Resolución Administrativa N° 75-2019. La Dirección Ejecutiva del **Instituto de Fomento y Asesoría Municipal**, Artículo 1º—Se establece en 10.30% anual la tasa de interés que está a cargo del sujeto pasivo de la obligación tributaria y de la Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Artículo 2º—La tasa del 10.30% anual que se establece en la presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 3º—A partir de la fecha en que sea publicada la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta, se deja sin efecto la tasa de interés publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 del viernes 12 de julio de 2019.

La Gaceta de 21 de julio de 2020. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 041-2020. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL **IFAM**. RESUELVE: Artículo 1o—Se establece en 7,05% anual la tasa de interés que está a cargo del sujeto pasivo de la obligación tributaria y de la Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Artículo 2o—La tasa del 7,05% anual que se establece en la presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 3o—A partir de la fecha en que sea publicada la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta, se deja sin efecto la tasa de interés publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 2 del martes 07 de enero de 2020. Artículo 4o—Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Moravia, a las diez horas del 14 de julio de 2020.—MBA. Mike Osejo Villegas, Director de la Administración Tributaria.—1 vez.—(IN2020471060).

La Gaceta 168 del 13 de setiembre de 2018, Resolución Administrativa N° 62-2018 del **Instituto de Fomento y Asesoría Municipal**, representada por Luis Fernando Delgado Negrini, en su condición de Director de la Administración Tributaria “RESUELVE:

Artículo 1º—Con el propósito de cumplir con lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 5792 del 01 de septiembre de 1975, vigente a partir del 29 de noviembre de 2012, se actualiza el impuesto específico creado por la Ley N° 9036 y otorgado a favor del IFAM, según se detalla a continuación:

<i>Tipo de Bebida</i>	<i>Impuesto por mililitro de Alcohol Absoluto</i>
<i>Cervezas</i>	<i>¢0.25706</i>

*Artículo 2º—El monto del impuesto específico ¢0.25706 (cero coma dos cinco siete cero seis colones), indicado en el artículo anterior, se aplicará sobre cada mililitro de alcohol absoluto a **partir del 01 de octubre del 2018**.*

Artículo 3º—A partir del 01 de octubre del 2018, se deja sin efecto el monto establecido en la Resolución Administrativa N° 37-2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 92, del viernes 25 de mayo de 2018, que actualizó el impuesto específico creado por el artículo 10 de la Ley 5792, para los meses de Julio, agosto y Setiembre del 2018. Dado en la ciudad de Moravia, a los 21 días del mes de agosto del 2018. Publíquese. Moravia, 24 de agosto del 2018.”

Concordancias:

Ver artículo 45 CNPT

Compensación

“Artículo 45.- Casos en que procede. *El contribuyente o responsable que tenga a su favor créditos líquidos y exigibles por concepto de tributos y sus accesorios podrá solicitar que se le compensen con deudas tributarias de igual naturaleza y sus accesorios, determinadas por él y no pagadas, o con determinaciones de oficio, referentes a periodos no prescritos, siempre que sean administrados por el mismo órgano administrativo. Asimismo, la Administración Tributaria quedará facultada para realizar la compensación de oficio.*

Tratándose del impuesto general sobre las ventas y el selectivo de consumo serán también compensables las deudas o los créditos que por concepto de estos tributos se generen en trámites aduaneros, con los generados ante la Dirección General de Tributación.

También, son compensables los créditos por tributos con los recargos y las multas firmes establecidos en este Código.” CNPT reformado por Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

(Este artículo 61 anteriormente había sido reformado Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)

“ARTÍCULO 61.- Pago. El adeudo tributario no pagado en cinco días hábiles contados a partir de su notificación se incrementará con un interés igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de vencimiento del plazo, más quince puntos. Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 47 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Las formas de pago admisibles serán la vía electrónica u otras autorizadas reglamentariamente.”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 61.- Pago. El adeudo tributario no pagado en cinco días hábiles contados a partir de su notificación se incrementará con un interés igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de vencimiento del plazo, más quince puntos. Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 47 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La reglamentación determinará los medios de pago admisibles y los lugares donde ha de efectuarse.”

Impuestos IFAM

IFAM. RES-87-2018. Artículo 1º—Se establece en 10.77% anual la tasa de interés que está a cargo del sujeto pasivo de la obligación tributaria y de la Administración Tributaria, de conformidad con el regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Artículo 2º—La tasa del 10.77% anual que se establece en la presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 3º—A partir de la fecha en que sea publicada la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta, se deja sin efecto la tasa de interés publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 jueves 13 de setiembre de 2018. Artículo 4º—Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. LG 17-01-2019

IFAM Res-General 02-2015. Se establece en 16% anual la tasa de interés que está a cargo del sujeto pasivo de la Obligación Tributaria y de la Administración Tributaria de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. LG 70. 13-04-15

TAN

*Por lo que resulta conforme a derecho la posición de la Administración al mantener la declaración de importación incólume, misma que se respalda en la posición jurisprudencial del Tribunal Aduanero Nacional, vertida en el tema de reclamaciones y rectificaciones de declaraciones aduaneras y de la **carga de la prueba**, puesto que tratándose de **rectificaciones a instancia de interesado**, éste debe aportar todo elemento de prueba conducente a demostrar, sin lugar a dudas la pretensión de corrección, y poder resolver la devolución de tributos que ello implica tal solicitud, en consecuencia, este Colegiado considera que no resulta idónea la reclamación y restitución de impuesto alguno, por lo que aplicando las reglas de la sana crítica racional, y la normativa que regula la carga de la prueba, entre otros los artículos 27, 196 c), 201 de la Ley General de Aduanas y 523 y 524 del Reglamento a ésta Ley, y en igual sentido en los artículos 140 a 143 del Código Tributario; y los artículos 221, 293 a 295, 298 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, disposiciones que mantienen una misma línea en cuanto al deber de probar lo dicho por parte de quien formule la pretensión a través de la amplitud de posibilidades que permiten las normas de derecho público y privado, así como el artículo 317 del Código Procesal Civil, estimamos procedente el rechazo operado en el presente asunto. **Sentencia 101-2015. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de marzo de dos mil quince.***

ARTÍCULO 62.- Prescripción. Prescribe en **cuatro años** la facultad de la autoridad aduanera para **exigir** el pago de los tributos que se hubieran dejado de percibir, sus intereses y recargos de cualquier naturaleza. Prescribe en el mismo plazo la acción del sujeto pasivo para **reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza o solicitar el crédito respectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago.**

Lo pagado para satisfacer una obligación tributaria aduanera prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado con conocimiento de la prescripción o sin él.

LGA 23-59-102-231
CNPT 43-51 y ss.
RLGA 259

Disposiciones administrativas

Resolución RES-DGH-045-2015 de las 8 horas del 8 de setiembre de 2015, “*Requisitos para que un solicitante con Derecho Legal a una exención que haya pagado tributos de importación solicite la autorización del Departamento de Gestión de Exenciones como insumo para la gestión de Devolución de Tributos ante la Administración Aduanera.*” La Gaceta 186 de 24 de setiembre del 2015.

Observaciones

Ver Oficio emitido por la Dirección General de Tributación: DGT-876-2017.

Ver artículo de Ana Elena Carazo: <http://www.elfinanciero.cr.com/economia-y-politica/columna-tributaria-prescripcion-de-sanciones/3QHTG47DHVF6DB7V65FSONKTM/story/>
En el artículo indica la prescripción no es una excepción de fondo (basándose en el oficio mencionado anteriormente), pero es claro que es de fondo.

Artículo 63.- Interrupción de la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán:

- a) por la notificación del inicio de las actuaciones de control y fiscalización aduaneras. **Se entenderá no producida la interrupción del curso de la prescripción, si las actuaciones no se inician en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación o si, una vez iniciadas, se suspenden por más de dos meses.**
- b) Por la notificación del inicio del procedimiento de verificación de origen.
- c) Por la notificación del acto final del procedimiento de verificación de origen.
- d) Por la notificación del acto inicial del procedimiento tendiente a determinar y exigir el pago de los tributos dejados de percibir.
- e) Por la **imposición de reclamaciones o recursos** de cualquier naturaleza contra resoluciones de la autoridad aduanera, incluyendo acciones judiciales que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final.
- f) Por cualquier actuación del deudor conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera.

El cómputo de la prescripción, para determinar la obligación tributaria aduanera, se suspende por la **imposición de la denuncia por presuntos delitos, hasta que dicho proceso se dé por terminado**. (Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, **rige a partir del 28 de setiembre de 2012.**)

(Anteriormente reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)

“ARTÍCULO 63.- Interrupción de la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán:

- a) Por la notificación del **acto inicial** del procedimiento tendiente a exigir el pago de tributos dejados de percibir.
- b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier naturaleza contra resoluciones de la autoridad aduanera, incluyendo acciones judiciales que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final.
- c) Por cualquier actuación del deudor conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera.”

El texto original del artículo era el siguiente:

ARTÍCULO 63.- Interrupción de la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán:

- a) *Por la notificación de la resolución que exige el pago de tributos dejados de percibir.*
- b) *Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier naturaleza contra resoluciones de la autoridad aduanera, incluyendo acciones judiciales que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final.*
- c) *Por cualquier actuación del deudor conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera.*

ARTÍCULO 64.- Destrucción y pérdida. La pérdida o destrucción de las mercancías por **caso fortuito, fuerza mayor o autorizada por la autoridad aduanera**, extinguirá la obligación tributaria aduanera **para el consignatario**, en proporción con la destrucción o pérdida, sin perjuicio de las responsabilidades **civiles, tributarias, administrativas o penales de terceros**.

LGA 24 q)-26-55 f)-60 d)-160-238 e)
RLGA 192

CAPÍTULO IV GARANTÍAS

ARTÍCULO 65- Garantías. El cumplimiento de la obligación tributaria aduanera podrá ser garantizado por quien esté obligado a su pago, en los casos que establece esta ley y su reglamento. Las garantías podrán consistir en dinero efectivo, cheque certificado, póliza o bonos de garantía bancaria o emitidos por el Instituto Nacional de Seguros y valores de comercio, siempre que, en este último caso, se demuestre mediante constancia de un corredor de bolsa que la garantía cubre el monto garantizado u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.

El monto garantizado deberá cubrir la totalidad de la deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier otro cargo líquido aplicable.

El monto deberá ser actualizado cada tres meses a partir de la fecha de rendición de la garantía para incluir los intereses que se adeudarían a esa fecha por las sumas no canceladas de conformidad con el artículo 61 de esta ley.

La autoridad aduanera vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posteriormente y, si no lo fueran, exigirá su ampliación o procederá a solicitar nueva garantía. Si la ampliación o la nueva garantía no se rinden en cinco días a partir de la solicitud de la autoridad aduanera, se procederá a la ejecución de las garantías rendidas y se iniciarán o continuarán, según el caso, los procedimientos correspondientes.

LGA 100
CNPT 5

Artículo 66.- Ejecución de la garantía. La garantía será exigible en las condiciones y los plazos que establecen esta Ley y sus Reglamentos.

Una vez agotada la vía administrativa, cuando a un auxiliar de la función pública aduanera se le determine responsabilidad derivada de una operación que haya tramitado, se procederá, si así corresponde, a ejecutar la garantía rendida ante el Servicio Nacional de Aduanas”.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 196

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 66- Ejecución de garantía. La garantía será exigible en las condiciones y los plazos que establece esta ley y sus reglamentos. Cuando proceda la ejecución de las garantías otorgadas por los auxiliares de la función pública aduanera, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 196 de esta ley.”

CAPÍTULO V PRIVILEGIOS FISCALES

SECCIÓN I PRIVILEGIOS GENERALES

ARTÍCULO 67.- Privilegio general. El Estado tendrá el derecho de prelación sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la obligación tributaria aduanera, excepto los créditos derivados de derechos laborales y alimentarios.

CNPT 59

Ver Ejecución del adeudo tributario aduanero

ADEUDOS INCOBRABLES: DGH-D-004-2018 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADEUDOS INCOBRABLES EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIVISIÓN DE ADEUDOS ESTATALES. Rige 1 de marzo de 2019, LG 17 de 24 de enero del 2019

MONTO EXIGUO COBRO JUDICIAL:

RES-DGH-085-2018. Dirección General de Hacienda, a las catorce horas y cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. “1º—El monto exiguo para el cobro judicial de adeudos originados en deudas aduaneras, tributarias y no tributarias a favor del Poder Central, será el equivalente al monto que establezca el Consejo Superior del Poder Judicial, al establecer el Salario Base del Oficinista 1, que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en noviembre de cada año.

2º—El monto exiguo equivalente a ese salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se tome en consideración para la fijación del monto exiguo sea modificado durante ese período.

3º—Para la aplicación del monto exiguo se debe contemplar la sumatoria de todas las deudas líquidas y exigibles de un mismo deudor, sin considerar recargos.

4º—Las deudas consideradas como exiguas originadas en deudas tributarias y aduaneras, según lo determinado en esta resolución, deberán incorporarse en el sistema de consulta tributaria contemplado en el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

5º—Se dejan sin efecto las resoluciones DGH-121-2008 de las doce horas del 20 de agosto de 2008 y DGH-041-2013 de las nueve horas del 30 de setiembre de 2013, emitidas por la Dirección General de Hacienda. 6º—Rige a partir de su publicación. Publíquese.” LG 29 de 11 de febrero del 2019

ARTÍCULO 68.- Afectación. Las mercancías que no hayan cumplido las formalidades legales de importación o internación ni los derechos transmitidos sobre ellas, quedarán afectas al cumplimiento de la obligación tributaria

aduanera y demás cargos, cualquiera que sea su poseedor, salvo que este resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o, en el caso de las mercancías no inscribibles, se justifique razonablemente su adquisición de buena fe y con justo título en establecimiento mercantil o industrial.

LGA 212 c)
CNPT 60

ARTÍCULO 69.- Embargo judicial de mercancías. El Juez que conozca de las causas judiciales en las que se involucren mercancías sujetas a regímenes aduaneros temporales, de perfeccionamiento, liberatorios o mercancías amparadas a franquicias o exenciones tributarias, deberá, con la expedición de cualquier orden de embargo que vaya a recaer sobre estas, solicitar certificación a la Dirección General de Aduanas respecto de los posibles tributos que graven esas mercancías. **En ningún caso procederá el embargo sobre mercancías caídas en abandono.**

LGA 24 c)-56

ARTÍCULO 70- Título ejecutivo. La certificación que expida la Dirección General de Aduanas por la parte insoluta de una obligación tributaria aduanera, sus intereses, multas, y otros recargos, tiene carácter de título ejecutivo suficiente para iniciar el cobro judicial.

El director o subdirector de Aduanas podrá ejercer directamente la acción de cobro y **decretar medidas cautelares**, según lo establecido al efecto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la siguiente sección, podrá decretar y practicar embargo administrativo sobre toda clase de bienes y mercancías del sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, según los términos y **procedimientos fijados en el Código citado**, para la **Oficina de Cobros Judiciales**.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 61
CNPT 173 a 176
LGAP 366

Ley 2393 de 11 de julio de 1959, Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 70- Título ejecutivo. La certificación que expida la Dirección General de Aduanas por la parte insoluta de una obligación tributaria aduanera, sus intereses, multas, y otros recargos, tiene carácter de título ejecutivo suficiente para iniciar el cobro judicial.

El Director o Subdirector General de Aduanas podrán ejercer directamente la acción de cobro y decretar las medidas cautelares. Podrán, asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la siguiente Sección, decretar y practicar embargo administrativo sobre toda clase de bienes y mercancías del sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, según los términos y procedimientos fijados en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para la Oficina de Cobros Judiciales.”

Artículo 70 bis.- Medidas cautelares. En cualquier momento en el **desarrollo de las actuaciones**, los funcionarios **encargados de la fiscalización de la Administración Tributaria** podrán adoptar **medidas cautelares debidamente motivadas**, para asegurar el resultado final de la actuación fiscalizadora que se desarrolla, con el **fin de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de obligaciones tributarias aduaneras o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición**. Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precintado, encintado de las mercancías que permanezcan en los recintos aduaneros, así como ordenar la permanencia de tales mercancías en dichos recintos, con el fin de asegurar las actuaciones fiscalizadoras. Las medidas cautelares serán **proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse las que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación, y estas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron**. Tales acciones no acarrearán, a las entidades o a los

funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe. (Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

SECCIÓN II PRENDA ADUANERA

ARTÍCULO 71.- Prenda aduanera. Con las mercancías se responderá directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos total o parcialmente por el sujeto pasivo como resultado de su actuación dolosa, culposa o de mala fe. La autoridad aduanera debe **retener o aprehender** las mercancías **previa orden judicial si esta acción implica un allanamiento domiciliario, de acuerdo con el ordenamiento vigente.** La **autoridad aduanera decretará** la prenda aduanera mediante el procedimiento que establece el **artículo 196 de esta ley.** Ese procedimiento debe **iniciarse dentro del plazo de prescripción para el cobro de la obligación tributaria aduanera.**

Ley No. 7485 de 6 de abril de 1995, Alcance No. 18 a La gaceta No. 99 de 24 de mayo de 1995

Ley aprobatoria del CAUCA 4

LGA 196

RLGA 186-187

ARTÍCULO 72.- Cancelación de la prenda. El pago efectivo de los tributos, las multas y los demás cargos por los que responden las mercancías, deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación que lo exige.

SECCIÓN III SUBASTA PÚBLICA

ARTÍCULO 73.- Subasta pública. Las mercancías abandonadas, las consideradas legalmente en abandono y las sometidas a comiso dictado por la autoridad competente, serán vendidas en subasta pública, conforme a los procedimientos estipulados en este capítulo y sus reglamentos, con excepción de las carentes de valor comercial o que no puedan ser consumidas por razones de seguridad de la salud -humana, animal o vegetal- la moral, la protección del medio ambiente, el interés público o sean de importación prohibida.

No podrán participar en forma directa o indirecta funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas como postores en el remate o compradores en la venta directa de mercancías establecida en esta sección, ni sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive.

LGA 56

RLGA 188 a 210

ARTÍCULO 74.- Determinación del precio base. El precio base de la subasta estará constituido por la obligación tributaria aduanera y los recargos de cualquier naturaleza exigibles a la fecha del abandono.

Mientras no se haya verificado la subasta, el **consignatario o quien compruebe su derecho sobre la mercancía** podrá recuperarla hasta veinticuatro horas antes del día señalado para la subasta, cancelando previamente al fisco el precio base más los intereses adeudados en el momento del pago.

LGA 61-76

RLGA 195-196

ARTÍCULO 75- Subasta de mercancías en lotes. Las mercancías podrán subastarse individualmente o integrando lotes. En este último caso, el precio base se disminuirá en un diez por ciento (10%).

RLGA 206-207

ARTÍCULO 76.- Venta directa de mercancías. La autoridad aduanera podrá ordenar la venta directa al público, sin necesidad de postura previa, de las mercancías que se fijen por vía reglamentaria. Estas mercancías se adjudicarán por el precio base a la primera persona que lo ofrezca.

Prevía autorización judicial, las **mercancías percederas decomisadas** podrán ser subastadas o adjudicadas en venta directa. Se fijará el precio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de esta ley más su valor aduanero. En este caso el producto de la venta **se pondría a disposición del Juez** correspondiente hasta que recaiga sentencia firme sobre el asunto, a fin de que disponga su destino.

RLGA 208 a 210

Artículo 77.- Adjudicación. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el acto de adjudicación se otorgará al mejor postor. Las mercancías no adjudicadas en el remate pasarán a propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 271 de esta Ley. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

RLGA 204

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 77.- Adjudicación. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el acto de adjudicación se otorga al mejor postor. Las mercancías no adjudicadas en el primer remate se pondrán a la venta diez días hábiles después en segundo remate, con un descuento del veinticinco por ciento (25%) de su precio base. Las mercancías no vendidas, en segundo remate, pasarán a propiedad del Estado.”

ARTÍCULO 78.- Mercancías provenientes de naufragio, zozobra, otros accidentes o encontradas sin titular conocido. Las mercancías provenientes de naufragio, zozobra, o accidentes similares o las que sean encontradas sin titular conocido y respecto de las cuales se presuma que no se han cancelado los tributos de importación, deberán ser puestas inmediatamente bajo control aduanero.

La autoridad aduanera publicará en el diario oficial un aviso sobre las anteriores circunstancias, incluyendo un detalle de las mercancías, para que las personas que se acrediten derecho a ellas se apersonen a hacerlo valer. Transcurrido un mes a partir de la publicación sin que conste apersonamiento alguno, las mercancías se considerarán en abandono y se venderán en subasta pública de conformidad con los procedimientos de esta sección, excepto los productos **percederos** que serán subastados o destruidos inmediatamente.

Toda persona que entregue a la autoridad aduanera mercancías, en las circunstancias apuntadas por este artículo, tiene derecho a que se le cancelen los gastos por concepto de rescate o transporte según se fije mediante estimación pericial. Estos gastos deberán ser cancelados por el titular de las mercancías. En caso de ordenarse su venta en subasta pública, los gastos se adicionarán al precio base, para su cancelación a quien las hubiera entregado a la autoridad aduanera.

RLGA 189

TÍTULO V INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y MERCANCÍAS

CAPÍTULO ÚNICO
INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS,
MERCANCÍAS, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte. El ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará la información requerida por vía reglamentaria.

Una vez cumplida la **recepción legal** del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse al embarque o desembarque de personas y mercancías.

LGA 2-266

RLGA 211 y ss.-217-222-543

Ley 9678 de 10 de abril de 2019, LG 142 de 6 de agosto de 2019, "Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá".

Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, Decreto Ejecutivo 41212-MOPT de 10 de julio de 2018, publicado La Gaceta 130 de 12 de julio de 2018: *"Visita Oficial: acto administrativo que se realiza a bordo del buque o nave, para conceder la libre plática, que permite a los funcionarios públicos determinar si la nave o buque, los tripulantes, los pasajeros y la carga a bordo, cumplen con los requerimientos establecidos en la normativa nacional e internacional, a efecto de autorizar su permanencia en aguas nacionales y el desembarque de tripulantes, pasajeros y carga."*

Concordancias

Reglamento General de Servicios Portuarios del INCOP

"Artículo 50.—Adicionalmente a la información y documentación requerida en el Artículo 36 de este Reglamento, en el momento de la Visita Oficial, el Capitán o el agente del armador obligatoriamente entregarán al representante del prestatario del servicio la siguiente documentación:

- a) Una copia de los manifiestos de carga destinada al puerto y una copia de los BLs correspondientes. Si la nave viene vacía, debe presentar el manifiesto en lastre.*
- b) Lista de pasajeros, tripulantes, equipajes, pacotilla y carga de correo (Convenio Postal Universal).*
- c) Declaración Marítima de Sanidad.*
- d) Declaración de Protección y estado de seguridad del buque al momento de atraque en el puerto de conformidad con lo establecido en el Código para la protección de Puertos e Instalaciones Portuarias PBIP.*
- e) Completar el Formulario de Control de Arribo de Embarcaciones emitido por la autoridad Portuaria."*

Artículo 79 bis. Presentación del manifiesto. El transportista presentará a la aduana de ingreso, por los medios que disponga la Dirección General de Aduanas, el manifiesto que ampara toda la carga que el vehículo transporta. La **autoridad portuaria**, aeroportuaria, el **concesionario** o el **contratista de servicios públicos portuarios o aeroportuarios**, el **funcionario competente** o el **auxiliar autorizado por la autoridad aduanera**, verificará la descarga de los bultos, consignará en el manifiesto el resultado de la operación y lo comunicará a la aduana por los medios que la Dirección General de Aduanas habilite. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

JAPDEVA = Autoridad Portuaria Ley 9764 publicada 17 octubre 2019, reforma Ley 3091, Ley Orgánica de JAPDEVA.

Artículo 79 ter.- Rectificación del manifiesto. El transportista podrá rectificar los datos del manifiesto relativos al número y a la descripción de los bultos (clase, marcas, numeración y peso), **en cualquier momento antes de la llegada del medio de transporte a la jurisdicción de la aduana de ingreso**. Los demás datos del manifiesto y/o conocimientos de embarque o guías aéreas, podrán rectificarse en cualquier momento antes de destinar las mercancías a uno de los regímenes aduaneros. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

Artículo 80.- Recepción de bultos. La aduana de destino o el receptor de mercancías recibirá los bultos u otros elementos de transporte, con base en los manifiestos de carga o el medio autorizado. El funcionario competente o la persona autorizada procederá a recibirlos, consignará su aprobación o efectuará las observaciones por los medios autorizados; lo anterior sin perjuicio de las atribuciones aduaneras en materia de control. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 266

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 80.-Recepción de bultos. La aduana de destino recibirá los bultos u otros elementos de transporte con base en los manifiestos de carga o medio autorizado. El funcionario competente o la persona autorizada procederá a recibirlos, consignará su aprobación o efectuará las observaciones por los medios autorizados.”

Artículo 81.- Bultos faltantes y sobrantes. Cuando al **finalizar la descarga del medio de transporte**, resulten más o menos bultos respecto de la cantidad declarada en el manifiesto o documento equivalente y así lo **verifique y transmita el auxiliar receptor de la mercancía**, el **transportista** deberá justificar ante la aduana de control el **faltante o el sobrante de bultos**, dentro del plazo máximo de **un mes contado a partir de finalizada la descarga**.

Si **faltan bultos**, la aduana aceptará la justificación solo cuando se demuestre fehacientemente que las mercancías:

- a) No fueron cargadas.
- b) Se perdieron en accidente.
- c) Fueron descargadas en lugar distinto.
- c) Quedaron a bordo del medio de transporte, por error.
- e) La falta de las mercancías se produjo por **caso fortuito o fuerza mayor**.

De **sobrar bultos**, se aceptará la justificación cuando el transportista demuestre que las mercancías estaban destinadas a otro puerto o aeropuerto. En caso contrario, las mercancías causarán abandono a favor del Fisco; en tal situación, el consignatario no podrá disponer de las mercancías.

Cuando el **transportista** no pueda justificar ninguna de las situaciones anteriores, incurrirá en las **sanciones correspondientes**, sin perjuicio de la responsabilidad por los **delitos o las infracciones** previstos en esta Ley.

Para los efectos de este artículo, la **justificación correspondiente deberá ser emitida por el representante legal del transportista en el puerto de embarque, mediante documento otorgado ante notario público del lugar y debidamente legalizado, por medio del procedimiento consular o del representante legal en el país, acreditado ante la Dirección General de Aduanas.** *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 81.-Bultos faltantes y sobrantes. Si en el momento de recibirse los bultos en los lugares y por las personas autorizadas se encuentran diferencias entre lo declarado y las mercancías descargadas, se efectuarán las rectificaciones o los ajustes en el manifiesto o medio que lo sustituya.

El transportista estará obligado a rectificar o aclarar pertinentemente, dentro de un plazo de un mes a partir de la fecha de descarga en los siguientes casos:

Si se trata de bultos faltantes, cuando exista diferencia respecto de las mercancías consignadas en los manifiestos o medios sustitutos y se demuestre lo siguiente:

- a) No fueron cargadas.*
- b) Fueron perdidas en accidentes.*
- c) Fueron descargadas en lugar distinto o,*
- d) Por error quedaron a bordo del medio de transporte.*

Si se trata de bultos sobrantes, cuando al efectuarse la descarga exista diferencia respecto de las mercancías consignadas en los manifiestos o los medios sustitutos y se demuestre que faltaron en otro puerto o aeropuerto.

Cuando el transportista haya recibido contenedores cerrados con dispositivos de seguridad, la responsabilidad de justificar los bultos sobrantes o faltantes corresponderá al exportador o embarcador de las mercancías.”

CONFRONTAR CON CAUCA IV.

“Artículo 67. Reembarque. Reembarque es el retorno al exterior de mercancías extranjeras desembarcadas por error.

El reembarque solamente será autorizado cuando las mercancías no se hubieran destinado a un régimen aduanero, no se encuentren en abandono o no se haya configurado respecto de ellas presunción fundada de infracción penal.

Artículo 68. Mercancías faltantes o sobrantes. *Si en el proceso de descarga se detectaren faltantes o sobrantes respecto de lo manifestado, el transportista deberá justificar tal circunstancia en el plazo que establezca el Reglamento.*

Artículo 69. Faltantes de mercancías. *En el caso de que los faltantes no se justifiquen debida y oportunamente se establecerán las responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes.*

Artículo 70. Sobrantes de mercancías. *En caso de sobrantes se permitirá su despacho siempre que se justifique tal circunstancia y la diferencia con lo manifestado no exceda del porcentaje establecido en el Reglamento.*

Cuando dichos sobrantes excedan del porcentaje permitido, éstos serán objeto de comiso administrativo y subastado por el Servicio Aduanero.

Artículo 71. Custodia temporal de mercancías. *La Autoridad Aduanera podrá autorizar que el medio de transporte o sus cargas, permanezcan temporalmente en los lugares habilitados para su custodia, bajo las condiciones y plazos que establezca el Reglamento.”*

APOSTILLADO

VER Exención de apostillado para países que tienen con Costa Rica un TLC. Circular-DGA-DGT-022-2019 de 6 de mayo de 2019, Oficio DGCE-COR-CAE-0088-2019 de COMEX: “... Dado lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el país, es importante reiterar que no se deben solicitar documentos relacionados con la importación de las mercancías consularizados o apostillados, cuando con el socio comercial existe un tratado de libre comercio que contemple dicho compromiso. . . .” “Artículo III.11 del Tratado vigente con **CARICOM**, Artículo 3.11 del Tratado vigente con **Chile**, Artículo 13 del Tratado vigente con **China**, Artículo 2.10.2 del Tratado vigente con **Colombia**, Artículo 2.11 del Tratado suscrito con **Corea**, Artículo 3.17 del Tratado vigente con **México**, Artículo 3.11 del Tratado vigente con **Panamá**, Artículo 2.10 del Tratado vigente con **Perú**, Artículo 3.08 del Tratado vigente con **República Dominicana**, Artículo 2.9 del Tratado vigente con **Singapur**, Artículo 10 del Anexo 7 del Tratado vigente con los **Estados AELC** y Artículo 3.10.2 del **Tratado vigente con los Estados Unidos.**”

DIRECTRIZ DGA-002-2018 de 25 de junio de 2018. Directriz de la Dirección General de Aduanas sobre justificación de Sobrantes y Faltantes.

Artículo 81 bis.- Sobrantes de mercancías a granel. No será necesario justificar las diferencias en las mercancías a granel, siempre que la diferencia total no exceda del tres por ciento (3%). Cuando tal diferencia sea superior a dicho límite, el transportista deberá justificar, en la forma señalada, la diferencia total respecto de lo manifestado para los bultos sobrantes. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)*

Artículo 82.- Irregularidades en la recepción. Los bultos con señales de daño, saqueo o deterioro se colocarán en sitio aparte para ser inspeccionados y reconocidos de inmediato, se ordenará su reembalaje y se efectuarán las anotaciones de rigor en los documentos respectivos. En este caso o cuando **la naturaleza de las mercancías difiera entre lo descargado y lo declarado**, o bien cuando **existan signos de violencia o daño en la unidad o el elemento de transporte, en los precintos, sellos, marchamos o dispositivos de seguridad**, se estará a lo dispuesto en materia de **delitos aduaneros e infracciones administrativas**. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 82.-Irregularidades en la recepción. Las mercancías y los bultos con señales de daño, saqueo o deterioro, se colocarán en sitio aparte para su inspección y reconocimiento inmediato, se ordenará su reembalaje y se efectuarán las anotaciones de rigor en los documentos respectivos. En este caso o cuando la naturaleza de las mercancías difiera entre lo descargado y lo declarado o existan signos de violencia o daño en la unidad o elemento de transporte, en los precintos, sellos, marchamos o dispositivos de seguridad, se estará a lo dispuesto en materia de delitos aduaneros e infracciones administrativas y tributarias aduaneras.”

Artículo 82 bis.- Rectificaciones del manifiesto de carga. Cuando el transportista haya justificado fehacientemente el faltante o sobrante de bultos, la aduana rectificará en el manifiesto lo siguiente:

- a) Rebajará del correspondiente conocimiento o guía aérea los bultos cuya falta se haya justificado.
- b) Agregará, al manifiesto del medio de transporte en que llegaron al país, una nueva partida de orden comprensivo de los bultos sobrantes, debidamente justificados.

Los bultos sobrantes justificados podrán ser despachados a cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros; los bultos no justificados causarán abandono a favor del Fisco, transcurrido el plazo de un mes. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

Artículo 82 ter.- Reembarque. El reembarque es el retorno al exterior de mercancías extranjeras desembarcadas **por error**. Solo será autorizado cuando las mercancías no se hayan destinado a un régimen aduanero, no se encuentren en abandono o respecto de ellas no se haya configurado **presunción fundada de infracción penal**.

Las mercancías destinadas a otro país, que por error hayan sido descargadas, podrán ser reexportadas en el vehículo que las trajo. Si dicho vehículo ya ha partido, quedarán depositadas en **zona de operación aduanera**, a la orden del representante nacional del transportista, quien asumirá los gastos ocasionados por su permanencia; si las mercancías **no son retiradas en un mes a partir de la fecha de descarga, se considerarán en abandono**. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

TÍTULO VI PROCEDIMIENTOS COMUNES A CUALQUIER RÉGIMEN ADUANERO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83.- Aplicación. Los procedimientos que establece este título son aplicables a todos los regímenes aduaneros, salvo disposición en contrario de esta ley. Por vía **reglamentaria** se dispondrán los demás requisitos, formalidades, condiciones y procedimientos obligatorios para cada régimen de conformidad con los fines del régimen jurídico aduanero y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas.

LGA 266

Ver Mecanismo para el Reembolso de los Derechos Arancelarios a la Importación de Mercancías Originarias de la Unión Europea. Resolución COMIECO-COSEFIN No. 01-2015 de 25 de junio de 2015
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=80687&nValor3=102481&strTipM=FN

CAPÍTULO II ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA

ARTÍCULO 84.- Examen previo. El declarante o su representante, podrá efectuar el examen previo de las mercancías por despachar, para reconocerlas a efecto de declarar, correctamente, toda la información acerca de las mercancías.

LGA 266

CONFRONTAR CAUCA IV.

***“Artículo 74. Examen previo.** El declarante o su representante, podrán efectuar el examen previo de la mercancía por despachar, para reconocerlas, a efecto de declararlas correctamente, autodeterminar las obligaciones tributarias y cumplir con las no tributarias. Los requisitos y procedimientos para efectuar el examen previo, se regularán en el Reglamento.”*

CONFRONTAR RECAUCA IV.

***“Artículo 311. Examen previo.** Para efectos del Artículo 74 del Código, el declarante o su representante tendrá derecho a efectuar el examen previo de las mercancías por despachar.*

Para efectuar el examen previo de las mercancías, el depositario estará obligado a brindar las facilidades necesarias al consignatario para la práctica de dicha diligencia.

***Artículo 312. Práctica del examen previo.** Durante el examen previo, no se permitirá la realización de actos que modifiquen o alteren la naturaleza y la cantidad de las mercancías. En la declaración de mercancías deberá indicarse que se practicó el examen previo, cuando éste se hubiere efectuado.*

El depositario debe tomar las medidas pertinentes de conservación y custodia durante la práctica del examen previo.

Tratándose de mercancías ubicadas en recintos bajo custodia de la Autoridad Aduanera, se deberá presentar solicitud ante dicha Autoridad, en la que se manifieste la intención de examinar físicamente las mercancías.

Del resultado del examen previo deberá levantarse un acta firmada por quien lo efectuó y por el representante del depositario, quedando dicha acta bajo custodia del depositario.

***Artículo 313. Discrepancias durante el examen previo.** En caso de que se encontraren discrepancias respecto de la documentación de soporte al momento de realizar el examen previo, la Autoridad Aduanera*

designada o el representante del depósito verificará el hecho y lo hará constar en un informe que comunicará en forma inmediata a la Autoridad Aduanera. Copia de dicho informe podrá anexarse a la declaración aduanera respectiva.”

ARTÍCULO 85.- Consultas técnicas. La persona con **interés directo o legítimo** podrá consultar por escrito a la autoridad aduanera sobre la aplicación de **reglamentos técnicos**, tarifas vigentes, criterios arancelarios y de valoración aduanera. La consulta deberá contener el criterio motivado del interesado.

El dictamen de la autoridad aduanera se limitará al **caso concreto consultado**. No tiene efecto la consulta realizada sobre la base de datos inexactos u omisos proporcionados por el interesado.

La presentación de la consulta no interrumpirá los plazos ni la continuación de los procedimientos aduaneros.

RLGA 255

VER CAUCA IV.

***“Artículo 72. Resoluciones Anticipadas.** Resoluciones anticipadas son actos previos de naturaleza vinculante mediante los cuales, los Servicios Aduaneros o la Autoridad competente en su caso, de los Estados Parte resuelven las solicitudes formuladas sobre:*

- a) Clasificación arancelaria;*
- b) Aplicación de los criterios de valoración aduanera, para un caso en particular, de acuerdo con la aplicación de las disposiciones establecidas en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y las del capítulo correspondiente en el Reglamento;*
- c) Aplicación de la devolución, suspensión u otro diferimiento de aranceles aduaneros;*
- d) Origen preferencial de una mercancía de acuerdo con el tratado que se invoca;*
- e) Elegibilidad para tratamiento libre de aranceles de una mercancía reimportada al territorio de un Estado Parte luego de haberse exportado para su transformación, elaboración o reparación;*
- f) Marcado de país de origen; y,*
- g) Aplicación de cuotas.*

Igualmente, incluye las resoluciones anticipadas expedidas por los Servicios Aduaneros o Autoridad competente conforme lo previsto en los acuerdos o tratados comerciales internacionales, bilaterales o multilaterales celebrados con terceros países, las que se regularán por lo establecido en dichos instrumentos.

Artículo 73. Formalidades de las Resoluciones Anticipadas. Los requisitos, procedimientos, plazos, recursos, publicidad y vigencia de las resoluciones anticipadas y demás aspectos y formalidades, se regularán en el Reglamento.”

VER RECAUCA IV. ARTICULOS 291 Y SIGUIENTES.

VER: Ley No. 9097 de 26 de octubre de 2012, publicada en el Alcance 49 a La Gaceta 52 **del: 14/03/2013**, “**Ley de Regulación del Derecho de Petición**”.

“Artículo 3.- Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley.”

DGA Lineamientos para el Ejercicio del Derecho de Petición ante el Servicio Nacional de Aduanas, DIR-DN-003-2018, adjuntada a la **DIR-DN-004-2018 de 24 de abril de 2018**. Ámbito de aplicación: “... la presente directriz es obligatoria para todas aquellas gestiones presentadas ante la Administración que constituyen una **mera solicitud de información** (petición pura). Por tanto, se excluye del ámbito de aplicación de ésta directriz, **gestiones con planteamiento de fondo y cuando lo solicitado por el administrado se trate de una aprobación, autorización o licencias por parte de la Administración.**” Plazo: 10 días hábiles, traslado a otro departamento en 3 días hábiles. Tutela: Recurso de Amparo.

Sobre emisión de Reglamentos Técnicos ver: **DE-41296-COMEX-MEIC** publicación de Guía Centroamericana de Buenas Prácticas Reglamentarias y sus Anexos, Anexo 2 Manual para la edición y presentación de los RTCA. LG diciembre 2018.

DE 41422-MEIC de 16 de octubre de 2018, Aprueba el **Procedimiento para Dispensar del Cumplimiento de la Nota Técnica a Productos del Sector no Alimentario que se encuentra fuera del Ámbito de Aplicación de un Reglamento Técnico Competencia del MEIC**, LG 237 de 20 de dic. de 2018.

“Artículo 2. Sanciones por incumplimiento. Los incumplimientos, infracciones u omisiones a las disposiciones del presente Decreto serán sancionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 del 20 diciembre de 1994. La responsabilidad penal será sancionada conforme a la legislación penal vigente.

Artículo 3. Por su naturaleza técnica, a las resoluciones originadas en este procedimiento, no le aplican los Recursos establecidos en la Ley General de la Administración Pública.”

CAPÍTULO III LA DECLARACIÓN ADUANERA

SECCIÓN I GENERALIDADES

Ver CNPT publicación de declaraciones aduaneras.

“Artículo 171.- Derechos generales de los contribuyentes. Constituyen derechos generales de los sujetos pasivos los siguientes: ...

*9) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter **confidencial** de los datos, informes y antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos expresa y específicamente en las leyes.*

...

Ninguna de las disposiciones anteriores se entenderá que restringe la posibilidad de la Administración Tributaria de publicar, en cualquier medio electrónico, la información que le sea proporcionada, incluyendo las declaraciones aduaneras transmitidas electrónicamente al Servicio Aduanero, debiendo salvaguardar, la Administración, el principio de confidencialidad”. Incluido por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

Artículo 86.- Declaración aduanera (*). Las mercancías internadas o dispuestas para su salida del territorio aduanero, **cualquiera que sea el régimen al cual se sometan**, serán declaradas conforme a los procedimientos y requisitos de esta Ley y sus Reglamentos, mediante los formatos autorizados por la Dirección General de Aduanas.

Con la **declaración se expresa, libre y voluntariamente**, el régimen al cual serán sometidas las mercancías; además, **se aceptan las obligaciones que el régimen impone**.

Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la **fe del juramento**. El agente aduanero será responsable de **suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera**, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según lo previsto en esta Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, bajo fe de juramento, el nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas jurídicas, dará fe de su existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus oficinas principales y de su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, **el agente aduanero deberá tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar correctamente la declaración aduanera, incluso la revisión física de las mercancías**.

La declaración aduanera deberá venir **acompañada** por los siguientes documentos:

- a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente reglamentados.
- b) Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente al efecto, cuando proceda.
- c) El conocimiento de embarque.
- d) Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de las mercancías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, que incluya el valor real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así como el número del contenedor, cuando proceda.
- e) La **demás documentación establecida legal y reglamentariamente**.

La disposición del inciso d) anterior solamente será exigible para las mercancías amparadas al régimen de importación definitiva. No será obligatoria para las mercancías cuyo valor en aduanas sea inferior a dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos urgentes en las modalidades de entrega rápida, envíos de socorro, equipaje de viajeros, importaciones realizadas por el Estado y demás entes públicos, muestras sin valor comercial, envíos postales no comerciales de acuerdo con el artículo 192 del Recauca, importaciones de ataúdes, urnas mortuorias o similares, con las características normales de mercado y que contengan a las personas fallecidas; tampoco para pequeños envíos sin carácter comercial e importaciones no comerciales.

El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas, vía reglamento, podrá ampliar o aclarar la lista anterior, para incluir otras modalidades o casos en los cuales no se requiera la presentación del documento enunciado en el inciso d) de este artículo.

En el caso de que la **declaración aduanera de exportación o el documento de salida** de las mercancías exportadas no se encuentre redactado en español, deberá adjuntársele la **traducción correspondiente**. Si la información es omisa en alguno de los datos requeridos, el importador deberá declarar en el reverso el dato omiso, firmado bajo su responsabilidad y, en esos términos, será aceptada por la autoridad aduanera (*) **(NOTA: VER DISPOSICION DEL ACUERDO DE FACILITACION, ABAJO)**

La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la obligación tributaria aduanera y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se dispongan vía reglamento.

(Reformado mediante Ley No. 8458 de 13 de septiembre del 2005. La Gaceta No. 205 de 25 de octubre del 2005 y Ley No. 8373 de 18 de agosto del 2003. La Gaceta No. 171 de 5 de septiembre del 2003)

LGA 58-59-235 a)-236 k)-239 b)-240 c)-241 b)-264
CNPT 122-128 bis-130

Resolución No. 63-2000 (COMIECO) del Consejo de Ministros de Integración Económica, 27 de setiembre de 2000, Decreto Ejecutivo No. 29085-COMEX de 3 de octubre de 2000, La Gaceta No. 225 de 23 de noviembre de 2000.

Legislación conexas: **“ARTICULO 10: FORMALIDADES CONTRA LA IMPORTACION, LA EXPORTACION Y EL TRANSITO. ... 2.3 Ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de exportación presentadas a las autoridades aduaneras del Miembro exportador como requisito para la importación.11 . . .”** **Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.**

20210209 Alcance No. 28 a La Gaceta 27 de 9 de febrero de 2021, Decreto Ejecutivo No. 42799-H de 11 de enero de 2021, **“Lineamientos para la aplicación de las disposiciones de los tratados y acuerdos comerciales internacionales vigentes en Costa Rica, relativas a la Importación de mercancías al amparo de preferencias arancelarias.”**

20210709 Alcance No. 136 a La Gaceta 132. Decreto Ejecutivo 43015-COMEX-H de 9 de abril de 2021, publicación de la Resolución No. 438-2020 (COMIECO-XCIII) de 10 de diciembre de 2020 y sus Anexos: **“Procedimiento Centroamericano para la Expedición del Certificado de Reexportación , “Certificado de Reexportación” y su “Instructivo de Llenado”.**

VER: Ley No. 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses y sus reformas.

DOCTRINA.

Informe sobre la Consultoría en materia de origen de mercancías llevada a cabo por Francisco Pelechá Zozaya en San José, Costa Rica, del 17 de julio al 16 de agosto de 1995” Sobre el texto borrador (art. 88) del que llegaría a ser el artículo 86 en su versión original de la LGA. “En el artículo 88 se establece que cuando se exija un certificado de origen “la responsabilidad del agente aduanero se limitará a transcribir fielmente la información respectiva que deba consignar en la declaración aduanera, sin perjuicio de su obligación de conservar los documentos que los respalden”. A juicio del consultor no es lógico limitar tanto la responsabilidad del agente aduanero, toda vez que pudiera darse el caso de que se pueda demostrar que la mercancía de que se trate no calificaba como originaria del país de que se trate, a pesar de que así o diga el certificado de origen considerado, y tal circunstancia fuese conocida por el agente aduanero; en todo caso, y diga lo que diga, en su caso, el certificado d origen, el agente aduanero sabrá si la mercancía de que se trate proviene o no directamente del país del que se dice originaria, y, en consecuencia, sabrá si tiene o no derecho a acogerse a los beneficios del trato preferencial de que se trate; a la luz de lo dicho parece ilógico exonerar de toda responsabilidad al agente aduanero por declarar un origen – si sabe- o debiera saber – que la mercancía en cuestión no puede acogerse al trato preferencial solicitado”. (página 13)

IBIDEM. “El importador costarricense, en principio, no debe ser sancionado, en caso de irregularidades, toda vez que habrá que suponer que él ha declarado el producto como mexicano en base al certificado de origen que le ha suministrado el exportador, certificado de cuya validez no tiene por qué dudar. Sólo si se probare – lo cual, obviamente, sería muy difícil – que él sabía de las falsedades contenidas en el certificado de origen cuando importó el producto supuestamente mexicano podría incurrir en las responsabilidades que prevea el ordenamiento costarricense.” (ANEXO III. EL TRATADO DE LBRE COMERCIO COSTA RICA Y MEXICO. LA TRASCENDENCIA JURIDICA DE DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS (i), página 9)

El texto anterior del artículo era el siguiente:

“Artículo 86.- La declaración aduanera. Las mercancías internadas o dispuestas para su salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el régimen al cual se sometan, serán declaradas conforme a los procedimientos y requisitos de esta Ley y sus Reglamentos, mediante los formatos autorizados por la Dirección General de Aduanas.

Con la declaración se expresa, libre y voluntariamente, el régimen al cual serán sometidas las mercancías; además, se aceptan las obligaciones que el régimen impone.

Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe del juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según lo previsto en esta Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, bajo fe de juramento, el nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas jurídicas, dará fe de su existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus oficinas principales y de su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el agente aduanero deberá tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar correctamente la declaración aduanera, incluso la revisión física de las mercancías.

En todos los casos, la declaración aduanera deberá venir acompañada por el original de la factura comercial, un certificado de origen de las mercancías emitido por la autoridad competente al efecto, cuando sea procedente, y una copia de la declaración oficial aduanera del país exportador, que incluya el valor real de la mercancía, el número y monto de la factura, el número del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador.

La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la obligación tributaria aduanera y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se dispongan vía reglamento.” (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 86.- La declaración aduanera. Las mercancías internadas o dispuestas para su salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el régimen al que se sometan, serán declaradas conforme a los procedimientos, requisitos de esta ley, sus reglamentos y mediante los formatos autorizados por la Dirección General de Aduanas.

Con la declaración se expresa libre y voluntariamente el régimen, al cual van a ser sometidas las mercancías y se aceptan las obligaciones que el régimen impone.

La declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe de juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto a la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, cantidad, tributos aplicables, cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, de conformidad con lo previsto en esta ley, otras leyes y disposiciones aplicables.

Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, bajo la fe de juramento, nombre, dirección exacta del domicilio y cédula de identidad del consignatario y del importador o consignante y exportador, en su caso; si se trata de personas jurídicas dará fe de su existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus oficinas principales y de su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el agente aduanero deberá tomar todas las previsiones necesarias para efectuar correctamente la declaración aduanera, inclusive la revisión física de las mercancías.

Si se exige un certificado o declaración en materia de valoración aduanera u origen de las mercancías, la responsabilidad del agente aduanero se limitará a transcribir fielmente la información respectiva que deba consignar en la declaración aduanera, sin perjuicio de su obligación de conservar los documentos que la respalden.

La declaración aduanera deberá establecer la cuantía de la obligación tributaria aduanera y el pago anticipado de los tributos en los casos y las condiciones que se fijen por vía de reglamento.”

ARTÍCULO 87.- Información exigible. Mediante reglamento, se determinarán los datos que deben expresar la declaración y los documentos o información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para aplicar el régimen aduanero que se solicita.

LGA 263-235 a)-236 k)-240 d)-241 b)
RLGA 314 a 319

Criterios administrativos

La Dirección General de Aduanas ha considerado que los documentos probatorios del tránsito directo, requisito para otorgar preferencias arancelarias otorgadas por Acuerdos Comerciales, debe ser conservado por el agente de aduanas para ser presentados ante solicitud de la Aduana, en el control inmediato, o en por la DGA, en el control a posteriori. Plazo de conservación sería de 5 años. Sanciones aplicables podrían ser el artículo 239 LGA de suspensión de un mes o 236, inciso 24, sanción de \$500. Ver resolución de COMEX número RES-DMR-

000-48-15/DGE-CR-CAE-0398-2015, "Lineamientos sobre la aplicación de las disposiciones de "tránsito y transbordo", en las importaciones de mercancías para las cuales se solicita trato arancelario preferencial al amparado de los tratados de libre comercio vigentes en Costa Rica".

SECCIÓN II

ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Artículo 88.- Aceptación. La declaración aduanera se entenderá aceptada cuando se registre en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas o en otro sistema autorizado.

La realización de dicho acto no implica avalar el contenido de la declaración ni limita las facultades de comprobación de la autoridad aduanera".

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA 242

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 88.- Aceptación. Para aceptar la declaración deberá demostrarse, por los medios autorizados, el cumplimiento de las regulaciones tributarias, arancelarias y no arancelarias, demás requisitos y formalidades legales y reglamentarias exigidas para aplicar el régimen que se solicita. La notificación de la aceptación se realizará por medio de los procedimientos o sistemas que se establezcan conforme a la reglamentación."

ARTÍCULO 89.- Rechazo de la declaración. De no aceptarse la declaración, se notificará inmediatamente su rechazo al declarante señalando los errores y defectos y otorgando un plazo de tres días hábiles para su corrección. Transcurrido el plazo indicado sin que hubieran sido subsanados los errores y defectos, se procederá a su archivo.

SECCIÓN III

RECTIFICACIÓN Y DESISTIMIENTO DE LA DECLARACIÓN

Artículo 90.- Rectificación de la declaración. En cualquier momento en que el declarante tenga razones para considerar que una declaración contiene información incorrecta o con omisiones, deberá presentar de inmediato una **solicitud de corrección** y, si procede, **deberá acompañarla del comprobante de pago de los tributos más el pago de los intereses correspondientes, calculados según el artículo 61 de esta Ley.** Presentar la corrección no impedirá que la autoridad aduanera ejerce las **acciones de responsabilidad correspondientes.** *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

CNPT 130

RECAUCA Ver art. 89 que establece las condiciones cuando se pretende rectificar cuando se ha iniciado una actuación de verificación de la declaración aduanera.

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 90.- Rectificación de la declaración. En cualquier momento que el declarante tenga razones para considerar que una declaración contiene información incorrecta o con omisiones, debe presentar de inmediato una solicitud de corrección, acompañada del comprobante de pago de los tributos si procede o la indicación de este. Presentar la corrección no impedirá que la autoridad aduanera ejerce las acciones de responsabilidad que correspondan."

Legislación conexas

Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

Concordancias

Lineamientos para el Procedimiento de Rectificación de las Declaraciones Aduaneras de los Regímenes Aduaneros de Zonas Francas y Perfeccionamiento Activo. Dirección General de Aduanas, 19 de agosto del 2008, Directriz DIR-DN-05-2008

TAN

“Por lo que resulta conforme a derecho la posición de la Administración al mantener la declaración de importación incólume, misma que se respalda en la posición jurisprudencial del Tribunal Aduanero Nacional, vertida en el tema de reclamaciones y rectificaciones de declaraciones aduaneras y de la carga de la prueba, puesto que tratándose de rectificaciones a instancia de interesado, éste debe aportar todo elemento de prueba conducente a demostrar, sin lugar a dudas la pretensión de corrección, y poder resolver la devolución de tributos que ello implica tal solicitud, en consecuencia, este Colegiado considera que no resulta idónea la reclamación y restitución de impuesto alguno, por lo que aplicando las reglas de la sana crítica racional, y la normativa que regula la carga de la prueba, entre otros los artículos 27, 196 c), 201 de la Ley General de Aduanas y 523 y 524 del Reglamento a ésta Ley, y en igual sentido en los artículos 140 a 143 del Código Tributario; y los artículos 221, 293 a 295, 298 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, disposiciones que mantienen una misma línea en cuanto al deber de probar lo dicho por parte de quien formule la pretensión a través de la amplitud de posibilidades que permiten las normas de derecho público y privado, así como el artículo 317 del Código Procesal Civil, estimamos procedente el rechazo operado en el presente asunto. Sentencia 101-2015. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de marzo de dos mil quince.

ARTÍCULO 91.- Desistimiento de la declaración. El declarante podrá desistir de la declaración a un régimen, **antes de la autorización del levante** de las mercancías, cuando demuestre ante la autoridad aduanera la existencia de **errores de hecho** que hayan viciado su voluntad.

Una vez aceptado el desistimiento, la aduana otorgará un plazo de **ocho días hábiles**, para someter las mercancías a otro régimen. Transcurrido ese plazo, sin solicitarse el cambio de régimen, las mercancías **causarán abandono** a favor del fisco.

Una vez aceptado el desistimiento, en el caso de desistirse una declaración de exportación definitiva, la aduana se limitará a dejarla sin efecto, comunicando este hecho a las oficinas competentes.

LGA 178-266

ARTÍCULO 92.- Efectos del desistimiento. El desistimiento de la declaración no exonera de responsabilidad por los **delitos y las infracciones administrativas y tributarias aduaneras** que se hubieran cometido.

En el supuesto de desistir la declaración de importación definitiva, no se permitirá posteriormente destinar las mismas mercancías a ese régimen.

CAPÍTULO IV VERIFICACIÓN

Artículo 93.- Verificación inmediata. La declaración aduanera autodeterminada será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para determinar si corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado.

Durante la verificación inmediata podrá ordenarse el reconocimiento físico de las mercancías, **la revisión de los documentos que sirvieron de soporte a la declaración aduanera** y los **análisis de laboratorio de las mercancías**,

así como **cualquier otra medida necesaria** para verificar la exactitud y veracidad de lo declarado por el declarante y por el agente aduanero, si ha intervenido ese auxiliar.

La verificación inmediata no limitará las facultades de fiscalización posterior a cargo de la autoridad aduanera. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)

CNPT 123-124-128

CIR-DGT-015-2007 de 20 de febrero de 2007 Guía para la revisión documental y física de las mercancías.

CIR-DGA-DGT-017-2017 de 16 de marzo de 2017 “Formalidades que se deben cumplir para el trámite de revisión de DUAs revisión documental.

CIR-DGA-004-2019 de 13 de marzo de 2019, “Recordatorio de las formalidades que se deben cumplir para el trámite de la revisión de DUAs en revisión documental.”

DE 41837-H-MOPT de 10 de julio de 2019, LG 7 agosto 2019, rige 7 de noviembre de 2019, Reglamento para la Aplicación del Artículo 5 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. **“Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento resulta aplicable a todos los vehículos automotores, remolques y semirremolques, de primer ingreso, previamente inscritos en el país de su procedencia, antes de que sean sometidos al régimen de importación definitiva en el territorio nacional.”**

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 93.-Verificación. El procedimiento de verificación está constituido por los actos necesarios para comprobar los elementos determinantes de la obligación tributaria aduanera y de las medidas arancelarias y no arancelarias, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.

Los actos que conforman la verificación, incluyendo el reconocimiento físico de las mercancías, su revisión documental o prescindencia de cualquier acto inmediato de verificación, se podrán fijar mediante criterios selectivos y aleatorios, sin perjuicio del ejercicio de los controles a posteriori y permanentes a que está facultada la autoridad aduanera.”

Artículo 93 bis.- Plazo para la realización de la verificación inmediata Cuando, en aplicación de los criterios de selectividad y aleatoriedad, corresponda realizar la verificación inmediata de lo declarado, esta se llevará a cabo tan pronto como sea posible.

Si la verificación inmediata no puede finalizar dentro de los siguientes **dos días hábiles** contados a partir de la fecha de registro de la declaración aduanera, el gerente de la aduana de despacho podrá ordenar, en forma motivada, una única prórroga por un plazo equivalente al anteriormente establecido, de conformidad con el procedimiento y en las condiciones que se señalen vía reglamentaria.

El declarante podrá solicitar el levante mediante garantía, de acuerdo con las reglas estipuladas por el artículo 100 de esta Ley; para ello, la autoridad aduanera efectuará una determinación provisional de la obligación tributaria aduanera. **Esta autoridad podrá impedir** el despacho de las mercancías y **tomar acciones administrativas o judiciales, incluso las tomas de muestras de las mercancías**, o bien, podrá **denegar el levante con garantía**, si existen **indicios de que se ha cometido una infracción administrativa o un delito** y se determina la **necesidad de retener las mercancías** para efectos de investigación; en tal caso, deberá **motivarse debidamente su decisión**. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CONFRONTAR CAUCA IV.

“Artículo 85. Plazo máximo y la verificación inmediata. El plazo máximo para efectuar la verificación inmediata, será establecido por el Reglamento. El incumplimiento de dicho plazo dará lugar a las responsabilidades y sanciones administrativas que correspondan.”

Legislación conexas

"ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS

1 Tramitación previa a la llegada ...

2 Pago electrónico ...

3 Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas

3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas, si esa determinación no se efectúa antes de la llegada, o en el momento de la llegada o lo más rápidamente posible después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás prescripciones reglamentarias.

3.2 Como condición para ese levante, un Miembro podrá exigir:

a) el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas determinados antes de o a la llegada de las mercancías y una garantía para la cuantía que todavía no se haya determinado en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus leyes y reglamentos; o

b) una garantía en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus leyes y reglamentos.

3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que el Miembro requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía.

3.4 En los casos en que se haya detectado una infracción que requiera la imposición de sanciones pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por las sanciones y las multas que puedan imponerse.

3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se liberará cuando ya no sea necesaria.

3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar, retener, decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de cualquier manera que no sea incompatible por otros motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de la OMC.

4 Gestión de riesgo ...

...

...

6 Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante

6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para el levante de las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la Organización Mundial de Aduanas (denominada en el presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiempo necesario para el levante.⁶

6 Cada Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo medio necesario para el levante según sus necesidades y capacidades.

6.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus experiencias en el cálculo de los plazos medios de levante, en particular los métodos utilizados, los escollos detectados y los efectos que puedan tener en la eficacia." Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio)." Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

ARTÍCULO 94.- Reconocimiento físico de las mercancías. Este reconocimiento es el acto que permite a la autoridad aduanera examinar físicamente las mercancías, su naturaleza, origen, procedencia, estado, cantidad, valor y demás características o condiciones que las identifiquen e individualicen.

El reconocimiento se limitará a las operaciones que se consideren indispensables, según se determine por vía reglamentaria y conforme a los procedimientos selectivos y aleatorios que determine la autoridad aduanera.

El reconocimiento podrá realizarse en zonas de operación aduanera tales como locales, bodegas o demás instalaciones de particulares que cumplan con las condiciones que señala la Dirección General de Aduanas.

Cuando se determine la práctica del reconocimiento, se podrá designar en forma aleatoria al funcionario aduanero competente para realizarlo.

ARTÍCULO 95.-Concurrencia al acto de reconocimiento de las mercancías. El agente aduanero o la persona que haya acreditado el consignatario, el consignante o la persona que tenga por algún título derecho a retirar las mercancías de la aduana, podrán concurrir al acto de reconocimiento.

ARTÍCULO 96.- Servicios técnicos. Cuando las mercancías por reconocer, requieran medidas técnicas para manipularlas y movilizarlas o bien pudieran producir daño, la autoridad aduanera podrá exigir al interesado que

ponga a su disposición personal especializado. Si el interesado no cumple, el Servicio Aduanero queda facultado para contratar por cuenta y riesgo de aquel los servicios especializados pertinentes.

El responsable de la custodia de las mercancías o el interesado, según el caso, deberán brindar las facilidades necesarias al funcionario aduanero que realice el reconocimiento, incluyendo a su solicitud la apertura de los bultos, su agrupamiento y la disposición para el reconocimiento.

ARTÍCULO 97.- Extracción de muestras. La autoridad aduanera podrá extraer muestras de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Aduanas. Cualquier muestra extraída por la autoridad aduanera constituirá muestra certificada para todos los efectos legales. El acto de extracción deberá consignarse en la declaración o en el medio que se establezca. La muestra será devuelta al interesado sin menoscabo de ella, salvo en lo resultante del análisis a que fuera sometida.

El valor de las muestras **destruidas en el proceso de examen** se deducirá de la base imponible de la obligación tributaria aduanera resultante.

La autoridad aduanera mantendrá la muestra en su poder por el plazo necesario para realizar su análisis.

La muestra se considerará en abandono en el plazo de un mes a partir de que se comuniqué al interesado que está a su disposición, en caso de que no sea retirada, previo pago de los tributos correspondientes según el estado en que se encuentre.

Antecedentes

TAN 227-2006, TAN 47-2006. Conexidad. No necesidad de muestras para producto plenamente identificable.

TAN Sentencia número 053-2018. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las quince horas con diecinueve minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho. “**Nulidad del Acta 154-18.** El recurrente establece con relación al Acta 154-18 y el procedimiento de extracción, una serie de vicios que a su criterio conllevan la nulidad de la misma y del procedimiento ordinario. Aduce el recurrente que el funcionario a cargo del despacho no participó en la extracción de muestras, que se utilizó un medio no idóneo (botella plástica de jugo de frutas) como embalaje para extraer la muestra, que las muestras se contaminaron por el contenido del embalaje y que se violan otros requisitos establecidos en el artículo 326 del reglamento a la Ley General de Aduanas. (F 244)

Es importante señalar que el acta se encuentra firmada por el funcionario aduanero a cargo del despacho, el agente de aduanas y un representante del depósito aduanero, firman aceptando y mostrando conformidad con lo que establece el documento, la extracción de muestras del producto objeto de importación, no consta en el acta ningún señalamiento de disconformidad, no existen manifestaciones inmediatas sobre lo que ahora denuncia el agente, los que suscribe consintieron con lo actuado al consignar su firma (Ver folio 40), actuaciones que respetaron el proceso reglado al efecto, y es a partir de ahí donde se logra la identificación de la mercancía y su conexidad con los restantes despachos, poniendo siempre en conocimiento de las partes lo actuado en el proceso seguido, lo cual desde ningún punto de vista ha dejado en estado de indefensión a los interesados, toda vez que se le dio el debido proceso, al constar en expediente su participación en la adopción del acto de extracción de la muestra en cuestión, de los resultados y de la conexidad determinada en el informe final de las actuaciones fiscalizadoras -los cuales no presentaron en el momento oportuno ninguna objeción al respecto-. Es importante hacer ver la responsabilidad del agente de aduanas, como auxiliar de la función pública, de denunciar en el acto, in situ, aquellas actuaciones que estima contrarias a la normativa o los procedimientos dispuestos por el Servicio Nacional de Aduanas, las que considere abusivas por parte de los funcionarios, pero no puede pretender después de meses de darse el hecho (la extracción de muestras), aducir vicios sin presentar pruebas de respaldo, cuando por el contrario, el documento idóneo como lo constituye el acta de extracción de muestra, la suscribe tanto el agente de aduanas como el agente de aduanas, dando fe de lo que se dispone en el documento.

Señala el agente que la muestra extraída se contaminó al utilizarse un recipiente (botella plástica de refresco), violentando también el procedimiento establecido por la Dirección General de Aduanas para tales efectos. No comparte este Tribunal los argumentos, porque al momento de la extracción de la muestra el agente de aduanas no mostró ninguna disconformidad con el medio utilizado (botella plástica), cuyo destino era el Laboratorio Aduanero para análisis químico, si bien es cierto no se utilizó el medio que indica el manual respectivo, esto no conlleva una nulidad de lo actuado. Con relación a un olor frutal citado en el Análisis de Laboratorio 4369, se descarta que el mismo tenga por origen la mezcla con un producto que contenía el recipiente utilizado lo que conllevaría la contaminación de la muestra, por el contrario el mismo análisis de laboratorio confirma la presencia de aldehídos en la muestra objeto

de análisis, moléculas que son por si mismas olorosas y así se dispone: "...Unas de las moléculas más olorosas son los aldehídos (moléculas orgánicas que contienen el grupo CHO). Generalmente huelen bien ([el famoso perfume Chanel nº5 está repleto de aldehídos](https://isqch.wordpress.com/2015/01/21/el-olor-de-los-aldehidos/)), pero suelen descomponerse al reaccionar con el oxígeno del aire y dar lugar a productos bastante apestosos..." (<https://isqch.wordpress.com/2015/01/21/el-olor-de-los-aldehidos/>)."

ARTÍCULO 98.- Discrepancias con el resultado de la verificación. Cuando en el proceso de verificación se determinen diferencias con respecto a la declaración, la autoridad aduanera lo notificará de inmediato al declarante y efectuará las correcciones y los ajustes correspondientes.

LGA 261

CAPÍTULO V AUTORIZACIÓN DEL LEVANTE DE LAS MERCANCÍAS

ARTÍCULO 99.- Levante. Una vez cumplidos los procedimientos estipulados para cada régimen aduanero, se autorizará el levante de las mercancías en la forma y por los medios autorizados, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

CAUCA 4-84

LGA 48 e)

RLGA 134 inc j), 35b), 246 bis, 246 ter, 247, 247 bis, 248, 322, 323, 329, 349, 350, 351

Reglamento TICA 25, 26, 28

ARTÍCULO 100.- Autorización del levante mediante garantía. La autoridad aduanera podrá autorizar el levante de las mercancías, previa rendición de garantía por el adeudo fiscal, cuando se **solicite la aplicación de un régimen arancelario preferencial o exención fiscal** y se demuestre por medio idóneo que los documentos que acreditan esa circunstancia **se encuentran en trámite ante quien corresponda emitirlos**. La garantía será por el monto de eventual beneficio; deberá cancelarse la diferencia no sujeta a la preferencia o exención.

La autoridad aduanera procederá, de oficio, a ejecutar la garantía si en un plazo de **tres meses** a partir de la autorización del levante de las mercancías, el interesado no se ha presentado a demostrar la cancelación de los tributos o no ha aportado los documentos que acrediten la aplicación de la preferencia o exención fiscal. **En casos calificados y a juicio de la autoridad ante la cual se rindió la garantía, este plazo podrá ser prorrogado por un plazo igual y consecutivo.**

Igualmente, la autoridad aduanera podrá autorizar el levante de las mercancías, previa rendición de garantía por el adeudo fiscal, cuando **se impugne en tiempo y forma el resultado de la determinación tributaria** en los términos del artículo 198 de esta ley y se solicite la suspensión de la ejecución del adeudo tributario. El recurrente deberá rendir garantía suficiente por la parte discutida y cancelar los tributos correspondientes por la parte no discutida. La autoridad aduanera ejecutará, de oficio, la garantía cuando se resuelva la impugnación en la vía administrativa y, de ser procedente, el adeudo tributario **no sea cancelado el día siguiente de su notificación**.

En cualquiera de los casos anteriores, se aplicarán las disposiciones del artículo 65 de esta ley. No procederá la autorización del levante mediante garantía, cuando esta autorización tenga por efecto la inaplicación de las regulaciones no arancelarias.

LGA 65-195-198

RLGA 521

Artículo 101.- Sustitución de mercancías. La autoridad aduanera podrá autorizar la sustitución de mercancías que hayan sido rechazadas por el importador, cuando:

- a) Presenten vicios ocultos no detectados en el momento del despacho aduanero. En este caso, si las mercancías que sustituyen a las rechazadas son idénticas o similares y de igual valor que estas, su ingreso no estará afecto al pago de derechos ni impuestos. De no ser así, el declarante deberá pagar las diferencias que resulten de los derechos e impuestos o, en su caso, podrá solicitar la devolución de las sumas pagadas en exceso.
- b) No satisfagan los términos del contrato respectivo. En este caso, la sustitución dará lugar al pago por las diferencias o a la devolución de los derechos e impuestos correspondientes.

En ambos casos, las mercancías rechazadas deberán haberse devuelto al exterior, previa autorización de la autoridad aduanera competente.

La solicitud deberá presentarse dentro del **plazo de un mes**, contado a partir de la **autorización del levante** de las mercancías.

La autorización de la sustitución de las mercancías no eximirá de responsabilidad al declarante ni al agente aduanero por los delitos aduaneros que se hayan cometido.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 101.- Sustitución de mercancías. La autoridad aduanera podrá autorizar la sustitución de las mercancías, cuando presenten vicios ocultos no determinables en el procedimiento de despacho de las mercancías.

La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de un mes contado a partir del levante o retiro de las mercancías.

La sustitución de las mercancías no exime de responsabilidad al declarante por los delitos o las infracciones aduaneras que se hubieran cometido con motivo del despacho de las mercancías.”

CONCORDAR CON DISPOSICIONES SOBRE “REPARACION EN EL EXTERIOR DE MERCANCIAS CON GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO” (CAUCA IV, art. 104)

RLGA 338 y siguientes

Artículo 102.- Revisión a posteriori del despacho. La autoridad aduanera podrá revisar, mediante el ejercicio de controles a posteriori o permanentes, la determinación de la obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de las demás normas que regulan el despacho de mercancías, en el plazo estipulado en el artículo 62 de esta ley.

Cuando la autoridad aduanera determine que no se cancelaron los tributos debidos o que se incumplieron otras regulaciones del comercio exterior, abrirá procedimiento administrativo notificando al declarante y al agente aduanero que lo haya representado, en los términos del artículo 196 de esta ley.

La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones de verificación y fiscalización que se estimen procedentes, entre otras, el reconocimiento de las mercancías y la extracción de muestras.

El adeudo resultante de modificar la determinación de la obligación tributaria aduanera deberá cancelarse por el sujeto pasivo a partir de su notificación, junto con sus intereses, de conformidad con las disposiciones del artículo 61 de esta ley.

De encontrarse **violaciones a otras regulaciones del comercio exterior**, se impondrán las sanciones o se establecerán las **denuncias** correspondientes. *(Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 58-59-61-62-196
CNPT 121

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 102.- Revisión a posteriori del despacho. La autoridad aduanera podrá, mediante el ejercicio de controles a posteriori o permanentes, revisar la determinación de la obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de las demás normas que regulan el despacho de mercancías, en el plazo estipulado en el artículo 62 de esta ley.

Cuando la autoridad aduanera determine que no se cancelaron los tributos debidos o que se incumplieron otras regulaciones del comercio exterior, abrirá procedimiento administrativo notificando al declarante y al agente aduanero que lo haya representado, en los términos del artículo 196 de esta ley.

La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones de verificación y fiscalización que se estimen procedentes, entre otras, el reconocimiento de las mercancías y la extracción de muestras.

El adeudo resultante de modificar la determinación de la obligación tributaria aduanera deberá cancelarse por el sujeto pasivo en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, de conformidad con las disposiciones del artículo 61 de esta ley.

De encontrarse violaciones a otras regulaciones del comercio exterior, se impondrán las sanciones o se establecerán las denuncias correspondientes.”

Legislación conexas

“5 Auditoría posterior al despacho de aduana

5.1 Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos conexos.

*5.2 Cada Miembro seleccionará a una persona o un envío a efectos de la auditoría posterior al despacho de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá incluir criterios de selectividad adecuados. **Cada Miembro llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho de aduana de manera transparente.** Cuando una persona sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado a resultados concluyentes, el Miembro **notificará sin demora a la persona cuyo expediente se audite los resultados, los derechos y obligaciones de esa persona y las razones en que se basen los resultados.***

5.3 La información obtenida en la auditoría posterior al despacho de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.

5.4 Cuando sea factible, los Miembros utilizarán los resultados de la auditoría posterior al despacho de aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.” Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

CAPÍTULO VI APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Artículo 103.- Informatización de los procedimientos. Cuando la Dirección General de Aduanas lo determine, mediante resolución de carácter general, y le asigne la clave de acceso confidencial y el código de usuario correspondiente o su certificado digital, mediante un prestador de servicios de certificación, el auxiliar de la función pública aduanera deberá realizar los actos correspondientes conforme a esta Ley y sus Reglamentos, empleando el sistema informático según los formatos y las condiciones autorizados.

Las firmas autógrafas que la Dirección General de Aduanas requiera podrán ser sustituidas por contraseñas o signos adecuados, como la firma electrónica, para la sustanciación de las actuaciones administrativas que se realicen por medios informáticos”.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 32-266

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 103.- Informatización de los procedimientos. Cuando la Dirección General de Aduanas lo determine mediante resolución de carácter general y le asigne clave de acceso confidencial y código de usuario correspondiente, el auxiliar de la función pública aduanera deberá realizar los actos correspondientes conforme a esta ley y sus reglamentos, empleando el sistema informático de conformidad con los formatos y las condiciones autorizadas.”

Artículo 104.- Declaración por transmisión electrónica de datos. El declarante o el agente aduanero que lo represente deberá presentar la declaración mediante transmisión electrónica de datos, utilizando su código de usuario y su clave de acceso confidencial o firma electrónica. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 236 e)-266

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 104.- Declaración por transmisión electrónica de datos. El declarante o agente aduanero que lo represente debe presentar la declaración mediante transmisión electrónica de datos, utilizando su código de usuario y clave de acceso confidencial.”

Artículo 105.- Código y clave de acceso o firma electrónica. Los funcionarios, auxiliares de la función pública aduanera y demás usuarios, serán responsables del uso del código de usuario y de la clave de acceso confidencial o firma electrónica asignados, así como de los actos que se deriven de su utilización.

Para todos los efectos legales, la clave de acceso confidencial y/o firma electrónica equivale a la firma autógrafa de los funcionarios, auxiliares y demás usuarios”.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)

LGA 221 d)-236 e)

RLGA 84-85

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 105.- Código y clave de acceso. Los funcionarios, auxiliares de la función pública aduanera y demás usuarios serán responsables del uso del código de usuario y de la clave de acceso confidencial asignados y de los actos que se deriven de su utilización.

La clave de acceso confidencial equivale a la firma autógrafa de los funcionarios, auxiliares y demás usuarios para todos los efectos legales.”

Artículo 106.- Prueba de los actos realizados en sistemas informáticos. Los datos y registros recibidos y anotados en el sistema informático, constituirán prueba de que el auxiliar de la función pública aduanera realizó los actos que le corresponden y que el contenido de esos actos y registros fue suministrado por este, al usar la clave de acceso confidencial o firma electrónica.

Los funcionarios o las autoridades que intervengan en la operación del sistema, serán responsables de sus actos y de los datos que suministren, según las formalidades requeridas y dentro del límite de sus atribuciones, actos

que constituirán instrumentos públicos y, como tales, se tendrán por auténticos. Cualquier información transmitida electrónicamente por medio de un sistema informático autorizado por la Dirección General de Aduanas, será admisible en los procedimientos administrativos y judiciales como evidencia de que tal información fue transmitida.

El **expediente electrónico** estará constituido por la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado, y tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

RLGA 32-239 b)

Junta Administrativa del Archivo Nacional. Lineamientos para la Conformación de Expedientes Administrativos. Norma Técnica Nacional – 001 Rige a partir de su publicación en el Alcance 168 a La Gaceta 165 de 8 de julio de 2020.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 106.-Prueba de los actos realizados en sistemas informáticos. Los datos y registros recibidos y anotados en el sistema informático constituirán prueba de que el auxiliar de la función pública aduanera realizó los actos que le corresponden y que el contenido de esos actos y registros fue suministrado por este, al usar la clave de acceso confidencial.

Los funcionarios o las autoridades que intervengan en la operación del sistema serán responsables de sus actos y de los datos que suministren. Cualquier información transmitida electrónicamente por medio de un sistema informático autorizado por la Dirección General de Aduanas, será admisible en los procedimientos administrativos y judiciales como evidencia de la transmisión de esa información.”

Artículo 107.- Enlace electrónico entre oficinas públicas. Las oficinas públicas o entidades relacionadas con el Servicio Nacional de Aduanas deberán transmitir electrónicamente, a las autoridades aduaneras competentes, permisos, autorizaciones y demás información inherente al tráfico de mercancías y a la comprobación del pago de obligaciones tributarias aduaneras, según los procedimientos acordados entre estas oficinas o entidades y la autoridad aduanera. La documentación emergente de la transmisión electrónica entre dependencias oficiales constituirá, de por sí, documentación auténtica y para todo efecto hará plena fe en cuanto a la existencia del original transmitido. La autoridad aduanera, por su parte, deberá proporcionarles a estas oficinas o entidades la información atinente a su competencia sobre las operaciones aduaneras, según los procedimientos acordados entre estas. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 107.- Enlace electrónico entre oficinas públicas. Las oficinas públicas o entidades relacionadas con el Servicio Nacional de Aduanas, deberán transmitir electrónicamente a las autoridades aduaneras competentes los permisos, autorizaciones, y demás información inherente al tráfico de mercancías y a la comprobación del pago de obligaciones tributarias aduaneras, de conformidad con los procedimientos acordados entre estas oficinas o entidades y la autoridad aduanera. Por su parte, la autoridad aduanera deberá proporcionar, a estas oficinas o entidades, la información atinente a su competencia sobre las operaciones aduaneras de acuerdo con los procedimientos acordados entre estas.”

ARTÍCULO 108.- Procedimientos de contingencia y alternos. La Dirección General de Aduanas establecerá procedimientos de contingencia en los casos en que los sistemas informáticos queden, total o parcialmente, fuera de servicio. La Dirección General de Aduanas estará facultada para establecer los procedimientos alternos que requiera la implantación de los sistemas informáticos.

TÍTULO VII REGÍMENES ADUANEROS

CAPÍTULO I GENERALIDADES

ARTÍCULO 109.- Concepto. Se entenderán por regímenes aduaneros, las diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera.

Los reglamentos establecerán los procedimientos, los requisitos y las condiciones necesarios para aplicar los regímenes aduaneros.

ARTÍCULO 110.- Clasificación. Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:

- a) Definitivos: Importación y Exportación y sus modalidades.
- b) Temporales: Tránsito Aduanero Nacional e Internacional, Transbordo, Tránsito por Vía Marítima o Aérea, Depósito Fiscal, Servicio de Reempaque y Distribución en Depósito Fiscal, Importación y Exportación Temporal y Provisiones a Bordo.
- c) Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona Franca, Reimportación en el mismo estado y Reexportación.
- d) De perfeccionamiento: Perfeccionamiento Activo y Exportación Temporal para el Perfeccionamiento Pasivo.
- e) Devolutivo de derechos:

Mediante reglamento podrá establecerse nuevos regímenes y modalidades para adecuar las **operaciones de comercio exterior a las necesidades de los usuarios del servicio, a los objetivos y a las políticas de intercambio comercial**. Los nuevos regímenes se entenderán dentro del marco de esta ley, por lo que los procedimientos establecidos en el título VI les serán aplicables.

LGA	55
LEY DE CONCESIÓN Y OPERACIÓN DE MARINAS TURÍSTICAS	21
REGLAMENTO A LA LEY DE CONCESION Y FUNCIONAMIENTO DE MARINAS TURÍSTICAS	46

GOLFITO (Modalidad de Importación definitiva):

Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 de 24 de mayo de 2016

“ARTÍCULO 67.- Se derogan los siguientes cuerpos legales:

- a) Parcialmente la Ley N.° 7012, Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, conservando vigencia únicamente los artículos 1 y 14 bis.*
- b) Ley N.° 7730, Reforma de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, N.° 7012, de 20 de diciembre de 1997.*
- c) Ley N.° 8942, Reforma del Párrafo Sexto del Artículo 10 de la Ley N.° 7012 (Creación de un Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas), de 28 de abril de 2011.”*

Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito N° 26999-H-MEIC-MP DEROGADO POR - Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), DE 42196-H de 12 de febrero de 2020, publicado en Alcance 22 a La Gaceta 30 de 14 de febrero de 2020, modificado por DE 42823-H-MEIC de 1 de febrero de 2021.

CAPÍTULO II

REGÍMENES DEFINITIVOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

SECCIÓN I GENERALIDADES

ARTÍCULO 111.- Concepto. Se entiende por régimen de importación o exportación definitivos, la entrada o salida de mercancías de procedencia extranjera o nacional respectivamente, que cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo, dentro o fuera del territorio nacional.

SECCIÓN II DECLARACIÓN ANTICIPADA

Artículo 112.- Declaración anticipada. La declaración aduanera podrá presentarse bajo el sistema de autodeterminación, según el artículo 86 de esta Ley, aunque las mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no se haya iniciado el procedimiento de exportación, cuando el declarante posea los documentos aduaneros o la información que deban presentarse con la declaración aduanera o consignarse en ella. Además, deberán indicarse los datos que identifiquen la unidad de transporte, el transportista y su fecha aproximada de llegada. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 112.- Declaración anticipada. La declaración aduanera podrá presentarse aunque las mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no se haya iniciado el procedimiento de exportación, cuando el declarante posea los documentos aduaneros o la información que deban presentarse con la declaración aduanera o consignarse en esta. Deberán indicarse, adicionalmente, los datos que identifiquen la unidad de transporte, el transportista y su fecha aproximada de llegada. Aceptada la declaración anticipada se deberá cancelar el adeudo tributario.”

SECCIÓN III RECONOCIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO 113.- Reconocimiento. El reconocimiento en el proceso de exportación, cuando sea del caso, podrá realizarse en la planta procesadora o industrial donde se efectúe la carga y el embalaje de las mercancías.

Sólo procederá el reconocimiento en los lugares autorizados por la aduana competente, que podrán ser la sede o el local de la empresa o las terminales de carga, que cumplan con los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria.

Una vez realizado el reconocimiento, el funcionario asignado procederá a tomar las medidas de seguridad pertinentes en los vehículos y las unidades de transporte, y se designará la ruta para el tránsito a la aduana de salida de las mercancías.

Este procedimiento será aplicable también para la reexportación y la salida de mercancías, objeto de un proceso industrial.

CAPÍTULO III

MODALIDADES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN

SECCIÓN I MODALIDAD DE EQUIPAJE

ARTÍCULO 114.- Equipaje. Toda persona que ingrese a los puertos o lugares habilitados podrá internar en el país su equipaje sin que cause el pago de tributos.

Constituyen equipaje las mercancías nuevas o usadas que una persona pueda razonablemente necesitar para su uso personal o para el ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje, conforme se disponga por vía reglamentaria. El equipaje podrá ingresar al país durante el lapso de **tres meses**, antes o después del arribo del viajero.

ARTÍCULO 115.- Mercancías que no constituyen equipaje. Las mercancías que la persona traiga consigo, que no constituyan equipaje, no estarán sujetas al pago de tributos hasta por un monto de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional del valor aduanero total de estas mercancías. Para estos efectos, la persona deberá permanecer un mínimo de **setenta y dos** horas fuera del país y no tendrá derecho a disfrutar, de nuevo, de este beneficio hasta que hayan transcurrido los **seis meses** siguientes a su arribo.

La declaración aduanera sobre las mercancías, a que se refieren este artículo y el anterior, presentada directamente por el **declarante sin representación de un agente aduanero**, será tramitada de oficio por la aduana respectiva.

LGA 235

SALA CONSTITUCIONAL “Sentencia 2014 - 000496. Expediente 14-000208-0007-CO. A las catorce horas con treinta minutos. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 115 de la Ley General de Aduanas, artículo 90 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el artículo 211 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Se rechaza de plano la acción.- ADMISIBILIDAD. 14-0208. 0496-14. COBRO DE IMPUESTOS POR ARTÍCULOS COMPRADOS POR INTERNET. ***Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 115 de la Ley General de Aduanas, el artículo 90 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el artículo 211 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano.*** Las normas se impugnan en la medida que permiten que los viajeros que ingresan a territorio nacional pueden recibir una exención de hasta US\$500 por artículos diferentes a sus equipajes, mientras a quienes no viajan y compran los artículos por Internet, sí se les aplica el pago de impuestos y no se les brinda la exención. Se rechaza de plano la acción por no cumplir con el presupuesto establecido en el artículo 75 inciso 1) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. RP” (ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA- ACCION DE LOS COURIERS SOBRE LAS DIRECTRICES DE LAS COMPRAS POR INTERNET)

SECCIÓN II ENVÍOS DE SOCORRO

ARTÍCULO 116.- Envíos de Socorro. Los envíos de socorro están constituidos por mercancías como vehículos u otras unidades de transporte, productos alimenticios, medicamentos, ropa, tiendas tipo dormitorio-hospital o de abastecimiento, casas prefabricadas, maquinaria, equipos especiales, movibles o no, para uso médico, construcción, abastecimiento, rescate, comunicación y transporte ingresados completos o en partes. Estos envíos están destinados a la **ayuda de las víctimas de catástrofes naturales o de siniestros análogos, que afectan a una colectividad.**

ARTÍCULO 117.- Consignatario de los envíos de socorro. El Estado o el órgano administrativo designado, será el consignatario en este tipo de importaciones.

ARTÍCULO 118.- Actuaciones de la autoridad aduanera. La autoridad aduanera se limitará, básicamente, al levantamiento de actas en las que se consigne la descripción de las mercancías ingresadas bajo esta modalidad.

SECCIÓN III INGRESO O SALIDA DE PERSONAS FALLECIDAS

ARTÍCULO 119.- Personas fallecidas. El ingreso o la salida de ataúdes, urnas mortuorias o similares, con las características normales de mercado, que contengan personas fallecidas, no estarán sujetos a trámite aduanero, intervención de agente aduanero o tributo alguno, salvo la aplicación de las disposiciones sobre salud y de seguridad pertinentes.

SECCIÓN IV MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL

ARTÍCULO 120.- Muestras sin valor comercial. Se consideran muestras sin valor comercial y no están sujetas al pago de tributos:

- a) Los objetos en materias ordinarias o que se presenten como muestras, según los usos del comercio, con la condición de que no haya más de un ejemplar por tamaño y clase cuyo valor aduanero de importación total **no exceda al equivalente en moneda nacional de doscientos pesos centroamericanos.**
- b) Las materias primas y productos, las manufacturas de estas materias o productos y suministros gratuitos, que hayan sido inutilizadas para cualquier otro fin que no sea su presentación como muestras, mediante cortes, perforaciones o colocación de marcas indelebles con la leyenda **"Muestra sin valor comercial"**, y sus catálogos, panfletos o folletos demostrativos.

ARTÍCULO 121.- Declaración. La declaración aduanera presentada directamente por el declarante sin representación de un agente aduanero será tramitada de oficio por la aduana respectiva.

SECCIÓN V DESPACHO DOMICILIARIO INDUSTRIAL

ARTÍCULO 122.- Despacho domiciliario industrial. De acuerdo con esta modalidad, las mercancías que fije reglamentariamente el Poder Ejecutivo que se sometan a un proceso industrial podrán ser recibidas, directamente, en los centros o las empresas de producción o industriales.

RLGA 143 a 150

ARTÍCULO 123.- Obligaciones y requisitos. La Dirección General de Aduanas autorizará el despacho domiciliario industrial a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos y obligaciones, sin perjuicio de los que le correspondan como auxiliar de la función pública aduanera:

- a) Aportar, a satisfacción del Servicio Nacional de Aduanas, los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera de las mercancías, objeto de importación habitual, inclusive los relativos al valor aduanero, el origen en caso de estar afectas las mercancías a un régimen arancelario preferencial, clasificación arancelaria y cualquier otro dato necesario para comprobar la aplicación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, lo cual obliga a su permanente actualización.

- b) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar.
- c) Mantener los volúmenes y montos de importaciones que se establezcan por vía reglamentaria.
- d) Los demás que establezcan los reglamentos de esta ley.

LGA 239 c)

ARTÍCULO 124.- Declaración provisional. El declarante o agente aduanero que lo represente, según el caso, declarará provisionalmente, ante la aduana competente, las mercancías a su llegada a puerto.

La aduana señalará las rutas legales para el desarrollo del tránsito a los recintos autorizados.

Esa declaración provisional deberá realizarse conforme a lo señalado en el artículo 86 de esta ley.

ARTÍCULO 125.- Declaración definitiva. El agente aduanero que represente a la empresa presentará la declaración definitiva ante la aduana competente dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de las mercancías en los recintos autorizados, en las condiciones establecidas por el artículo 86 de esta ley. El agente debe realizar, mediante esa declaración, los ajustes de cualquier índole a la declaración provisional, aún los que no afecten la obligación tributaria aduanera o las estadísticas de comercio exterior.

La empresa autorizada para operar según esta modalidad podrá designar a un agente aduanero en forma permanente y exclusiva, para que se encargue del despacho de sus mercancías. Ese agente deberá tener relación laboral con la empresa sin perjuicio de sus responsabilidades inherentes como agente aduanero.

ARTÍCULO 126.- Mercancías consolidadas. No se autorizará la modalidad de despacho domiciliario industrial para mercancías enviadas, según el sistema consolidado de transporte.

LGA 44-45

SECCIÓN VI ENTREGA RÁPIDA

Artículo 127.- Envíos urgentes de la modalidad de entrega rápida o couriers. Las mercancías de envío urgente ingresadas al territorio aduanero por vía aérea, según la modalidad de entrega rápida o "courier", u otras similares, deberán venir con manifestación expresa de tal régimen y con **reseña de contenido**. Las mercancías calificadas como correspondencia, impresos, mensajería y paquetería documental, recibirán el mismo tratamiento tributario que las mercancías arribadas mediante el sistema postal general. Las mercancías que califiquen dentro de cualquiera de las **otras modalidades especiales contempladas en la presente Ley**, recibirán **el tratamiento tributario correspondiente**. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 127.- Entrega rápida. Las mercancías ingresadas al territorio aduanero por vía aérea, según la modalidad de entrega rápida o "courier", u otras similares, deben venir con manifestación expresa de tal régimen y reseña de contenido. Las mercancías calificadas como correspondencia, impresos, mensajería y paquetería documental recibirán el mismo tratamiento tributario de las mercancías arribadas en el sistema postal general. Las mercancías que califiquen dentro de cualquiera de las otras modalidades especiales contempladas en la presente ley recibirán el tratamiento tributario que corresponda."

ARTÍCULO 128.- Requisitos y obligaciones. Las empresas acogidas a esta modalidad, sin perjuicio de lo que les corresponda como auxiliar de la función pública aduanera deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:

- a) Mantener personal registrado ante la Dirección General de Aduanas, que la represente ante las Aduanas y con las facultades necesarias para tal acto.
- b) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por el monto de veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, y mediante los instrumentos establecidos por los auxiliares de la función pública aduanera.
- c) Cumplir con las disposiciones de organización, de procedimientos y de control que dicte la autoridad aduanera.
- d) Transmitir a la aduana de control el **manifiesto de entrega rápida**.
- e) Transmitir a la aduana de control las diferencias que se produzcan en la cantidad, la naturaleza y el valor de las mercancías declaradas, respecto de lo efectivamente arribado o embarcado.

La empresa autorizada para operar según esta modalidad podrá designar a un **agente aduanero en forma permanente y exclusiva para que se encargue del despacho de sus mercancías**. Este agente deberá tener relación laboral con la empresa sin perjuicio de sus responsabilidades inherentes como agente aduanero. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

*“ARTÍCULO 128.- **Requisitos y obligaciones.** Las empresas acogidas a esta modalidad, sin perjuicio de lo que les corresponda como auxiliar de la función pública aduanera deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:*

- a) Mantener personal registrado ante la Dirección General de Aduanas, que la represente ante las Aduanas y con las facultades necesarias para tal acto.*
- b) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar.*
- c) Cumplir con las disposiciones de organización, de procedimientos y de control que dicte la autoridad aduanera.*

La empresa autorizada para operar según esta modalidad podrá designar a un agente aduanero en forma permanente y exclusiva para que se encargue del despacho de sus mercancías. Este agente deberá tener relación laboral con la empresa, sin perjuicio de sus responsabilidades inherentes como agente aduanero.”

ARTÍCULO 129.- Declaración aduanera. Las mercancías que una empresa transporte en un mismo vuelo podrán ampararse a una sola declaración aduanera.

SECCIÓN VII ENVÍOS URGENTES

Artículo 130.- Envíos urgentes en razón de su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada. Constituirán envíos urgentes, en razón de su naturaleza o por responder a una necesidad

debidamente justificada, las mercancías consistentes en medicamentos, prótesis, órganos, sangre y plasma humanos, **materias perecederas** o aparatos de uso médico que se reputen de uso inmediato o indispensable en un centro hospitalario, entidad privada o pública, y que motiven la importación urgente por necesitarlos una persona determinada.

El carácter de uso inmediato o indispensable se determinará mediante dictamen médico, que deberá adjuntarse a la declaración correspondiente, la cual deberá presentar el interesado o quien demuestre representar sus intereses. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

*“ARTÍCULO 130.- **Envíos urgentes.** Constituyen envíos urgentes las mercancías consistentes en medicamentos, prótesis, órganos, sangre y plasma humanos, materias perecederas o aparatos de uso médico que se reputen de uso inmediato o indispensable en un centro hospitalario, entidad privada o pública y que motive la importación urgente por necesitarlo una persona determinada.*

El carácter de uso inmediato o indispensable se determinará mediante dictamen médico que debe adjuntarse a la declaración correspondiente. El interesado o quien demuestre representar sus intereses la deberá presentar.”

ARTÍCULO 131.- Aplicación de regulaciones no arancelarias. Los permisos previos obligatorios para el despacho, podrán aportarse mediante el procedimiento más rápido disponible, incluyendo la vía facsímil o similares; o con posterioridad al despacho, en los casos determinados por vía reglamentaria.

La utilización de la presente modalidad no exime a la aduana de la coordinación con las oficinas competentes sobre la aplicación de regulaciones no arancelarias.

ARTÍCULO 132.- Envíos reiterados. No podrá calificarse como envío urgente, la remisión reiterada de una misma mercancía para una persona determinada, salvo dictamen o recomendación de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Ministerio de Salud.

SECCIÓN VIII ENVÍOS POSTALES

ARTÍCULO 133.- Envíos postales. Se entienden por envíos postales, los envíos de correspondencia y paquetes postales pequeños, designados así por la Unión Postal Universal, y se sujetarán a lo dispuesto en los convenios internacionales en materia postal.

Una vez notificado el envío al interesado, este deberá presentarse a la aduana para reconocer las mercancías y manifestar su disposición de despacharlas para consumo o devolverlas. En el primer caso, la aduana procederá a tramitar, de oficio, la declaración y determinar el adeudo tributario.

Las autoridades postales son responsables del transporte, depósito y presentación de los envíos postales a las autoridades aduaneras.

SECCIÓN IX TIENDAS LIBRES

ARTÍCULO 134- Tiendas libres. Las mercancías importadas al amparo de esta modalidad no causarán el pago de tributos, en los términos y para los fines que fije la legislación especial. Las mercancías estarán en bodegas y locales habilitados por la autoridad aduanera competente, adecuados para la seguridad fiscal, con los requisitos exigidos conforme al reglamento.

ARTÍCULO 135.- Requisitos y obligaciones. Las empresas deben operar bajo sistemas informáticos y programas que determine la Dirección General de Aduanas. Necesariamente, deben llevar registros permanentes de sus existencias, del historial de ventas y de otras operaciones sin perjuicio de los requisitos y las obligaciones que les correspondan como auxiliares de la función pública aduanera. Estas empresas podrán actuar en el despacho de sus mercancías sin intervención de agente aduanero.

SECCIÓN X IMPORTACIONES NO COMERCIALES

ARTÍCULO 136.- Importaciones no comerciales. Constituyen importaciones no comerciales las realizadas en forma ocasional, en las que el valor aduanero de las mercancías no exceda del equivalente en moneda nacional a cien pesos centroamericanos. Las mercancías importadas por comerciantes no se reputarán, en ningún caso, como importación no comercial, si corresponden al ramo del comercio a que se dedican.

La declaración aduanera presentada directamente por el declarante, sin representación de un agente aduanero, será tramitada de oficio por la aduana respectiva.

Artículo 137.- Pequeños envíos sin carácter comercial . Se consideran pequeños envíos sin carácter comercial, las mercancías remitidas del exterior para uso o consumo del destinatario o de su familia. La importación de dichas mercancías estará exenta del pago de derechos, impuestos y demás cargos, siempre que su valor total en aduana no exceda de quinientos pesos centroamericanos. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 137.- Pequeños envíos de carácter familiar. Las importaciones no comerciales, consistentes en pequeños envíos de carácter familiar, destinadas a consumo por el destinatario o su familia no estarán sujetas al pago de tributos, siempre que no superen un valor aduanero equivalente en moneda nacional a veinte pesos centroamericanos.”

CONFRONTAR CAUCA Y RECAUCAS IV.

CAPÍTULO IV REGÍMENES TEMPORALES

SECCIÓN I TRÁNSITO ADUANERO INTERNO E INTERNACIONAL

Artículo 138.- Tránsito aduanero. El tránsito aduanero, interno o internacional, es el régimen aduanero según el cual se transportan, por vía terrestre, mercancías bajo control aduanero dentro del territorio nacional. El **tránsito aduanero interno** será declarado por el transportista aduanero autorizado expresamente por la Dirección General de Aduanas. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)*

LGA 236 c), g), j)

VER DISPOSICIONES SOBRE LIBERTAD DE TRANSITO EN EL Artículo 11 del *Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre*

Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

“ARTÍCULO 138.- Tránsito aduanero. El tránsito aduanero interno o internacional es el régimen aduanero según el cual se transportan, por vía terrestre, mercancías bajo control aduanero dentro del territorio nacional. El tránsito aduanero interno será declarado por el transportista aduanero o el agente aduanero expresamente autorizado por la Dirección General de Aduanas.”

ARTÍCULO 139.- Regulaciones basadas en reglamentos técnicos. La autorización del tránsito aduanero estará sujeta al cumplimiento de las regulaciones basadas en **reglamentos técnicos** aplicables a las mercancías, vehículos y unidades de transporte.

La autoridad aduanera verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad de las unidades de transporte, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento.

Artículo 140.- Declaración del tránsito y régimen aduanero. Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley. **Una vez aceptada la declaración, el transportista** será responsable de **iniciar** el tránsito dentro del término de las **setenta y dos horas naturales** siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que corresponda. **De no iniciarse el tránsito en el plazo indicado, procede la multa establecida en el artículo 236 de esta ley.** (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGA 145

(Anteriormente había sido reformado por la Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)

ARTÍCULO 140.- Declaración del tránsito y régimen aduanero. Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los Reglamentos de esta Ley. Aceptada la declaración, el tránsito deberá iniciar dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que corresponda.

De no iniciarse el tránsito autorizado dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta Ley, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.

(Sala Constitucional sentencia 11926-2013 Acción de inconstitucionalidad promovida por MAURICIO BRUCE JIMÉNEZ, mayor, portador de la cédula de identidad número 1-450-535, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa MARINA INTERCONTINENTAL S.A., cédula jurídica 3-101-054245-17, contra el artículo 140, párrafo segundo de la Ley General de Aduanas, número 7557 del 20 de octubre de 1995. Intervinieron también en el proceso la Procuraduría General de la República, representada por Farid Beirute Brenes en su condición de Procurador General Adjunto, y la Dirección General de Aduanas, representada por su Directora General, Silvia Calvo Sáenz.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 140.- Declaración del tránsito y régimen aduanero. Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista o agente aduanero deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los reglamentos a esta ley. Aceptada la declaración la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá la información correspondiente a la aduana competente.

De no iniciarse el tránsito autorizado dentro de ocho días hábiles a partir del arribo de las mercancías, se impondrá una multa de cien pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el artículo 56 inciso a), salvo caso fortuito,

fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista o el agente aduanero comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.”

ARTÍCULO 141.- Controles básicos. Las aduanas de entrada, interiores, de salida o destino, los puestos aduaneros o cualquier otra autoridad aduanera competente, según el caso, verificarán la identificación, estado y seguridad de las unidades de transporte de los dispositivos de seguridad, el desarrollo del tránsito por las **rutas habilitadas** y, en general, el cumplimiento de las formalidades exigidas en esta ley, sus reglamentos y disposiciones administrativas.

De haberse violentado alguna de las medidas de seguridad colocadas en las unidades de transporte, bultos u otros elementos de transporte, se procederá al reconocimiento de las mercancías y a las demás comprobaciones pertinentes, ejecutándose las acciones que correspondan, incluyendo las sanciones o denuncias aplicables.

En el tránsito nacional o internacional se podrán aceptar dispositivos de seguridad colocados por autoridades o empresas privadas, nacionales o extranjeras, salvo que a criterio de la autoridad aduanera, no ofrezcan la seguridad adecuada.

LGA 211-212 a), b), c)

RES-DGA-099-97 de 15:30 horas de 7 de agosto de 1997. L.G. 181 de 22 setiembre de 1997. Fijó tiempos para efectos de descanso, alimentación y dormida.

D.E. 26123-H-MOPT LG 127 de 3 de julio de 1997. “Reglamento de Habilitación de Rutas de Paso Obligatorio para Vehículos Automotores que se encuentren dentro del Tránsito Aduanero, Interno o Internacional, de mercancías sujetas al Control Aduanero”

D.E. 31603-H-MOPT de 19 de enero de 2004. Modificación al Reglamento de Habilitación de Rutas de Paso Obligatorio para los Vehículos Automotores que se encuentran dentro del Tránsito Aduanero, Interno o Internacional, de mercancías Sujetas al Control Aduanero en el Territorio de la República y Fijación de los Tiempos de Rodaje (Salida Llegada) entre Aduanas del País. LG 90 de 10 de mayo del 2004. Habilita Ruta 34 denominada Costanera Sur para el tráfico internacional de mercancías.

RES-DGA-72-2004 de 9 horas del 17 de junio de 2004. Adición en la determinación de los tiempos máximos de descanso, alimentación y dormida en el desarrollo del tránsito entre aduanas, utilizando la Ruta No. 34 “Costanera Sur”, según se presenta en los cuadros A y B de la Resolución RES-DGA-099-97.

Artículo 141 bis.- Precinto electrónico. Toda declaración de traslado o de tránsito, o cualquier movilización de la unidad de transporte, hacia una instalación habilitada para recibirla, **que implique el transporte de mercancías sujetas a control aduanero**, independientemente del régimen al que se encuentren sometidas, deberán utilizar precinto electrónico **según lo determine la Dirección General de Aduanas, mediante resolución de alcance general.**

Los precintos electrónicos podrán ser proporcionados por **autoridades o empresas privadas, nacionales o extranjeras**, los cuales deben cumplir las características técnicas definidas a **nivel reglamentario y mediante resolución de alcance general.**

El **régimen de responsabilidad de estas empresas o autoridades** estará definido en la presente **ley, su reglamento y en las respectivas resoluciones administrativas**, y será sancionado en los términos establecidos en esta ley.

A las empresas privadas, a las que se les haya emitido un **certificado de homologación** para la colocación de precintos electrónicos, se les **suspenderá dicha homologación**, en los siguientes casos:

1. Cuando de cualquier forma falle el sistema de monitoreo, que impida monitorear todas y cada una de las unidades que transportan y sus mercancías por las rutas autorizadas, durante todo su recorrido.

2. Cuando al precinto electrónico le fallen los sensores o los medios de comunicación, hacia el sistema de monitoreo, para intercambiar información con el sistema informático del Servicio Aduanero, sobre la salida, movilización y llegada de las unidades de transporte a los destinos autorizados, de tal forma que se imposibilite darles el debido seguimiento a todas y cada una de las unidades de transporte.

En los **dos supuestos anteriores, la suspensión se extenderá hasta que se corrija o solventen dichos incumplimientos**. Todo lo anterior sin perjuicio de **otro tipo de responsabilidades patrimoniales o penales en que pueda incurrir**.

Cualquier otro incumplimiento, por parte de estas empresas, de las obligaciones establecidas en el reglamento y en los respectivos certificados de homologación de precintos electrónicos, igualmente **será sancionado con la suspensión de la homologación respectiva, hasta tanto se solvete su incumplimiento**.

La **instalación y el adecuado uso del precinto electrónico** es **responsabilidad del auxiliar de la función pública aduanera que realiza la declaración de traslado o de tránsito hacia una instalación habilitada para recibirla**; tratándose de mercancías con destino al **Depósito Libre Comercial del Golfito**, dicha responsabilidad es de la **empresa que efectúe la movilización o el traslado de dichas mercancías**. *(Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 11

Ver - Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), DE 42196-H de 12 de febrero de 2020, publicado en Alcance 22 a La Gaceta 30 de 14 de febrero de 2020, modificado por DE 42823-H-MEIC de 1 de febrero de 2021.

ARTÍCULO 142.- Plazo. Si en el plazo establecido por la aduana no llegan las mercancías al lugar de destino, se sancionará de conformidad con lo establecido en el título de esta ley, salvo **fuerza mayor o caso fortuito** debidamente comprobados.

ARTÍCULO 143.- Accidentes ocurridos durante el transporte. Los accidentes y otros hechos imprevistos ocurridos durante el transporte y que afecten la operación de tránsito aduanero, deberán ser comunicados a la aduana competente u otra autoridad cercana al lugar del accidente para efectos de su comprobación. Quien tenga el mando de la unidad de transporte deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que las mercancías circulen en condiciones no autorizadas.

LGA 236 i), j)

ARTÍCULO 144.- Finalización del régimen de tránsito aduanero. El tránsito aduanero finaliza con la **entrega efectiva** de las mercancías en el **lugar de destino**. El funcionario aduanero o persona autorizada para la recepción, **comunicará inmediatamente** a la autoridad aduanera competente conforme al procedimiento que señalen los reglamentos, las condiciones de los bultos u otros elementos de transporte recibidos, de los dispositivos de seguridad y el cumplimiento de las demás obligaciones exigidas para el tránsito. De haberse encontrado irregularidades o incumplimiento del régimen, la autoridad aduanera dispondrá las acciones que correspondan, incluyendo las sanciones y denuncias aplicables.

Artículo 145.- Estacionamientos Transitorios. En circunstancias excepcionales, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar, a título precario, la operación de estacionamientos transitorios, **permitiendo a los transportistas aduaneros** la permanencia de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, hasta por un plazo máximo de **ocho días hábiles**, **para su destinación hacia un régimen aduanero de importación, siempre que permanezcan bajo precinto aduanero**.

Las unidades de transporte vacías y las unidades de transporte y sus mercancías, destinadas a un régimen aduanero de exportación o en libre circulación, no tendrán límite de permanencia, siempre y cuando se encuentren debidamente identificadas y ubicadas, según las disposiciones que establezca, para tales efectos, el reglamento de esta ley.

De no destinarse las mercancías que se encuentren en estacionamiento transitorio a tránsito, a traslado a depósito aduanero o a cualquier otro lugar autorizado, dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá al transportista una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta ley, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.

La mercancía que no haya sido destinada a tránsito o traslado a depósito aduanero o a cualquier otro lugar autorizado, dentro del plazo máximo de ocho días hábiles, se mantendrá en custodia del estacionamiento transitorio hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta ley, sin perjuicio de la multa establecida en el párrafo anterior. (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGAP 154

RLGA 158, 159, 234, 266

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

“ARTÍCULO 145.- Estacionamientos transitorios. En circunstancias excepcionales, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar, a título precario, la operación de estacionamientos transitorios, permitiendo a los transportistas aduaneros la permanencia de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles, para su destinación hacia un régimen aduanero de importación, siempre que permanezcan bajo precinto aduanero.

Las unidades de transporte vacías y las unidades de transporte y sus mercancías destinadas hacia un régimen aduanero de exportación o en libre circulación, no tendrán límite de permanencia, siempre y cuando se encuentren debidamente identificadas y ubicadas, según las disposiciones que establezca para tales efectos el Reglamento de esta Ley.

La mercancía que no haya sido destinada a tránsito a traslado a depósito aduanero dentro del plazo máximo de ocho días hábiles, se mantendrá en custodia del estacionamiento transitorio hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta Ley.”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 145.- Estacionamientos transitorios. La Dirección General de Aduanas podrá autorizar a título precario y, en circunstancias excepcionales, ante la insuficiencia de infraestructura pública o de depósitos aduaneros, la operación de estacionamientos transitorios, permitiendo a los transportistas aduaneros la permanencia de vehículos, unidades de transporte y sus cargas hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles para su destinación, siempre que permanezcan bajo precinto aduanero.

Las empresas que operen estacionamientos transitorios tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera y deberán cumplir con los requisitos y obligaciones indicados en los artículos 29 y 30 de esta ley y con las condiciones técnicas relativas a la seguridad, vigilancia, infraestructura e iluminación establecidas reglamentariamente. Asimismo, deberán contar con un sistema informático de registro de ingreso, permanencia y salida de los vehículos y las unidades de transporte. También rendirán garantía global establecida por la Dirección General de Aduanas de acuerdo con el volumen de sus operaciones.”

Artículo 145 bis.- Requisitos. Los estacionamientos transitorios bajo la condición de precariedad que les otorga esta Ley, tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera y, además de los requisitos y las obligaciones indicados en los artículos 29 y 30 de esta Ley y su Reglamento, deberán cumplir con los siguientes:

- a) Cumplir las condiciones técnicas relativas a la seguridad, vigilancia, infraestructura e iluminación establecidas reglamentariamente, así como las disposiciones técnico-administrativas referentes

a ubicación, estiba, identificación de los vehículos, unidades de transporte y sus cargas, que siempre deberán permanecer con precinto aduanero o elementos de seguridad.

- b) Contar con un sistema informático de registro de ingresos, permanencia y salida de los vehículos y de las unidades de transporte.
- c) Rendir garantía global, mediante los instrumentos ordenados para los auxiliares de la función pública aduanera, o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado por las posibles responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por el monto de setenta y cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. El monto de la caución o del seguro será actualizado anualmente.

Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el Reglamento de esta Ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

Artículo 145 ter.- Obligaciones. Los estacionamientos transitorios, bajo la condición de precariedad que les otorga esta Ley, además de cumplir otras obligaciones que señalan la presente Ley y su Reglamento, deberán acatar las siguientes:

- a) Comunicar a la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de pérdidas, daños, hurtos, robos u otras circunstancias que afecten las unidades de transporte ingresadas y sus cargas.
- b) Dar aviso diariamente a la aduana de control, por los medios que autorice la autoridad aduanera, de la caída en abandono de las mercancías custodiadas.
- c) **Mantener registros** de los vehículos y de las unidades de transporte con sus respectivos dispositivos de seguridad, **ingresados y retirados**, según los formatos y las condiciones que defina la autoridad aduanera. *(VER SANCION DE SUSP DE 1 AÑO)*
- d) Transmitir, a la aduana de control, el reporte diario del ingreso y la salida efectivos de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas a sus instalaciones, con la indicación de la información que se disponga vía reglamentaria por parte de las autoridades aduaneras.
- e) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los registros de control de ingreso, permanencia y salida de los vehículos y las unidades de transporte, con sus respectivos dispositivos de seguridad.
- f) No permitir el ingreso a sus instalaciones de vehículos o unidades de transporte que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u otras de similar naturaleza, así manifestadas por el transportista internacional.
- g) Contar con medios de vigilancia tecnológicos, que aseguren la efectiva custodia y conservación de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, según las condiciones de ubicación o infraestructura que establezca la autoridad aduanera.

- h) Responder por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras, por los vehículos, las unidades de transporte y sus dispositivos de seguridad que no se encuentren pese a haber sido declaradas como recibidas; además, pagar por los daños que las mercancías sufran en sus recintos o bajo su custodia, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que resulten procedentes.
- i) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta lo determine, oficinas para los funcionarios aduaneros asignados al estacionamiento transitorio.
- j) **Entregar**, únicamente con autorización de la autoridad aduanera, las mercancías custodiadas.
- k) **Llevar un registro de todas las personas que se presenten con autorizaciones para realizar el tránsito, así como de todo vehículo** que se utilice para transportar mercancías al egreso del estacionamiento transitorio.

(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

SECCIÓN II TRANSPORTE MULTIMODAL

ARTÍCULO 146.- Transporte multimodal. Se entiende por Transporte Multimodal el tránsito nacional o internacional de mercancías amparadas **a un solo contrato de transporte**, utilizando por lo menos dos medios diferentes de transporte.

Las mercancías deberán entregarse al consignatario en el lugar designado en el contrato de transporte.

Directriz DGA-DGT-xxx-2019 xx de marzo de 2019, “Plan Piloto para la operación aduanera de la modalidad de Transporte Multimodal Internacional Marítimo – Terrestre, en la ruta Puerto Caldera – Puerto La Unión. Fundamento: varios y arts. 15 y 17 de Ley 8461 de Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico.

ARTÍCULO 147.- Operador de transporte multimodal. El operador de transporte multimodal es la persona que celebra un contrato de transporte multimodal y asume ante el consignante la responsabilidad del transportista por su plena ejecución. Para los efectos de la presente modalidad, se entiende por transportista, el que realmente ejecuta o se hace cargo de la ejecución del transporte o parte de este, pudiendo coincidir o no con el operador del transporte multimodal.

LGA 149

ARTÍCULO 148- Prueba del contrato de transporte. El documento que prueba la existencia del contrato de **transporte multimodal** puede ser obtenido por medio de transmisión electrónica de datos, y constituye un documento de **circulación al portador, a la orden y no negociable.**

LGA 147

ARTÍCULO 149.- Responsabilidad. El operador nacional del contrato de transporte multimodal responde, directa y personalmente, ante el Servicio Nacional de Aduanas y el consignante por el **transporte de las mercancías amparadas al contrato**. El operador es responsable directo de las consecuencias civiles y administrativas derivadas de las actuaciones de sus dependientes y, en forma solidaria, es responsable de las actuaciones de los

subcontratistas nacionales, cuando de estas se derive un perjuicio fiscal. El operador asume la responsabilidad desde que se hace cargo de las mercancías hasta su entrega efectiva al consignatario.

Una vez entregadas las mercancías en el lugar autorizado, el consignatario queda obligado al cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias establecidos en esta ley y sus reglamentos.

Por vía reglamentaria, se dispondrán los procedimientos a que se sujetará la modalidad de transporte multimodal.

ARTÍCULO 150.- Actuaciones de la autoridad aduanera. Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el régimen de tránsito aduanero, las autoridades aduaneras se limitarán **a controlar el estado de los precintos aduaneros, sellos, marchamos y otras medidas de control en los puntos de inicio o finalización del tránsito.** También, controlarán el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad pública, control de drogas, moralidad o sanidad pública y las demás que tengan la obligación de hacer cumplir. La aduana competente establecerá el plazo para la ejecución del tránsito bajo esta modalidad.

SECCIÓN III TRÁNSITO POR VÍA MARÍTIMA O AÉREA

ARTÍCULO 151.- Tránsito por vía marítima o aérea. Constituye tránsito por vía marítima o aérea el transporte de mercancías bajo control aduanero, sujetas al pago de tributos a la importación o exportación o a regulaciones no arancelarias, entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero, mediante naves y aeronaves debidamente matriculadas y con los permisos de las respectivas autoridades nacionales.

Las mercancías que a su ingreso no hayan sido objeto de una declaración pueden transportarse por medio de este régimen.

El tránsito por vía marítima o aérea será declarado por la persona que, conforme al documento de transporte, pueda disponer de las mercancías y podrá estar sujeto a la rendición de garantía sobre los tributos aplicables, que será determinada por la autoridad aduanera.

SECCIÓN IV TRANSBORDO

ARTÍCULO 152.- Transbordo. Constituye transbordo el traslado de mercancías, bajo control aduanero, desde una unidad de transporte o vehículo utilizado para el ingreso al territorio nacional a otra unidad o vehículo que continúa el tránsito aduanero, sin que las mercancías causen pago de tributos.

Las autoridades aduaneras y portuarias darán prioridad al transbordo de animales vivos y mercancías **perecederas** sobre cualquier otro transbordo.

LGA 236 b)

ARTÍCULO 153.- Declaración del transbordo. El transportista o la persona que conforme al documento de transporte tenga la disponibilidad de las mercancías, podrá declarar el transbordo con independencia de su origen, procedencia o destino, en las condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.

Las mercancías que, durante el transbordo se dañen o destruyan, podrán ser abandonadas en favor del fisco o sometidas a otro régimen aduanero.

ARTÍCULO 154.- Garantías y medidas complementarias. La operación de transbordo podrá estar sujeta a rendición de garantía, fijada por la autoridad aduanera competente, y a la aplicación de medidas de seguridad necesarias para identificar las mercancías en el momento de su salida.

La autoridad aduanera, a solicitud del interesado, podrá autorizar que las mercancías sean **objeto de reagrupamiento, reembalaje, marcado, seleccionado, extracción de muestras, reparación o reemplazamiento de embalajes defectuosos y otras operaciones que faciliten su salida.**

Las operaciones de transbordo, únicamente, **podrán efectuarse con la intervención de la autoridad aduanera.**

SECCIÓN V RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL

ARTÍCULO 155.- Depósito fiscal. El depósito fiscal es el régimen aduanero por el cual las mercancías son depositadas temporalmente bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario y el control de la aduana, sin el pago de los tributos a la importación.

La salida y entrega de las mercancías del depósito fiscal se efectuarán una vez cumplidas las formalidades exigibles y satisfechas las responsabilidades tributarias, conforme con el régimen aduanero aplicable.

Las mercancías que, por su naturaleza, puedan causar daños a otras o **requieran instalaciones especiales**, se admitirán únicamente en los depósitos fiscales acondicionados para ello.

LGA 46 y ss.
RLGA 234

ARTÍCULO 156.- Informe de ingreso. El depositario deberá efectuar un informe a la autoridad aduanera competente de las **cantidades, marcas, daños, faltantes o sobrantes** de los bultos y demás información que señalen los reglamentos, inmediatamente después del ingreso de la mercancía al depósito.

Artículo 157- Plazo de permanencia. Las mercancías podrán permanecer en depósito fiscal hasta por un año a partir de su ingreso en el depósito fiscal.

Vencido el plazo anterior sin que se haya solicitado otro régimen aduanero, las mercancías caerán en abandono.

Si las mercancías depositadas por su naturaleza son perecederas o tienen el riesgo de causar daños a otras mercancías depositadas o a las instalaciones y no se encuentran en un depósito acondicionado para ese efecto, el depositario avisará de inmediato a la autoridad aduanera. Esta notificará de esa circunstancia al consignatario y dará un plazo de cinco días hábiles para que cancele el régimen o las traslade a un lugar acondicionado; transcurrido el plazo, las mercancías causarán abandono en favor del fisco.

Para aquellas situaciones de una emergencia nacional declarada previamente por decreto, el Poder Ejecutivo podrá otorgar un único plazo hasta de un año adicional al fijado en este artículo. Para ello, deberá definir las reglas y condiciones que deberán ser aplicadas de conformidad con esta ley. *(Último párrafo adicionado por el artículo único de la Ley 9947 de 15 de febrero de 2021, Publicada en el Alcance 35 a La Gaceta 33 del 17 de febrero de 2021.) (También publicada en La Gaceta 38 de 4 de febrero del 2021)*

Ley No 9947. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 157 DE LA LEY 7557, LEY GENERAL DE ADUANAS, DE 20 DE OCTUBRE DE 1995. ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo final al artículo 157 de la Ley 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995. El texto es el siguiente: Artículo 157- Plazo de permanencia. Las mercancías podrán permanecer en depósito fiscal hasta por un año a partir de su ingreso en el depósito fiscal. Vencido el plazo anterior sin que se haya solicitado otro régimen aduanero, las mercancías caerán en abandono. Si las mercancías depositadas por su naturaleza son perecederas o tienen el riesgo de causar daños a otras mercancías depositadas o a las instalaciones y no se encuentran en un depósito acondicionado para ese efecto, el depositario avisará de inmediato a la autoridad aduanera. Esta notificará de esa circunstancia al consignatario y dará un plazo de cinco días hábiles para que cancele el régimen o las traslade a un lugar acondicionado; transcurrido el plazo, las mercancías causarán abandono en favor del fisco. Para aquellas situaciones de una emergencia nacional declarada previamente por decreto, el Poder Ejecutivo podrá otorgar un único plazo hasta de un año adicional al fijado en este artículo. Para ello, deberá definir las reglas y condiciones que deberán ser aplicadas de conformidad con esta ley. Rige a partir de su publicación. ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintiuno. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO Eduardo Newton Cruickshank Smith **Presidente** Ana Lucía Delgado Orozco María Vita Monge Granados **Primera secretaria Segunda secretaria** Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE. CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600046652.— Solicitud N° 03-GAF-2021.—(L9947 - IN2021528646).

Versión anterior

“ARTÍCULO 157.- Plazo de permanencia. Las mercancías podrán permanecer en depósito fiscal hasta por un año a partir de su ingreso en el depósito fiscal.

Vencido el plazo anterior sin que se haya solicitado otro régimen aduanero, las mercancías caerán en abandono.

*Si las mercancías depositadas por su naturaleza son **perecederas** o tienen el **riesgo de causar daños a otras mercancías depositadas o a las instalaciones** y no se encuentran en un depósito acondicionado para ese efecto, el depositario avisará de inmediato a la autoridad aduanera. Esta notificará de esa circunstancia al consignatario y dará un plazo de cinco días hábiles para que cancele el régimen o las traslade a un lugar acondicionado; transcurrido el plazo, las mercancías causarán abandono en favor del fisco.”*

Legislación conexas

“9 Mercancías perecederas¹⁰ 10A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si no existen condiciones adecuadas de almacenamiento.

9.1 Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros evitables de mercancías perecederas, y siempre que se hayan cumplido todas las prescripciones reglamentarias, cada Miembro preverá que el levante de las mercancías perecederas:

a) se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales; y

b) se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras autoridades competentes en circunstancias excepcionales en que proceda hacerlo así.

9.2 Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al programar los exámenes que puedan ser necesarios.

9.3 Cada Miembro adoptará disposiciones para almacenar de forma adecuada las mercancías perecederas en espera de su levante o permitirá que un importador las adopte. El Miembro podrá exigir que las instalaciones de almacenamiento previstas por el importador hayan sido aprobadas o designadas por sus autoridades competentes. El traslado de las mercancías a esas instalaciones de almacenamiento, incluidas las autorizaciones para que el operador pueda trasladar las mercancías, podrá estar sujeto, cuando así se exija, a la aprobación de las autoridades competentes. Cuando sea factible y compatible con la legislación interna, y a petición del importador, el Miembro preverá los procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en esas instalaciones de almacenamiento.

9.4 En caso de demora importante en el levante de las mercancías perecederas, y previa petición por escrito, el Miembro importador facilitará, en la medida en que sea factible, una comunicación sobre los motivos de la demora.”

VER TAMBIEN 10, 1, 1.1.)

Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

ARTÍCULO 158.- Operaciones autorizadas. Las mercancías depositadas y sus embalajes podrán ser objeto de examen, reacondicionamiento o reembalaje para asegurar su conservación e identificación, siempre que no se altere o modifique su naturaleza.

ARTÍCULO 159.- Bono de prenda. El **dueño** de las mercancías depositadas al amparo del presente régimen podrá constituir gravamen prendario **en favor del depositario**, de un **banco del Sistema Bancario Nacional o entidad financiera** registrada ante la Auditoría General de Entidades Financieras, por medio de la constitución de un Bono de Prenda sobre las mercancías amparadas al conocimiento de embarque, y soportará el privilegio general que, por concepto de tributos y regulaciones no arancelarias, pueda establecer la Administración sobre esas mercancías.

Los bonos de prenda son títulos valores "**a la orden de...**", **transmisibles por endoso**.

Las mercancías en prenda podrán ser rematadas por el acreedor. Para ello, en el diario oficial o en el medio en que se publique, se deberá indicar a los posibles postores y al adjudicatario, que para retirar las mercancías deberá pagar previamente la obligación tributaria aduanera, multas, intereses y demás recargos; además, presentar a la aduana respectiva copia certificada por notario público o autoridad judicial del acta en donde se le nombra adjudicatario.

La constitución del bono de prenda se hará constar en el **original del título de transporte respectivo** y se **anotará en los bultos de manera visible**.

Los bonos de prenda deberán tener consignado, en forma manifiesta y visible, la advertencia clara de que las mercancías están afectas al pago de tributos y que **su término de vencimiento no debe exceder del plazo de depósito fiscal**. Tanto para la **constitución** como para la **ejecución de los bonos de prenda**, se seguirán en lo aplicable las normas establecidas por la **Ley de almacenes generales de depósito** y sus reformas, Ley No. 5, del 15 de octubre de 1934, especialmente los artículos 17, 28 y siguientes.

El **Bono de Prenda** contendrá los requisitos estipulados en el **artículo 670 del Código de Comercio**.

ARTÍCULO 160.- Mercancías dañadas o destruidas. Las mercancías dañadas o destruidas podrán importarse definitivamente en el estado en que se encuentren, mediante el pago de los tributos correspondientes.

Las mercancías depositadas que se destruyan no estarán sujetas al pago de los tributos de importación, a condición de que su destrucción se compruebe a satisfacción de las autoridades aduaneras y **sin que medie causa imputable al depositario**.

SECCIÓN VI SERVICIOS DE REEMPAQUE Y DISTRIBUCION EN DEPÓSITO FISCAL

ARTÍCULO 161.- Servicios de reempaque y distribución. La autoridad aduanera podrá autorizar a los depositarios aduaneros a prestar servicios de desempaqué, división, clasificación, empaque, embalaje, reempaque, reembalaje, remarcación, etiquetado y **distribución de mercancías para su posterior consumo en el mercado local o su reexportación total o parcial**. Mediante reglamento, se determinarán los requisitos operativos correspondientes.

ARTÍCULO 162.- Formalidades para el ingreso y salida. El ingreso y la salida de las mercancías al amparo de este régimen será declarado por el agente aduanero de conformidad con el artículo 86 de esta ley.

ARTÍCULO 163.- Plazos de depósito. Las mercancías podrán permanecer en este régimen hasta por un plazo de un año, a partir de su ingreso en el depósito fiscal. Cuando exista imposibilidad de **exportar oportunamente las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor, la prórroga se extenderá hasta que cesen las circunstancias que la originaron.**

Si la **reexportación** no se ha realizado dentro de los plazos señalados, las mercancías serán consideradas en abandono.

LGA 63

ARTÍCULO 164.- Comprobación del proceso y salida. La autoridad aduanera realizará las comprobaciones pertinentes sobre el proceso realizado y el destino de las mercancías.

Los **insumos nacionales incorporados a los productos finales** estarán sujetos al pago de los tributos a la exportación, vigentes en el momento de su reexportación.

Las mermas y los desperdicios **serán reexportados, destruidos o importados definitivamente** conforme a las disposiciones reglamentarias.

SECCIÓN VII RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TEMPORAL

Artículo 165.—Régimen de importación temporal. La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso, por un plazo determinado, de mercancías a territorio aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro del plazo que se establezca por la vía reglamentaria y de acuerdo con la finalidad de la importación. **Este plazo no podrá exceder de un año, salvo en el caso de la importación temporal de aeronaves a que se refiere el inciso j) del artículo siguiente.** La vigencia de la importación temporal referida en ese inciso, estará determinada por el plazo establecido en el contrato, debidamente aprobado por la Dirección General de Aviación Civil, **el cual no podrá exceder de cinco años.** Para poder acogerse a este régimen, esas empresas no requerirán el otorgamiento de garantía.

Las mercancías importadas temporalmente deberán ser claramente identificables, por cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y deberán cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables.” (Así reformado por Ley No. 8419 de 17 de junio de 2004, publicada en La Gaceta 140 del 19 de julio del 2004)

El texto original del artículo era el siguiente:

“Artículo 165.- Régimen de importación temporal. La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso, por un plazo determinado, de mercancías a territorio aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente sin modificación o transformación alguna, dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria, de acuerdo con la finalidad de la importación. Este plazo no podrá exceder de un año.

Las mercancías importadas temporalmente deberán ser claramente identificables por cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables.”

ARTÍCULO 166.- Categorías de mercancías. Podrán importarse, temporalmente, las mercancías incluidas en forma indicativa en alguna de las siguientes categorías:

a) Industriales: Las que se utilizan para el conocimiento de tecnología, apoyo a los procesos industriales, experimentación y exhibición, siempre que no formen parte, temporal o definitivamente, de un proceso de manufactura o fabricación.

b) Comerciales: Las que se utilizan para la demostración de productos y sus características, pruebas de calidad, exhibición, publicidad, propaganda y otros, siempre que no produzcan lucro por su comercialización.

c) Turismo: Las de uso personal y exclusivo del turista, incluyendo vehículo terrestre, aéreo o acuático; mercancía publicitaria o de propaganda para cualquier medio de comunicación referida al turismo nacional e internacional.

d) Transporte de mercancías: Las unidades que se utilizan para el transporte comercial de mercancías y los vehículos comerciales por carretera, que transportan mercancías afectas a controles aduaneros de cualquier tipo. Se admitirán, igualmente, el material especial, envases y elementos del transporte que sirve para la carga, descarga, manipulación y protección de mercancías, partes, piezas y equipos destinados para la reparación de transportes comerciales importados temporalmente, los que deberán ser incorporados en una unidad de transporte. Los vehículos y las unidades de transporte no podrán utilizarse en transportes internos en el territorio aduanero nacional, salvo lo dispuesto para el tránsito por vía marítima o aérea. Las partes, piezas y repuestos sustituidos deberán someterse a un régimen aduanero o entregarse a la aduana para su destrucción.

e) Feriales: Las destinadas a su exhibición en una feria debidamente programada y a cargo de una organización inscrita ante el registro correspondiente de acuerdo con la legislación nacional sobre la materia.

f) Educativas y culturales: Las utilizadas para ser exhibidas o servir de apoyo a una actividad de fortalecimiento y difusión de las artes y las catalogadas como educativas o culturales por el Ministerio competente.

g) Recreativas y deportivas: Las que ingresan a territorio aduanero con el propósito de ser utilizadas en espectáculos públicos de carácter recreativo o deportivo, incluyendo las mercancías necesarias para su mantenimiento, funcionamiento, actuación o transporte.

h) Científicas: Las que sirven de apoyo tecnológico o complemento de investigaciones científicas, avaladas por el Gobierno de la República, incluyendo los implementos personales de los científicos.

i) Estatales: Las que el Estado importe temporalmente para el cumplimiento de sus fines.

j) Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra, destinadas a servicios aéreos, de empresas que cuenten con un certificado de explotación otorgado por la autoridad aeronáutica costarricense, de conformidad con lo establecido en el **artículo 222 de la Ley General de Aviación Civil**, N° 5150, de 14 de mayo de 1973, y sus reformas. *(Inciso adicionado por Ley No. 8419 de 17 de junio de 2004, publicada en La Gaceta 140 del 19 de julio del 2004)* Circular AS-G-004-2013 de 29 de abril de 2013, Normativa Aduanera aplicable en la importación temporal de “piezas y repuestos” y de “equipo de reparación y mantenimiento” de aeronaves comerciales y correspondientes códigos de transmisión de garantías en el TICA.

Normas Conexas

RLGA 457-460-461

Reglamento de Importación Temporal de Equipos y Piezas de Repuestos para el Mantenimiento y Reparación de Aeronaves de Transporte Internacional, D.E. 13633-H-R, publicado LG 101 del 26 mayo 1982.

Oficio DN-1262-2009 de 15 de octubre de 2009, "Importación temporal de equipo y piezas de repuesto para el mantenimiento y reparación de transporte internacional", Exp. DN-536-2009, firmado por Desiderio Soto S., Director General de Aduanas.

Circular AS-G-004-2013 de 29 de abril de 2013, Normativa Aduanera aplicable en la importación temporal de "piezas y repuestos" y de "equipo de reparación y mantenimiento" de aeronaves comerciales y correspondientes códigos de transmisión de garantías en el TICA.

Reglamento para el Régimen de Importación Temporal para las Categorías Estatal y Ejecución de Obras Públicas, D.E. 36757-MOPT-H de 28 de julio de 2011. Incluye causas de cancelación y procedimiento de cobro de los tributos.

Decreto Ejecutivo 40803-MOPT, La Gaceta 47 de 2 de marzo de 2018, **Reforma Organizativa y Funcional de la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.** "... corresponde a las Capitanías de Puerto del Departamento de Navegación y Seguridad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la ejecución y control de las actividades relacionadas con la navegación y seguridad marítima dentro de su jurisdicción (artículo 18 inciso 1). También le corresponde autorizar o prohibir la entrada, así como el despacho, a las embarcaciones nacionales o extranjeras que visitan nuestros puertos marítimos de altura, embarcaderos, marinas o cualquier otra instalación de atraque debidamente habilitada para su atención, sin perjuicio de las obligaciones previas que correspondan a otras autoridades (artículo 12 inciso 17), así como la verificación y emisión de los Permisos de Permanencia de embarcaciones extranjeras en aguas nacionales (artículos 17 inciso 1)."

Regulaciones sobre Control Marítimo de Ingreso, Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía.

ARTÍCULO 167.- Exigencia de garantías. Las importaciones temporales estarán sujetas a la presentación de garantía. Esta deberá calcularse según el **monto de los tributos que pagarían** las mercancías en el momento de aceptarse la declaración en el régimen.

Se podrá rendir **garantía global** conforme al porcentaje que fije el reglamento, calculado sobre el monto total de tributos aplicables en las importaciones enumeradas en el inciso g) del artículo anterior. No será obligatoria la presentación de garantía para las mercancías señaladas en los incisos c), **d)**, f), h) e i) del artículo anterior.

ARTÍCULO 168.- Ejecución de garantías. La autoridad aduanera **ejecutará las garantías** cuando **haya transcurrido el plazo otorgado sin que se haya demostrado la reexportación o el depósito para la importación definitiva de las mercancías** o, cuando **se le haya dado un fin distinto del solicitado**, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. De **no haberse rendido garantía**, la autoridad aduanera exigirá el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera mediante los procedimientos que establece esta ley.

ARTÍCULO 169.- Destrucción o daño de mercancías importadas temporalmente. Las mercancías dañadas o destruidas por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia temporal, podrán ser **declaradas para consumo en el estado en que se encuentren o abandonadas** en favor del fisco.

ARTÍCULO 170.- Exportación temporal. La exportación temporal es el régimen aduanero que permite la salida, por un plazo determinado, de mercancías del territorio aduanero con suspensión de los tributos a la exportación. Las mercancías deberán ser reimportadas sin transformación o modificación alguna dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria de acuerdo con la finalidad de la exportación. Este plazo no podrá exceder de un año.

Las mercancías exportadas temporalmente deberán ser claramente **identificables** por cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables.

Las disposiciones contenidas en esta sección para la importación temporal, serán aplicables a la exportación temporal, con las condiciones y para las categorías de mercancías que se establezca en la reglamentación.

SECCION VIII PROVISIONES DE A BORDO

ARTÍCULO 171.- Provisiones de a bordo. Son provisiones de a bordo, independientemente de su momento de ingreso al país, las mercancías ingresadas temporalmente y destinadas a la manutención de los tripulantes, para ser consumidas, compradas u obsequiadas a los pasajeros por la empresa aérea o marítima; además, las utilizadas en la operación, el funcionamiento, la reparación y el mantenimiento de vehículos de transporte internacional de personas, buques, embarcaciones turísticas bajo el régimen de importación temporal y aquellas sometidas al régimen de charteo, aeronaves y trenes.

La empresa o su representante debe presentar una declaración detallada, tanto al ingreso como a la salida de las mercancías, ya sea por **lotes o individualizadas** según los manuales operativos que ponga en vigencia la Dirección General de Aduanas.

Las mercancías podrán permanecer a bordo del vehículo que las transporta o ser depositadas en bodegas o locales, destinados sólo para esta clase de mercancías, previa autorización de la aduana competente. (Párrafo primero modificado por Ley 9977 de 5 de abril de 2021, publicada en el Alcance 79 a La Gaceta 78 del 23 de abril de 2021, Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y Desarrollo Costero.)

Versión anterior del artículo.

“ARTÍCULO 171.- Provisiones de a bordo.** Son provisiones de a bordo las mercancías ingresadas temporalmente y destinadas a la manutención de los tripulantes, para ser **consumidas, compradas u obsequiadas** a los pasajeros por la **empresa aérea o marítima**; además, las **utilizadas en la operación, el funcionamiento y la conservación de vehículos de transporte internacional de personas, buques, aeronaves y trenes, con exclusión de las piezas, repuestos y equipo del vehículo o unidad de transporte.

*La empresa o su representante debe presentar una declaración detallada, tanto al ingreso como a la salida de las mercancías, ya sea por **lotes o individualizadas** según los manuales operativos que ponga en vigencia la Dirección General de Aduanas.*

Las mercancías podrán permanecer a bordo del vehículo que las transporta o ser depositadas en bodegas o locales, destinados sólo para esta clase de mercancías, previa autorización de la aduana competente.”

Ver Ley 7744, Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos del 19 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 172.- Responsabilidad. Las empresas que mantengan mercancías al amparo de este régimen en bodegas o locales habilitados para ese efecto, deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:

- a) Cumplir con las disposiciones de organización, de procedimientos y de control que dicte la autoridad aduanera.
- b) Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas. Los registros estarán a disposición de las autoridades aduaneras competentes, cuando estas lo soliciten en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.
- c) Proporcionar la información sobre su gestión, en la forma y por los medios que establezca la Dirección General de Aduanas mediante disposiciones generales.
- d) Integrarse en los sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Aduanas.
- e) Inscribir en los registros de la empresa las mercancías recibidas en sus recintos, según los procedimientos y medios que establezca la Dirección General de Aduanas.
- f) Mantener y enviar registros de mercancías admitidas, depositadas, retiradas u objeto de otros movimientos a la autoridad aduanera competente, de conformidad con los formatos y las condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas.

g) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías.

h) Rendir garantía que respalde el eventual pago de tributos por incumplimiento, pérdida, menoscabo, daños no causados por caso fortuito o fuerza mayor o cambio del fin para el cual fueron ingresadas las mercancías, **sin perjuicio de las acciones penales o administrativas que correspondan.**

ARTÍCULO 173.- Plazo. El plazo máximo de permanencia de las mercancías en el territorio aduanero, será de **seis meses** contados a partir de su ingreso. Vencido este plazo sin haber realizado su reexportación o cambio de régimen, causarán abandono en favor del fisco.

ARTÍCULO 174.- Provisiones de buques y aeronaves. Las provisiones de a bordo que traigan consigo las naves marítimas y aéreas para ser consumidas u obsequiadas a los pasajeros y a la tripulación que permanezcan en el medio de transporte gozarán de franquicia aduanera. El capitán o responsable manifestará a la autoridad aduanera la reseña de las provisiones de a bordo para el eventual ejercicio del control aduanero. Cualquier provisión que sea descargada estará sujeta a los procedimientos de despacho previstos en esta ley.

La autoridad aduanera deberá tomar las medidas necesarias para que el capitán o responsable realice el trámite respectivo en el lugar de arribo de las naves marítimas y aéreas. *(Párrafo adicionado por Ley 9977 de 5 de abril de 2021, publicada en el Alcance 79 a La Gaceta 78 del 23 de abril de 2021, Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y Desarrollo Costero.)*

CAPÍTULO V

DE LOS RÉGIMENES LIBERATORIOS DEL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS

SECCIÓN I ZONAS FRANCAS

ARTÍCULO 175.- Delimitación de las zonas francas. Los límites del área geográfica en que esté ubicada una empresa beneficiaria del régimen de zona franca, deben estar claramente determinados de tal forma que la entrada y salida de personas, vehículos, unidades de transporte o mercancías deban realizarse necesariamente por los puestos o lugares destinados al control aduanero.

Los horarios de operación serán los establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que se **autoricen operaciones fuera de las horas hábiles de servicio.** El órgano administrador del régimen podrá suplir los recursos económicos que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios aduaneros las veinticuatro horas del día.

RLGA 163 a 166

ARTÍCULO 176.- Control aduanero. La autoridad aduanera ejercerá, entre otros, los siguientes controles aduaneros:

a) Vigilancia permanente o temporal en los límites y vías de acceso.

b) Comprobación del uso y destino de las mercancías, según el fin para el cual fueron ingresadas en el régimen.

c) Inspección de las empresas beneficiadas.

El órgano administrador del régimen debe suministrar a la autoridad aduanera la información pertinente sobre las operaciones realizadas por las empresas por los medios que establezca la Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad aduanera para solicitar, directamente, a las empresas los registros de costos y procesos de producción, inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las amparadas en el régimen, conforme a lo que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DE REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO

Artículo 177.- Reimportación La reimportación es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, que se exportaron definitivamente y que regresan en el mismo estado, con liberación de derechos e impuestos.

Para gozar de los beneficios del régimen de reimportación, el declarante deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Que la declaración de reimportación sea debidamente presentada y aceptada, dentro del plazo de **tres años** contado a partir de la fecha de aceptación de la declaración de exportación definitiva.
- b) Que las mercancías no hayan sido objeto de ninguna transformación.
- c) Que se establezca plenamente la identidad de las mercancías.
- d) Que se devuelvan las sumas recibidas por concepto de beneficios e incentivos fiscales u otros incentivos recibidos con ocasión de la exportación, en su caso.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 177.-Reimportación de mercancías exportadas definitivamente. Podrán ser reimportadas, sin el pago de tributos, las mercancías exportadas definitivamente, que por causas originadas en el país importador fueron devueltas, siempre que tal circunstancia se presente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la aceptación de la declaración en el régimen. Además, es necesario probar que tales mercancías son las mismas que fueron exportadas y no fueron objeto de transformación.

En el momento de la reimportación, el declarante deberá proceder a la devolución de las sumas percibidas por concepto de estímulos a la exportación.”

SECCIÓN III

RÉGIMEN DE REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS

Artículo 178.- Reexportación. La reexportación es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas definitivamente.

No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en abandono o respecto de las cuales se haya configurado **presunción fundada de delito penal aduanero**.

La autoridad aduanera podrá autorizar la reexportación a solicitud del interesado, siempre que este no haya solicitado con anterioridad un régimen definitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 de esta Ley". (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 91-110-266

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 178.- Reexportación. La autoridad aduanera podrá autorizar la reexportación en los siguientes casos:

a) A solicitud del interesado, siempre que este no haya solicitado con anterioridad un régimen definitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 de esta ley.

b) Cuando se trate de mercancías desembarcadas por error.

En ambos casos, se requerirá la presentación de la información exigible de conformidad con los reglamentos.

Las mercancías destinadas a otro país y que por error hayan sido descargadas, podrán ser reexportadas en el vehículo que las trajo. Si el vehículo hubiera partido, las mercancías quedarán depositadas en zona de operación aduanera, a la orden del representante nacional del transportista, quien asumirá los gastos ocasionados por su permanencia; si no son retiradas en un mes a partir de la fecha de descarga, se considerarán en abandono."

CAPÍTULO VI REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO

SECCIÓN I RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

ARTÍCULO 179.- Régimen de perfeccionamiento activo. El régimen de perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas **mercancías** deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de **transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos**, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas **para otros fines análogos**, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador competente.

LGA 236 a)
RLGA 154 a 157

VER DISPOSICIONES SOBRE REGIMENES DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y PASIVO EN EL *Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio)." Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.*

ARTÍCULO 180.- Atribuciones del órgano administrador competente. Corresponde al órgano administrador del régimen:

a) Definir las políticas de aplicación y desarrollo del régimen.

b) Otorgar y cancelar las autorizaciones para el régimen en cada caso.

c) Determinar las mercancías que podrán ingresar en el país mediante este régimen y los porcentajes de mermas y desperdicios, conforme se disponga en la vía reglamentaria.

El órgano administrador deberá coordinar sus funciones y actividades con la Dirección General de Aduanas, la que nombrará un representante ante él.

ARTÍCULO 181.- Control de la autoridad aduanera. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en esta ley, corresponde a la autoridad aduanera el control sobre el uso y destino de las mercancías acogidas en el régimen.

En el ejercicio de ese control, la autoridad aduanera podrá:

a) Revisar los registros de costos y procesos de producción, los registros de inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las mercancías amparadas al régimen.

b) Controlar el uso correcto uso de las mercancías, según el destino para el cual fueron ingresadas en el régimen.

c) Controlar el movimiento, uso y destino de las mercancías, sus garantías, destino de los desperdicios y donaciones de acuerdo con los procedimientos que, al efecto, establezca la Dirección General de Aduanas.

LGA 238 a)

ARTÍCULO 182.- Obligaciones de las empresas beneficiarias. Las empresas acogidas a esta modalidad deberán cumplir con las siguientes obligaciones sin perjuicio de las que le correspondan como auxiliares de la función pública aduanera:

a) Iniciar operaciones dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución que les autoriza el régimen. Este plazo podrá ser prorrogado por el órgano administrador hasta por otros seis meses, previa solicitud justificada del interesado. Vencido el plazo sin iniciar operaciones, se tendrá por cancelada la autorización.

b) Facilitar a la autoridad aduanera la información de sus actividades y registros de operaciones.

c) Presentar, en los plazos que fije el reglamento, los reportes e informes de sus operaciones ante la autoridad aduanera.

d) Identificar plenamente la maquinaria, equipo y repuestos siguiendo las disposiciones que, al efecto, emita la Dirección General de Aduanas.

e) Rotular en forma visible con la razón social las instalaciones donde opere la empresa.

f) Integrarse en los sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Aduanas.

g) Inscribirse ante la aduana competente y mantener el registro actualizado.

h) Cumplir con las disposiciones de organización, procedimientos y control que emita la Dirección General de Aduanas.

i) Mantener toda la información relativa a los ingresos, importaciones y reexportaciones de mercancías, en los registros o formatos oficiales diseñados o autorizados por la Dirección General de Aduanas; además, tenerlos a disposición de la autoridad aduanera para el ejercicio del control, por un **plazo mínimo de cinco años**.

j) Cumplir con las **normas relativas a depósito y ubicación de mercancías**, conforme se disponga en el reglamento.

k) Cualquier otra obligación o condición operativa que se establezca en el reglamento.

ARTÍCULO 183.- Responsabilidad tributaria. La empresa es responsable por los daños o pérdidas causadas a las mercancías que permanecen en sus recintos, queda obligada al pago de los tributos correspondientes, **salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados**.

Las mercancías internadas al amparo del régimen **deberán permanecer en los locales autorizados**.

ARTÍCULO 184.- Desafectación del régimen. La desafectación del régimen se probará mediante los sistemas determinados por vía reglamentaria. Se tomará como base los reportes y las declaraciones de ingreso, uso y consumo, actas de donación y destrucción, reexportaciones e importaciones definitivas efectuadas.

ARTÍCULO 185.- Gravamen prendario legal. La maquinaria, equipo y **materias primas** amparados al régimen soportarán gravamen prendario legal en primer grado en favor del fisco, sobre el cual se deberá emitir un título de prenda aduanera que será inscrito a instancia de la autoridad aduanera o de la propia empresa interesada en el Registro de Prendas del Registro Público, sin pago de ningún tributo. No será necesaria garantía adicional.

Los **propietarios de los bienes** que ingresen al amparo de este régimen, por el simple hecho de remitirlos al país, otorgarán poder suficiente al **consignatario** para imponer ese gravamen, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía.

La autoridad aduanera ejecutará la prenda cuando al **vencimiento del plazo de permanencia** de las mercancías, estas no hayan sido reexportadas o importadas definitivamente.

Igualmente, será ejecutada la garantía cuando se demuestre que la empresa ha usado indebidamente o dado un fin distinto a la maquinaria, el equipo o **las materias primas**, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

ARTÍCULO 186.- Destino de los desperdicios, subproductos y muestras. Los desperdicios y subproductos deberán ser reexportados, importados definitivamente o donados al Estado.

Las muestras, desperdicios y subproductos que no puedan ser retornados al extranjero o donados, deberán ser destruidos bajo supervisión de la autoridad aduanera.

Los beneficiarios podrán donar bienes semi-elaborados, residuos, productos de segunda calidad, muestras, repuestos, accesorios y bienes de capital al órgano competente del Ministerio de Hacienda, que a su vez los podrá destinar a instituciones de beneficencia, centros de educación e instituciones del Estado.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA EL PERFECCIONAMIENTO PASIVO

ARTÍCULO 187.- Régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. El régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo es el régimen aduanero por el cual se permite exportar, temporalmente, mercancías que se encuentren en libre circulación en el territorio aduanero nacional, para ser transformadas, elaboradas o reparadas en el extranjero para su reimportación, conforme con las disposiciones reglamentarias correspondientes.

La Dirección General de Aduanas establecerá los procedimientos para asegurar el control y la verificación de las mercancías retornadas.

LGA 236 a)

ARTÍCULO 188.- Productos compensadores. Para los efectos de este régimen, se entiende por productos compensadores, las mercancías obtenidas en el extranjero a partir de las que se han enviado en exportación temporal para su perfeccionamiento pasivo.

Artículo 189.- Base imponible. Para los efectos de la determinación de la obligación tributaria aduanera, la base imponible resultará de la diferencia entre el valor del producto compensador y el valor de las mercancías inicialmente exportadas y de la clasificación arancelaria de las mercancías.

En caso de **reparación de mercancías**, la obligación tributaria se determinará sobre el valor de las mercancías extranjeras incorporadas, más los servicios prestados en el extranjero para su reparación, de conformidad con la tarifa aplicable según la clasificación arancelaria de las mercancías retornadas. No obstante, las mercancías que hayan sido reparadas en el exterior, dentro del **período de la garantía de funcionamiento**, reingresarán con exención total de derechos e impuestos”. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 57

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 189.- Base imponible. La base imponible para los efectos de la determinación de la obligación tributaria aduanera, resultará de la diferencia entre el valor del producto compensador y el valor de las mercancías inicialmente exportadas y la clasificación arancelaria de las mercancías.

En caso de reparación de mercancías, la obligación tributaria aduanera se determinará sobre el valor de las mercancías extranjeras incorporadas, más los servicios prestados en el extranjero para su reparación, de conformidad con la tarifa aplicable según la clasificación arancelaria de las mercancías retornadas.”

Reglamento Centroamericano sobre el Valor Aduanero de las Mercancías. Artículo 10: “Para la determinación del valor en aduana de las mercancías reimportadas reparadas en el extranjero, deberá tomarse en consideración el precio realmente pagado o por pagar de todas las mercancías incorporadas en las operaciones de reparación; comprendidos los gastos de entrega en el extranjero, el valor o costo de la mano de obra en la reparación, el monto del beneficio de quien efectuó el trabajo así como las comisiones pagadas o por pagar a terceras personas, los gastos de embalaje, transporte y seguro incurridos en la reimportación. Cuando las mercancías reimportadas hayan sido reparadas **dentro del plazo de garantía** concedido por el proveedor, el valor en aduana se determinará considerando únicamente los gastos y costos no cubiertos por la garantía.”

CAPÍTULO VII RÉGIMEN DEVOLUTIVO DE DERECHOS

Artículo 190.- Régimen devolutivo de derechos. El régimen devolutivo de derechos es el régimen aduanero que permite la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas a favor del Fisco por concepto de

tributos, como consecuencia de la importación definitiva de **insumos, envases o embalajes incorporados a productos de exportación**, siempre que la exportación se realice dentro del plazo de doce meses contado a partir de la importación de esas mercancías. Los reglamentos establecerán las condiciones que los interesados deberán cumplir para acogerse a este régimen, así como los plazos en los que la Administración deberá realizar la devolución de los impuestos efectivamente pagados.

El Ministerio de Comercio Exterior deberá proveer, a la Dirección General de Aduanas, las recomendaciones y los estudios técnicos necesarios, a fin de que la aduana cuente con la información requerida para realizar la devolución efectiva de los tributos amparados a dicho régimen. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 190.- Régimen devolutivo de derechos. El régimen devolutivo de derechos es el régimen aduanero que permite la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas en favor del fisco por concepto de tributos, como consecuencia de la importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos de exportación, siempre que la exportación se realice dentro del plazo de doce meses contados a partir de la importación de esas mercancías. Los reglamentos establecerán las condiciones que deberán cumplir los interesados para acogerse a este régimen.”

ARTÍCULO 191.- Solicitud del régimen. El exportador final que se acoja a este régimen debe solicitarlo en el momento de presentar la declaración de exportación, conforme a los requerimientos reglamentarios siempre y cuando no goce de un estímulo arancelario a la exportación.

Se procederá a la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas, previa comprobación de la aduana de las condiciones del régimen. La devolución se realizará mediante crédito en su favor o por los medios que se establezcan reglamentariamente.

En ningún caso, se entenderán como ingresos ordinarios del fisco los depósitos o pagos efectuados por empresas autorizadas por la Dirección General de Aduanas para el ejercicio habitual del régimen.

TÍTULO OCTAVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CAPÍTULO I NORMAS GENERALES

Ver CNPT “TÍTULO VI. DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE”

“Artículo 166.- Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo regula los derechos y las garantías fundamentales de los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea en su condición de contribuyentes, responsables y de toda persona física o jurídica a la cual la ley creadora del tributo le asigne el cumplimiento de deberes u obligaciones, sea como retenedores, obligados a ingresar a cuenta, sucesores de la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a las direcciones generales de Aduanas, Hacienda, Tributación, así como de la Dirección General de Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, todos los cuales se denominan en el presente título como “contribuyentes”.

Los derechos y las garantías contenidos en el presente Código se entienden sin perjuicio de los demás reconocidos en el resto del ordenamiento jurídico.

Para los fines de aplicación e interpretación del presente título se entenderá por “Administración Tributaria” el órgano, sea la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, así como la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Policía de Control Fiscal, a la cual la ley le atribuye las competencias de gestión, normativa, fiscalización y recaudación del tributo”. (Incluido por Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

Sala Constitucional. Incumplimiento de plazos. Jurisdicción Contenciosa Administrativa. RES-2011-0000828, expediente 11-000630-0007-CO; RES-2011-003937, expediente 11-002373-0007-CO.

Reglamento de Procedimiento Tributario. Decreto Ejecutivo Nº 38277-H de 7 de marzo de 2014. Alcance No. 10 a La Gaceta No. 65 de 2 de abril de 2014.

“Artículo 2.- Definiciones.

Sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el resto del articulado y demás normativa tributaria, para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Administración Tributaria. *Es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos de la obligación tributaria.*

*Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando se otorga una potestad o una facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la **Dirección General de Aduanas**, a la Dirección General de Hacienda y a la Dirección General de Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de competencia.*

*En virtud de lo anterior, **todo lo relacionado con las normas de procedimiento general son de aplicación a las administraciones tributarias. Algunos procedimientos específicos regulan la materia propia de la competencia de la Dirección General de Tributación, sin perjuicio de que si son atinentes a otras administraciones tributarias, estas puedan ser aplicadas supletoriamente.***

...”

ARTÍCULO 192.- Generalidades. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables, salvo otra especial contrario a esta ley, en todos los procedimientos que inicie la autoridad aduanera para dictar decisiones o actos con efectos externos para los administrados.

De no indicarse expresamente, los términos y plazos concedidos en días por esta ley y sus reglamentos se considerarán hábiles en todos los casos.

A falta de norma expresa en esta ley, en materia de procedimiento se deben aplicar las disposiciones generales de **procedimiento tributario** y, en su caso, las de **procedimiento administrativo**.

LGA	59
CNPT	10-99
LGAP	256-Título II
RLGA	520 y ss.

Excepciones

“Excepción: La agencia aduanal plantea la **excepción de falta de competencia**, y al ser este instituto un acto legítimo del sujeto contra el cual se incoa un procedimiento, tendiente a proteger un derecho determinado, que puede producir la desestimación de la pretensión invocada o la interrupción total o parcial del asunto, el mismo es de conocimiento prioritario.

Para el caso concreto, al haberse interpuesto la excepción indicada y al no existir norma expresa en materia aduanera al respecto, resulta aplicable el artículo 208 de la LGA, el cual dispone que, en caso de ausencia de norma debemos remitirnos a las disposiciones sobre el procedimiento reguladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT), siendo que este cuerpo normativo a su vez, en su numeral 155, establece el orden de aplicación de las normas supletorias, indicando que se deben emplear los lineamientos generales del procedimiento administrativo y en su defecto las del Código Procesal Civil o Código Procesal Penal, según el caso que se trate. Así, al no contener el CNPT norma expresa, resulta de aplicación en materia de excepciones, como norma supletoria, lo dispuesto por el numeral 298 del Código Procesal Civil, el cual clasifica las excepciones en previas y de fondo, siendo la falta de competencia una excepción previa. Teniendo clara la naturaleza de la excepción planteada, se entra a conocer de inmediato la misma.” Sentencia 375-2017. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las quince horas cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

ARTÍCULO 193.- Utilización de sistemas informáticos. Para la presentación de recursos, gestiones y la notificación de actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, podrán utilizarse sistemas informáticos debidamente autorizados.

Artículo 194.- Medios de Notificación. El Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional podrán notificar por cualquiera de los siguientes medios:

- a) Transmisión electrónica de datos en la sede de la aduana o en el domicilio señalado por el auxiliar de la función pública aduanera. La notificación surtirá efecto **veinticuatro horas** después del envío de la información.
- b) Mediante casilla ubicada en la **aduanas competente o en la Dirección General de Aduanas**, según donde se desarrolle el procedimiento. Se tendrá como notificado el acto tres días hábiles después de ingresada la copia íntegra del acto en la respectiva casilla, se haya o no retirado en ese lapso. Los **agentes aduaneros, los transportistas y los depositarios** deben tener obligatoriamente una casilla asignada para los efectos anteriores. *(Ver Circular CIR-DN-016-2015 de 26 de marzo de 2015- reactiva el uso de casilleros en las Aduanas y la DGA)*
- c) Personalmente, si la parte concurre a las oficina del Servicio Nacional de Aduanas que tienen a su cargo la notificación de los actos, o a la oficina del **Tribunal Aduanero Nacional**.
- d) **Carta certificada** o telegrama, con aviso de recepción, dirigido al domicilio o al lugar designado para oír notificaciones, en cuyo caso se tendrá por notificada al **quinto día hábil** posterior a la fecha en que **conste el recibido del destinatario**. En caso de sociedades, se podrá notificar al agente residente designado.
- e) Cuando no sea posible notificar por alguno de los medios anteriores, se notificará por única publicación en el diario oficial, en cuyo caso se tendrá por efectuada al quinto día hábil posterior a esa publicación.
- f) A solicitud del interesado por medio de facsímil, **correo electrónico u otros medios similares** que ofrezcan la seguridad a juicio de la autoridad aduanera. **La notificación surtirá efecto veinticuatro horas después del envío o el depósito de la información.**
- g) Al lugar señalado por el interesado, siempre que, tratándose de las aduanas, se encuentre dentro del asiento geográfico señalado por el reglamento de esta ley. En el caso de la **Dirección General de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional**, la notificación será en el lugar señalada dentro del **perímetro de la Gran Área Metropolitana**.

La notificación debe contener copia literal del acto. Los notificadores gozarán de fe pública.

(Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGAP 241 4)

Guía práctica de comunicaciones judiciales. Circular número 50-2021, que lleva adjunta las reglas generales que contempla la Ley de Notificaciones Judiciales. Publicado en el Boletín Judicial 55 del 19 de marzo del 2021. <https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/>

Circular CIR-DN-016-2015 de 26 de marzo de 2015. “Comunicar acerca de la implementación de las respectivas casillas de notificación en las aduanas del país, a la luz de lo dispuesto en el artículo 194 inciso b) de la Ley General de Aduanas, y otros temas relacionados”

Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, Ley No. 7637 de 21 de octubre de 1996, La Gaceta No. 211 de 4 de noviembre de 1996.

Sala Primera 000234-A-S1-2018 Notificación por correo electrónico. Cómputo. “Conforme se desprende del auto ya firme de esta Sala no. 000355-A-S1-2017 de las 11 horas 53 minutos del 23 de marzo de 2017, la comunicación de la resolución recurrida quedó notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2016 y como se repite el plazo venció el 19 de diciembre de 2016. No llevan razón los recurrentes, en cuanto mencionan que como la notificación ingresó a las 18 horas 30 minutos fuera del trabajo del día, la transmisión se debe tener como realizada a partir del día hábil siguiente sea el 23 de noviembre de acuerdo a lo que establece el artículo 38 artículo de la Ley de Notificaciones. Dicho artículo dispone: “Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.”. Ahora bien, la notificación ingresó el 22 de noviembre y se tuvo por realizada el 23 de ese mes, como los días 24 y 25 de noviembre y el 09 de diciembre fueron asuetos no se tomaron en cuenta para el cómputo del plazo, aún así el plazo para la presentación del recurso de casación venció como se indicó en aquella resolución el 19 de diciembre de 2016 y no el 20 de diciembre de 2016, como lo pretenden hacer creer los demandados. El artículo 17 de la Ley de Notificaciones es claro en señalar que todos los días y las horas son hábiles para practicar las notificaciones. De conformidad con lo expuesto, el rechazo de plano por extemporáneo debe mantenerse y denegarse la solicitud de revocatoria.”

Sentencia 2014 - 001168. Expediente 12-005231-0007-CO. A las catorce horas con treinta minutos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD contra INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DEL CAPITULO III DE LA LEY DE NOTIFICACIONES. Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. ADMISIBILIDAD. 12-5231 / 1168-14. NOTIFICACIONES JUDICIALES. Acción de Inconstitucionalidad presentada contra el capítulo III de la Ley de Notificaciones, y la interpretación restrictiva por parte de los Tribunales de Justicia sobre el señalamiento de medio para recibir notificaciones. Se acusa que reiterada jurisprudencia del Juzgado Contencioso Administrativo y otros, en tanto señalan que se hace el intento de notificar solamente a uno de los lugares señalados para esos efectos, que no hay obligación por parte de la administración de justicia de notificar a un medio supletorio que la parte haya presentado, lo que a juicio del recurrente es violatorio al debido proceso. Con base en las consideraciones expuestas en la sentencia se rechaza de plano la acción. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. RP

ESPAÑA Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso (Pleno), de 3 de diciembre de 2013, Recurso contencioso-administrativo 557/2011 15-01-2014 El Tribunal Supremo rectifica su doctrina legal sobre el Art. 58.4 de la Ley 30/1992, relativo a la obligación de notificar las resoluciones o actos administrativos dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos. “Rectificamos la doctrina legal declarada en la sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 17 de noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 128/2002, en el sentido, y sólo en él, de sustituir la frase de su párrafo segundo que dice «[...] el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación [...]», por esta otra: «el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo”. **De esta manera, la doctrina legal queda fijada como sigue:** Que el inciso intento de notificación debidamente acreditado que emplea el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se refiere al intento de notificación personal por cualquier procedimiento que cumpla con las exigencias legales contempladas en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado. De esta manera, bastará para entender concluso un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en aplicación del referido artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible según los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, y que se practique con todas las garantías legales aunque resulte frustrado finalmente, y siempre que quede debida constancia del mismo en el expediente. En relación con la práctica de la notificación por medio de correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo, siempre que quede constancia de ello en el expediente. <http://www.otrosi.net/article/sentencia-del-tribunal-supremo-sala-de-lo-contencioso-pleno-de-3-de-diciembre-de-2013-recurs>

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 194.- Medios de notificación. El Servicio Nacional de Aduanas podrá notificar por cualquiera de los siguientes medios:

- a) Transmisión electrónica de datos en la sede de la aduana o en el domicilio señalado por el auxiliar de la función pública aduanera. La notificación surtirá efectos veinticuatro horas después del envío de la información.
- b) Mediante casilla ubicada en la aduana competente o Dirección General de Aduanas, según donde se desarrolle el procedimiento. Se tendrá como notificado el acto tres días hábiles después de ingresada la copia íntegra del acto en la respectiva casilla, se haya o no retirado en ese lapso. Los agentes aduaneros, transportistas y depositarios deben tener, obligatoriamente, casilla asignada para los efectos anteriores.
- c) Personalmente, si la parte concurre a las oficinas del Servicio Nacional de Aduanas que tienen a su cargo la notificación de los actos.

d) Carta certificada o telegrama, con aviso de recepción, dirigido al domicilio o lugar designado para oír notificaciones, en cuyo caso, se tendrá por notificada al quinto día hábil posterior a la fecha en que conste el recibido del destinatario. En caso de sociedades, se podrá notificar al agente residente designado.

e) Cuando no sea posible notificar por alguno de los medios anteriores, se notificará por única publicación en el Diario Oficial, en cuyo caso se tendrá por efectuada al quinto día hábil posterior a esa publicación.

f) A solicitud del interesado por medio de facsímil u otros medios similares que ofrezcan la seguridad a juicio de la autoridad aduanera. La notificación surtirá efectos veinticuatro horas después del envío de la información.

La notificación debe contener copia literal del acto. Los notificadores del Servicio Nacional de Aduanas gozarán de fe pública.”

ARTÍCULO 195.- Incidentes y excepciones. *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 195.- Incidentes y excepciones. El incidente de nulidad absoluta y la excepción de pago de la obligación tributaria aduanera, suspenderán la ejecución del acto y serán de pronunciamiento previo y especial.”

Ver CNPT Título ____ Derechos del Contribuyente

Artículo 196.- Actuaciones comunes del procedimiento ordinario. Para emitir de cualquier acto que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse las siguientes normas básicas:

a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, debe ser notificada a las personas o entidades que puedan verse afectadas.

b) En el acto de notificación se otorgará un plazo de **quince días hábiles** para presentar los alegatos y las pruebas respectivas. La autoridad aduanera que instruya el procedimiento podrá prorrogar, mediante resolución motivada, de oficio, o a instancia de parte interesada este plazo para los efectos de presentación de pruebas.

c) A solicitud de parte interesada, el órgano instructor dará **audiencia** oral y privada por un término de ocho días, **una vez evacuadas** las **pruebas** para que las partes desarrollen las conclusiones finales.

d) Listo el asunto para resolver, la autoridad aduanera competente dictará la resolución dentro de los **tres meses siguientes**. La notificación debe contener el texto íntegro del acto. *(El inciso d) fue reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 66-71-102-234

RLGA 525-527-528-531-532-536

LGA 71 (Procedimiento Requerido para decretar prenda aduanera)

Junta Administrativa del Archivo Nacional. **Lineamientos para la Conformación de Expedientes Administrativos**. Norma Técnica Nacional – 001 Rige a partir de su publicación en el Alcance 168 a La Gaceta 165 de 8 de julio de 2020.

El texto original del inciso d) era el siguiente:

“d) Listo el asunto para resolver, el órgano instructor dictará la resolución dentro de un plazo de diez días hábiles. La notificación debe contener el texto íntegro del acto.”

Concordancias

Jurisprudencia

Audiencia. Sala Constitucional Exp: 00-003920-0007-CO, Res: 2000-06926. A las dieciséis horas con once minutos del ocho de agosto del dos mil.- **Recurso de amparo** interpuesto por NASSAR PEREZ TOMAS, portador de la cédula de identidad número 1-508-509, a favor de "DHL ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA", cédula jurídica número 3-101-121344; contra la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.

*"V.- En este caso la Sala estima, con base en la relación de hechos del considerando primero así como de la prueba que consta en el expediente, que no se ha producido la alegada lesión al debido proceso. Lo anterior por cuanto en la resolución RES DCF 417-99, que inició el procedimiento administrativo, claramente se le advirtió a la amparada sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento; que el procedimiento a aplicar establecido en el artículo 196 de la Ley General de Aduanas; se le confirió un plazo de quince días para la presentación de los alegatos de defensa y pruebas de descargo; se puso a disposición el expediente administrativo y se le previno señalar lugar donde atender notificaciones. **De la prueba que consta en el expediente no se desprende que el recurrente haya presentado dentro del plazo conferido prueba alguna en su defensa. En relación con la audiencia que echa de menos el recurrente, tal y como se indicó en el considerando anterior, la misma sólo se lleva a cabo dentro del procedimiento especial regulado en la Ley General de Aduanas si es solicitada por la parte interesada; gestión que no se hizo en este caso. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso".***

Doctrina

"Derecho de audiencia José María Oreamuno L. / Socio de Facio & Cañas

La determinación tributaria consiste en establecer la existencia y la cuantía de una obligación tributaria. La hace el contribuyente cuando presenta una declaración y la hace la Administración cuando, en una fiscalización, hace ajustes a la declaración o determina montos no declarados que debieron serlo.

De un tiempo para acá ha surgido —en todo el mundo— la preocupación de respetar los derechos del contribuyente en todas sus relaciones con la Administración y, en particular, ante una determinación tributaria. El Tribunal de Estrasburgo ha hecho suya esa preocupación a partir del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos que, si bien al establecer el "derecho a un proceso equitativo" pensaba más bien en procesos judiciales, considera sus principios aplicables a los procedimientos administrativos, entre ellos los tributarios.

Los contribuyentes tienen derecho a ser oídos

Más claro es el artículo 8,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". También el contexto es judicial, pero como la determinación tributaria se hace en sede administrativa, es obvio que el derecho de audiencia debe ejercerse ante la Administración. Así lo entendió el legislador al incorporar ese derecho al artículo 171, 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios: "Constituyen derechos generales de los sujetos pasivos los siguientes: [...] 12) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos, de conformidad con la ley".

Periódico "El Financiero"

Excepciones

Excepción Sine Actione Agit

"Sala Primera de Justicia, sentencia No. 317-F-S1-2008, de las 9 horas 10 minutos del 2 de mayo de 2008, en la cual indicó: "XXIII.- (...) En torno a la expresión genérica "sine actione agit", a la luz de lo señalado por la doctrina procesalista, en la actualidad, no configura defensa alguna. Tuvo su origen y fundamento en el derecho romano, principalmente en el segundo período del Derecho Formulario, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Pretor le otorgaba la fórmula-acción. Hacía referencia a la inexistencia de esa "fórmula" para acudir ante el Pretor. Este sistema arcaico de acceso a la justicia fue superado. Por lo tanto, no sólo por razones históricas, sino también constitucionales, resulta inoponible e inaceptable. Además, tal expresión no comprende las defensas de falta de derecho, de interés, y de legitimación, como se ha querido establecer. La defensa "sine actione agit" tuvo una finalidad propia, con ella nunca se atacó el derecho material, lo cual sí hacen las tres indicadas excepciones. Lo que se combatía con ella, se reitera, era la válida constitución de la relación procesal".

Verdad real o material

TAN 318-2014. Verdad Real, oficiosidad del procedimiento, motivación.

TAN 304-2007 "Principio de Verdad Real en el Procedimiento Administrativo Aduanero.

En virtud de lo anterior, todos los procedimientos administrativos, incluyendo dentro de ellos por supuesto el **aduanero**, de conformidad con el fundamento constitucional citado y en relación con los artículos 205, 208 y 272 de la Ley General de Aduanas, que establece la competencia de este Tribunal, las normas de procedimiento y la legislación tributaria supletoria, el numeral 155 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que indica que a falta de norma expresa de ese código se deben aplicar las disposiciones generales del procedimiento administrativo y los artículos 1 a 19, 214, 216, 221, 222, 223, 224, 225, 230 a 238, y 297 de la LGAP, están regulados por los principios de: legalidad, gratuidad, prueba libre, imparcialidad, publicidad del procedimiento, defensa, verdad real e informalismo.

Todos están estrechamente vinculados entre sí y refiriéndonos concretamente al de **verdad real** nuestra LGAP lo regula en el numeral 214, en los siguientes términos:

“1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final.” (El resaltado no es del original)

De lo anterior se desprende claramente que el legislador estableció como objeto o fin más importante del procedimiento administrativo la verificación de la verdad real que sirven de motivo al acto final. Lo anterior en razón de lo dispuesto por el artículo 133 de la citada ley, como bien lo estableció la Procuraduría General de la República al analizar este principio, estableciendo que la decisión se debe fundamentar en hechos, explicando la relación de los numerales 214 inciso 2), 133 y 136 de la LGAP en los siguientes términos:

“El motivo que va a tener la Administración para tomar un acto tiene un fundamento fáctico, se va a basar sobre los hechos que realmente sucedieron. En la ley se establece como obligación la existencia de hechos reales que sirven de motivo al acto. Esto ya que existe el interés público de que la Administración actúe conforme a las necesidades reales de la comunidad... Cuando establece que debe existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto, entonces tenemos que el principio de verdad material como finalidad del proceso es muy importante en este punto, porque los hechos que van a servir de sustento al acto, no serán hechos valorados arbitrariamente, sino que existe la obligación que estos hechos sean los reales independientemente de la voluntad de las partes” (Revista de la Procuraduría General de la República. Pronunciamiento C 103-80 de 14-05-80)

Como corolario de lo señalado, tenemos que a nivel del artículo 221 de la citada Ley de la Administración Pública, en forma expresa se da sustento al principio de verdad material, acotando al respecto en los siguientes términos:

“En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de estas últimas”.

En razón de lo manifestado, debemos tener presente que como las decisiones administrativas deben ajustarse a los hechos sin importar si éstos fueron alegados o probados, este principio de verdad real está estrechamente ligado a otros principios, en especial a los principios de oficialidad e informalismo, en razón de que el impulso de oficio del procedimiento por parte de la Administración ha hecho que el administrado haya ido adquiriendo un papel de colaborador o participe en la activación de los procedimientos como bien lo ha establecido la doctrina, siendo alcances jurídicos de este principio en la LGAP, que el procedimiento debe conducirse con un máximo de celeridad y eficiencia dentro del respeto del ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado (art. 225 y 269:1), que la petición o reclamo mal interpuesto puede ser tramitado de oficio (art. 292) y que la Administración debe realizar todas las diligencias de prueba necesarias de oficio o a petición de parte, esto con el fin de determinar la verdad real de los hechos (art. 297), entre otros 2 (2. Ver sobre el tema pronunciamiento en Sentencia de este Tribunal, número 71-1999). Actuaciones y razonamiento que no son compartidos por este Colegiado, toda vez que ante la duda generada sobre el correcto alcance de las pretensiones de la parte interesada, debió la Aduana conforme con lo señalado por la Sala Constitucional, prevenir la información aclaratoria complementaria, de forma previa a resolver el asunto, lo anterior como garantía de que el administrado tuviera la oportunidad procesal de proveer la prueba suficiente y pertinente que fundamentara adecuadamente su pretensión

Según lo expuesto, el actuar de la Aduana de Peñas Blancas es a nuestro criterio, violatorio del derecho de defensa y del principio de búsqueda de la verdad real, al que está sometida toda la Administración Pública, ya que ante la duda presentada en cuanto a lo solicitado, lo indicado en el contrato y lo manifestado por el interesado en el recurso de reconsideración y lo permitido en la legislación aduanera como procesos a ejecutar en el régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y ante la ya indicada discrepancia de criterio sobre si en el caso opera o no una sustitución de mercancía, debió en consecuencia solicitar las aclaraciones respectivas en cuanto a la diferencia detectada e incluso hasta un nuevo contrato, en caso de considerarlo necesario, además de valorar la posibilidad de optar por alguna de las opciones que el interesado manifestó desde su escrito inicial, es decir debió garantizarse un entendimiento claro de lo solicitado, como garantía del análisis efectuado y en consecuencia de la respuesta dada a dicho requerimiento, ya que de no hacerlo incurre en una grave violación del procedimiento acarreado la nulidad absoluta de lo actuado..

Tenga presente la Aduana que en todo procedimiento administrativo, independientemente de la instancia ante quien se encuentre el expediente, según los preceptos de la ley, debe ser respetado su objeto más importante, siendo este la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto o resolución a adoptar; respeto de los fines de la Administración y de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, quienes tienen derecho ser oídos y atendidos todas sus pretensiones y pruebas antes de la adopción de la decisión final, ya que ésta debe estar apoyada en la verdad real de los hechos 3 (3. Ver Sentencia de este Tribunal, número 58-1999) , y que es fundamental que el acto administrativo se encuentre debidamente motivado, como parte de la garantía del debido proceso, toda vez que el interesado debe conocer

la fundamentación que ha tenido la Administración para actuar de determinada manera y de esa forme ejercer un efectivo ejercicio de su defensa.

El Tribunal Superior Contencioso Administrativo ha reconocido la posibilidad de corregir defectos subsanables mediante una prevención en sede aduanera, lo anterior en un asunto en que acogió la demanda en lo expresamente concedido y ordenó a la Administración a conocer el reclamo formulado⁴ (Ver Sentencias números 193-96 y 286-96 del 05 de setiembre y 13 de diciembre de 1996, respectivamente.).

Por su parte la Sala Constitucional, ante el tema de los defectos procesales que presentan las gestiones de los administrados y sus posibilidades de subsanación, en relación con la prevención de información para mejor resolver, ha manifestado que la Administración Pública debe a la hora de actuar, tener en cuenta los principios que le informan y el fin básico de mantener equilibrada su autoridad, mediante el respeto a los derechos y libertades de los administrados, tomando en consideración que “...la existencia de formalidades tiene la única finalidad de tutelar los derechos mencionados del individuo y, en consecuencia, nunca pueden utilizarse criterios de forma para precisamente denegar al involucrado en el procedimiento el ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como lo ha hecho el Ministerio de Educación Pública, al no tomar en cuenta el escrito presentado por el recurrente por falta de firma, eliminándole cualquier oportunidad de defensa”.

Continúa resolviendo la Sala Constitucional “Si el ente encargado de realizar el procedimiento hubiera considerado que la firma del documento era una formalidad esencial para el ejercicio de la defensa – criterio que no alcanza a entender la Sala- o hubiera tenido alguna duda de la confiabilidad del documento presentado, en el sentido de que no fuera del recurrente, lo menos que pudo haber hecho era prevenirle a efectos de que manifestara si lo había presentado o no, pero no, “anularlo” completamente dentro del procedimiento, incurriendo con ello en una gravísima violación del derecho de defensa, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política.” 5 (5 Ver Voto número 3423-94 de las 8:57 horas del 08 de julio de 1994)

En consecuencia de conformidad con el fundamento legal expuesto y la aplicación de los principios de reiterada cita, considera este Tribunal que la Aduana de Peñas Blancas en su actuación generó indefensión al interesado ya que no fue en busca de la “verdad real” respecto a los hechos que fueron puestos a su disposición para su consideración y análisis, por lo que lo procedente en el presente caso es anular todo lo actuado a partir de la emisión de la resolución que rechaza la solicitud de autorización del régimen de exportación temporal para el régimen de perfeccionamiento pasivo.” **Sentencia número 304-2007. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de setiembre del dos mil siete.**

Omisión de referirse a la solicitud de prueba. Nulidad.

“El principio del contradictorio señalado obliga a la Administración a referirse a cada una de las pruebas y argumentaciones presentadas, y el no hacerlo como se aprecia en autos, generó una clara violación al carácter contradictorio del procedimiento. Sobre el particular el numeral 522 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, RLGA, dispone: “El acto final que emita la autoridad aduanera, deberá cumplir con los elementos del acto administrativo señalados por la Ley General de la Administración Pública, indicando expresamente al menos: a. Los hechos y relación de argumentos técnicos y jurídicos considerados por la Administración o aportados por las partes que sirven de fundamento para la decisión final. b. Apreciación de las pruebas, los motivos de aceptación o rechazo y de las defensas alegadas. c. Determinación de los montos exigibles por tributos y demás recargos e indicación de las infracciones que se le atribuyan. d. Enunciación del lugar, fecha y firma del funcionario legalmente autorizado para resolver.”

En efecto, el objeto del procedimiento ordinario es demostrar o desvirtuar los hechos y pretensiones de las partes, en aras de determinar la verdad real, correspondiendo definir y decidir lo que corresponda en el acto final o, de lo contrario, el acto no sería válido al no estar conforme al ordenamiento jurídico, tal como se da en la especie.

En consecuencia, y sin entrar a valorar este Tribunal sobre la procedencia o no de la prueba solicitada y demás alegatos técnicos argüidos por el recurrente, lo cual compete a la Administración Activa; es criterio de este órgano de alzada que en la especie, la Administración violó una formalidad sustancial del procedimiento, entendida como “formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causase indefensión” (Artículo 223 LGAP) al no atender la solicitud reiterada del recurrente de poner a disposición la prueba técnica practicada por el Laboratorio Aduanero referente al espectro de infrarrojo (IR), no respetando el derecho a ser oído y el principio de transparencia que debe caracterizar la actuación de la administración activa, lesionando así los principios de legalidad y debido proceso contenidos en los numerales 11 y 39 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y Constitución Política respectivamente.

En virtud de lo expuesto, lleva razón el recurrente en la nulidad alegada, debiendo la Administración poner a disposición del interesado la prueba solicitada referente al espectro de infrarrojo (IR) practicada por el Laboratorio Aduanero en los certificados de análisis N° 1780 y 1781 del 21-11-2003.” TAN 029-2008

Artículo 197.- Silencio administrativo. Se entenderá por denegado todo reclamo, petición o recurso no concluido por acto final, una vez transcurrido el término de tres meses contado desde el inicio del procedimiento. El silencio positivo se regirá por las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública. (Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 197.- Silencio administrativo. Si de los autos se comprueba que la inactividad procesal se debe a negligencia del órgano competente, se entenderá por denegado todo reclamo, petición o recurso no concluido por acto final una vez transcurrido el término de tres meses contados desde el inicio del procedimiento.

El silencio positivo se regirá por las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública.”

CAPÍTULO II TRÁMITE DE LA FASE RECURSIVA

SECCIÓN I IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA ADUANA

Artículo 198.- Impugnación de actos. Notificado un acto final dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto podrá interponer los recursos de reconsideración y de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la notificación. Será potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos.

El recurrente presentará las alegaciones técnicas, de hecho y de derecho, las pruebas en que fundamente su recurso y la petición o pretensión de fondo.

El recurrente podrá aportar, en su beneficio, toda clase de pruebas, incluso exámenes técnicos, catálogos, literatura o dictámenes. (Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

LGA 250

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

NOTA: Mediante resolución RES-DGA-143-2013 de mayo de 2013 se estableció el procedimiento para utilizar el sistema informático TICA para “impugnar” los ajustes durante el despacho aduanero. Mediante comunicado DGT-012-2013 se trasladó la vigencia de esa resolución para el 19 de junio de 2013. Esa circular se puede consultar en <https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/5FB3158B-B0A6-4C02-B33B-4537DA7752B2/33302/RESDGA1432013MODIFICACIONDECRICULARES.pdf>

DE 41837-H-MOPT de 10 de julio de 2019, LG 7 agosto 2019, rige 7 de noviembre de 2019, Reglamento para la Aplicación del Artículo 5 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. **“Artículo 1. Ámbito de aplicación.** El presente Reglamento resulta aplicable a todos los vehículos automotores, remolques y semirremolques, de primer ingreso, previamente inscritos en el país de su procedencia, antes de que sean sometidos al régimen de importación definitiva en el territorio nacional.” **“Capítulo VIII RECURSOS CONTRA EL PROCESO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR.”** Artículo 22.

El texto anterior del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 198.- Impugnación de actos Notificado un acto final dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto, podrá interponer el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Será potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos.

El recurrente presentará las alegaciones técnicas, de hecho y de derecho, las pruebas en que fundamente su recurso y la petición o pretensión de fondo.

El recurrente podrá aportar, en su beneficio, toda clase de pruebas, incluso exámenes técnicos, catálogos, literatura o dictámenes”.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 198.- Impugnación de actos. Notificado un acto final dictado por la aduana, que incluya el resultado de la determinación tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto podrán interponer el recurso de reconsideración y el de revisión jerárquico ante la aduana, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación.

El recurrente presentará las alegaciones técnicas, de hecho y de derecho, las pruebas en que fundamente su recurso y la petición o pretensión de fondo.

El recurrente podrá aportar, en su beneficio, toda clase de pruebas, incluyendo exámenes técnicos, catálogos, literatura o dictámenes.”

Artículo 199.- Plazo para que la aduana dicte la resolución. Dentro de un plazo de **dos meses**, contado desde la fecha de interposición, la aduana competente deberá dictar el acto que resuelve el recurso de reconsideración. *(Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 199.- Plazo para que la aduana dicte la resolución. Dentro de los tres días hábiles siguientes a su interposición la aduana competente deberá dictar el acto que resuelve el recurso de reconsideración.”

Jurisprudencia constitucional

Exp: 04-007023-0007-CO, Res. Nº 2006-001518, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y cuarenta y seis minutos del diez de Febrero del dos mil seis. Recurso de amparo interpuesto por EDWARD BECK THOMAS, a favor de SEGURIDAD POSTAL SOCIEDAD ANÓNIMA e INVERSIONES INTERNACIONALES BANCOR, S. A., contra la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.

...

III.- SOBRE LA VIOLACION A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE AUDIENCIA. Lo que reclama el recurrente es un vicio del debido proceso legal, por cuanto la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 361 y siguientes establece cuándo un proyecto de disposición general debe ser sometido al trámite de información pública. No se trata de un vicio grosero del debido proceso. Por lo anterior, descarta la Sala que se haya producido el agravio alegado.

IV.- SOBRE LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO POR DENEGACION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS. La Administración Aduanera denomina el acto impugnado como “Directrices orientadas a garantizar una correcta declaración del flete total para mercancías ingresadas al territorio aduanero por vía aérea, según la modalidad de Entrega Rápida o “courier” y luego arguye para rechazar los recursos ordinarios que se trata de un acto administrativo interno o más concretamente de una “circular”. Sin embargo, estima este Tribunal que no se trata de tal acto interno, puesto que, la metodología dispuesta en la circular, está dirigida a todos los administrados que se dedican a la entrega rápida o courier, de modo que tiene un alcance general y normativo, en cuanto les vincula y obliga al momento de declarar el flete total en mercancías ingresadas al territorio aduanero por vía aérea. Independientemente, del nomen iuris del acto jurídico, esto es, de la denominación que le haya dado la administración, es lo cierto que desde una perspectiva sustancial y material, afecta la esfera jurídica de los administrados que se dedican a la actividad, con lo cual tiene efectos jurídicos externos y, por consiguiente, resulta admisible su impugnación. La denegatoria de los recursos procedentes, en criterio de esta Sala, sí constituye un vicio grosero o grave del debido proceso constitucional. Bajo esta inteligencia, se impone acoger este extremo del proceso.

V.- SOBRE LA VIOLACION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR CUANTO NO HAY UNA NORMA QUE HABILITE LA CREACION DE LA TABLAS DE MONTOS. El determinar si un reglamento tiene o no cobertura en la ley es una cuestión de legalidad ordinaria que debe discutirse en sede administrativa o jurisdiccional.

VI.- SOBRE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER UN MONTO COMO BASE EN LA TABLA DE VALORES QUE SU VEZ VIOLENTA LA LIBERTAD DE EMPRESA. La determinación de tales montos es una cuestión estrictamente técnica que precisa de ser discutida en sede administrativa o de legalidad ordinaria que permite una cognición plena y el ofrecimiento de abundante prueba para ser debatida, siendo que el recurso de amparo es un proceso sumario y preferente.

VII.- CONCLUSION. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso únicamente en lo que respecta a la acusada violación al derecho a la defensa, anular el oficio del Director General de Aduanas Nº DVA- 086-2003 del 19 de septiembre del 2003 y ordenarle a la Directora General de Aduanas, que resuelva el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el recurrente el 3 de septiembre del 2003 y le notifique lo resuelto en los términos que se dirá.-...”

Artículo 200.- Remisión del recurso. Presentado el recurso de apelación y denegado total o parcialmente el recurso de reconsideración, en su caso, la aduana competente se limitará a remitirlo al Tribunal Aduanero Nacional, junto con el expediente administrativo, dentro de los siguientes **tres días hábiles**, por el medio más rápido que tenga a disposición, y emplazará a la parte para que en los diez días hábiles siguientes, contados a

partir de la fecha de notificación, **reitere o amplíe** los argumentos de su pretensión ante el Tribunal Aduanero Nacional. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

RLGA 7 m)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 200.- Remisión del recurso. Denegado total o parcialmente el recurso de reconsideración e interpuesto el recurso de revisión jerárquico, la aduana competente lo remitirá a la Dirección General de Aduanas, junto con el expediente administrativo, el día hábil siguiente por el medio más rápido que tenga a disposición; emplazará a la parte para que en los cinco días hábiles siguientes reitere o amplíe los argumentos de su pretensión ante la Dirección General de Aduanas.”

Artículo 201.- Fase probatoria El Tribunal Aduanero Nacional podrá ordenar prueba para **mejor proveer**. El recurrente podrá **proponer prueba**, pero el Tribunal rechazará aquella que sea impertinente o superabundante. Se concederá un plazo de **quince días hábiles** para presentar las pruebas. Mediante resolución motivada, el Tribunal podrá **prorrogar** este plazo por uno igual y sucesivo, a solicitud del recurrente, lo cual deberá ser solicitado antes del vencimiento del plazo inicial. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 201.- Fase probatoria. De ser necesario para mejor resolver o a solicitud del recurrente o de parte interesada, la Dirección General de Aduanas otorgará un plazo de quince días hábiles para presentar pruebas. La Dirección General de Aduanas podrá prorrogar este plazo, mediante resolución motivada, de oficio, a solicitud del recurrente o de parte interesada.”

Resoluciones judiciales

“I.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- La parte actora aportó en Juicio, una especie de constancia -No. XXXXX- emitida por la Dirección Ejecutiva de XXXX con fecha Y de YYY de 2019, en la que se da cuenta de que para el año 2003, el Grupo XXXXX S.A., ostentaba la condición de asociado activo. Al referido documento se le brindó el trámite del artículo 50.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que se procedió a conferir al Estado la audiencia de rigor -quien se opuso por considerar que no se trata de prueba útil y pertinente-, reservándose la decisión sobre su admisibilidad o no, para sentencia. Criterio de esta Cámara.- Como es sabido, sin importar que la prueba para mejor resolver sea propuesta, ofrecida o aportada por las partes, la misma continúa siendo prueba del Tribunal, quien tiene amplia discrecionalidad para determinar si resulta pertinente, útil y necesaria. Siendo una consecuencia de ello, que su rechazo en modo alguno pueda producir quebranto al derecho de defensa en particular ni al Debido Proceso en general. En la especie, es criterio de quienes resuelven, que la constancia aportada por la accionante, además de resultar pertinente, claramente es útil y necesaria, en el tanto se pretende con la misma, demostrar el vínculo existente entre el Grupo XXXX S.A. -con un 100% de participación en el capital accionario de YYYYYY S.A., entidad auditada por la Administración Tributaria- y la Asociación XXXXXXXX al momento en que se realizaron las consultas sobre la metodología para calcular el gasto financiero no deducible, los gastos administrativos no deducibles y el gasto por diferencial cambiario no deducible de los Bancos del Sistema Bancario Nacional. Siendo ello así, lo procedente es admitir la prueba aportada, como en efecto se dispone.” 32-19-TCASIV (839) 11:10 horas del 6 de mayo de 2019

ARTÍCULO 202.- Plazo para que la Dirección General de Aduanas dicte la resolución. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de las diligencias probatorias la Dirección General de Aduanas deberá dictar el acto que resuelve el recurso de revisión jerárquica. **(NOTA: DEROGADO TACITAMENTE)**

ARTÍCULO 203.- Apelación. (Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 203.- Apelación. Contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional. Este recurso deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. Una vez interpuesto, en tiempo y forma, la Dirección General de Aduanas lo admitirá y emplazará a las partes para que dentro del plazo de diez días hábiles, se apersonen ante el Tribunal Aduanero Nacional y remitirá el expediente completo.”

SECCIÓN II

IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Artículo 204.- Impugnación de actos de la Dirección General de Aduanas. Contra los actos dictados directamente por la Dirección General de Aduanas, cabrán los **recursos de reconsideración** y de **apelación** para ante el Tribunal Aduanero Nacional; ambos recursos serán potestativos y deberán interponerse dentro del plazo de los **quince días** hábiles siguientes a la notificación del acto recurrido. La Dirección General de Aduanas deberá dictar el acto que resuelva el recurso de reconsideración, dentro de **dos meses** contados a partir de la interposición del recurso. **La fase probatoria del recurso de apelación se tramitará de conformidad con el artículo 201 de esta ley.** *(Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

Nota: RECURSO DE REVOCATORIA LGAP: Mediante resolución del TAN número 421-2014 se alude a la necesidad de emitir una resolución de confidencialidad en los procedimientos de verificación del origen, aplicando supletoriamente la LGAP, artículos 273, 274, 346 de esa Ley, permitiendo la presentación del RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA ESA RESOLUCION DE CONFIDENCIALIDAD EN EL PLAZO DE 24 HORAS.

LGA 201-202-203-250
RLGA 7 m)

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)

“Artículo 204.- Impugnación de actos de la Dirección General de Aduanas. Contra los actos dictados directamente por la Dirección General de Aduanas, cabrán el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional; ambos recursos serán potestativos y deberán interponerse dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto recurrido. La Dirección General de Aduanas deberá dictar el acto que resuelva el recurso de reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes. La fase probatoria del recurso de apelación se tramitará de conformidad con el artículo 201 de esta Ley.”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 204.- Impugnación de actos de la Dirección General de Aduanas. Contra los actos dictados directamente por la Dirección General de Aduanas, cabrá el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional. Ambos recursos deberán interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de notificación del acto recurrido. El recurso de reconsideración se sustanciará de conformidad con los artículos 201 y 202 y el de apelación de conformidad con el artículo 203 de esta Ley.”

Artículo 204 bis.- Apelación Interpuesto el recurso de apelación, la Dirección General de Aduanas se limitará a remitirlo, junto con el expediente administrativo completo, al Tribunal Aduanero Nacional y emplazará a las partes para que, dentro del plazo de diez días hábiles, se apersonen ante ese órgano. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

TÍTULO IX

INSTANCIA SUPERIOR ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO ÚNICO

TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL

ARTÍCULO 205.- Competencia. Créase el Tribunal Aduanero Nacional como un órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda. Tendrá competencia para conocer y decidir, en última instancia administrativa, **los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.**

Artículo 206.- Composición. El Tribunal estará integrado por siete miembros. Cuatro de ellos serán abogados especializados en materia aduanera, con experiencia mínima de cuatro años; los otros tres serán personas con el grado mínimo de licenciatura y experiencia de por lo menos cuatro años en materias tales como **clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior.**

El Tribunal contará con un presidente que será abogado, además, con un secretario y el personal administrativo necesario para el buen funcionamiento, nombrados de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 206.- Composición. El Tribunal estará integrado por siete miembros; cinco de ellos serán abogados especializados en materia aduanera, con experiencia no menor de cuatro años, y los otros dos serán personas con grado mínimo de licenciatura y experiencia no menor de cuatro años en materias tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior.

El Tribunal contará con un presidente que será abogado, además, con un secretario y el personal administrativo necesario para el buen funcionamiento, nombrados de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.”

ARTÍCULO 207.- Nombramiento. Los miembros serán nombrados por el Ministro de Hacienda, previo concurso público de antecedentes.

En esa forma, se nombrará igual número de suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos de los propietarios y actuarán en caso de ausencia, impedimento, recusación o excusa de estos.

Las causales y los procedimientos de remoción y prohibición y la retribución económica de los miembros del Tribunal serán iguales a los fijados para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo.

ARTÍCULO 208.- Normas de procedimiento El Tribunal ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente ley y, supletoriamente, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Serán motivos de impedimento, excusa o recusación los **prescritos en el capítulo V del título I del Código Procesal Civil.** En estos casos, el órgano observará el procedimiento dispuesto en dicho Código. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

LGA 257

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 208.- Normas de procedimiento. El Tribunal ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente ley y, supletoriamente, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.”

Artículo 209.- Plazo para resolver. El Tribunal dictará la resolución dentro de los **seis meses** siguientes a la fecha de recepción del respectivo expediente administrativo en ese órgano.

En los casos en que los sujetos pasivos y otros afectados presenten pruebas de descargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 201 de esta ley, o cuando el Tribunal ordene prueba para mejor resolver, el plazo de **seis meses** correrá a partir del vencimiento de dicha fase probatoria. La resolución dará por agotada la vía administrativa.

El interesado podrá **solicitar aclaración y adición** dentro de los **tres días hábiles** siguientes a la notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de **quince días hábiles**. (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 209.- Plazo para resolver. Una vez listo el asunto, el Tribunal dictará la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. Mediante resolución fundada, el plazo podrá prorrogarse por un término único adicional de quince días hábiles. La resolución dará por agotada la vía administrativa.

El interesado podrá solicitar aclaración y adición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de quince días hábiles.”

ARTÍCULO 210.- Votación. El Tribunal tomará las decisiones por simple mayoría.

Los miembros deberán asegurar la eficiencia y el decoro en el ejercicio de las funciones encomendadas por ley. Al presidente del tribunal le corresponderá realizar las correcciones de advertencia y amonestación de los miembros, mediante el debido proceso administrativo disciplinario. **En caso de falta grave, se regirá por las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Hacienda.** (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 210.- Votación. El Tribunal tomará las decisiones por simple mayoría.”

Concordancias

DE 41198-H de 1 de junio de 2018, Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Asesora de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda, modificación y adición al Decreto No. 35366 de fecha 24 de junio del 2009, adición a los Decretos No. 35688 de fecha 27 de noviembre del 2009, No. 25270 de fecha 14 de junio de 1996, 35940 de fecha 12 de marzo del 2010 y derogatoria del inciso c) del artículo 17 al Decreto No. 35366. Publicado La Gaceta 127 del 13 de julio de 2018

Interposición de proceso contencioso administrativo (Art. 41 CPCA)

“Pero cuando nos encontramos en presencia de un Proceso Tributario, qué habrá de aplicarse entonces para establecer y computar el plazo con que se cuenta para la interposición de la demanda? Prescripción o caducidad? Este cuestionamiento, bien puede afirmarse, nació con la misma entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo y la redacción no muy feliz del ordinal 41 de dicho cuerpo normativo. No obstante ello, la interrogante señalada ha sido resuelta por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias Nos. 1536-F-S1-2013, de las 09:45 horas del 14 de noviembre de 2013; 972-F-S1-2014, de las 09:00 horas del 24 de julio de 2014; 1240-F-S1-2014, de las 09:00 horas del 24 de setiembre de 2014; 31-F-S1-2015, de las 13:55 horas del 16 de enero de 2015; 324-F-S1-2015, de las 11:38 horas del 12 de marzo de 2015 y 0759-F-S1-2016, de las 10:15 horas del 14 de julio del 2016. Se trata entonces de un criterio jurisprudencial, según el cual respecto de la impugnación de actuaciones en materia tributaria, rige el instituto de la prescripción del derecho de fondo, en los términos establecidos en el numeral 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual, “... a pesar de su redacción, no se está ante la caducidad de la acción sino de la prescripción del derecho.” (En similar sentido, ver también la sentencia No. 552-F-S1-2011, de las 09:00 horas del 25 de mayo de 2011, del referido órgano jurisdiccional). Ahora bien, no hay discusión alguna respecto a que por la naturaleza de lo debatido en la especie, este asunto es de índole tributaria, teniéndose como inmediata consecuencia de ello a la luz de lo antes dicho: i) que conforme al ordinal 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no resulte aplicable a este caso la alegada caducidad del artículo 39 del mencionado cuerpo normativo, sino la prescripción del derecho de fondo, en lo que al plazo para demandar se refiere. ii) que el plazo de prescripción, por tratarse de un asunto tributario, deberá explorarse en primera instancia en la ley de creación del tributo y de ser necesario en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Señalado lo anterior, ha de indicarse que de una revisión detallada de las normas que componen la Ley de Impuesto sobre la Renta, se aprecia que la misma no regula plazo alguno de prescripción respecto del mencionado tributo, lo que impone la necesidad de acudir en aplicación supletoria, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este último cuerpo normativo establecía en su artículo 51 antes de la reforma operada por Ley No. 9069 -que sería la norma vigente al momento del acaecimiento de los hechos-, un plazo de prescripción de 3 años para la determinación de la obligación tributaria, así como para exigir el pago del tributo y sus intereses. Pero dicho plazo, por la redacción del referido ordinal, parece estar previsto sólo para la Administración Tributaria y no así para el administrado, circunstancia la señalada, que impone la necesidad de escudriñar tal aspecto. Precisamente sobre el tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, señaló:

"IV.- ... Pues, como se viene exponiendo es precisamente el **cardinal 41 del CPCA** [léase Código Procesal Contencioso Administrativo] el que dispone una excepción para el caso de las materias civil de hacienda y tributaria (que interesa en este asunto), incluso para el proceso de lesividad tributaria. Por otro lado, ha de manifestarse que, el espíritu de dicha norma fue el de uniformar el plazo de prescripción en las materias expresamente indicadas en el cardinal 41 de marras, con el propósito de eliminar la disparidad de regulaciones, y claro está, dirigida a brindar un tratamiento equitativo a la prescripción del derecho de fondo, tanto para la Administración como para el administrado, y en el caso del ámbito tributario al contribuyente y al Estado mediante la lesividad, de manera que cuenten con igual plazo. En consonancia con lo expuesto, este Órgano decisor tanto en materia civil de hacienda (sentencias no. 185 de las 8 horas 55 minutos del 3 de marzo de 2011 y no. 469 de las 15 horas 20 minutos del 7 de mayo de 2009) como en la tributaria (fallo 552 del 2011 ya citado), ha dispuesto que cuando el ordenamiento jurídico le otorga a la Administración un determinado plazo para hacer un reclamo, aunque de manera precisa no se establezca para el administrado, lo cierto es que en virtud de una integración analógica, considerando asimismo los **principios de igualdad y equilibrio de intereses**, es posible establecer que se ha de actuar un lapso similar cuando sea este último quien reclame. De modo que **si la Administración contaba con tres años para determinar la obligación tributaria, así como el pago y sus intereses, sería irrazonable y, consecuentemente, se vulnerarían aquellos postulados, si cuando es el contribuyente quien hace el reclamo, se le aplique otro plazo** (Sentencia 1536-F-S1-2013. En idéntico sentido la número 234-F-S1-2015). También señaló la Sala Primera que conforme a las discusiones en el seno de la subcomisión dictaminadora del Código Procesal Contencioso Administrativo en la Asamblea Legislativa, "... resulta claro en primer término que para la materia tributaria **la norma dispone un plazo de prescripción. ... En síntesis, la duda surgida por la redacción del artículo 41 en su párrafo primero, se aclara en el sentido de que se trata de un plazo prescriptivo para las materias civil de hacienda y tributaria.**" (Sentencia 972-F-S1-2014, de cita). Y en lo concerniente a las **posibles pretensiones en los procesos en materia tributaria** explicó: "VIII.- Alcance de la prescripción en materia tributaria regulada por el precepto 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Examinado lo acontecido en el proceso de formación de la Ley, conviene precisar que en la materia tributaria, las pretensiones de las partes incluyen la más de las veces- una relativa a vicios del acto administrativo y su consecuente nulidad. Ha de precisarse entonces el alcance de este inciso segundo, siendo que tal pretensión lo asemeja en tesis inicial- a un proceso anulatorio puro, regido en principio por el plazo de caducidad anual estipulado en el mandato 39 del CPCA (léase Código Procesal Contencioso Administrativo) que conforma precisamente tesis del Tribunal en la sentencia impugnada. Esta circunstancia pretensiva no debe llamar a confusión. Según se vio en el considerando que antecede, los redactores de la norma consideraron preponderante el tema o consecuencia patrimonial dineraria ligada a los tributos, incluso sobre la petición de invalidez. **Es por tanto la inmediata consecuencia sobre la hacienda pública y la del obligado tributario la que imprimió a esta materia una regulación distinta, abstrayéndola del plazo de caducidad del año e incorporándole un plazo prescriptivo algo más extenso o al menos diverso, al margen de que en el objeto del proceso se cuestione un acto específico de la Administración, o bien, actuaciones materiales u omisiones, por ejemplo.** Esto es así, por cuanto aún y cuando la parte actora impugnase una conducta administrativa, su pretensión principal, al igual que un proceso civil de hacienda, es la afectación directa e inmediata de su peculio. A más de ello, **no dispone la norma, ni se halla en las actas de la subcomisión legislativa, distinción alguna entre pretensiones anulatorias y las relativas a derechos de crédito.** En este orden, tal y como se reconoció en esa oportunidad, el artículo de comentario instaura un tratamiento especial para la materia tributaria, que obedece a esa inmediatez sobre el patrimonio de los contribuyentes, de los responsables y de las Administraciones. Se trata pues de un instituto distinto, que implica finalmente una extensión temporal para incoar la demanda con independencia de las particulares pretensiones que se esgriman (misma razón por la cual, y para efecto de un equilibrio entre las partes, también el legislador **incluyó expresamente la de lesividad**). En suma, la intención fue entonces subsumir dentro de los supuestos de la norma, la totalidad de la materia tributaria, aún y cuando exista un acto administrativo mediático en ejercicio de una potestad administrativa con correlativa intensidad de sujeción. Ello -se reitera- por tratarse de un aspecto meramente dinerario, que el legislador quiso apartar de los plazos normales de caducidad. Más claro, en ambos supuestos (civil de hacienda y tributario), **se suprime como se dijo- la caducidad de la acción, para dejar vigente sólo la extinción del derecho de fondo por vía de la prescripción en lo que hace a la obligación dineraria impuesta (luego del ejercicio concreto de la potestad tributaria). Todo lo cual constituye un claro ensanchamiento de las garantías y derechos del contribuyente, y luego para la propia Administración.**" (Sentencia 972-F-S1-2014, de cita. El subrayado no es del original. En idéntico sentido, ver las sentencias 1240-F-S1-2014, 31-F-S1-2015, supra citadas.)

Claro está además, que a la luz del mencionado criterio no pueden obviarse las causales de interrupción del plazo de prescripción previstas en el numeral 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo hasta aquí señalado, permite sobradamente sustentar el rechazo de la excepción de caducidad opuesta por el Órgano Procurador, como en efecto se dispone. **No obstante, únicamente con una finalidad informativa para las partes en este Proceso, consideran los suscritos juzgadores que estamos en presencia de una oportunidad para que, pese a su inaplicabilidad al caso concreto por la razones dichas-, se aclare lo que esta Sección del Tribunal piensa sobre el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo de caducidad para efectos de determinar si una demanda contenciosa se interpuso o no en tiempo. Así, este Tribunal respetuosamente ha disentido del criterio reiteradamente sostenido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y al respecto, en sentencia No. 84-2017-IV de las siete horas y cuarenta minutos del veinte de setiembre de dos mil diecisiete, expresamente se indicó:**

"Si bien el criterio contenido en las sentencias número 65-F-TC-2015, 116-A-S1-2015 y 122-F- TC-2015 dictadas por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, parece tender a darle preeminencia al agotamiento facultativo

de la vía administrativa, como una manera de facilitarle al administrado el acceso a una justicia pronta y cumplida; también lo es, que la aplicación aislada de lo dispuesto en el artículo 39 inciso 1 sub inciso a del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) que se plantea en dichos pronunciamientos, no sólo implica desconocer lo establecido en los incisos 6 y 7 del artículo 31 con relación al numeral 33 de ese mismo cuerpo normativo, sino que además coartar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales que pretende tutelar.

En ese sentido, los numerales antes citados del CPCA contemplan tres supuestos para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa -sin perjuicio de los dos casos en que conforme a la interpretación de la jurisprudencia constitucional de los artículos 182 y 173 de la Constitución Política, el agotamiento es "preceptivo"; así como, de las conductas de efectos continuados, supuestos que no serán objeto de este análisis-, a saber: a) Una vez notificado el acto final, plantear la demanda sin agotar la vía administrativa, supuesto en el cual, el plazo de 1 año previsto en el numeral 39 del CPCA, correrá a partir de la comunicación de la conducta formal; b) Si el interesado decide agotar la vía administrativa, una vez que transcurra el mes previsto en los artículos 261 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y, 31 inciso 6) del CPCA, podrá tener por denegado el recurso ordinario e interponer la demanda, para lo cual, tendrá un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que venció el plazo de un mes para que la Administración resolviera expresamente el o los recursos planteados (inciso 6 del numeral 31 del CPCA); c) Si el interesado decide esperar a que la autoridad competente le resuelva de manera expresa el recurso-a lo que en todo caso se encuentra obligada conforme a lo previsto en los numerales 329 y 127 de la LGAP-, el plazo para formular la demanda se contará desde el día siguiente a que se le haya notificado el acto mediante el cual, la Administración resolvió de manera expresa el recurso (inciso 7 del artículo 31 del CPCA), lo cual, resulta acorde a lo previsto en el numeral 39 inciso 1) sub inciso a) del CPCA, dado que cuando el acto impugnado deba notificarse, el plazo para plantear la demanda se contará a partir del día siguiente a la notificación. En consecuencia, no es que la interposición de los recursos administrativos tenga la virtud de interrumpir o suspender el plazo de caducidad, dado que no le son aplicables esas figuras; simplemente y de conformidad con lo previsto en los artículos 31 incisos 6 y 7, 33 y 39 inciso 1) sub inciso a) del CPCA; 127, 261.2 y 329 de la LGAP, el plazo de caducidad empezará a computarse dependiendo de la opción que válidamente haya escogido el administrado, con base en las facultades que al efecto le otorga el ordenamiento jurídico. Considera este Tribunal que sostener lo contrario, torna nugatorio el derecho de acción de los administrados y la garantía de acceso a la justicia en estricta conformidad con las leyes, desconociendo así la facultad que les da el ordenamiento jurídico para impugnar en vía administrativa las conductas que estiman contrarias a derecho y para que de manera expresa y motivada la Administración les resuelva, sin que ese ejercicio facultativo tenga la virtud de limitar o coartar su derecho de acción y de acceso a la justicia en la vía contencioso administrativa, en los términos previstos en los numerales 41 in fine de la Constitución Política; 8 incisos 1 in fine y 2 sub inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 31 incisos 6) y 7), 33, 39 inciso 1) sub inciso a) del CPCA, 127, 261 inciso 2), 329 de la LGAP. En razón de lo anterior, este Tribunal en aplicación de los principios de independencia judicial (artículo 154 de la Constitución Política); jerarquía normativa (artículo 6 de la LGAP y 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 inciso 1) de la LGAP); tutela judicial efectiva (artículos 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 41 de la Constitución Política) y de justicia (artículo 16 inciso 1 de la LGAP), se aparta del criterio contenido en las sentencias número 65-F- TC-2015, 116-A-S1-2015 y 122-F- TC-2015 dictadas por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. (Véase en relación a este tema la sentencia No 63-2017-V, Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Quinta de las once horas cincuenta minutos del seis de julio del dos mil diecisiete). (La negrita y el subrayado corresponden al original).

En síntesis, la excepción opuesta se rechaza por cuanto en materia tributaria el legislador no previó un plazo de caducidad y siendo que la excepción de prescripción no fue alegada, nada respecto de la misma es viable analizar en la especie." 32-19-TCASIV (839) de 11:10 horas del 6 de mayo de 2019

TÍTULO X

DELITOS ADUANEROS, INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS ADUANERAS

CAPÍTULO I

DELITOS ADUANEROS

Ver Ley 9699 de RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS DELITOS, Alcance 130 a La Gaceta 108 del 11 de junio de 2019.

"ARTÍCULO 1- Objeto de la presente ley

La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos contemplados en la Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004, en sus artículos 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57 y 58 y los

delitos contemplados en la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, en sus artículos 347, 348, 349, 350, 351, 352, 352 bis, 353, 354, 355, 361, 363, 363 bis y 368 bis, el procedimiento para la investigación y el establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones penales correspondientes y la ejecución de estas, así como los supuestos en los cuales la presente ley resulta procedente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas físicas por la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en el párrafo primero de este artículo.”

Ver Ley Contra la Delincuencia Organizada No. 8754 del 22 de julio de 2009, Alc. 29 a LG 143 de 24 de julio de 2009.

Ver Ley No. 9481 de 13 setiembre de 2017, Alc. 246 a LG 194 de 13 octubre de 2017. Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica.

ARTÍCULO 1-Objeto. Se crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, con competencia en investigación y el juzgamiento de los delitos graves que sean cometidos por personas mayores de edad y que cumplan con los criterios previstos en la presente ley. Los juzgados y tribunales que apliquen la presente ley extenderán su competencia al conocimiento de los delitos conexos respecto de los cuales la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se arroge su competencia.

Para todo el ordenamiento jurídico penal, por delincuencia organizada se entenderá toda actividad que reúna los requisitos y parámetros previstos en los artículos 8 y 9 de la presente ley.

ARTÍCULO 8-Delito grave. Además de los otros requisitos previstos en la presente ley, la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se aplicará cuando se trate de la investigación y el juzgamiento de un delito grave, así como de los delitos conexos, independientemente de la penalidad de estos últimos, según las reglas de conexidad establecidas en la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.

Para todo el ordenamiento jurídico penal, por delito grave se entenderá aquel cuyo extremo mayor de la pena de prisión sea de cuatro años o más.

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal de los delitos graves en la jurisdicción común; sin embargo, cuando lo se cumplan los requisitos establecidos en esta ley y se estime conveniente por la complejidad del asunto, podrá solicitar al Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada que se arroge la competencia para el conocimiento y la investigación de estos delitos.

ARTÍCULO 9-Criterios. Para que la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se arroge la competencia, además de tratarse de la investigación de uno o más delitos graves, para considerar que se está frente a un grupo de delincuencia organizada deberán estar presentes los siguientes criterios obligatorios:

1) Participación colectiva. Grupo compuesto por tres o más personas, que no haya sido formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito.

2) Grupo organizado. Que se trate de un grupo con una estructura organizada, porque existe un rol o una tarea específica para cada miembro del grupo.

3) Permanencia en el tiempo. Que exista durante cierto tiempo o por un período de tiempo indefinido.

4) Actuación concertada para cometer delitos. Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves.”

ARTÍCULO 11-Intervención de las comunicaciones. El Ministerio Público podrá gestionar, por escrito, al momento de formular la solicitud para que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada se arroge el conocimiento de los hechos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, la intervención o la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las vías epistolar, radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por cualquier otro medio, según lo establecido en la Ley N.º 7425, Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, de 9 de agosto de 1994 y en la Ley N.º 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009. Lo anterior, sin perjuicio, de las potestades que conserva el juez penal de la jurisdicción común, según lo establecido en la Ley N.º 7425.

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada podrá ordenar, en los casos sometidos a su conocimiento y por resolución fundada, la intervención de las comunicaciones en los delitos que así lo permitan, de conformidad con el ordenamiento jurídico y podrá delegar la ejecución de la medida ante el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones.

ARTÍCULO 12-Intervención de las comunicaciones durante el proceso. Lo dispuesto en el artículo anterior no obsta para que el Ministerio Público y demás sujetos legitimados, de conformidad con la Ley N.º 7425, Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, y la Ley N.º 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, puedan solicitar la intervención de las comunicaciones o la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las vías epistolar, radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por otro medio, en cualquier momento del proceso, una vez que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada se haya arrogado el conocimiento de los hechos.

ARTÍCULO 17-Normas supletorias. El proceso penal seguido ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada será el ordinario previsto por la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, con las excepciones previstas en la presente ley.

Las actuaciones y resoluciones de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se registrarán, en lo no previsto expresamente en esta ley, por la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996; la Ley N.º 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009; la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y la Ley N.º 7728, Ley de Reorganización Judicial, Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 15 de diciembre de 1997.

LEY 9591 MODIFICACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY No. 9481, CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017. ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica la entrada en vigencia de la Ley No. 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017. El texto es el siguiente: Rige veinticuatro meses después de su publicación. Rige a partir de su publicación. ASAMBLEALEGISLATIVA- Aprobado a los veintiún días del mes de junio del año dos mil dieciocho. La Gaceta de 14 de setiembre de 2019.

Ley de Fortalecimiento de FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA Ley 9769 publicada LG 31 octubre 2019, Se reforman los artículos 2, 8, 18 y 19 de la Ley 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

Reparación integral del daño. Dirección General de Tributación. DGT-R-002-2019 de las 8:05 horas del 14 de enero de 2019, LG 59 del 25 de marzo de 2019.

“Artículo 1—Dentro del proceso penal originado con la interposición de una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de fraude a la Hacienda Pública, a los efectos de aceptar una reparación integral del daño, esta Dirección General de Tributación estaría anuente siempre y cuando se cumplan con cada uno de los siguientes requisitos:

a. Se proceda a cancelar el monto total de los impuestos correspondientes, para lo cual se tomará como base de la liquidación, los montos de impuestos denunciados según el período fiscal, salvo que la Fiscalía acuse por un monto mayor, en cuyo caso la liquidación tomará como monto base la suma acusada.

b. Sobre el monto de la deuda tributaria, deberá cancelarse la suma correspondiente a intereses, computados desde la fecha en que debió haberse pagado cada tributo y hasta la fecha efectiva de su cancelación.

c. Deberá cancelarse el monto correspondiente a la multa que hubiese tenido que pagarse por la imposición de la infracción administrativa tipificada en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, si el caso se hubiese concluido en sede administrativa.

d. Las sumas de dinero señalados por concepto de principal, intereses y multa deberán ser ingresados de manera integral al Fisco, sin perjuicio del cobro que realice la Procuraduría General de la República por concepto de “Daño Social”.

*e. Finalmente, y por un aspecto de transparencia con la población en general, la empresa deberá realizar **una publicación en un diario de circulación nacional**, que abarque una medida mínima de media plana, en cualquiera de las primeras cinco páginas del matutino, en la cual se indique:*

“La empresa (nombre de la empresa), cédula jurídica número (número de la cédula jurídica), representada por (nombre del representante legal), cédula de identidad número (número de la cédula número) hace de conocimiento de la población en general, que ha realizado el pago de los tributos, intereses y multas adeudados a la Hacienda Pública, cuyo monto asciende a (monto reparado).

Lo anterior como reparación integral del daño por el delito de fraude a la Hacienda Pública, dentro del proceso penal expediente judicial No. (número de expediente), seguido en su contra”.

Artículo 2o—El pago de las sumas indicadas deberá realizarse en un solo tracto y en la cuenta bancaria del Ministerio de Hacienda, que se indique dentro del proceso penal.

Artículo 3o—Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación. Publíquese. Carlos Vargas Durán, Director General.— Karla Salas Corrales, Directora de Fiscalización.”

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Delitos

“Artículo 92.- Fraude a la Hacienda Pública. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse que:

a) El monto de quinientos salarios base se considerará condición objetiva de punibilidad.

b) El monto no incluirá los intereses, las multas ni los recargos de carácter sancionador.

c) Para determinar la cuantía mencionada, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración y, si estos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

*Se considerará **excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación de la Administración Tributaria para obtener la reparación.***

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Procuraduría General de la República se constituirá como actor civil en el ejercicio de la acción civil resarcitoria, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal; para ello, deberá contar con la participación técnica activa dentro del proceso penal de la Dirección General de Tributación, que actuará por medio de la Dirección General o en quienes esta delegue la función. Para efectos de cumplir con lo dispuesto en este artículo, se deberán notificar a la Dirección General de Tributación todos los actos del proceso. (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 16 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N° 9416 del 14 de diciembre de 2016) (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del 2012, "Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria")

SECCIÓN I DELITO DE CONTRABANDO

Artículo 211.- Contrabando. Será sancionado con una multa de **dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando** y con pena de **prisión de tres a cinco años**, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los **cinco mil pesos centroamericanos**, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:

- a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, **valor**, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.
- b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.
- c) **Entregue, extraiga o facilite la extracción** de mercancías del **depósito aduanero**, de los **estacionamientos transitorios** o de las **zonas portuarias o primarias**, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.
- d) Desvíe de su destino final mercancías que sean movilizadas en tránsito por el territorio nacional para su introducción al mercado nacional, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.
- e) **Sustituya** mercancías de las unidades de transporte.

El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial mediante la **determinación que realice la autoridad aduanera**, o bien, **mediante estimación pericial**. Adicionalmente, la autoridad aduanera informará el monto de los tributos adeudados y sus intereses en los términos del artículo **227** de esta ley, referente al tratamiento del monto de los tributos evadidos. (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Versión anterior de la norma.

Artículo 211.- Contrabando. Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el **valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos**, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:

- a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.
- b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.
- c) Entregue mercancías del **depósito aduanero**, de los **estacionamientos transitorios** o de las **zonas portuarias o primarias**, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.
- d) Sustituya mercancías de las unidades de transporte.

El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial, mediante ayuda pericial y de conformidad con la normativa aplicable. (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, **rige a partir del 28 de setiembre de 2012.**)

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, **regía a partir del 5 de marzo de 2004.**)

“ARTÍCULO 211.-Contrabando. Quien introduzca en el territorio nacional o extraiga de él mercancías de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el ejercicio del control aduanero, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando, y con pena de prisión, según los rangos siguientes:

- a) De seis meses a tres años, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda de cinco mil pesos centroamericanos y no supere los diez mil pesos centroamericanos.
- b) De uno a cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía supere la suma de diez mil pesos centroamericanos.

El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial, mediante ayuda pericial y de conformidad con la normativa aplicable.”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 211.- Delito básico. Quien introduzca o extraiga mercancías del territorio nacional, eludiendo el ejercicio del control aduanero, será penado con prisión de uno a tres años y con multa equivalente a dos veces el monto de los tributos dejados de percibir, con sus intereses y recargos, siempre que el valor aduanero de esas mercancías supere los cinco mil pesos centroamericanos.”

CIRCULAR N° 198-2017 Publicada el 25 de enero del 2018 en el Boletín Judicial.

ASUNTO: Salario base sobre el cual se definen las penas a aplicar por la comisión de diversas figuras delictivas contenidas en el Código Penal y demás normativa durante el 2018.

“El Consejo Superior en sesión N° 113-17 celebrada el 19 de diciembre de 2017, artículo I, de conformidad con lo que establece el párrafo tercero del artículo 2° de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, que reformó varios artículos del Código Penal, dispuso comunicarles que a partir del 1° de enero del 2018, el salario base a aplicar para definir las penas por la comisión de esas figuras delictivas, así como de las contenidas en otras leyes que refieran a la supracitada norma es de ₡431.000.00 (cuatrocientos treinta y un mil colones exactos).”

Artículo 212.- Agravantes. La pena será de **cinco a quince años** de prisión y la multa equivalente a **cuatro veces el monto del valor aduanero** de las mercancías, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 211 de esta ley concurra por lo menos **una** de las siguientes conductas o situaciones:

- a) Se perpetre, facilite o **evite su descubrimiento**, mediante el empleo de violencia o intimidación.
- b) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.
- c) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya **usurpado su identidad**, o personas físicas o jurídicas **inexistentes**.
- d) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un **funcionario público** en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.
- e) Se **participe en el financiamiento**, por cuenta propia o ajena, para la comisión de delitos aduaneros.
- f) El autor o participe integre un grupo que califique como **delincuencia organizada**, según la legislación vigente.
- g) Se trate de **productos de interés sanitario** o mercancías sujetas a **regulación técnica** que pongan en **riesgo la vida o la salud humana, la vida o la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad de la nación**.

(Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de **12 de noviembre de 2015**)

Norma anterior.

ARTÍCULO 212.- Casos específicos de contrabando. (Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 212.- Casos específicos de contrabando. Cometerá también delito de contrabando, y será sancionado con la pena prevista en el artículo anterior, quien:

- a) Transporte o conduzca mercancías objeto de control aduanero sin autorización de la autoridad aduanera competente.*
- b) Extraiga o permita extraer mercancías objeto de control aduanero de las zonas y los puertos libres, de los depósitos, los recintos fiscales o las unidades de transporte, eludiendo el control aduanero.*
- c) Comercie, haga circular o transporte clandestinamente, dentro del territorio nacional, productos o mercancías que no hayan pagado los tributos correspondientes o sin cumplir con los requisitos exigidos por las disposiciones legales tributarias.”*

Artículo 213.- Contrabando fraccionado. Incurrirá igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los dos artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que actuando con una **misma finalidad** realice actividades de **contrabando de forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos**, respecto de mercancías con un valor aduanero **inferior a los cinco mil pesos** centroamericanos, de forma tal **que aisladamente hubiesen sido considerados infracciones administrativas**. Para determinar la modalidad de contrabando fraccionado, la autoridad judicial podrá considerar los actos realizados por el infractor en los **doce meses anteriores al último acto denunciado**. El hecho generador se regirá por lo establecido en el artículo 55 de esta ley, **para el acto o cada uno de los actos individualmente considerados**. (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Norma anterior

*“Artículo 213.- **Agravantes.** La pena será de cinco a nueve años de prisión y la multa equivalente a dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 211 de esta Ley, concorra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:*

- a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.*
- b) Cuando sea cometido por dos personas o más o el agente integre una organización destinada al contrabando.*
- c) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.*
- d) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas naturales o jurídicas inexistentes.*
- e) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.*
- f) Se participe en el financiamiento, por cuenta propia o ajena, para la comisión del delito de contrabando aduanero.”*

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

*“ARTÍCULO 213.- **Agravantes.** La pena será de tres a cinco años y la multa equivalente a tres veces el monto de los tributos dejados de percibir, con sus intereses y recargos, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en los artículos 211 y 212, concurra, por lo menos, una de las siguientes circunstancias:*

a) Intervengan en el hecho tres o más personas, en calidad de autoras.

b) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.

c) Se realice el hecho empleando un medio de transporte aéreo que se aparte de las rutas autorizadas o aterrice en lugares no habilitados por la autoridad aduanera para traficar mercancías sujetas a control aduanero.

d) Cuando las mercancías objeto de contrabando sean elementos nucleares, explosivos, sustancias químicas, sustancias sicotrópicas, drogas, armas, municiones o materiales que se consideren bélicos, sustancias o elementos que, por su naturaleza, cantidad o características, afecten la seguridad común o la salud pública o mercancías cuya internación o extracción sea prohibida. Esta sanción se aplicará siempre que el hecho no configure otro delito sancionado con una pena mayor.”

SECCIÓN II DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL ADUANERA

Artículo 214.- Defraudación fiscal aduanera. Quien, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, **eluda o evada**, total o parcialmente, el pago de los tributos, será sancionado con pena de **prisión de tres a cinco años** y con una **multa de dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses**, cuando el **monto de los tributos dejados de percibir exceda los cinco mil pesos centroamericanos**.

El **monto de los tributos dejados de percibir** será fijado en sede judicial mediante la determinación que realice la autoridad aduanera de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de esta ley, referente al tratamiento del monto de los tributos evadidos, o bien mediante estimación pericial. (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de **12 de noviembre de 2015**)

Versión anterior de la norma.

*“Artículo 214.- **Defraudación fiscal aduanera.** Quien, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada, total o parcialmente, el pago de los tributos, será sancionado con una **multa de dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses**, y con **pena de prisión de tres a cinco años**, cuando el **monto de los tributos dejados de percibir exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos**.*

*El monto de los tributos dejados de percibir será fijado en sede judicial mediante ayuda pericial, de conformidad con la normativa aplicable. (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del **28 de setiembre de 2012**.)*

*(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del **5 de marzo de 2004**.)”*

Artículo 214.- Defraudación fiscal aduanera. Quien valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada total o parcialmente el pago de los tributos, será sancionado con una multa de dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses y una pena de prisión, de conformidad con lo siguiente:

a) De seis meses a tres años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir **exceda de los cinco mil pesos centroamericanos** y no supere los quince mil pesos centroamericanos.

- b) *De uno a cinco años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir supere los quince mil pesos centroamericanos.*

El monto de los tributos dejados de percibir, será fijado en sede judicial mediante ayuda pericial, de conformidad con la normativa aplicable. (Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, regía a partir del 5 de marzo de 2004.)"

Sentencia 2014 - 001177. Expediente 13-014227-0007-CO. A las catorce horas con treinta minutos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Contra ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO PENAL. Se rechaza por el fondo la acción. ADMISIBILIDAD. 13-14227 / 1177-14. ESTAFA. Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 216 del Código Penal. Se acusa que la norma señala que la frase "simulación de hechos falsos", desnaturaliza el significado del tipo penal y hace inconstitucional la frase, por violatoria de los artículos 11, 33 39 y 41 de la Constitución Política. Con base en las consideraciones expuestas en la sentencia se rechaza por el fondo la acción. RF

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 214.- Delito básico. Será penado con prisión de uno a tres años y multa equivalente a dos veces el monto de los tributos dejados de percibir, con sus intereses y recargos, quien, mediante simulación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, eluda o evada total o parcialmente el pago de la obligación tributaria aduanera, siempre que el valor aduanero de las mercancías supere los cinco mil pesos centroamericanos."

Artículo 215.- Agravantes. La pena será de **cinco a quince años de prisión** y la multa equivalente a **cuatro veces el monto de los tributos** dejados de percibir más sus intereses, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 214 de esta ley concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:

- a) Intervenga, en calidad de autor, cómplice o instigador, un **funcionario público** o un **auxiliar de la función pública** aduanera en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.
- b) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya **usurpado** su identidad, o personas físicas o jurídicas **inexistentes**.
- c) Se perpetre, facilite o **evite su descubrimiento**, mediante el empleo de violencia o intimidación.
- d) El autor o partícipe integre un grupo que califique como **delincuencia organizada**, según la legislación vigente.
- e) Se trate de mercancías **sujetas a regulación que pongan en riesgo la vida o la salud humana, la vida o la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad de la nación**.

(Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

ARTÍCULO 215.- Casos específicos de defraudación fiscal aduanera. *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 215.- Casos específicos de defraudación fiscal aduanera. Incurrirá en las penas señaladas en el artículo anterior, siempre que el valor aduanero de las mercancías supere los cinco mil pesos centroamericanos:

- a) *Quien, sin autorización del órgano competente, dé un fin distinto del dispuesto en la norma autorizante, a mercancías beneficiadas con exención o franquicia o que hayan ingresado libres de tributos.*
- b) *Quien, utilizando o declarando información falsa, solicite u obtenga un tratamiento aduanero preferencial.*

c) Quien, utilizando o declarando información falsa, justifique el cumplimiento de sus deberes, obligaciones o requisitos en su condición de beneficiario o usuario de un régimen o modalidad aduanera, para solicitar u obtener un tratamiento aduanero preferencial.

d) Quien, simule, total o parcialmente, una operación de exportación o importación de mercancías o altere la descripción de algunas, con el fin de obtener en forma ilícita un incentivo de carácter aduanero o un beneficio económico.

e) El funcionario, el empleado público o el funcionario de la fe pública, que falsamente certifique o haga constar que se satisfizo total o parcialmente un tributo.”

Artículo 216.- Defraudación fiscal fraccionada. Incurrirá igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los dos artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que actuando **con una misma finalidad**, realice actividades de defraudación aduanera de forma fraccionada, en un **solo acto o en diferentes actos**, en los que el **monto de los tributos dejados de percibir** en forma **individual resulte inferior a los cinco mil pesos centroamericanos, de forma tal que aisladamente hubiesen sido considerados infracciones administrativas**. Para determinar la modalidad de defraudación fiscal aduanera fraccionada, la autoridad judicial podrá considerar los actos realizados por el infractor en los **doce meses anteriores al último acto denunciado**. El **hecho generador** se regirá por lo establecido en el artículo 55 de esta ley, **para el acto o cada uno de los actos individualmente considerados.**” (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Versión anterior

La Ley 8373 de 18 de agosto de 2003 lo había reformado de la siguiente forma:

“Artículo 216.- Agravantes. La pena será de cinco a nueve años de prisión y la multa equivalente a dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 214 de esta Ley, concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:

- a) Intervengan en el hecho delictivo dos o más personas en calidad de autoras.
- b) Intervenga, en calidad de autor, cómplice o instigador, un funcionario público o un auxiliar de la función pública aduanera en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.
- c) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos relativos al despacho de las mercancías, personas naturales o jurídicas inexistentes.
- d) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 216.- Agravantes. La pena será de tres a cinco años y la multa equivalente a tres veces el monto de los tributos dejados de percibir, con sus intereses y recargos, cuando, en alguno de los dos artículos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Intervengan en el hecho tres o más personas, en calidad de autoras.
- b) Intervenga en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.”

Artículo 216 bis.- Responsabilidad penal del funcionario público por acción u omisión dolosa Será sancionado con prisión de **tres a diez años** el funcionario público que, directa o indirectamente, por acción u omisión dolosa, favorezca, colabore o facilite, en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera, la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo, la introducción o extracción de mercancías evadiendo

o eludiendo el control aduanero. (Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

SECCIÓN III OTROS DELITOS

ARTÍCULO 217.- Tenencia ilícita de sellos de identificación y otros sistemas de seguridad. Será reprimido con pena de seis meses a tres años de prisión quien posea en forma ilícita, trafique o falsifique sellos de identificación, dispositivos u otros sistemas de seguridad, **utilizados o autorizados por la autoridad aduanera.** Esta sanción se aplicará siempre que el hecho no configure otro delito sancionado con una pena mayor.

ARTÍCULO 218- Incumplimiento de medidas de seguridad. Será reprimido con pena de prisión de tres meses a tres años de prisión, quien

a) Transporte o mantenga en depósito mercancías objeto de control aduanero sin los precintos, los sellos ni otros sistemas de seguridad, colocados o autorizados por la autoridad aduanera, rotos o con evidencia de violación.

b) Transporte mercancías objeto de control aduanero en unidades de transporte dañadas o que presenten aberturas en compartimientos que, por disposición de la autoridad aduanera, deben mantenerse totalmente cerrados.

En cualquiera de las hipótesis de los dos incisos anteriores, la sanción se aplicará siempre que el hecho no configure **otro delito sancionado con una pena mayor.**

Artículo 219.- Ocultamiento o destrucción de información. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien oculte, niegue, altere o **no entregue información a la autoridad aduanera**, o destruya libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros, mercancías, documentos y otra información de trascendencia tributaria o aduanera, así como sistemas y programas computarizados o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan dicha información. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 24 d)-241 d), e), f)
CNPT 105-106-128

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 219. Ocultamiento o destrucción de información. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien oculte, niegue o altere información a la autoridad aduanera o destruya libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros, mercancías, documentos y otra información de trascendencia tributaria o aduanera; asimismo, sistemas y programas computarizados o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa información.”

ARTICULO 220.- Incumplimiento de deberes de terceros. Será reprimido con prisión de tres a cinco años quien, incumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación tributaria y aduanera, niegue u oculte información de trascendencia tributaria o aduanera, sobre hechos o actuaciones de terceros, que le consten por mantener relaciones económicas y financieras con ellos, o quien la brinde incompleta o falsa.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 24 d)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 220. Incumplimiento de deberes de terceros. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien, incumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación tributaria y aduanera, niegue, oculte o brinde, de manera incompleta o falsa, información de trascendencia tributaria o aduanera, sobre hechos o actuaciones de terceros, que le constan por mantener relaciones económicas y financieras con ellos.”

Artículo 220 bis.- Falsedad de la declaración aduanera y otros delitos de tipo aduanero. (Derogado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto derogado indicaba:

“Artículo 220 bis.- Falsedad de la declaración aduanera y otros delitos de tipo aduanero. Será reprimido con prisión de dos meses a tres años:

- a) *Quien introduzca mercancías en el territorio aduanero nacional mediante una declaración falsa relacionada con el régimen, la clasificación, la calidad, el valor, el peso, la cantidad y/o la medida de tales mercancías o por medio de un pago inferior de tributos a los que legalmente estaba obligado, o ambos.*
- b) *Quien, clandestinamente, ingrese mercancías en tránsito, sin pagar los tributos correspondientes.*
- c) *Quien transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía introducida al país eludiendo el control aduanero.*
- d) *Quien sustituya mercancías del depósito aduanero, de las unidades de transporte, de los estacionamientos transitorios o de las zonas portuarias.”* (Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

JURISPRUDENCIA

*Expediente 08-04962-0007-CO. A las quince horas con catorce minutos. Acción de Inconstitucionalidad. Edwin Duarte Delgado en contra del Artículo 220 bis inciso c) de la Ley General de Aduanas. Se declara sin lugar la acción. 16307-09. DELITOS DE TIPO ADUANERO. Acción de Inconstitucionalidad contra el **artículo 220 bis inciso c) de la Ley General de Aduanas**. La norma se impugna en cuanto se considera que viola los principios de proporcionalidad y culpabilidad. El primero pues contiene una sanción penal elevada por una conducta que puede ser, en muchos casos, insignificante. La norma no establece el monto a partir del cual se hace la gradación de la sanción. El artículo 211 de la misma Ley que regula una situación de hecho muy similar, dispone que la diferencia entre multa e infracción penal es una suma de dinero determinada, mientras la norma impugnada no establece el valor de la mercadería a partir de la cual la conducta se considera delito. También estima el recurrente que viola el principio de culpabilidad pues la sanción es igual a la de otras infracciones contenidas en la Ley General de Aduanas. Señala que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la pena debe guardar proporción con el bien jurídico tutelado y el grado de culpabilidad con que actuó el sujeto, principios con los que esta norma no cumple. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar la acción. SL*

CAPÍTULO II DELITOS INFORMÁTICOS

ARTÍCULO 221.- Delitos informáticos. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien:

- a) Acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier medio, a los sistemas informáticos utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas.
- b) Se apodere, copie, destruya, inutilice, altere, facilite, transfiera o tenga en su poder, sin autorización de la autoridad aduanera, cualquier programa de computación y sus bases de datos, utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas, **siempre que hayan sido declarados de uso restringido por esta autoridad.**

c) Dañe los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones del Servicio Nacional de Aduanas, con la finalidad de entorpecerlas u obtener beneficio para sí o para otra persona.

d) Facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos. La pena será de seis meses a un año si el empleo se facilita culposamente.

LGA 103 a 108-266
CNPT _____

ARTÍCULO 222.- Agravante. La pena será de tres a cinco años cuando, en alguna de las causales del artículo anterior, concorra una de las siguientes circunstancias:

a) Intervengan en el hecho tres o más personas, en calidad de autoras.

b) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS

ARTÍCULO 223. Relación con delitos tipificados en otras normas tributarias. Si las conductas tipificadas en esta ley configuran también un delito o una contravención establecidos en la legislación tributaria, se aplicarán las disposiciones especiales de la presente ley **siempre que esas conductas se relacionen con el incumplimiento de obligaciones tributarias aduaneras o los deberes frente a la autoridad aduanera.**

CNPT 65 y ss.

ARTÍCULO 224.- Comiso. En los delitos que contempla este Título, se aplicará el comiso de las mercancías objeto o medio del delito y el comiso de los vehículos y las unidades de transporte de cualquier clase con sus accesorios, útiles y aparejos siempre que de conformidad con el Código Penal se hayan utilizado de alguna manera para cometer el delito.

LGA 25 d)
RLGA 190

ARTÍCULO 225.- Sanciones accesorias. Además de las penas privativas de libertad y multa correspondientes, en los delitos contemplados en este Título, **se aplicarán las siguientes sanciones:**

a) Cuando un **empleado público o un auxiliar de la función pública** cometa, en perjuicio de la Hacienda Pública, uno o varios de los delitos descritos en los artículos 211, 214, 216 y 216 bis de esta Ley, se le impondrá, además de las penas establecidas para cada delito, la **inhabilitación especial** de uno a **diez años** para desempeñarse como funcionario público o como auxiliar de la función pública, o para disfrutar de incentivos aduaneros o beneficios económicos aduaneros.

b) Cuando el **hecho delictivo** se haya cometido utilizando a una **persona jurídica o lo hayan cometido personeros, administradores, gerentes o empleados de ella**, además de las penas que sean impuestas a cada uno por su participación en los hechos punibles, se impondrá, en la vía

correspondiente, una **sanción administrativa consistente en multa de tres a cinco veces el monto del valor aduanero de las mercancías, para el caso del contrabando, o en el monto de los tributos dejados de percibir, para el caso de la defraudación fiscal aduanera.** Asimismo, la autoridad competente podrá disponer que la empresa no disfrute de incentivos aduaneros ni de beneficios económicos aduaneros por un plazo de uno a diez años. Si el hecho es cometido por los accionistas, personeros, administradores, gerentes o apoderados que ejercen la representación legal de la persona jurídica, o bien por uno de sus **empleados**, y aquellos consienten su actuar por acción u omisión en forma dolosa, sin que **medie caso fortuito ni fuerza mayor**, la autoridad judicial le impondrá a **la persona jurídica** una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la actividad auxiliar aduanera, por un plazo de uno a diez años. Las personas jurídicas responderán **solidariamente** por las acciones u omisiones que sus representantes realicen en el cumplimiento de sus funciones.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 28

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 225.- Sanciones accesorias. Además de las penas privativas de libertad y multa correspondientes, en los delitos contemplados en este Título, se aplicarán las siguientes sanciones:

a) La inhabilitación especial por un plazo hasta de diez años, para desempeñarse como funcionario público o como auxiliar de la función pública aduanera.

b) Cuando el hecho delictivo se haya cometido utilizando una empresa o una persona jurídica por parte de sus personeros, administradores o gerentes, el Juez Penal podrá imponer a la empresa, además de las penas previstas en los artículos anteriores, una multa de tres hasta cinco veces el monto de lo defraudado.”

ARTÍCULO 226.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando se incurra en un delito por incumplimiento de obligaciones aduaneras de personas jurídicas, responderán del delito y, consiguientemente, se les aplicarán las penas respectivas a los **representantes legales, gerentes o administradores responsables del cumplimiento de tales obligaciones**; asimismo, a los **socios de sociedades de personas** o a los **directores de sociedades anónimas** según corresponda, cuando hayan adoptado las decisiones que impliquen la comisión del delito. Cada uno de los indicados antes, será sancionado de acuerdo con **su propia responsabilidad personal**.

En cualquiera de los delitos contemplados en este título, para establecer la **verdad real** de la relación tributaria aduanera, el **Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda o la autoridad jurisdiccional competente**, ante la presencia de **fraude aduanero**, podrán prescindir de las formas jurídicas que adopte un determinado agente económico nacional o transnacional, individual o bajo el crimen organizado, cuando no corresponda a la realidad de los hechos investigados. El sujeto físico y jurídico que sea en realidad el promovente de la falta tributaria deberá responder, administrativa, civil y penalmente, cuando así proceda.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 269

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 226.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando se incurra en un delito por incumplimiento de obligaciones aduaneras de personas jurídicas, responderán del delito y, consiguientemente, se les aplicarán las penas respectivas a los representantes legales, gerentes o administradores responsables del cumplimiento de tales obligaciones; asimismo, a los socios de sociedades de personas o a los directores de sociedades anónimas según corresponda, cuando hayan adoptado las decisiones que impliquen la comisión del delito. Cada uno de los indicados antes, será sancionado de acuerdo con su propia responsabilidad personal.”

ARTÍCULO 227.- Monto de los tributos evadidos. La autoridad aduanera informará, de oficio o a solicitud del Juez que conoce la causa, del monto de los tributos adeudados y sus intereses, según la legislación vigente. Al dictar sentencia definitiva, sea absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento, los tribunales, de oficio, se pronunciarán, además, sobre el pago de la obligación tributaria aduanera, sus intereses, multas y otros recargos del imputado y otros responsables tributarios.

LGA 58-55 c)-61

Artículo 227 bis.- Cobro de tributos cuando exista causa penal pendiente. En los supuestos en que la autoridad aduanera estime que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito, deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador hasta que concluya el proceso penal, en cuyo caso se suspenderá la prescripción del procedimiento sancionatorio. **Lo anterior no impide el cobro de los tributos adeudados y sus intereses, de conformidad con el procedimiento administrativo respectivo.** (Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

Sentencia 2014 - 001173. Expediente 13-012014-0007-CO. A las catorce horas con treinta minutos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. contra -Artículo 85 de la Ley General de Policía. *Se rechaza por el fondo la acción. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA E INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL. Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 85 de la Ley General de Policía. La norma señala que: “El inicio de la acción penal pública no impide que, simultáneamente, se comience la investigación administrativa, por los mismos hechos y para aplicar el régimen disciplinario. La relación de hechos probados que se pronuncien en la sentencia penal vincula a la instancia administrativa, para los efectos disciplinarios y laborales del caso, aunque con anterioridad haya recaído una resolución administrativa favorable al servidor; en este caso deberá oírsele, sumariamente, antes de aplicar las sanciones que correspondan. Lo anterior no impide que, mientras se resuelve el asunto en la vía penal, la administración tome las medidas provisionales que estime necesarias.” Se acusa que la administración interpreta que aún cuando fue absuelto en vía administrativa, al recaer una sentencia penal sobre el funcionario, por los mismos hechos anteriormente investigados, el caso se puede reabrir. Con base en las consideraciones expuestas por la Sala en la sentencia se rechaza por el fondo la acción.* RF

“Falta competencia en razón de la materia

La competencia se constituye en uno de los elementos esenciales del acto administrativo, configurándose en sede administrativa, en el conjunto de facultades que legítimamente puede ejercer la Autoridad Administrativa, siendo que la misma, apegada al principio de legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), podrá solamente actuar dentro de los límites asignados legalmente.

Al respecto, el representante de la agencia aduanal afirma que la situación que envuelve la presente litis y el proceder de la empresa importadora, al declarar bajo la fe de juramento que no existían cánones o derechos de licencia que el comprador tenía que pagar directa o indirectamente, califica como un eventual delito de perjurio y defraudación aduanera, y por lo tanto debe remitirse el asunto al Ministerio Público, suspendiéndose la tramitación del presente procedimiento ordinario.

En primer lugar, la **posición de la agencia aduanal recurrente** radica en calificaciones subjetivas de la configuración de la presente litis, siendo importante resaltar que el Ordenamiento Jurídico es un todo organizado, bajo un sistema coherente de lógica y de valores, y como tal ha de interpretarse, tenemos que en materia aduanera, al amparo de los numerales **227 y 227 bis de la LGA**, en aplicación del principio de legalidad, aún y cuando para un caso concreto exista la eventualidad de remitir el asunto a sede judicial al considerarse la posibilidad de configuración de un ilícito penal, lo cual en autos no ha acontecido, no existe una regulación expresa que prohíba el ejercicio de la facultad de cobro en los supuestos en que se remitan los asuntos a la sede judicial, sino que por el contrario en forma expresa el último de los numerales citados, establece que el hecho de que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito, **“no impide el cobro de los tributos adeudados y sus intereses, de conformidad con el procedimiento administrativo respectivo”.**

Ambos numerales en cuestión son complementarios entre sí, viniendo a establecer primero el deber de la Administración de presentar la denuncia en sede penal en aquellos casos que así considere lo ameriten, lo cual de los autos se extrae que no llevó a cabo por parte del A Quo, así como la facultad de la Autoridad Aduanera para decidir, en razón de las particularidades de cada asunto, si inicia o no procedimiento de cobro de los tributos adeudados, lo anterior con el ánimo de evitar el acaecimiento de la prescripción respecto del cobro, mientras se encuentre en curso el proceso judicial, en virtud de que, tal y como ya se señaló, no se impide el cobro de la obligación tributaria aduanera y sus intereses en sede administrativa, previo cumplimiento del debido proceso, cuando se ha planteado una denuncia penal, debiéndose tener que considerar que el Ordenamiento Jurídico en estos supuestos no obliga a la Autoridad Aduanera a realizar el ajuste, sino que le da una facultad para valorar en cada caso si ejerce o no dicha facultad.

De esta forma, ante la realidad que se desprende de los autos, no se configuran los supuestos de la defensa previa planteada, sin que exista impedimento para el desarrollo del presente asunto, respecto del cual posee la Autoridad Aduanera la competencia plena para efectuar el cobro de los tributos adeudados, debiendo rechazarse el planteamiento de la falta de competencia interpuesta.” Sentencia 375-2017. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las quince horas cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

ARTÍCULO 228.- Sanción de la tentativa. En los delitos de contrabando y defraudación fiscal aduanera, la tentativa se sancionará con la pena prevista para el delito consumado.

ARTÍCULO 229.- Competencia. Serán competentes para conocer de los delitos estipulados en la presente ley, los juzgados y tribunales ordinarios en materia penal, salvo que se establezca una jurisdicción especializada en materia penal tributaria.

Cuando se desconozca el lugar de introducción de las mercancías objeto de contrabando serán competentes, para conocer de estos delitos, las autoridades judiciales del lugar donde se hayan decomisado las mercancías o, en su defecto, los tribunales de la ciudad de San José.

CAPÍTULO IV INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS ADUANERAS

SECCIÓN I GENERALIDADES

ARTÍCULO 230.- Concepto. Constituye infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que se califique como delito.

LGA 235 k)-269

Doctrina

“... principio de protección de la confianza legítima que ha de ser aplicado, no tan solo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando se basa en signos extremos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de los intereses en juego –interés individual e interés general-, la revocación o dejación sin efecto del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene que soportar ...” Gómez Tomillo, Manuel; Sanz Rubiales, Iñigo “Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Pág. 499

“Aceptada la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas, tanto de lege lata, como de lege ferenda, existen sólidas razones que apoyan la exigencia de culpabilidad también en las personas jurídicas.” Gómez Tomillo, Manuel; Sanz Rubiales, Iñigo “Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Pág. 518

Artículo 231.- Aplicación de sanciones. Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, ya sea la aduana de jurisdicción o la Dirección General de Aduanas, salvo las infracciones administrativas sancionadas con **suspensión** del auxiliar de la función pública aduanera, cuyo conocimiento y sanción serán competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas, así como también la inhabilitación de los auxiliares de la función pública aduanera.

La aplicación de las sanciones se hará conforme a las leyes vigentes en la época de su comisión. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulga una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al infractor, en el caso particular que se juzgue. **La aplicación de las sanciones administrativas estipuladas en la presente ley es independiente de las sanciones penales, cuando el hecho también constituya**

un delito penal.

Las infracciones sancionadas con multa devengarán intereses, los cuales se computarán a partir de los **tres días hábiles** siguientes a la **firmeza** de la resolución que las fija, conforme a la tasa establecida en el artículo 61 de esta ley, **referente al tema del pago de la obligación tributaria aduanera y sus aspectos esenciales.**

Serán **eximentes de responsabilidad**, los **errores materiales sin incidencia fiscal**, la **fuerza mayor** y el caso **fortuito**, **en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.**

La facultad de la autoridad aduanera **para sancionar** las infracciones reguladas en este capítulo prescribe en **seis años** contados a partir de la comisión de las infracciones. El término de prescripción de la **acción sancionatoria se interrumpirá** desde que se le notifique, al supuesto infractor, la **sanción aplicable** en los términos del artículo 234 de esta ley, **referente al debido proceso en sede administrativa para la aplicación de sanciones en la materia.** (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Versión anterior de la norma.

"Artículo 231.- Aplicación de sanciones. Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, ya sea la Aduana de Jurisdicción o la Dirección General de Aduanas, salvo las infracciones administrativas sancionadas con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera, cuyo conocimiento y sanción será competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas, así como también la inhabilitación de los auxiliares de la función pública aduanera.

La aplicación de las sanciones se hará conforme a las leyes vigentes en la época de su comisión. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulga una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al infractor, en el caso particular que se juzgue.

*Las infracciones sancionadas con multa devengarán intereses, los cuales se computarán a partir de los **tres días hábiles siguientes a la firmeza de la resolución** que las fija, conforme la tasa establecida en el artículo 61 de esta ley.*

*Serán **eximentes de responsabilidad los errores materiales o de hecho sin perjuicio fiscal, la fuerza mayor y el caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.***

*La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo prescribe en **seis años** contados a partir de la comisión de las infracciones. El término de prescripción de la acción sancionatoria **se interrumpirá** desde que se le notifique, al supuesto infractor, la **sanción aplicable** en los términos del artículo 234 de esta ley." (Reformado por Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 62-234

Versión anterior

"Artículo 231.- Aplicación de sanciones. Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca del respectivo procedimiento administrativo. Serán eximentes de responsabilidad, los errores materiales o de hecho sin incidencia fiscal, la fuerza mayor y el caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

*La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo, prescribe en **seis años** contados a partir de la comisión de las infracciones. El término de prescripción de la acción sancionatoria se interrumpirá desde que se le notifique al supuesto infractor la **sanción aplicable en los términos del artículo 234 de esta Ley**". (Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 231.- Aplicación de sanciones. Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras son sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca del respectivo procedimiento administrativo.

En cuatro años prescribe la facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este Capítulo. El término de prescripción de la acción sancionatoria se interrumpirá desde que se le notifica al supuesto infractor la sanción aplicable en los términos del artículo 234 de esta ley.”

Legislación conexas

“3. Disciplinas en materia de sanciones

3.1 A los efectos del párrafo 3, se entenderá por "sanciones" aquellas impuestas por la administración de aduanas de un Miembro por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduana.

3.2 Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley, reglamento o formalidad de aduana se impongan únicamente a la persona o personas responsables de la infracción con arreglo a sus leyes.

3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida.

3.4 Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar:

- a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos; y
- b) la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3.

3.5 Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una sanción por una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el importe o el alcance de la sanción por la infracción.

3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas de un Miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana antes de que la administración de aduanas advierta la infracción, se alienta al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción contra dicha persona.

3.7 Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas al tráfico en tránsito a que se hace referencia en el párrafo 3.1.” Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio).” Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

Jurisprudencia

Sala Constitucional. Exp. 15-006280-0007-CO, Res. 2017000639 de las 11:30 minutos del 18 de enero de 2017. Boletín Judicial 107 de 15 de junio de 2018. “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, cometida la infracción establecida en el párrafo tercero del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, **deberá aplicarse la sanción de cierre de negocio sin más análisis y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias atenuantes. En su lugar, deberá valorarse en cada caso concreto, si existió o no causa eximente o atenuantes para emitir la orden de cierre de local como sanción. ...**”

Aplicación norma más favorable. Aduanas. “Este recurso debe rechazarse de plano por las siguientes razones: primero debe recordarse que la función de auxiliar de la función pública aduanera conlleva una serie de obligaciones diferentes y más exigentes que las que pueden surgir de la simple relación Administración-administrado, en tanto se trata de verdaderos agentes estatales que actúan por el Estado y por su autorización en la labor aduanal; todo esto hace que el régimen disciplinario pueda ser más estricto y que las faltas se sancionen teniendo en cuenta esa particular condición. En segundo lugar,” Res. No. 2015006309 de las 14:30 horas del 5 de mayo de 2015, exp. 15-005848-007-CO

Plazo de prescripción sanciones LGA e invocación de inconstitucionalidad en el recurso de apelación. Exp: 13-014169-0007-CO Res. N° 2014007456 SALA CONST. 15 hs. 15 minutos del 28 mayo 2014. Acción inconst. contra 231 párrafo 5 LGA. **“Considerando: I.- Sobre la legitimación de la acción de inconstitucionalidad.** La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se hace. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y se regulan tres situaciones distintas: en el párrafo primero, exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial, incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo, o en la administrativa, en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la

inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero, se regula la acción directa -no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: **a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y b) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.** II.- **Sobre la fase en que debe encontrarse el asunto principal cuando se trate de un procedimiento administrativo.** En los supuestos del párrafo primero del numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la demanda es de naturaleza incidental, toda vez que lo que la Sala resuelva, deberá servir para despejar los cuestionamientos invocados por la parte interesada ante el órgano resolutor, con los criterios de constitucionalidad emitidos por la Sala para proteger o no los derechos o intereses que se consideraron lesionados con la norma o disposición impugnada. De ahí que, la invocación de inconstitucionalidad debe hacerse en un momento previo a la interposición de la acción, ello se colige del hecho de que la discusión debe hacerse en el contexto de un asunto pendiente de resolver, en el que la invocación de inconstitucionalidad sea medio razonable de amparar esos derechos o intereses que se estiman lesionados. También, la norma establece un segundo momento para los alegatos de inconstitucionalidad contra disposiciones fundadas en un procedimiento administrativo, y es cuando el asunto se encuentre en la fase de agotamiento de la vía administrativa, es decir, cuando la decisión final haya sido dictada e impugnada para ante el Superior en grado o con el recurso de reposición cuando proceda contra el acto final, ante quien agota la vía administrativa. En estos supuestos, la acción de inconstitucionalidad debe proporcionar una solución, para que el órgano resolutor pueda dirimir definitivamente el reclamo administrativo o procedimiento con fundamento en una norma o disposición cuya constitucionalidad ha quedado despejada ante esta sede. A partir de lo dicho y los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, cabe indicar que no todo reclamo administrativo resulta idóneo para fundar una solicitud de inconstitucionalidad como la que se analiza, sino únicamente aquellos que se encuentran en la fase de agotamiento de la vía administrativa propiamente dicha, que son los que se inician con y a partir del recurso de reposición o en su caso de alzada, interpuestos contra el acto final, ante el jerarca administrativo de manera que la invocación que se haga en ese estado del procedimiento resultaría válida para sustentar una pretensión de tal envergadura y no antes (En este sentido, entre otras, sentencias número 2013-013466, de las catorce horas treinta minutos del nueve de octubre de dos mil trece; número 2012-004793, de las catorce horas treinta minutos del dieciocho de abril del dos mil doce; número 2012-005252, de las quince horas del veinticinco de abril del dos mil doce; número 2011-004272, de las quince horas y veintiuno minutos del treinta de marzo del dos mil once; número 2009-003900, de las catorce horas y cuarenta y seis minutos del once de marzo del dos mil nueve; número 2008-015445, de las catorce horas y cincuenta y uno minutos del quince de octubre del dos mil ocho).

III.- **Sobre la legitimación del accionante.** En el presente caso, el accionante señala como asunto base el procedimiento administrativo Exp-AS-DN-2015-2012 de la Aduana Santamaría seguido en su contra. En este procedimiento se dictó la resolución RES-AS-DN-2493-2013, de las doce horas del diecinueve de junio de dos mil trece, en la que se impuso al accionante el pago de una multa (folios 69 a 85 del expediente administrativo). Contra dicha resolución el accionante interpuso, el veintinueve de julio de dos mil trece, recurso de reconsideración y apelación invocando la inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 231 de la Ley General de Aduanas (folios 88 a 96 del expediente administrativo); recurso que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. En el caso concreto, aún cuando el accionante cumple los requisitos formales, la acción resulta inadmisibile por el motivo que se analizará a continuación.

IV.- **Inadmisibilidat de la acción en razón del objeto de la acción.** El accionante impugna el párrafo quinto del artículo 231 de la Ley General de Aduanas, Ley número 7557, del 20 de octubre de 1995, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 231.- Aplicación de sanciones. Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, ya sea la Aduana de Jurisdicción o la Dirección General de Aduanas, salvo las infracciones administrativas sancionadas con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera, cuyo conocimiento y sanción será competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas, así como también la inhabilitación de los auxiliares de la función pública aduanera. [...] La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo prescribe en seis años contados a partir de la comisión de las infracciones. El término de prescripción de la acción sancionatoria se interrumpirá desde que se le notifique, al supuesto infractor, la sanción aplicable en los términos del artículo 234 de esta ley.” Considera el accionante que dicha norma es inconstitucional por cuanto el plazo de prescripción de seis años que establece para el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración es excesivo e irrazonable y lesiona el principio de equidad por cuanto otras normas del ordenamiento jurídico disponen un plazo de prescripción de cuatro años.

V.- **En reiteradas ocasiones, esta Sala se ha pronunciado sobre el tema de los plazos de prescripción previstos en diversas normas.** En materia tributaria dispuso que: “En ese sentido, no corresponde a esta Sala determinar cuál debería ser el plazo de prescripción que procede en los casos de exoneraciones tributarias, o bien, determinar cuándo debería suspenderse y cuando no, por cuanto esto no involucra ningún conflicto de constitucionalidad. De esta forma, la acción resulta inadmisibile en cuanto a este extremo (ver en igual sentido las sentencias números 2010-17569, 2010-11347 y 2009-18347). [...] Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, la disconformidad con los plazos de prescripción, así como las causas de suspensión o interrupción, constituye un conflicto de legalidad ajeno al control constitucional por parte de este Tribunal.” (Sentencia número 2011-011733, de las quince horas y ocho minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once).

Asimismo, en relación con la prescripción en materia sancionatoria disciplinaria de un colegio profesional, este Tribunal señaló que: “La norma cuestionada [el inciso 1 del artículo 87 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho] claramente establece el régimen de prescripción en materia sancionatoria disciplinaria que ha de observar el Colegio de Abogados cuando pretende aplicar una sanción a uno de sus afiliados. La Sala ha establecido que dicho régimen es un asunto de legalidad y que corresponde al legislador, en sentido lato, su regulación.” (Sentencia número 2011-009415, de las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del veinte de julio del dos mil once). Por su parte, en materia penal, la Sala indicó que: “De todo lo dicho, es claro que, conforme lo ha venido resolviendo en forma reiterada esta Sala, todo lo relativo a la regulación del instituto de la prescripción, tanto en materia penal como en otras ramas del derecho, es competencia del legislador, cuyo criterio no es revisable en esta vía. Corresponde, entonces, al legislador, de conformidad con la política criminal que se adopte, determinar el plazo de la prescripción, el momento a partir del cual corre, los hechos

o actos procesales que la interrumpen, la forma en que se debe contabilizar el plazo, así como cualquier otro aspecto relativo a este instituto. (Sentencia número 2008-018573, de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del diecisiete de diciembre del dos mil ocho) Finalmente, en material comercial, este Tribunal dispuso que: “Conforme puede apreciarse en los razonamientos del impugnante, lo que éste en resumen plantea es que el plazo de prescripción que debe aplicarse a las hipotecas otorgadas para garantizar una obligación mercantil ha de ser de cuatro y no de diez años, como establece el texto de la norma cuestionada. Al respecto, debe decirse que la determinación de los plazos de prescripción es un asunto que corresponde decidir al legislador en el ámbito de su competencia, que no involucra ningún tema de constitucionalidad, dado que como reiteradamente ha señalado esta Sala (ver entre otras, la sentencia 4397-99 de las 16,06 hrs. del 8-06-99) no existe un derecho fundamental a la prescripción.” (Sentencia número 2007-00826, de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de enero del dos mil siete). Como se desprende de las sentencias transcritas, esta Sala ha sido consistente en señalar que no existe un derecho fundamental a la prescripción, pues ello es un asunto propio del legislador, quien en uso de su libertad de configuración, se encarga de diseñar los diferentes procesos, los plazos de prescripción para cada caso, así como las causas de interrupción, suspensión o terminación. **VI.- Conclusión.-** Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente es rechazar por el fondo la acción planteada contra el párrafo quinto del artículo 231 de la Ley General de Aduanas, toda vez que la determinación del plazo de prescripción es un asunto que corresponde determinar al legislador ordinario, cuya revisión no corresponde en esta vía. **Por tanto:** Se rechaza por el fondo la acción”.

Doctrina

“7. El error de prohibición y la conciencia de la antijuricidad.” Gómez Tomillo, Manuel; Sanz Rubiales, Iñigo “Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Pág. 487 y siguientes.

Artículo 231 bis.- Elemento subjetivo en las infracciones administrativas y tributarias aduaneras. Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las **obligaciones y los deberes tributarios aduaneros**.

Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la sanción **más severa**.

(Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

VER CODIGO PENAL

“SECCION V Culpabilidad

No hay pena sin culpa.

ARTÍCULO 30.-Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.

Significado del dolo.

ARTÍCULO 31.- Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible.

Preterintención

ARTÍCULO 32.- Obra con preterintención quien realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa.

Caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 33.- No es culpable quien realiza el hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor.

Error de hecho.

ARTÍCULO 34.- No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado.

Error de derecho.

ARTÍCULO 35.- No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere

invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79.

Obediencia debida.

ARTÍCULO 36.- No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que la orden dimanase de autoridad competente para expedirla y esté revestida de las formas exigidas por la ley;

b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden; y c) Que la orden no revista el carácter de una evidente infracción punible.

Pena más grave por consecuencia especial del hecho.

ARTÍCULO 37.- Si la ley señalare pena más grave por una consecuencia especial del hecho, se aplicará sólo al autor o partícipe que haya actuado, a lo menos culposamente respecto a ella.

Coacción o amenaza.

ARTÍCULO 38.- No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual grave, sea o no provocada por la acción de un tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una conducta diversa.”

...

Error de derecho no invencible y exceso en las causas de justificación.

ARTÍCULO 79.- En los casos de error no invencible a que se refiere el artículo 35 ó en los de exceso no justificado del artículo 29, la pena podrá ser discrecionalmente atenuada por el Juez.”

Antecedentes administrativos

TAN 033-2018. “En la Sentencia de este Tribunal N°188-2005, sobre el principio de culpabilidad se estableció: “...Por su parte el principio de culpabilidad implica la **necesidad de demostrar la participación o responsabilidad subjetiva del presunto infractor**, es decir, debe respetarse el principio de culpabilidad, según el cual, no hay delito o infracción sin culpabilidad, **puesto que no se debe penar por lo producido causalmente sino por lo que se ha realizado culpablemente**. En consecuencia, el principio de culpabilidad que se encuentra recogida en el artículo 39 de nuestra Constitución Política, implica un juicio de reproche que se le debe formular al que pudiendo comportarse con arreglo a derecho no lo hace, siendo que sólo puede ser sancionado, aquel a quien la acción sancionada le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente, es decir, no puede haber responsabilidad por el mero resultado o por la mera causación de un resultado, sino que se exige además, que se haya actuado con dolo o culpa.

Como ha señalado este Tribunal, la culpabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente ya sea con dolo o culpa. Se fundamenta en el principio de que no hay pena sin culpa, **debiéndose demostrar en cada caso el elemento subjetivo**, esto es, que el recurrente efectivamente omitió el cumplimiento de la obligación y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es decir que no argumenta ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos.

El autor Alejandro Nieto señala que **“el término “culpabilidad” se contrapone al de “inocencia”. En ese sentido, bajo la expresión “principio de culpabilidad” puede incluirse diferentes límites del ius puniendi, que tienen en común exigir, como presupuesto de la pena que pueda “culpase” a quien la sufra del hecho que la motiva. Para ello es preciso, en primer lugar, que no se haga responsable al sujeto de delitos ajenos: “principio de personalidad de las penas”. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser, personalidades, puesto que la responsabilidad de su configuración por parte del sujeto es difícil de determinar, sino solo “conductas”, hechos: “principio de responsabilidad por el hecho” exigencia de un “Derecho Penal de hecho”.**

Más no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable de él; es preciso que el hecho haya sido “querido” (doloso) o haya podido “preverse y evitarse” (que pueda existir culpa o imprudencia): “principio de dolo o culpa”. Por último para que pueda considerarse culpable del hecho doloso o culposo a su autor ha de poder atribuírsele normalmente a éste, como producto de una motivación racional normal: “principio de atribuibilidad” o de “culpabilidad en sentido estricto”. Es decir, debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación...”

De esta forma, desde el inicio del presente procedimiento, se ha privado al imputado el conocer clara y detalladamente cuáles son los hechos que se le están endilgando y por los que se le sanciona, dado que la Administración se limita a hacer una referencia genérica a la conducta tipificada por la infracción de cita, los hechos relacionados al caso sin especificar porque incumple el auxiliar y que acciones debió ejercer para evitar el posible incumplimiento que se le achaca, demostrando la relación de causalidad entre el hecho imputado y el sujeto responsable, sin realizar al menos una investigación previa para determinar lo sucedido, situación que definitivamente deja al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer los hechos imputados no tiene certeza de si los mismos le son o no atribuibles, o bien, si a pesar de ser cometidos por el auxiliar, le resultan eventualmente reprochables.”

TAN 009-2018 “De seguido debe el Colegiado entrar a conocer las pretensiones del recurrente en el marco de sus derechos y la nulidad pretendida, en éste procedimiento administrativo, el cual se instauró por la autoridad contra del auxiliar de la función pública XXX, puesto que presume haber incurrido en la infracción administrativa prescrita en el artículo 237 inciso b) de la Ley General de Aduanas,

sancionable con una suspensión de dos días, por no haber transmitido al Sistema Tica, los datos correspondientes al número y tipo de precinto electrónico que portaba la unidad de transporte XXX, asociada al viaje XXX, declaración de tránsito 006-2013-XXX del 14 de mayo de 2013. (Folio 39)

Así las cosas los suscritos consideramos que desde el acto de apertura del procedimiento sancionador, la Dirección General de Aduanas, se limitó a señalar como nexo causal de éste sancionatorio: "El Licenciado Roy Chacón Mata, Gerente de la Aduana de Limón, remite a la Dirección General de Aduanas el informe AL-DN-XXX-2013 del 03 de diciembre de 2013, donde indica que mediante la Declaración Aduanera de Tránsito 006-2013-XXX del 07 de marzo de 2013, viaje XXX, la Aduana de Limón autorizó el tránsito del contenedor XXX hacia las instalaciones del Depositario Aduanero código XXX (Transportes XXX) (...) Adicionalmente, mediante consulta al módulo "Precintos de un viaje", del Sistema TIC@, se comprueba que el estacionamiento transitorio XXX, no registró en el dicho sistema, los datos del viaje XXX, el tipo del precinto electrónico que portaba la unidad de transporte XXX al inicio del tránsito." (Folio 19).

Aunado a lo señalado líneas atrás, al referirse a la tipicidad se circunscribe a citar y transcribir los artículos 30 incisos d) y h) 145 y 145 bis, ter y 234, 245 de la LGA, pero no se presenta ningún análisis de la tipicidad sea objetiva o subjetiva, ya que se limita a transcribir hechos, sin razonar o motiva la relación del tipo citado – norma- los hechos endilgados a la empresa investigada. Consecuentemente, la autoridad aduanera omite desde el momento mismo de dictar el acto de apertura, brindar la adecuada motivación y fundamentación legal sobre los hechos atribuidos que inciden en una inadecuada intimación e imputación, dada que no guarda relación con el tipo sancionador que considera típico de la conducta tenida por irregular, en especial sobre las obligaciones y responsabilidades del transportista para el caso concreto, respecto del hecho imputado, lo que conlleva una ausencia de motivación oportuna para el ejercicio del derecho de defensa, contrario sensu esta omisión de la Administración conlleva indefensión al supuesto infractor, lo que produce la nulidad de todo lo actuado. Toda vez que existen un grave problema de intimación e imputación de cargos, porque no son claros, precisos que conllevan falta de motivación como agravio susceptible de ser revisado, en vista de que el recurrente solicita la declaratoria de nulidad al ver afectado el ejercicio de su derecho de defensa."

TAN 316-2014 Con lugar. Falta de prueba. No había certeza de la devolución de los documentos originales al agente aduanero. Estos le estaban siendo solicitados a ese agente. La sanción aplicable hubiera sido de un mes.

ARTÍCULO 232.- Sanción de las infracciones administrativas. Las infracciones administrativas se penarán con la suspensión del auxiliar de la función pública aduanera o con multa expresada en pesos centroamericanos, la cual se cancelará con su equivalente en moneda nacional en los bancos del Sistema Bancario Nacional autorizados al efecto. **En caso de suspensión, el auxiliar no podrá iniciar operaciones nuevas, sino solamente concluir las iniciadas a la fecha en que se le notifique la resolución respectiva.**

Si las conductas tipificadas en esta Ley configuran también una infracción establecida en la **legislación tributaria**, se aplicarán las disposiciones especiales de esta Ley, siempre que dichas conductas se relacionen con el incumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras o de los deberes ante la autoridad aduanera. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 232.-Sanción de las infracciones administrativas. Las infracciones administrativas se penarán con la suspensión del auxiliar de la función pública aduanera o con multa expresada en pesos centroamericanos, la cual se cancelará con su equivalente en moneda nacional en los bancos del Sistema Bancario Nacional autorizados al efecto. En caso de suspensión, el auxiliar no podrá iniciar operaciones nuevas, sino solamente concluir las iniciadas a la fecha en que se le notifique la resolución respectiva."

Artículo 233.- Rebaja de la sanción de multa. Las sanciones de multa previstas en esta ley se reducirán cuando se cumplan los supuestos y las condiciones que se enumeran a continuación:

- a) Cuando **el infractor repare voluntariamente los incumplimientos, las omisiones o las insuficiencias en que haya incurrido**, sin mediar ninguna acción de la autoridad aduanera para obtener esta reparación, la sanción de multa se le rebajará en un setenta y cinco por ciento **(75%)**. El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar el incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del ochenta por ciento **(80%)**.
- b) Cuando el infractor **repare su incumplimiento después de la actuación de la autoridad aduanera, pero antes de la notificación del acto de apertura del procedimiento determinativo de ajuste** de la obligación

tributaria, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá **autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento**, en cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por ciento (55%).

- c) Cuando, **notificado el acto de apertura del procedimiento determinativo** de ajuste de la obligación tributaria y **dentro del plazo establecido para presentar alegatos y pruebas**, el infractor **acepte los hechos planteados en el acto de apertura y subsane el incumplimiento**, la sanción se reducirá en un veinticinco por ciento (25%). El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del treinta por ciento (30%). **En estos casos, el infractor deberá comunicar a la autoridad aduanera los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago, respecto a la obligación tributaria como a la sanción, según corresponda.**

Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como **actuación de la Administración toda acción conducente a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, notificada al sujeto pasivo.**

También, se reducirá la sanción cuando en el ejercicio del **control inmediato se haya notificado un acto de ajuste** de la obligación tributaria aduanera y el infractor **acepte los hechos planteados y subsane el incumplimiento dentro del plazo previsto para su impugnación**. En este caso, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%). El infractor podrá **autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento**, en cuyo caso la reducción será del cincuenta y cinco por ciento (55%). En estos casos, el infractor deberá comunicar a la autoridad aduanera los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago, respecto a la obligación tributaria como a la sanción, según corresponda.

En el caso de incumplimientos sancionables con **multa que no conlleven un ajuste en la obligación tributaria aduanera**, la sanción se reducirá en un cincuenta y cinco por ciento (55%), cuando el infractor **autoliquide y pague la multa, previo a la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio**. (Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 233.- Rebaja de la sanción de multa. Cuando el infractor repare voluntariamente los incumplimientos, las omisiones o las insuficiencias en que haya incurrido, sin mediar ninguna acción de la autoridad aduanera para obtener esta reparación, la sanción de multa se le rebajará en un setenta y cinco por ciento (75%).”

Legislación conexa

“3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas de un Miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana antes de que la administración de aduanas advierta la infracción, se alienta al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción contra dicha persona.” Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio). Aprobado mediante Ley de N° 9430, del 4 de abril de 2017. Ratificado mediante DE-40342-COMEX de 4 de abril de 2017, Publicado LG de 21 de abril de 2017.

Jurisp.

Adecuación de la sanción administrativa de suspensión de dos días de suspensión como Auxiliar. Concurso Material. Aplicación de la Dirección General de Aduanas, Sala Constitucional 1484-96, Dictamen PGR 437 de 15 de diciembre de 2008. Código Penal, art. 22, TFA-Sala 1, resolución 372-2002-P de 10 horas del 23 de setiembre de 2002, TAN 188-2009, 097-2010.

Criterios jurídicos

Criterio jurídico número DN-014-2017 de 2017 no procede el rebajo de multa en materia de decomisos por ingreso ilegal de mercancías, pues no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 233 LGA.

Artículo 233 bis.- Autoliquidación de sanciones. El sujeto pasivo podrá autodeterminar la multa correspondiente. En este caso, utilizando los medios que defina la Dirección General de Aduanas, podrá fijar el importe que corresponde de acuerdo con la sanción de que se trate y, una vez realizada la autoliquidación, podrá pagar el monto determinado. El sujeto pasivo deberá comunicar a la autoridad aduanera el pago realizado, sin demérito de las facultades de control a cargo de la autoridad aduanera. *(Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

Artículo 234.- Procedimiento administrativo para aplicar sanciones. Cuando la autoridad aduanera determine la posible comisión de una infracción administrativa o tributaria aduanera sancionable con multa, notificará, de forma motivada al supuesto infractor, la **sanción aplicable** correspondiente, sin que implique el retraso ni la suspensión de la operación aduanera, salvo si la infracción produce en el procedimiento un vicio cuya subsanación se requiera para proseguirlo.

El presunto infractor contará con **cinco días hábiles** para presentar sus alegaciones; transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente, si procede.

En el caso de infracciones administrativas sancionables con suspensión, la autoridad aduanera deberá iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 196 de esta ley.

Notificado un acto final que impone la sanción, la persona destinataria del acto podrá interponer en tiempo y forma los recursos señalados en los artículos 198 y siguientes, y 204 y siguientes de esta ley.” *(Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 24 i)-196-231
RLGA 7 n)-533

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

“Artículo 234.- Procedimiento administrativo para aplicar sanciones. Cuando la autoridad aduanera determine la posible comisión de una infracción administrativa o tributaria aduanera sancionable con multa, notificará en forma motivada al supuesto infractor, la **sanción aplicable correspondiente**, sin que implique el retraso ni la suspensión de la operación aduanera, salvo si la infracción produce en el procedimiento un vicio cuya subsanación se requiera para proseguirlo.

El presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus alegaciones, transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente, si procede.

En el caso de infracciones administrativas sancionables con suspensión, la autoridad aduanera deberá iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 196 de esta Ley.”

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 234.- Procedimiento administrativo para aplicar sanciones. Cuando la autoridad aduanera determine la posible comisión de una infracción administrativa o tributaria aduanera sancionable con multa, notificará en forma motivada, al supuesto infractor, la **sanción aplicable** correspondiente sin que implique el retraso o la suspensión de la operación aduanera, salvo que la infracción produzca un vicio en el procedimiento, cuya subsanación se necesite para proseguirlo.

El presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus alegaciones. Transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente si procede.

En el caso de infracciones administrativas sancionables con suspensión, la autoridad aduanera deberá iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 196 de esta ley.”

SECCIÓN II

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Concordancia

Ver art. 153 RLGA: “Artículo 153.-Suspensión o cancelación. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que deba cumplir la empresa de entrega rápida, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento, la Dirección General, podrá suspender o cancelar la aplicación del **procedimiento simplificado** regulado en la Sección VII, Capítulo VII, Título VII de este Reglamento, **sin perjuicio de las sanciones que correspondan.**”

Ver sanciones incluidas en la Ley 8707 del 03/02/2009. Creación del Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes Distribuidores de Bebidas Alcohólicas, La Gaceta No. 44 del 04/03/2009

Artículo 235.- Multa de cien pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de cien pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

- a) Omita presentar la declaración aduanera de las mercancías que lleve consigo, si se trata de **viajeros**.
- b) Omita distribuir entre los pasajeros las **fórmulas oficiales de declaración aduanera**, si se trata de empresas que prestan el servicio de transporte internacional de **personas**.
- c) No mantenga actualizado, en los registros establecidos por la autoridad aduanera, el **registro de firmas autorizadas** para sus operaciones.
- d) Como **receptora de mercancías**, no brinde las **facilidades necesarias** al funcionario aduanero que realice el reconocimiento; incluso, por solicitud suya, deberá permitir la apertura, el agrupamiento y la disposición de los bultos para el reconocimiento.
- e) No identifique, estando obligada, la maquinaria, el equipo y los repuestos, según las disposiciones que emita al efecto la Dirección General de Aduanas.
- f) Como **transportista aéreo**, no entregue separados del resto de la carga los **bultos de entrega rápida**.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 2-30 f)-79-42 f),g)-87-115-211-236 k)-266
RLGA 113-369

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 235.- Multa de cien pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

- a) Omita presentar o transmitir, con la declaración aduanera, cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta ley o sus reglamentos para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso o la salida de mercancías del territorio aduanero.

- b) *Presente o transmita los documentos, la información a que se refiere el inciso anterior o la declaración aduanera con errores u omisiones o los presente tardíamente.*
- c) *Omita presentar la declaración aduanera de las mercancías que traiga consigo, si se trata de viajeros.*
- d) *Omita distribuir, entre los pasajeros, las fórmulas oficiales de declaración aduanera, si se trata de empresas que prestan el servicio de transporte internacional de personas.*
- e) *No transmita, antes del arribo de la unidad de transporte, mediante transmisión electrónica de datos u otros medios autorizados, los datos relativos a las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte destinados al país, si se trata de un transportista aduanero.*
- f) *No rotule, en forma visible con la razón social, las plantas, oficinas o instalaciones donde opera la empresa, si es obligatorio rotularlas.*
- g) *No presente, al ingreso o salida del territorio nacional, las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte a la autoridad aduanera, dentro del plazo exigido en la legislación respectiva.*
- h) *No mantenga actualizado el registro de firmas autorizadas para sus operaciones, en los registros establecidos por la autoridad aduanera.*
- i) *Como depositaria, no brinde las facilidades necesarias al funcionario aduanero que realice el reconocimiento; inclusive, por solicitud suya, debe permitir la apertura, el agrupamiento y la disposición de los bultos para el reconocimiento.*
- j) *Estando obligada, no identifique la maquinaria, el equipo y los repuestos según las disposiciones que, al efecto, emita la Dirección General de Aduanas.*
- k) *Mediante acción u omisión, contravenga las disposiciones del régimen jurídico aduanero siempre que no cause perjuicio fiscal o no esté sancionada con una sanción mayor.”*

Artículo 236.- Multa de quinientos pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

1. No reexporte o reimporte mercancías o las reexporte o reimporte hasta ocho días después del vencimiento del plazo legal, cuando sea obligatorio de conformidad con el régimen o la modalidad aduanera aplicado. **Si se ha rendido garantía y procede su ejecución, la multa será de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, salvo si no está tipificado con una sanción mayor.**
2. Estando autorizada para realizar un **transbordo o un tránsito de mercancías por vía marítima o aérea, incumpla las medidas de seguridad y las demás condiciones establecidas por la autoridad aduanera.**
3. No asigne personal para la carga, la descarga o el transbordo de mercancías, si se trata de un **transportista aduanero.**
4. Incumpla las normas referentes a ubicación, estiba, depósito, **vigilancia**, seguridad, protección o **identificación** de **mercancías, vehículos y unidades de transporte.**
5. Omita avisar las posibles causas, por los medios que autorice la autoridad aduanera, dentro del término de las **veinticuatro horas** siguientes al conocimiento de la ocurrencia de **pérdidas, hurtos, robos, daños u otra circunstancia que afecte las mercancías** bajo su custodia, de cualquier **empresa o auxiliar de la función pública aduanera receptora de mercancías.**

6. En su calidad de persona física o jurídica, pública o privada que, por cualquier título, **reciba, manipule, procese o tenga en custodia mercancías sujetas al control aduanero, incluso las empresas de estiba y autoridades o empresas portuarias y aeroportuarias, se encuentre responsable patrimonial por mercancías que, a pesar de haber sido recibidas, no se hayan encontrado.**
7. Como responsable de la recepción, la manipulación, la conservación, el **depósito** o la **custodia** de mercancías sujetas al control aduanero, permita que sufran daños, faltantes o pérdidas.
8. En su calidad de **transportista aduanero**, inicie el tránsito o presente los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.
9. **No coloque, estando obligado, dispositivos de seguridad** en las unidades de transporte cargadas para el tránsito hacia un puerto aduanero, una vez autorizado el levante de las mercancías.
10. No transmita, **antes del arribo de la unidad de transporte**, electrónicamente ni por otros medios autorizados, los datos relativos a las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte, si se trata de un **transportista aduanero**, o los transmita **incompletos o con errores**; lo anterior con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.
11. Omita transmitir, **antes del arribo de la unidad de transporte**, transmita en forma incompleta o con errores que causen perjuicio fiscal, o transmita fuera de los plazos fijados por esta Ley o sus Reglamentos, la existencia de **mercancías inflamables, corrosivas, explosivas, perecederas o de las que, por su naturaleza, representen peligro para otras mercancías**, personas o instalaciones, con el fin de darles tratamiento especial, si se trata de un transportista aduanero; lo anterior con las salvedades establecidas reglamentariamente.
12. En su calidad de **auxiliar de la función pública**, no transmita a la autoridad aduanera o transmita tardíamente, con omisiones o errores que causen perjuicio fiscal, el detalle de las **diferencias que se encuentren entre la cantidad de bultos u otros elementos de transporte, realmente descargados o transportados**, y las cantidades manifestadas o el detalle de mercancías, bultos u otros elementos de transporte dañados o averiados como consecuencia del transporte o de otra circunstancia que afecte las declaraciones presentadas a la autoridad aduanera o los documentos que las amparan.
13. En su calidad de **transportista aduanero**, no comunique a la autoridad más cercana los accidentes que sufra el vehículo o la unidad de transporte en el transcurso del tránsito aduanero.
14. Estando obligado, omita transmitir a la autoridad aduanera, **en el momento de la recepción de los vehículos y las unidades de transporte, el resultado de la inspección de estos en los términos y las condiciones dispuestos por la presente Ley y sus Reglamentos, o lo transmita en forma tardía, incompleta o con errores que causen perjuicio fiscal.**
15. Omita transmitir, transmita en forma incompleta o transmita con errores que causen perjuicio fiscal a la aduana de control, por vía electrónica, en el plazo y la forma señalados por esta Ley o sus Reglamentos, el reporte del ingreso a sus instalaciones y la salida de ellas de vehículos, unidades de transporte y sus cargas, si se trata de un estacionamiento transitorio.
16. Como **receptor de mercancías**, al recibir los bultos **no deje constancia**, o la deje incompleta o con errores que causen perjuicio fiscal, de sus actuaciones y registros **en la declaración o el documento de ingreso**

respectivo, donde consigne los datos en la forma, **el plazo** y las condiciones que esta Ley o sus Reglamentos establecen.

17. Si se trata de un **depositario aduanero o de otro auxiliar obligado**, no transmita a la autoridad aduanera, en los términos ordenados por esta Ley y sus Reglamentos, le transmita **tardíamente** o le transmita con **omisiones o errores que causen perjuicio fiscal**, el **reporte del inventario de los bultos recibidos una vez finalizada la descarga**, incluidas las diferencias que se encuentren entre la cantidad de mercancías, bultos u otros elementos o unidades de transporte manifestados y la cantidad realmente descargada y recibida, **ya sean faltantes o sobrantes, los daños u otra irregularidad que se determine**.
18. En su calidad de **depositario**, incumpla su obligación de transmitir en forma anticipada y a posteriori el reacondicionamiento o reembalaje de los bultos, en los términos y las condiciones establecidos en la normativa aduanera, o realice una **transmisión incompleta** o con **errores que causen perjuicio fiscal**.
19. Si se trata del **consolidador de carga internacional** o de la **empresa de entrega rápida**, no transmita, dentro de los plazos y según las condiciones dispuestas en la normativa aduanera, el **manifiesto de carga consolidada** y los **conocimientos de embarque matriz e individualizados en estos**, tantos como consignatarios registre el documento, los transmita incompletos o con **errores que causen perjuicio fiscal**.
20. En su calidad de **consolidador de carga internacional**, no transmita a la aduana de control, le transmita en forma tardía o con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, **las diferencias encontradas en la operación de desconsolidación de mercancías efectuada en el depósito fiscal o en otro lugar autorizado, respecto de la documentación que las ampara, dentro del plazo de tres horas hábiles contado a partir de la finalización de la descarga o, en este mismo plazo, no comunique la información de los conocimientos de embarque que se deriven del conocimiento de embarque matriz ni el nombre de los consignatarios**.
21. En su calidad de **depositario**, **no concluya la descarga** de la unidad de transporte en el plazo fijado por esta Ley y sus Reglamentos.
22. En su calidad de **empresa de entrega rápida**, no transmita a la aduana de control el manifiesto de entrega rápida ni **cualquier diferencia** en cuanto a la cantidad, la naturaleza y el valor de las mercancías declaradas, **respecto de lo efectivamente arribado o embarcado**.
23. Como **transportista**, **ingrese a los estacionamientos transitorios** unidades de transporte que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u otras de similar naturaleza, así manifestadas por el transportista internacional.
24. Omite presentar o transmitir, **con la declaración aduanera**, cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta Ley o sus Reglamentos, para **determinar** la obligación tributaria aduanera o **demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso de mercancías al territorio aduanero o su salida de él**.
25. Presente o transmita los documentos, **la información referida** en el inciso anterior o la declaración aduanera con **errores u omisiones**, o los presente **tardíamente** o **describa las mercancías de forma incompleta**, **salvo si está tipificado con una sanción mayor**. (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Versión anterior del inciso: *Presente o transmita los documentos, la información referida en el inciso anterior o la declaración aduanera, con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, o los presente tardíamente, salvo si está tipificado con una sanción mayor. (Acción de Inconstitucionalidad Exp. 12-009094-0007-CO de 10/07/2012, Voto 006119-2013 de 8 de mayo de 2013, SIN LUGAR)*

En relación con este inciso, confrontar con “artículo 231.- Aplicación de sanciones...” *Serán eximentes de responsabilidad, los errores materiales sin incidencia fiscal, la fuerza mayor y el caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.”*

26. Transmita por vía electrónica, a la autoridad aduanera o a otra autoridad competente, datos distintos de los consignados en el documento en que se basó la transmisión, salvo si está tipificado con una sanción mayor.
27. Viole o rompa sellos, precintos o marchamos u otras medidas de seguridad colocadas o que la **autoridad aduanera haya dispuesto colocar**, en tanto no exista sustracción de mercancías.
28. Declare erróneamente los cálculos de conversión de monedas, en tanto no constituya una sanción mayor.
29. Venda u obsequie cualquier clase de mercancías que se encuentren a bordo de vehículos que ingresen en el territorio aduanero, en tanto no constituya una sanción mayor.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 30 e)-41 c)-42 b), c)-48 c)-g)-104-105-138-143-152-165-170-179-187, 235 a), b)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 236.- Multa de quinientos pesos centroamericanos. Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:

- a) No reexporte o reimporte mercancías o las reexporte o reimporte fuera del plazo legal, cuando sea obligatorio de conformidad con el régimen o la modalidad aduanera aplicada. Si se hubiera rendido garantía y procediera su ejecución, la multa será de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.*
- b) Estando autorizada para realizar un transbordo o un tránsito de mercancías por vía marítima o aérea, incumpla las medidas de seguridad y demás condiciones establecidas por la autoridad aduanera.*
- c) No asigne personal para carga, descarga o transbordo de mercancías, si se trata de un transportista aduanero o agente aduanero autorizado para declarar el tránsito.*
- d) Incumpla las normas referentes a ubicación, estiba, depósito, seguridad, protección o identificación de mercancías.*
- e) No realice los actos que le corresponden según esta ley y las demás disposiciones legales, empleando el sistema informático, cuando la autoridad aduanera le haya autorizado su código de usuario y clave de acceso y el empleo de ambos sea obligatorio.*
- f) En su calidad de depositario, se encuentre responsable patrimonial por mercancías que no se hubieran hallado a pesar de haber sido declaradas como recibidas.*
- g) Como transportista aduanero o agente aduanero autorizado para declarar el tránsito, no mantenga inscritos los vehículos y unidades de transporte utilizados en el tránsito aduanero.*
- h) Como responsable de la recepción, manipulación, conservación, depósito o custodia de mercancías sujetas al control aduanero, permita que sufran daños, faltantes o pérdidas.*

- i) *En su calidad de transportista aduanero o agente aduanero autorizado para declarar el tránsito, no comunique, a la autoridad más cercana, los accidentes que sufra el vehículo o la unidad de transporte en el transcurso del tránsito aduanero, o presente los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.*
- j) *En su calidad de transportista aduanero o agente aduanero autorizado para declarar el tránsito, no reporte el detalle de las diferencias que se encuentren entre la cantidad de bultos u otros elementos de transporte, realmente descargados o transportados, y las cantidades manifestadas o el detalle de mercancías, bultos u otros elementos de transporte, dañados o averiados como consecuencia del transporte o cualquier otra circunstancia que afecte las declaraciones presentadas a la autoridad aduanera.*
- k) *Como agente aduanero, presente o transmita la declaración aduanera de importación o exportación omitiendo cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta ley o sus reglamentos para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos o la realice con errores o inexactitudes."*

Jurisprudencia constitucional

Acción de inconstitucionalidad número 12-009094-007-CO a las quince horas cinco minutos del día 08 de mayo del año 2013, resolución No. 2013-006119 sin lugar. Contra del inciso 25 del artículo 236 de la Ley General de Aduanas: *"Igualmente, debe recordarse lo explicado supra en el sentido que los datos consignados en las declaraciones aduaneras (incluidos los relacionados con el cálculo de los gravámenes), se tienen como ciertos por parte de la aduana. En razón de ello es que los errores u omisiones que sanciona el inciso 25 del artículo 236 de la Ley General de Aduanas, deben ser multados con rigor, independientemente de las diferencias económicas localizadas en cada caso concreto. La multa encuentra su razón de ser porque al dársele una veracidad casi automática a este tipo de declaraciones aduaneras, cualquier error u omisión en que incurra la persona auxiliar tiene un impacto negativo en la credibilidad y confiabilidad ulterior respecto de esos mismos documentos y de los profesionales que los confeccionan. De ahí que la multa procure evitar errores a futuro que socaven la seguridad jurídica en ese tipo de documentos e informaciones aduaneras. Así las cosas, el daño en la confianza aduanera que se produce con la conducta definida por el inciso 25 del ordinal 236, es suficiente para establecer una multa como la definida en esa misma disposición. Bajo esas premisas, la multa deviene razonable y proporcionada.*

Aunado a ello, la actividad aduanera constituye una función pública encomendada a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participan habitualmente en la gestión aduanera (artículo 28 de la Ley Nº 7557). No se trata simplemente del ejercicio privado de una función pública, sino que, por el contrario, se refiere a una labor de gran relevancia para el país y, por ende, debe ejercerse dentro de las potestades y limitaciones que el ordenamiento jurídico dispone y que son de conocimiento pleno de los sujetos involucrados en la materia. Ergo, la Administración requiere definir obligaciones y deberes para que esas funciones encomendadas a personas particulares se ejecuten de una manera óptima, en aras de resguardar el interés público que se encuentra involucrado. De ahí que el establecimiento de la multa dispuesta en el numeral 236 cuestionado devenga constitucional."

Artículo 236 bis.- Multa de mil pesos centroamericanos. Será sancionado con una multa de mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional:

- a) Quien antes del arribo de la unidad de transporte, no comunique a la aduana la existencia de mercancías inflamables, corrosivas, explosivas o perecederas o de mercancías que, por su naturaleza, representen un peligro para otras mercancías, personas o instalaciones, con el fin de darles un tratamiento especial.

Esta sanción se aplicará por cada unidad de transporte en la que se incumpla esta obligación.

- b) Quien, como **transportista** que declara el ingreso a territorio aduanero de las unidades de transporte y sus cargas, no traslade la mercancía caída en abandono al depósito aduanero que designe la aduana de control, dentro del plazo legalmente establecido.
- c) El **estacionamiento transitorio** que **permita el ingreso** de unidades de transporte con mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas y otras de similar naturaleza, así manifestadas por el transportista internacional.

Esta sanción se aplicará por cada unidad de transporte en la que se incurra en esta conducta.

(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

ARTÍCULO 237.- Suspensión de dos días. Será suspendido por dos días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el **auxiliar de la función pública aduanera** que:

- a) **No comuniqué**, en el plazo correspondiente, cualquier irregularidad respecto de las condiciones y el estado de embalajes, sellos o precintos, cuando le corresponda recibir o entregar mercancías, vehículos o unidades de transporte bajo control aduanero.
- b) **Estando obligado**, incumpla las disposiciones de procedimiento y control emitidas por las autoridades aduaneras, o no mantenga a disposición de esas autoridades los medios de control de ingreso, permanencia y salida de las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte.

Doctrina: “Desde el punto de vista de la prueba, puede ser un **indicio de la presencia de la conciencia de la antijuricidad** el que el infractor no ponga de manifiesto su ignorancia de la norma infringida en los momentos iniciales del procedimiento sancionador (por ejemplo, cuando se efectúa la inspección. No obstante, a lo expresado no puede otorgársele un valor absoluto toda vez que precisamente la complejidad legal requiera de una reflexión y un análisis imposible de efectuar en esos momentos. Entiendo que se trata de una situación que,” Gómez Tomillo, Manuel; Sanz Rubiales, Iñigo “Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Pág. 496 y siguientes.

Ver 236 2): “Estando autorizada para realizar un transbordo o un tránsito de mercancías por vía marítima o aérea, incumpla las medidas de seguridad y las demás condiciones establecidas por la autoridad aduanera.”

- c) Si se trata de un transportista aduanero, **no mantenga inscritos** los vehículos y las unidades de transporte utilizados en el tránsito aduanero.
- d) (Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “Incumpla la obligación de mantener, en perfectas condiciones técnicas y físicas de operación, locales adecuados para la recepción, la descarga, el depósito, la inspección y el despacho de mercancías, vehículos y unidades de transporte, según lo exija la legislación.”⁶
- e) (Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “No reciba el curso de actualización anual, impartido por la Dirección General de Aduanas, si es agente aduanero.”⁷
- f) Como transportista aduanero utilice, para el tránsito aduanero de mercancías, vehículos o unidades de transporte que incumplan las condiciones técnicas y de seguridad.
- g) Como **depositario aduanero**, no mantenga, dentro de la bodega destinada a depósito, un área de al menos doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m²), para el examen previo de las mercancías y/o su verificación física.

En los casos de los incisos b), c), d), f) y g) de este artículo, la suspensión se extenderá hasta que cumpla las respectivas obligaciones”. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 31-35 e)-41 c), 47 a)-48 b), f)-138

⁶ La Ley 8373 en uno de sus artículos reforma este artículo 237 y al transcribirlo deja como estaba el inciso d), no obstante, más adelante la misma Ley lo deroga expresamente.

⁷ La Ley 8373 en uno de sus artículos reforma este artículo 237 y al transcribirlo deja como estaba el inciso e), no obstante, más adelante la misma Ley lo deroga expresamente.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 237.- Suspensión de dos días. Será suspendido por dos días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) No comunique, en el plazo correspondiente, cualquier irregularidad respecto de las condiciones y el estado de embalajes, sellos o precintos, cuando le corresponda recibir o entregar mercancías, vehículos o unidades de transporte bajo control aduanero.*
- b) No mantenga a disposición de las autoridades aduaneras los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías, si se trata de un depositario.*
- c) Incumpla la obligación de mantener locales adecuados para la recepción, la descarga, el depósito, la inspección y el despacho de mercancías, vehículos y unidades de transporte en perfectas condiciones técnicas y físicas de operación, según lo exija la legislación.*
- d) Omita avisar, por los medios autorizados por la autoridad aduanera, el cumplimiento del término de abandono y de la ocurrencia de daños y pérdidas de las mercancías depositadas, si se trata de un depositario.*
- e) No reciba el curso de actualización anual, impartido por la Dirección General de Aduanas, si es agente aduanero.*
- f) Como transportista aduanero o agente aduanero autorizado para declarar el tránsito, utilice, para el tránsito aduanero de mercancías, vehículos o unidades de transporte que incumplan las condiciones técnicas y de seguridad.*

En los casos de los incisos b), c) y f) de este artículo, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las respectivas obligaciones.”

Antecedentes administrativos y judiciales.

TAN 137-2011 de 9 de setiembre de dos mil once, suspensión 2 días para Depositario Aduanero por laborar fuera del horario establecido sin autorización de la Aduana.

TAN- 038-2013 de 15 de febrero de 2013, suspensión 2 días para **Depositario Aduanero por no llenar casilla 41** que indica “Hora y Fecha de salida y Llegada”, específicamente por no consignar la hora de salida de las instalaciones del depositario de las mercancías amparadas a la Declaración Aduanera de Zona Franca. Confirmada en Casación **Sala Primera CSJ RES. 0000954-F-S1-2017** de 17 de agosto de 2017 (Almacén Fiscal del Este).

Sentencia SC 2014 - 001583. Expediente 13-006120-0007-CO. A las dieciséis horas. **Acción de inconstitucionalidad** contra el artículo 237 inciso b) de la Ley General de Aduanas.-. “*Se declara sin lugar la acción interpuesta. 13-6120 / 1583-14. SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADUANERAS. Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 237 inciso b) de la Ley General de Aduanas. No. 7557 del 20-10-95. Manifiesta el accionante que la norma impugnada delega la potestad legislativa de establecer y crear ex novo faltas, infracciones o tipos administrativos en las autoridades aduaneras, por demás, sin establecer límites ni regulaciones básicas a seguir, de suerte que, con fundamento en la norma cuestionada, quedan facultadas las autoridades aduaneras para determinar, vía infra reglamentaria o incluso mediante acto administrativo singular, las conductas típicas merecedoras de una sanción administrativa, tal como la suspensión en el ejercicio de la actividad de los depositarios aduaneros. Además de ello, con base en la norma impugnada a los depositarios aduaneros se les puede imponer la sanción de suspensión tantas veces como incumplimiento a disposiciones de procedimientos y control consideren las autoridades aduaneras o tantas veces como incumplimientos a los medios de control de ingreso, permanencia y salida de las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte establezcan las autoridades aduaneras. Ergo, los depositarios aduaneros pueden ser sancionados acumulativamente y ad infinitum, tantas veces como nuevas disposiciones emitan las autoridades aduaneras, pues de acuerdo con la norma impugnada, cada nueva “disposición” que emitan las autoridades aduaneras sobre procedimiento, control o medios de control de ingreso, permanencia y salida de las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte constituye una nueva infracción, falta o tipo administrativo ante cuya comisión debe imponerse la consecuente sanción de suspensión. En suma, se trata de una ley en blanco, una verdadera renuncia expresa del legislador a su función de legislar y la sustitución ilegítima de este por una Administración Pública que no está democráticamente legitimada. Con base en las consideraciones expuestas en la sentencia se declara sin lugar la acción.” SL*

ARTÍCULO 238.- Suspensión de cinco días. Será suspendido por cinco días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) Estando obligado, **no permita** el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas y registros de costos de producción para la verificación y el **reconocimiento** correspondientes de las mercancías y su destino final.
- b) No transporte las mercancías por las rutas legales autorizadas.
- c) Incumpla la obligación de mantener mercancías únicamente en lugares **habilitados o autorizados**, si se trata de empresas.
- d) Se niegue injustificadamente a recibir las mercancías enviadas por la autoridad aduanera, si es un depositario.
- e) **Destruya mercancías** sin supervisión ni autorización de la autoridad aduanera.
- f) Tratándose de depositarios aduaneros, **no reserven** un área para la recepción y permanencia de las unidades de transporte y sus vehículos, o **no separen, delimiten ni ubiquen las áreas o bodegas destinadas a los servicios de almacén general de depósito o reempaque, distribución y servicios complementarios**, en la forma y las condiciones prescritas por esta Ley o sus Reglamentos.
- g) Si se trata de **depositarios aduaneros**, **no tomen las medidas** necesarias para que las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte **puedan permanecer en las áreas habilitadas hasta que la aduana autorice la descarga**.
- h) Incumpla la obligación de **aportar**, en las condiciones y los plazos que la autoridad aduanera requiera expresamente, la documentación de trascendencia tributaria y aduanera que se le solicite. (NOTA: Ver sanción de reincidencia 241 i))

En los casos de los incisos **a), c), d), e), f), g) y h)** de este artículo, la suspensión se extenderá hasta que cumpla las respectivas obligaciones”. (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 2-24 f)-42 e)-47 a)-48 d)-176-181-48 d)-
RLGA 24 q)-64-192

Acción de inconstitucionalidad No. 2017014250 GASH

“VI.- Conclusión.- El párrafo final del artículo 238 de la Ley General de Aduanas no impone una sanción perpetua, como interpreta el accionante, sino que, la sanción queda sujeta al cumplimiento de las respectivas obligaciones. La medida del tiempo que durará la sanción depende del mismo sancionado, cuando cumpla con la respectiva obligación. Además, puede alegar razones fundadas para el incumplimiento y la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de los auxiliares de la función pública aduanera no es antojadiza por parte de la administración aduanera nacional, sino que responde a la potestad soberana del Estado de vigilar las funciones públicas asignadas a sujetos privados y de hacer efectiva la obligación constitucional de que se paguen los impuestos en forma legal, correcta y justa. Finalmente, la norma impugnada no puede ser analizada en solitario sino que resulta indispensable armonizarla con el resto de la normativa que posibilita alegar alguna eximente de responsabilidad, tal como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 231 de la misma ley. En virtud de todo lo anterior, al no encontrarse inconstitucionalidad alguna, se impone la desestimación de esta acción, tal como en efecto se hace.”

Resolución 41-2013 del TCA Secc. VII GASH Artículo 238 inciso h) Sin lugar

Acción de inconstitucionalidad No. 17-007015-0007-CO que promueve Transporte Internacional GASH S. A., contra artículo 240 último párrafo,” La norma se impugna por no cumplir los requisitos constitucionales para su validez, **en tanto extiende el plazo de la sanción en forma indefinida, lo cual lesiona el artículo 40 de la Constitución Política**. Boletín Judicial del 18 mayo 2017. RES-2017-014250 de las 9:15 horas del 6 de setiembre de 2017. **“...VI. Conclusión.** El párrafo final del artículo 238 de la Ley General de Aduanas no impone una sanción perpetua, como interpreta el accionante, sino que, la sanción queda sujeta al cumplimiento de las respectivas

obligaciones. La medida del tiempo que durará la sanción depende del mismo sancionado, cuando cumpla con la respectiva obligación. Además, puede alegar razones fundadas para el cumplimiento y la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de los auxiliares de la función pública aduanera no es antijudicial por parte de la administración aduanera nacional, sino que responde a la potestad soberana del Estado de vigilar las funciones asignadas a sujetos privados y de hacer efectiva la obligación constitucional de que se paguen los impuestos en forma legal, correcta y justa. Finalmente, la norma impugnada no puede ser analizada en solitario sino que resulta indispensable armonizarla con el resto de la normativa que posibilita alegar alguna eximente de responsabilidad, tal como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 231 de la misma ley. En virtud de todo lo anterior, al no encontrarse inconstitucionalidad alguna, se impone la desestimación de esta acción, tal como en efecto se hace.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas y treinta y siete minutos del veintisiete de julio del dos mil once. Se declara sin lugar la acción interpuesta. Res. Nº 2011-009849. **Acción de inconstitucionalidad** contra los artículos 241 inciso e) y **238 inciso c)**, en la redacción original que a ambos diere la Ley General de Aduanas, Nº 7557. “Por tanto: Se declara SIN LUGAR la acción.” **SL**

Exp: 00-003920-0007-CO, Res: 2000-06926.

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con once minutos del ocho de agosto del dos mil.- **Recurso de amparo** interpuesto por NASSAR PEREZ TOMAS, portador de la cédula de identidad número 1-508-509, a favor de "DHL ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA", cédula jurídica número 3-101-121344; contra la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. **SL**

Art. 238 e) Ver TAN-008-2018. “En los actos de la Administración se citan de manera abundante las normas de la Ley General de Aduanas relacionadas, la condición de depositario y sus obligaciones, pero carente de una relación con los hechos y un análisis de la responsabilidad subjetiva, lo que parece reflejar la imposición de la sanción en aplicación de una responsabilidad objetiva en contra del auxiliar, por el solo hecho de ser auxiliar al determinarse una omisión de entregar información. El supuesto error, se imputa materialmente al **auxiliar de la función pública**, sujeto activo, de eso no existe duda porque es el depositario autorizado, esto lo convierte en el sujeto activo en la norma invocada por la autoridad aduanera, pero ese elemento es valioso para identificar al sujeto infractor, falta demostrar que el sujeto incurrió en el hecho porque “... **haya sido “querido” (doloso) o haya podido “preverse y evitarse” (que pueda existir culpa o imprudencia): “principio de dolo o culpa”...**”, no existe un análisis de la naturaleza del error, en qué consistió y porque es culpable el auxiliar.

Se impone la sanción sin un análisis ni desarrollo que demuestre la responsabilidad subjetiva del inculcado, como bien se indicó en la sentencia transcrita “...**no basta requerir que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacerse responsable de él; es preciso que el hecho haya sido “querido” (doloso) o haya podido “preverse y evitarse” (que pueda existir culpa o imprudencia): “principio de dolo o culpa”.** No está demostrado si la conducta, la acción o la omisión que se imputa, se pudo prever o evitar, no se analiza el error en sí mismo, que tipo de error se atribuye, material o de hecho, vencible o invencible, el hecho mismo que genera el error, las posibilidades que tenía el auxiliar para no incurrir en la equivocación que se le imputa, los medios puestos a su disposición que le permitían evitar incumplir, todo esto se podía completar con su condición de auxiliar de la función pública. Retomando lo señalado por **Alejandro Nieto, solo se pueden castigar conductas, hechos, “principio de responsabilidad por el hecho”.**

Todo lo anteriormente expuesto respalda la falta de una adecuada y precisa imputación de los cargos al recurrente, generándose a su vez una inconsistente e insuficiente motivación que le ha provocado indefensión a partir del inicio mismo del procedimiento sancionatorio, donde dicha actuación vicia de nulidad todo el procedimiento, por lo que no puede este Colegiado ante tales insuficiencias, dejar de advertir el vicio grave en las presentes actuaciones del A quo y declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del acto inicial inclusive.”

TAN 263-2014 art. 238 inc. h)

El texto original del artículo era el siguiente:

“**ARTÍCULO 238.- Suspensión de cinco días.** Será suspendido por cinco días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) Estando obligado, no permita el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas y registros de costos de producción para la verificación y el reconocimiento correspondientes de las mercancías y su destino final.
- b) No transporte las mercancías por las rutas legales autorizadas.
- c) Incumpla la obligación de mantener mercancías únicamente en lugares habilitados o autorizados, si se trata de empresas.
- d) Se niegue injustificadamente a recibir las mercancías enviadas por la autoridad aduanera, si es un depositario.
- e) Destruya mercancías sin supervisión ni autorización de la autoridad aduanera.

En los casos de los incisos a) c) d) y e) de este artículo, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las respectivas obligaciones.”

ARTÍCULO 239.- Suspensión de un mes. Será suspendido por un mes del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) **No conserve o no convierta**, por el plazo, en la forma y por los medios establecidos en esta Ley o sus Reglamentos, los documentos ni la información de los regímenes en que ha intervenido o no los haya conservado aun después de ese plazo y hasta la finalización del proceso de que se trate, en los casos en que conozca la existencia de un asunto pendiente de resolver en la vía judicial o administrativa. La sanción será de un mes por cada declaración aduanera y sus anexos respectivos, que no haya sido conservada por el plazo, en la forma y por los medios ordenados en esta Ley o sus Reglamentos, acumulables hasta por un máximo de diez años.
- b) *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “Transmita, por vía electrónica, a la autoridad aduanera u otra autoridad competente, datos diferentes de los consignados en el documento en que se basó la transmisión, cuando de ella se derive un perjuicio grave”.*
- c) Estando autorizado para depositar, transportar o declarar el tránsito de mercancías **peligrosas** para la salud humana, animal o vegetal o el medio ambiente, **no cumpla con las medidas de seguridad fijadas en la legislación o por las autoridades competentes.**
- d) Como **agente aduanero**, incumpla sus obligaciones sobre la sustitución del mandato, el encargo, la transmisión o la transferencia de derechos.
- e) Tratándose de una empresa que opere bajo la modalidad de **despacho domiciliario industrial**, incumpla las disposiciones del artículo 123 inciso a), o presente con errores y omisiones, la declaración, los documentos o la información.
- f) *(Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “No mantenga oficinas abiertas en la jurisdicción de las aduanas en que preste sus servicios, si se trata de un agente aduanero”.*
- g) Estando obligado a acreditar ante la autoridad aduanera el domicilio de sus oficinas centrales o sucursales, las traslade o las cierre sin notificarlo previamente a esa autoridad.
- h) En su calidad de **agente aduanero**, incumpla el mandato otorgado por su comitente en perjuicio de este último o de la autoridad aduanera.
- i) **No indique** a la Dirección General de Aduanas, bajo declaración jurada rendida ante notario público, el lugar donde se custodian los documentos originales y la información fijados reglamentariamente, para los regímenes en que intervenga.
- j) Si se trata de un **receptor de mercancía**, no proporcione el servicio de recepción de vehículos y unidades de transporte, en los términos y las condiciones establecidos en esta Ley o sus Reglamentos.
- k) *(Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015) ARTÍCULO 2.- Se adiciona un inciso k) al artículo 239 de la Ley N.º 7557, Ley General de Aduanas y sus reformas, de 20 de octubre de 1995, para que en adelante se lea así: "Artículo 239.- Suspensión de un mes [...] k) En*

calidad de depositario aduanero preste servicios complementarios sin autorización de la autoridad aduanera.

En los casos de los incisos a), c), e), g), h), i) y j) de este artículo, la suspensión se extenderá hasta que cumpla las respectivas obligaciones”.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 30 b)-33-35 a)-c)-43 f)-47 c)-86-106-123 a)
RLGA 116-239

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 239.- Suspensión de un mes. Será suspendido por un mes del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) No conserve, durante un plazo de cinco años, los documentos y la información de los regímenes en que ha intervenido o no los haya conservado aún después de ese plazo y hasta la finalización del proceso de que se trate, en los casos en que conozca la existencia de un asunto pendiente de resolver en la vía judicial o administrativa.*
- b) Transmita, por vía electrónica, a la autoridad aduanera u otra autoridad competente, datos diferentes de los consignados en el documento en que se basó la transmisión, cuando de ella se derive un perjuicio grave.*
- c) Estando autorizado para depositar, transportar o declarar el tránsito de mercancías peligrosas para la salud humana, animal o vegetal o el medio ambiente, no cumpla con las medidas de seguridad fijadas en la legislación o por las autoridades competentes.*
- d) Como agente aduanero, incumpla sus obligaciones sobre la sustitución del mandato, el encargo, la transmisión o la transferencia de derechos.*
- e) Tratándose de una empresa que opere bajo la modalidad de despacho domiciliario industrial, incumpla las disposiciones del artículo 123 inciso a), o presente con errores y omisiones, la declaración, los documentos o la información.*
- f) No mantenga oficinas abiertas en la jurisdicción de las aduanas en que preste sus servicios, si se trata de un agente aduanero.*
- g) Estando obligado a acreditar ante la autoridad aduanera el domicilio de sus oficinas centrales o sucursales, las traslade o las cierre sin notificarlo previamente a esa autoridad.*
- h) En su calidad de agente aduanero, incumpla el mandato otorgado por su comitente en perjuicio de este último o de la autoridad aduanera.*

En los casos de los incisos a), c), e), f), g), y h) de este artículo, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las respectivas obligaciones.”

D.E. Nº 41527-S-MINAE Reglamento General para la Clasificación y Manejo de **Residuos Peligrosos**, LG 23 enero 2019

ARTÍCULO 240.- Suspensión de tres meses. Será suspendido por tres meses del ejercicio de su actividad aduanera ante la autoridad aduanera, el agente aduanero que:

- a) Intervenga en algún despacho aduanero sin la autorización de quien legítimamente puede otorgarla.*
- b) (Derogado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.) El texto derogado indicaba: “Sea responsable en una infracción tributaria aduanera, siempre y cuando la diferencia entre el monto de los tributos pagados o declarados sea superior en un cincuenta por*

ciento (50%) a los tributos que debieron declararse o pagarse. Esta sanción no será aplicable cuando la diferencia haya sido causada por una clasificación arancelaria inexacta, producto de una diferencia de criterio en la interpretación de la clasificación aplicable, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación hayan sido correctamente declaradas a la autoridad aduanera.”

- c) Omite declarar o declare con inexactitud alguna información que produzca una diferencia superior al veinte por ciento (20%) entre el monto de los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional o salvaguardias y los que debieron declararse o pagarse, cuando los declarados o pagados sean inferiores a los debidos.
- d) **Haga constar el cumplimiento de una regulación no arancelaria** que dé lugar al despacho de las mercancías sin haberse cumplido realmente el requisito.

LGA 86-87-242
RLGA 239

ARTÍCULO 241.- Suspensión de un año. Será suspendido por un año del ejercicio de su actividad aduanera ante la autoridad aduanera, el **auxiliar de la función pública aduanera** que:

- a) Permita que, al amparo de su autorización, actúe, **directa o indirectamente**, un agente aduanero que esté **suspendido** de su ejercicio o **un tercero, cualquiera sea su carácter**, si se trata de un **agente aduanero**. (TAN. 204-2017. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las quince horas con tres minutos del trece de julio del dos mil diecisiete. Sin lugar, tercero.)
- b) Omite declarar o declare con inexactitudes alguna información que dé lugar al despacho de mercancías de importación o exportación prohibida, si se trata de un **agente aduanero**.
- c) **Deje de cumplir algún requisito para actuar como auxiliar de la función pública aduanera por más de tres meses**, sin causa justificada. En este caso, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las respectivas obligaciones.
- d) **No lleve los registros de sus actuaciones en la forma y condiciones que establezca la autoridad aduanera; no realice las inscripciones o los respaldos en los registros, los efectúe extemporáneamente, los destruya o no los ponga a su disposición cuando se le hayan solicitado en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.**
- e) **Estando obligado, no mantenga, no presente o no envíe los registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas**, así como los inventarios, estados financieros e informes sobre su gestión o sobre las mercancías **admitidas** importadas, exportadas, reimportadas, reexportadas, recibidas, depositadas, retiradas, vendidas u objeto de otras operaciones, o sobre el uso o destino de las mercancías beneficiadas con exención o con franquicia o que hayan ingresado libres de tributos, o lo efectúe por medios o formatos no autorizados.
- f) **Entorpezca o no permita la inspección aduanera** de las mercancías, los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas o la **verificación de los documentos o autorizaciones que los amparen**.
- g) En su calidad de agente aduanero persona física, **no ejerza la correduría aduanera en forma independiente** o represente a más de un agente aduanero persona jurídica, salvo las excepciones reguladas por reglamento.

- h) Si se trata de un **receptor de mercancía**, no lleve los registros de los vehículos ni de las unidades de transporte y sus cargas, **ingresados y retirados, según los formatos y las condiciones que establezca la autoridad aduanera.**
- i) Habiendo sido sancionado por la comisión de la falta tipificada en el inciso **h) del artículo 238** de esta Ley, **reincida en dicha conducta.**

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

LGA 29-30-31-42 a)-48 a)-86-87-219-220

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas y treinta y siete minutos del veintisiete de julio del dos mil once. Se declara sin lugar la acción interpuesta. Res. Nº 2011-009849. Acción de inconstitucionalidad contra los artículos **241 inciso e)** y 238 inciso c), en la redacción original que a ambos diera la Ley General de Aduanas, Nº 7557. “Por tanto: Se declara SIN LUGAR la acción.” **SL**

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 241.- Suspensión de un año. Será suspendido por un año del ejercicio de su actividad aduanera ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:

- a) Permita que, al amparo de su autorización, actúe, directa o indirectamente, un agente aduanero que esté suspendido de su ejercicio o un tercero, cualquiera sea su carácter, si se trata de un agente aduanero.*
- b) Omita declarar o declare con inexactitudes alguna información que dé lugar al despacho de mercancías de importación o exportación prohibida, si se trata de un agente aduanero.*
- c) Deje de cumplir algún requisito para actuar como auxiliar de la función pública aduanera por más de tres meses, sin causa justificada. En este caso, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las respectivas obligaciones.*
- d) No lleve los registros de sus actuaciones en la forma y condiciones que establezca la autoridad aduanera; no realice las inscripciones o los respaldos en los registros, los efectúe extemporáneamente, los destruya o no los ponga a su disposición cuando se le hayan solicitado en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.*
- e) Estando obligado, no mantenga o no envíe los registros e informes sobre su gestión o sobre las mercancías importadas, exportadas, reimportadas, reexportadas, recibidas, depositadas, retiradas u objeto de otras operaciones a las autoridades aduaneras correspondientes o lo efectúe por medios o formatos no autorizados.*
- f) Entorpezca o no permita la inspección aduanera de las mercancías, los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas o la verificación de los documentos o autorizaciones que los amparen.”*

SECCIÓN III INFRACCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS

Artículo 242- Infracción tributaria aduanera. Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa de dos veces los tributos dejados de percibir, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal **superior a quinientos pesos centroamericanos y no constituya delito ni infracción administrativa sancionable con suspensión** del auxiliar de la función pública aduanera. *(Reformado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

“ARTÍCULO 242.- Infracción tributaria aduanera. Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una **multa equivalente al valor aduanero de las mercancías**, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un **perjuicio fiscal superior a cien pesos centroamericanos** y no constituya delito ni infracción administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera. **(Primer párrafo declarado inconstitucional 2015, SALA CONSTITUCIONAL resolución número 2015-011079 de las 10:31 horas del 22 de julio de 2015, Bol. Judicial 163 de 21 de agosto de 2015)**

Los casos comprendidos en los **artículos 211 y 214 de esta Ley**, en los cuales el valor aduanero de las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, serán considerados infracción tributaria aduanera y se les aplicará una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías”.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 242.- Infracción tributaria aduanera. Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa de tres veces el monto de los tributos evadidos, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause perjuicio fiscal mayor de cien pesos centroamericanos y no constituya delito o infracción administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera, .

En los casos comprendidos en los artículos 211, 212, 214, y 215, en que el valor aduanero de las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, serán considerados infracción tributaria aduanera y se aplicará una sanción de tres veces el monto de los tributos evadidos.”

Disposiciones administrativas y jurisprudencia posterior a la Acción de Inconstitucionalidad. Luego dejadas sin lugar ante la resolución del TAN de aplicar el Principio de Reviviscencia.

Circular **CIR-DN-048-2015 de 21 de setiembre de 2015**, uniformidad de la aplicación de la infracción tributaria aduanera establecida en el art. 242 de la LGA, según reforma realizada mediante Ley No. 8373, a la luz de la resolución No. 2015-011079 de la Sala Constitucional. Confrontar con posición del TAN sobre este tema.

Sala Constitucional. Gestión posterior presentada en la acción de inconstitucionalidad No. 12-007735-0007-CO, contra el artículo 242 de la Ley General de Aduanas. *“Alega el accionante que el Tribunal Aduanero Nacional aún no resuelve su caso conforme la sentencia dictada en este expediente. Señala la Sala que esta acción de inconstitucionalidad tuvo por objeto conocer la conformidad de una norma de orden legal con la Constitución Política, pero no lo casos concretos de aplicación de esa norma. No procede que, en esta vía, el Tribunal se pronuncie sobre un caso concreto. Mucho más improcedente es que esta Sala le prescriba a una instancia administrativa cómo debe resolver un caso pendiente. Si el interesado no estuviera de acuerdo con lo resuelto, deberá impugnarlo con los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para tales efectos. No ha lugar a la gestión formulada.”*

Artículo 242 bis.- Otra infracción administrativa. Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al **valor aduanero de las mercancías**, las conductas establecidas en el artículo **211** de esta ley, siempre que el **valor aduanero** de las mercancías **no supere los cinco mil pesos centroamericanos** o su equivalente en moneda nacional, **aunque con ello no cause perjuicio fiscal y no configure las modalidades de contrabando fraccionado o defraudación fiscal fraccionada.** (Ley No. 9328 de 19 de octubre de 2015, publicada Alc. 94 a La Gaceta 220 de 12 de noviembre de 2015)

Versión anterior de la norma.

“Artículo 242 bis.- Otra infracción administrativa. Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una **multa equivalente al valor aduanero de las mercancías**, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero de las mercancías **no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos** o su equivalente en moneda nacional, **aunque con ello no cause perjuicio fiscal.** (Adicionado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

JURISPRUDENCIA:

10-3292-0007-CO, Acción de Inconstitucionalidad. Mario Fernando Vargas Zeledón, 04-03-10, SANCIONES ADUANERAS, -Artículo 242 de la Ley General de Aduanas. No. 7557 y sus reformas. La norma establece una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías que se importan, en los casos en donde se cause, a juicio de la administración, perjuicio. Considera el recurrente que la sanción resulta confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad. Número de Expediente: 10-003292-0007-CO, Fecha Entrada: 05/03/2010, ESTADO al 13 de abril de 2010: Ter. rechazo fondo desde 24/03/2010

2012-03640, Acción de Inconstitucionalidad. Sin lugar. Recurso de Amparo base, Exp: 10-015669-0007-CO, Res. N° 2014009890, 9 hs. 5 minutos del 27 de junio de 2014. Sin lugar.

Criterios jurídicos

Criterio jurídico número DN-014-2017 de 2017 no procede el rebajo de multa en materia de decomisos por ingreso ilegal de mercancías, pues no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 233 LGA.

TÍTULO XI

CAPÍTULO ÚNICO Valor aduanero de mercancías

El título original era: “**ÓRGANO NACIONAL DE VALORACIÓN Y VERIFICACIÓN ADUANERA**”

(Corregido por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

ARTÍCULO 243.- Verificación de precios. La administración aduanera será la responsable de establecer los sistemas idóneos de control para verificar los precios y otros rubros consignados en las facturas que amparan las mercancías importadas en Costa Rica.

LGA 57-251
RLGA 43-44

ARTÍCULO 244.- Creación. Créase el Órgano nacional de valoración y verificación aduanera, dentro de la estructura administrativa del Servicio Nacional de Aduanas. Será el encargado de verificar, controlar, investigar, recuperar y recopilar la información, y de los demás asuntos relacionados con la valoración aduanera de las mercancías.

RLGA 19 y ss.

Artículo 245.- Funciones. *(Derogado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

El texto derogado indicaba:

“Artículo 245.- Funciones. El órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera controlará la información relativa al precio de las mercancías, por intermedio de casas de importación, marcas, referencias, número de serie, modelos y cualquier otra indicación. Sus funciones básicas serán las siguientes:

- a) Verificar el cumplimiento de las normas de valoración aduanera.
- b) Recopilar la información y analizar los elementos necesarios para la determinación correcta del valor aduanero.
- c) Crear y administrar bases de datos sobre valoración aduanera.
- d) Analizar y evaluar las declaraciones del valor aduanero; además, efectuar las inspecciones, auditorías e investigaciones necesarias.
- e) Mantener actualizada la información sobre los precios de mercancías y otros rubros para la correcta valoración aduanera; para ello, será válido el mecanismo de búsqueda electrónica por medio de la red Internet, revistas especializadas, órganos homólogos de gobiernos extranjeros y entes internacionales especializados en materia aduanera.
- f) Promover, con gobiernos de otros países e instituciones internacionales oficiales en materia aduanera, el intercambio de información y capacitación.
- g) Brindar atención especial en cuanto a la base de datos de precios y valores nacionales e internacionales de los productos y las mercancías con declaratoria sensible, por parte del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios.

Existirán el registro y el análisis obligatorio de valor de las mercancías o productos de origen agrícola, sensibles para la producción nacional, que tengan alta incidencia e impacto económico y social". (Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

"ARTÍCULO 245.- Funciones. El Órgano nacional de valoración y verificación aduanera controlará la información relativa al precio de las mercancías, por intermedio de casas de importación, marcas, referencias, número de serie, modelos y cualquiera otra indicación. Sus funciones básicas serán las siguientes:

- a) Verificar el cumplimiento de las normas de valoración aduanera.*
- b) Recopilar la información y analizar los elementos necesarios para la correcta determinación del valor aduanero.*
- c) Crear y administrar bases de datos sobre valoración aduanera.*
- d) Analizar y evaluar las declaraciones del valor aduanero; además, efectuar las inspecciones, auditorías e investigaciones necesarias.*
- e) Mantener actualizada la información sobre precios de mercancías y otros rubros para la correcta valoración aduanera.*
- f) Promover el intercambio de información y capacitación con gobiernos de otros países e instituciones internacionales oficiales en materia aduanera."*

Artículo 246.- Registro de importadores. Los importadores habituales deberán registrarse ante la **Dirección General de Aduanas**, donde se les asignará un número de registro. En el registro de importadores se consignarán, por lo menos, los siguientes datos: el nombre, la dirección, el número de cédula jurídica -si se trata de personas jurídicas-, el número de la cédula de identidad, el número de pasaporte o cualquier otra identificación -si se trata de una persona física-, así como las personerías jurídicas y los registros mercantiles correspondientes.

Deberán registrarse, por cada uno de ellos, las modalidades de importación realizadas; por tanto, se llevará un control separado de los internamientos definitivos y de los efectuados en tránsito o redestino.

Los importadores estarán obligados a suministrar a la autoridad aduanera las listas de precios y los catálogos de las mercancías importadas, así como toda la información y los documentos que permitan establecer los valores aduaneros correctos. *(Reformado por 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)*

LGA 24 o)

CNPT 128

(Anteriormente había sido reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

****REFERENCIA: (Ley N° 8707 del 4 de marzo de 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44, del 4 de marzo de 2009, crea el Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes, Distribuidores o Vendedores de Bebidas Alcohólicas) ** Agregado el 14 de Setiembre del 2015. Gaceta número 179.**

20181218 Decreto Ejecutivo 41411-S RTCR: 494-2018. TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES. ROPA USADA. REGISTRO Y OBLIGATORIEDAD DE SANITIZACIÓN "5. REGISTRO DE IMPORTADORES 5.1 *A fin de poder realizar las importaciones a través del sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, todo importador de prendas de vestir usadas, debe registrarse ante la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud."*

Artículo 2°- Prohibiciones. *Se prohíbe la importación de calzado usado y ropa íntima usada, según se describen éstos en los incisos 4.1, 4.4, 4.5, 4.9 de la presente normativa. De igual forma queda prohibida la comercialización y donación de los productos antes indicados, que se encuentren dentro del territorio nacional. Todos estos productos deberán ser destruidos mediante incineración, el coprocesamiento o el envío a un relleno sanitario, lo cual será llevado a cabo por el importador según se indica en el artículo 6.2.3, informando de cada destrucción al funcionario designado por la Dirección del Área Rectora de la Salud territorialmente competente."*

“ARTÍCULO 246.- Registro de importadores

Los importadores habituales deberán registrarse ante el órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera, donde se les asignará un número de registro. En el registro de importadores se consignarán, por lo menos, los siguientes datos: el nombre, la dirección, el número de cédula jurídica -si se trata de personas jurídicas-, el número de la cédula de identidad, el de pasaporte o cualquier otra identificación - si se trata de una persona física-, así como las personerías jurídicas y los registros mercantiles correspondientes.

Deberán registrarse por cada uno de ellos, las modalidades de importación realizadas; por tanto, se llevará un control separado de los internamientos definitivos y de los efectuados en tránsito o redestino.

Los importadores estarán obligados a suministrar a la autoridad aduanera las listas de precios y los catálogos de las mercancías importadas, así como toda la información y los documentos que permitan establecer los valores aduaneros correctos”.

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 246.- Registro de importadores. Los importadores habituales deberán registrarse ante el Órgano nacional de valoración y verificación aduanera, donde se les asignará un número de registro. En el registro de importadores, se consignarán, por lo menos, el nombre, la dirección, el número de cédula jurídica -si se trata de personas jurídicas-, el número de la cédula de identidad, el pasaporte o cualquier otra identificación -si se trata de una persona física-, las personerías jurídicas y los registros mercantiles correspondientes.

Los importadores están obligados a suministrar a la autoridad aduanera las listas de precios, los catálogos de las mercancías importadas, toda información y documentos que permitan establecer los valores aduaneros correctos.”

Artículo 247.- Obligación de archivos (Derogado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto derogado indicaba:

“ARTÍCULO 247.- Obligación de archivos. Los agentes aduaneros deberán mantener, en sus archivos, por un plazo no menor de cinco años, copia de las cédulas jurídicas, personerías y demás documentos necesarios para la declaración aduanera de sus clientes”.

LGA 35

ARTÍCULO 248.- Obligaciones de los importadores. Además de las obligaciones establecidas en la legislación especial de valoración aduanera, los importadores deberán consignar, en el reverso de la factura comercial, bajo fe de juramento, que ese documento es original, corresponde a la importación amparada en él y el precio anotado es real y exacto. Esta **declaración jurada** sólo podrá firmarla la persona que ostente la representación legal de la persona jurídica y, si se trata de personas físicas, el mismo importador.

En el caso de que la administración aduanera compruebe que los datos expresados en la factura son falsos, **estará obligada** a presentar la **denuncia** correspondiente ante el Ministerio Público.

LGA 25 e)
RLGA 318

Artículo 249.- Requerimientos. (Derogado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto derogado indicaba:

“ARTÍCULO 249.- Requerimientos. Para el desempeño de las funciones del Órgano nacional de valoración y verificación aduanera, el Ministerio de Hacienda proporcionará la infraestructura informática y tecnológica para conformar y actualizar una base de datos y la infraestructura de telecomunicaciones en el nivel nacional, a fin de interconectar las diferentes oficinas aduaneras con la base nacional de datos”.

Artículo 250.- Impugnación. (Derogado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

El texto derogado indicaba:

“ARTÍCULO 250.- Impugnación

Los datos que suministre y utilice el Servicio Nacional de Aduanas estarán sujetos a los medios de impugnación que establece la ley”.

LGA 198-204

“TÍTULO XII

(Mediante Ley No. 8013 de 18 de agosto de 2000 se adicionó un nuevo Título XII y se corrió la numeración.)

VALOR ADUANERO DE MERCANCIAS IMPORTADAS”

(Eliminado por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.) Esa ley dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO 6.- Se efectúan las siguientes correcciones a la Ley N.º 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas:

- 1) Se modifica el nombre del título XI que se leerá: “Valor aduanero de mercancías”.*
- 2) Se suprime el título XII, Valor Aduanero de Mercancías Importadas; por consiguiente, los artículos del 251 al 265 bis, inclusive, pasarán a formar parte del título XI.*
- 3) Se corrige la numeración del título XIII que se leerá: “título XII, Disposiciones finales”.*

Artículo 251.—Normativa aplicable en materia de valoración aduanera. Para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas o internadas, estén o no exentas o libres de derechos arancelarios o demás tributos a la importación, Costa Rica se regirá por las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, así como por las del presente título y la normativa nacional e internacional aplicable.

-PROTOCOLO AL CONVENIO LEGISLACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL VALOR ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS ANEXO "B" DEL CONVENIO SOBRE EL RÉGIMEN ARANCELARIO Y ADUANERO CENTROAMERICANO, Ley No. 7984 de 3 de febrero de 2000

-Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Ley No. 7475 de 24 de diciembre de 1994 la Asamblea Legislativa ratificó el Acta que recoge los Acuerdos de la Ronda Uruguay, suscrita en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, Alcance No. 40 a La Gaceta No. 245 de 26 de diciembre de 1994.

LGA 57-189-243-265

Ley 6879 de 21 de julio de 1983, reformada por Ley 6946 de 13 de enero de 1984.

Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Ley No. 6826 de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas. 13 (DEROGADA)

(VER ACTUALMENTE LEY I.V.A. Y SU REGLAMENTO)

Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Decreto Ejecutivo No. 14082-H de 29 de noviembre de 1982. 19, 40 (DEROGADO) VER REGLAMENTO A LA LEY I.V.A.)

Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, Ley No. 4961 de 10 de marzo de 1972, reformada por Ley No. 6820 de 3 de noviembre de 1982, Ley No. 6955 de 24 de enero de 1984, Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992. 10

Reglamento a la Ley de los Impuestos Selectivos de Consumo, Decreto Ejecutivo No. 14617-H de 10 de junio de 1983. 13, 26

RLGA

Decreto Ejecutivo No. 28976-H de 27 de setiembre de 2000, La Gaceta No. 196 del 12 de octubre del 2000 (Formulario a la Declaración del Valor en Aduanas y su instructivo de llenado), Decreto No. 29128-H de 8 de diciembre de 2000, La Gaceta _____ puso en vigencia y modifica el Decreto No. 28976-H. (DEROGADOS POR CAUCA Y RECAUCA IV)

Valoración de vehículos automotores:

Decretos Ejecutivos 27265-H de 24 de enero de 2001, La Gaceta 27 de 7 de febrero de 2001; 29346-H de 2 de marzo de 2001, Alcance 22 a La Gaceta 47 de 7 de marzo de 2001; 29367-H, de 7 de marzo de 2001, La Gaceta 49 de 9 de marzo de 2001; 29555-H de 16 de mayo de 2001, La Gaceta 110 de 11 de junio de 2001.

Gastos de Transporte y Seguro:

Circular ONVVA-008-2007 de 27 de julio de 2007 Valor y monto del transporte

Directriz No. DIR0-ONVVA-004-2009 del 18 de diciembre de 2009 Fletes

Directriz No. DIR-ONVVA-004-2009 del 18 de diciembre de 2009 Seguro

Directriz No. DIR-ONVVA-002-2002 del 10 de mayo de 2002 Fórmula para cálculo del Seguro

Jurisprudencia.

Exp. 14-002609-1027-CA, Res. 000270-F-S1-2019, Sala Primera de la CSJ San José, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Proceso de conocimiento, declarado de fallo directo, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por la CORPORACIÓN FINQUERA ROLAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA, rcontra el ESTADO. **Método de valoración de mercancías similares.** “... De una revisión integral, minuciosa y concienzuda del total del acervo probatorio aportado a los autos, no se logra inferir de modo alguno que las papas importadas por la accionante fuesen medianas y de primera calidad, como lo concluyó la Administración Aduanera. Ahora bien, queda claro para esta Sala que el importador no atendió el requerimiento de información planteado por la Administración, lo que pudo obstruir la investigación; no obstante, sin perjuicio de las sanciones que ello podría conllevar, la Autoridad Aduanera bien pudo obtener otras pruebas, como los reportes de calidad agrícola citados, a fin de demostrar fehacientemente la similitud de las papas comparadas, o incluso echar mano a otros métodos de valoración. Uno de los objetivos del Acuerdo de Valoración es precisamente evitar la utilización de valores arbitrarios o ficticios, de ahí la creación de distintos métodos alternativos para que la Administración Tributaria pueda determinar el valor aduanero de las mercancías importadas. Además, la carga de la prueba incumbe a la Administración respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria (artículos 99 y 140 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). Así, esa determinación no puede sustentarse en meras suposiciones, sin respaldo probatorio. Debe, por el contrario, establecerse a partir de la ponderación integral de las pruebas aportadas u obtenidas en el procedimiento de fiscalización. Lo opuesto llevaría a una arbitrariedad en el ejercicio del control tributario, lo que no encuentra respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. En consonancia con lo considerado, los argumentos ventilados por la representación estatal resultan insuficientes para casar el fallo y, por ende, se impondrá el rechazo de la censura. VII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso planteado, de conformidad con el canon 150.3 del CPCA deberá la parte recurrente sufragar las costas generadas con su ejercicio.”

Artículo 252.—Inversión en la aplicación de los métodos de valoración regulados en los artículos 5 y 6 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. La inversión del orden de aplicación de los métodos para valorar, fijados en los artículos 5 y 6 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, prevista en su artículo 4, solo tendrá lugar si la autoridad aduanera accede a la petición que le formule el importador en tal sentido.

Artículo 252 bis: Elementos adicionales para motivar decisiones sobre el valor en aduanas. Podrán servir para motivar las resoluciones en las que se determine el valor en aduana de las mercancías importadas, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, que consten en los expedientes o documentos que dichas autoridades lleven o tengan en su poder, la información disponible en el territorio nacional del valor en aduana de mercancías idénticas o similares, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, terceros o autoridades extranjeras.

La información relativa a la identidad de terceros que importen o hayan importado mercancías idénticas o similares, cuyo valor en aduana se emplee para determinar el valor de las mercancías objeto de resolución, así como la información **confidencial** de dichas importaciones que se utilice para motivar las decisiones en materia de valor y resoluciones, **solo podrán ser reveladas a los tribunales ante los cuales, en su caso, se impugne el acto de la autoridad”**.

Artículo 253.—Utilización del precio unitario de mercancías vendidas después de una transformación. El método de valoración previsto en el segundo párrafo del artículo 5º del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, podrá aplicarse según las disposiciones de la nota interpretativa correspondiente a dicho párrafo, lo solicite o no el importador.

Artículo 254.—Inclusión al valor en aduana de los gastos y costos establecidos en el segundo párrafo del artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Además de los elementos referidos en el **primer párrafo del artículo 8** del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, también formará parte del valor en aduana lo siguiente:

- a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación.
- b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas, hasta el puerto o lugar de importación.
- c) El costo del seguro.

Cuando alguno de los elementos enumerados en los incisos a), b) y c) anteriores, sea gratuito o se efectúe por medios o servicios propios del importador, su valor deberá calcularse conforme a las tarifas normalmente aplicables.

Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías

Circular ONVVA-13-2006 de 9 de octubre de 2006, Declaración del monto de transporte interno en el país de importación, para que se pueda deducir del valor en aduana de las mercancías importadas.

Instructivo de llenado de la Declaración del Valor en Aduanas de las mercancías importadas.

Artículo 255.—Puerto o lugar de introducción. Para los efectos del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se entenderá por “puerto o lugar de importación” el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio aduanero del país de importación.

Artículo 256.—Tratamiento de los intereses. Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas no se considerarán parte del valor en aduana siempre que:

- a) Los intereses se distingan del precio realmente pagado o del precio por pagar de dichas mercancías.
- b) El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito.
- c) El comprador, cuando se le requiera, pueda demostrar que:

- i) Tales mercancías en realidad se venden al precio declarado como precio realmente pagado o por pagar.
- ii) El tipo de interés reclamado no excede del nivel aplicado en el país a este tipo de transacciones en el momento en que se haya facilitado la financiación.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará si el vendedor, una entidad bancaria u otra persona física o jurídica, facilita la financiación. También, se aplicará, si procede, cuando las mercancías se valoren con un método distinto del basado en el valor de transacción.

Artículo 257.—Conversión monetaria. Cuando sea necesaria la conversión de una moneda para determinar el valor en aduana, según el artículo 9º del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se aplicará el tipo de cambio de referencia dado por el Banco Central, vigente a la fecha de aceptación de la declaración aduanera, conforme al artículo 20 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

Para tales efectos, el tipo de cambio será el de venta de la moneda extranjera que se convierta a moneda nacional.

Artículo 258.—Vinculación. Para los efectos del inciso h), párrafo cuarto, artículo 15 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, las personas solo se considerarán de la misma familia, si están vinculadas entre sí por cualquiera de las siguientes relaciones:

- a) Cónyuges.
- b) Ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado.
- c) Hermanos y hermanas.
- d) Tío y tía y sobrino y sobrina.
- e) Suegros y yernos o nueras.
- f) Cuñados y cuñadas.

Artículo 259.—Aplicación del párrafo segundo del artículo 20 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. El Poder Ejecutivo retrasará la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo 1º y del artículo 6º, ambos relativos a la determinación del valor en aduana mediante un valor reconstruido, por un período que no exceda de los tres años contados a partir del 1º de enero del año 2000, de conformidad con las disposiciones del segundo párrafo del artículo 20 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

El Poder Ejecutivo realizará la comunicación formal al Director General de la Organización Mundial de Comercio.

Artículo 260.—Retiro de las mercancías mediante garantía. Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resulta necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador, no obstante, podrá retirar sus mercancías de la aduana si, cuando se le exija, presta una garantía suficiente que cubra el pago de la obligación tributaria aduanera a que puedan estar sujetas, en definitiva, las mercancías.

En la aplicación de esta norma se seguirán las disposiciones del artículo 65 de la presente Ley.

LGA 65

Artículo 261.—Dudas de la Administración de Aduanas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando haya sido presentada una declaración y la autoridad aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de ella, la autoridad aduanera podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada según las disposiciones del artículo 8º del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Si no se recibe respuesta o si una vez recibida la información complementaria la autoridad aduanera aún duda razonablemente acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, con base en las disposiciones del artículo 11 de ese Acuerdo, que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a las disposiciones del artículo 1 de ese Acuerdo. Antes de adoptar una decisión definitiva, la autoridad aduanera comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le concederá una oportunidad razonable para responder. Adoptada la decisión definitiva, la autoridad aduanera la comunicará por escrito al importador, indicándole los motivos que la inspiran.

El importador podrá retirar la mercancía cuando lo solicite, previo cumplimiento de la garantía, conforme al artículo 260 de esta Ley. En tal caso, deberá notificarse al importador que la determinación del valor en aduana no es definitiva, sino provisional, hasta que la autoridad aduanera adopte la decisión definitiva.

El procedimiento que implementará lo dispuesto en el presente artículo y en las normas relacionadas, se regulará mediante reglamento. En el caso de las comunicaciones y notificaciones indicadas, podrán utilizarse medios electrónicos, siempre y cuando los que se implementen salvaguarden el debido procedimiento y brinden tanto seguridad como certeza a los usuarios y la administración.

Artículo 262.—Plazo para pedir explicación y plazo para responder. Para los efectos del artículo 16 del Acuerdo, el importador, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de aceptación de la declaración aduanera, podrá solicitar a la autoridad aduanera una explicación del método según el cual se determinó el valor en aduana de las mercancías. La autoridad aduanera estará obligada a responder, por escrito o de manera electrónica, dentro del plazo de diez días hábiles.

Artículo 263.—Declaración del valor en aduana de las mercancías. Para los efectos de la aplicación del presente título, la importación de mercancías deberá estar amparada en una declaración de valor en aduana de las mercancías. La Dirección General de Aduanas, mediante reglamento, determinará los casos de las importaciones de mercancías que se eximan de este requisito.

Artículo 264.—Responsabilidad por los datos de la declaración del valor en aduana de las mercancías. La declaración de valor en aduana de las mercancías será firmada bajo fe de juramento por el importador, quien

además, será el responsable de la exactitud de los elementos que figuren en ella, de la autenticidad **de los documentos que apoyen esos elementos y de suministrar la información o los documentos necesarios para verificar la determinación correcta del valor en aduana.** Esta declaración solo podrá ser firmada por quien ostente la representación legal de la persona jurídica y, si se trata de personas físicas, por el mismo importador.

El valor declarado en aduana será siempre autodeterminado por el declarante.

El agente aduanero responderá como responsable solidario por el valor aduanero declarado.

La declaración del valor en aduana de las mercancías deberá efectuarse mediante transmisión electrónica, por los medios que autorice la autoridad aduanera”. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

El texto anterior, adicionado por Ley 8013 de 18 de agosto de 2000 l del artículo era el siguiente:

“Artículo 264.—Responsabilidad por los datos de la declaración del valor en aduana de las mercancías. La declaración de valor en aduana de las mercancías será firmada, bajo fe de juramento por el importador, quien será responsable de la exactitud de los elementos que figuren en ella, de la autenticidad de los documentos que apoyan esos elementos y de suministrar la información o los documentos necesarios para verificar la determinación correcta del valor en aduana. Esta declaración solo podrá ser firmada por la persona que ostenta la representación legal de la persona jurídica y, si se trata de personas físicas, por el mismo importador.

El valor en aduana declarado será siempre autodeterminado por el importador.

La declaración del valor en aduana de las mercancías deberá efectuarse mediante transmisión electrónica, por los medios que autorice la autoridad aduanera.”

Artículo 265.—Término de valor en aduana de las mercancías importadas. Todo artículo de la presente Ley referido al concepto “valor aduanero” debe entenderse como “valor en aduana de las mercancías” de conformidad con el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.”

Artículo 265 bis.- Elementos que también permiten rechazar el valor de transacción La autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, con base en los métodos secundarios de valoración, regulados en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, cuando:

- a) Detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades:
 - i) No lleve contabilidad, no conserve o no ponga a disposición de la autoridad la contabilidad o parte de ella, o la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior.
 - ii) Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.
 - iii) Omita los registros de las operaciones de comercio exterior o las altere.
 - iv) Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación, y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para presentar la declaración de que se trate.

- v) Se adviertan, en su contabilidad, otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior.
- vi) No cumpla los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información, que acrediten que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales, en el plazo otorgado en el requerimiento.
- b) La información ó documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos o inexactos, o cuando se determine que el valor declarado no fue definido conforme al artículo 251 de esta Ley.
- c) Se le requiera al importador, en importaciones entre personas vinculadas, dejar constancia de que la vinculación no afectó el precio y él no demuestre dicha circunstancia.

(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CONFRONTAR CON RECAUCA IV. ARTICULO 206. MOTIVOS PARA RECHAZAR EL VALOR DE TRANSACCION.

TITULO XII

(Eliminado por Ley No. 9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)

TÍTULO XII

Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. Ley **9069 de 10 de setiembre de 2012, publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre de 2012, rige a partir del 28 de setiembre de 2012.)**

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I DEFINICIONES

ARTÍCULO 266.- Definiciones. Para la aplicación de esta ley, se establecen las acepciones siguientes:

ARRIBO: Llegada de vehículos y unidades de transporte a un puerto aduanero. Obliga a presentarlos a la autoridad aduanera para ejercer el control aduanero de recepción.

AUTORIDAD ADUANERA: **Funcionario del Servicio Nacional de Aduanas** que, en razón de su cargo y en virtud de la competencia otorgada, ejecuta o aplica la normativa aduanera.

BULTO: Unidad utilizada para contener mercancías. Puede consistir en cajas, fardos, cilindros y demás formas de presentación de las mercancías, según su naturaleza.

CERTIFICADO DIGITAL: Documento firmado electrónicamente por el prestador de servicios de certificación que vincula a un firmante unos datos de verificación de firma y confirma su identidad.

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Título representativo de mercancías, que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa al consignatario de ellas. Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de porte.

DESISTIMIENTO: Renuncia voluntaria al procedimiento aduanero propio del régimen solicitado, libremente manifestada por el declarante.

DESPACHO ADUANERO: Conjunto de operaciones y actos necesarios para cumplir con un régimen aduanero; concluye con el levante o la disposición de las mercancías.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Mecanismos tales como precintos, sellos o marchamos aduaneros que se colocan en las unidades de transporte o forman parte estructural de ellas, de acuerdo con las normas de construcción prefijadas de forma tal que no pueda extraerse o introducirse ninguna mercancía sin dejar huella visible de fractura o ruptura.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE: Envoltura, empaque, paleta y otros dispositivos protectores de las mercancías que previenen daños posibles durante la manipulación y el transporte de las mercancías.

EMBARQUE Y DESEMBARQUE: Proceso mediante el cual se cargan o se descargan las unidades de transporte en las naves o los vehículos.

ESTACIONAMIENTOS TRANSITORIOS: Área autorizada y debidamente delimitada en la que se pueden depositar temporalmente las unidades de transporte y sus cargas con dispositivos de seguridad, a fin de solicitar un régimen aduanero para las mercancías.

EXAMEN PREVIO: Inspección o reconocimiento de mercancías bajo supervisión aduanera, efectuado por el consignatario o el agente aduanero que lo representa, con el propósito de declarar correctamente la información o los datos exigibles para el despacho de las mercancías.

EXENCIÓN: Dispensa temporal o definitiva de pago de los tributos a la importación o exportación de mercancías.

FACTURA COMERCIAL: Documento expedido conforme a los usos y las costumbres comerciales, justificativo de un contrato de compraventa de mercancías o servicios extendido por el vendedor a nombre y cargo del comprador.

FIRMA ELECTRÓNICA: Resultado de obtener, mediante mecanismos o dispositivos, un patrón, que biunívocamente se asocie a una persona física o jurídica y a su voluntad de firmar.

FLETADOR: Transportista que debe entregar al transportista las mercancías objeto del contrato de transporte terrestre, marítimo o aéreo, a bordo de la nave.

FRANQUICIA: Exención total o parcial de los derechos e impuestos de importación otorgados a las mercancías cuando se importan en determinadas condiciones por una persona o fin determinado.

GESTIÓN ADUANERA: Conjunto de actividades y acciones que realiza el Sistema Aduanero Nacional en ejercicio de sus atribuciones, facultades, obligaciones y deberes, establecidos por el régimen jurídico aduanero para obligar a cumplir los preceptos normativos aduaneros y brindar el servicio a los usuarios.

MANIFIESTO DE CARGA: Documento emitido por el responsable de transportar las mercancías; contiene la descripción de los bultos u otros elementos de transporte de cualquier clase a bordo del vehículo excepto los efectos postales y los de tripulantes y pasajeros.

MANUALES OPERATIVOS: Conjunto sistemático de disposiciones dictado por la Dirección General de Aduanas. Regula la forma como deben desarrollarse los procedimientos y el ejercicio de las funciones a cargo del personal aduanero.

MENAJE DE CASA: Bienes **nuevos** o **usados** que, sin ser equipaje, se utilizan normalmente para comodidad o adorno de una casa.

MERCANCÍA: Objeto susceptible de ser apropiado y, por ende, importado o exportado, clasificado conforme al arancel de aduanas.

RÉGIMEN JURÍDICO ADUANERO: Conjunto de normas legales y reglamentarias aplicables a las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte objeto de comercio internacional, así como a las personas que intervienen en la gestión aduanera.

ÓRGANO ADMINISTRADOR DE UN RÉGIMEN: Entidad u órgano distinto de la autoridad aduanera, designado por ley para administrar un régimen de carácter aduanero.

PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: Persona física o jurídica, pública o privada, que expide certificados o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.

PUERTO ADUANERO: Lugar designado por la autoridad aduanera para el arribo de mercancías en tráfico marítimo, aéreo o terrestre.

RECARGOS O CARGAS: Imposiciones accesorias de carácter fiscal que se adicionan a la obligación tributaria aduanera. Con excepción de las multas, en esta categoría se incluyen los intereses moratorios y ocasionalmente otros servicios que preste la autoridad aduanera y los gastos ocasionados por el transporte o el depósito de las mercancías.

RECEPTOR DE MERCANCÍAS: Auxiliar de la función pública o no, autorizado para recibir mercancía objeto de control aduanero, bajo los regímenes aduaneros de perfeccionamiento activo y/o zona franca.

REEXPORTACIÓN: Salida, una vez cumplidas las formalidades y obligaciones impuestas por un régimen aduanero, de mercancías anteriormente internadas, sin que hayan consumado su importación definitiva.

RUTAS LEGALES HABILITADAS: Vías públicas de empleo obligatorio para el tránsito aduanero de las mercancías. Las definirá el reglamento o la autoridad aduanera, según el caso.

SISTEMA INFORMÁTICO: Sistema de información asistido por computadoras.

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS: Intercambio de datos entre entidades utilizando medios eléctricos, magnéticos, ópticos, microondas, ondas de radio y similares.

UNIDAD DE TRANSPORTE: Compartimiento total o parcialmente cerrado, acondicionado en especial para contener mercancías para uso reiterado sin manipulación intermedia de carga, con un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos, destinado a facilitar el transporte de mercancías; con dispositivos que faciliten la manipulación y otras estructuras especialmente concebidas para transportar mercancías que,

por su naturaleza o características, no pueden utilizarse en espacios cerrados, conforme a las normas técnicas reglamentarias.

VEHÍCULO: Cualquier medio automotor de transporte de personas, carga o unidades de transporte. Para los efectos de esta ley, un vehículo con compartimiento de carga se considerará como unidad de transporte.

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

CAUCA	4-16-20
LGA	2-4-5-6-7-24 c)-42 c), g)-45-79-80-83-84-91-103 y ss.-145-
Código de Comercio	473
RLGA	315 a 317

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 266.- Definiciones. Para la aplicación de esta ley, se establecen las acepciones siguientes:

ARRIBO: Llegada de vehículos y unidades de transporte a un puerto aduanero. Obliga a presentarlos a la autoridad aduanera para ejercer el control aduanero de recepción.

AUTORIDAD ADUANERA: Funcionario del Servicio Nacional de Aduanas que, en razón de su cargo y en virtud de la competencia otorgada, ejecuta o aplica la normativa aduanera.

BULTO: Unidad utilizada para contener mercancías. Puede consistir en cajas, fardos, cilindros y demás formas de presentación de las mercancías, según su naturaleza.

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Título representativo de mercancías, que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa al consignatario de ellas. Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de porte.

DESISTIMIENTO: Renuncia voluntaria al procedimiento aduanero propio del régimen solicitado, libremente manifestada por el declarante.

DESPACHO ADUANERO: Conjunto de operaciones y actos necesarios para cumplir con un régimen aduanero; concluye con el levante o la disposición de las mercancías.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Mecanismos tales como precintos, sellos o marchamos aduaneros que se colocan en las unidades de transporte o forman parte estructural de ellas, de acuerdo con las normas de construcción prefijadas de forma tal que no pueda extraerse o introducirse ninguna mercancía sin dejar huella visible de fractura o ruptura.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE: Envoltura, empaque, paleta y otros dispositivos protectores de las mercancías que previenen daños posibles durante la manipulación y el transporte de las mercancías.

EMBARQUE Y DESEMBARQUE: Proceso mediante el cual se cargan o se descargan las unidades de transporte en las naves o los vehículos.

ESTACIONAMIENTOS TRANSITORIOS: Área autorizada y debidamente delimitada en la que se pueden depositar temporalmente las unidades de transporte y sus cargas con dispositivos de seguridad, a fin de solicitar un régimen aduanero para las mercancías.

EXAMEN PREVIO: Inspección o reconocimiento de mercancías bajo supervisión aduanera, efectuado por el consignatario o el agente aduanero que lo representa, con el propósito de declarar correctamente la información o los datos exigibles para el despacho de las mercancías.

EXENCIÓN: Dispensa temporal o definitiva de pago de los tributos a la importación o exportación de mercancías.

FACTURA COMERCIAL: Documento expedido conforme a los usos y las costumbres comerciales, justificativo de un contrato de compraventa de mercancías o servicios extendido por el vendedor a nombre y cargo del comprador.

FLETADOR: Transportista que debe entregar al transportista las mercancías objeto del contrato de transporte terrestre, marítimo o aéreo, a bordo de la nave.

FRANQUICIA: Exención total o parcial de los derechos e impuestos de importación otorgados a las mercancías cuando se importan en determinadas condiciones por una persona o fin determinado.

GESTIÓN ADUANERA: Conjunto de actividades y acciones que realiza el Sistema Aduanero Nacional en ejercicio de sus atribuciones, facultades, obligaciones y deberes, establecidos por el régimen jurídico aduanero para obligar a cumplir los preceptos normativos aduaneros y brindar el servicio a los usuarios.

MANIFIESTO DE CARGA: Documento emitido por el responsable de transportar las mercancías; contiene la descripción de los bultos u otros elementos de transporte de cualquier clase a bordo del vehículo excepto los efectos postales y los de tripulantes y pasajeros.

MANUALES OPERATIVOS: Conjunto sistemático de disposiciones dictado por la Dirección General de Aduanas. Regula la forma como deben desarrollarse los procedimientos y el ejercicio de las funciones a cargo del personal aduanero.

MENAJE DE CASA: Bienes nuevos o usados que, sin ser equipaje, se utilizan normalmente para comodidad o adorno de una casa.

MERCANCÍA: Objeto susceptible de ser apropiado y, por ende, importado o exportado, clasificado conforme al arancel de aduanas.

RÉGIMEN JURÍDICO ADUANERO: Conjunto de normas legales y reglamentarias aplicables a las mercancías, los vehículos y las unidades de transporte objeto de comercio internacional, así como a las personas que intervienen en la gestión aduanera.

ÓRGANO ADMINISTRADOR DE UN RÉGIMEN: Entidad u órgano distinto de la autoridad aduanera, designado por ley para administrar un régimen de carácter aduanero.

PUERTO ADUANERO: Lugar designado por la autoridad aduanera para el arribo de mercancías en tráfico marítimo, aéreo o terrestre.

RECARGOS O CARGAS: Imposiciones accesorias de carácter fiscal que se adicionan a la obligación tributaria aduanera. Con excepción de las multas, en esta categoría se incluyen los intereses moratorios y ocasionalmente otros servicios que preste la autoridad aduanera y los gastos ocasionados por el transporte o el depósito de las mercancías.

REEXPORTACIÓN: Salida, una vez cumplidas las formalidades y obligaciones impuestas por un régimen aduanero, de mercancías anteriormente internadas, sin que hayan consumado su importación definitiva.

RUTAS LEGALES HABILITADAS: Vías públicas de empleo obligatorio para el tránsito aduanero de las mercancías. Las definirá el reglamento o la autoridad aduanera, según el caso.

SISTEMA INFORMÁTICO: Sistema de información asistido por computadoras.

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS: Intercambio de datos entre entidades utilizando medios eléctricos, magnéticos, ópticos, microondas, ondas de radio y similares.

UNIDAD DE TRANSPORTE: Compartimiento total o parcialmente cerrado, acondicionado en especial para contener mercancías para uso reiterado sin manipulación intermedia de carga, con un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos, destinado a facilitar el transporte de mercancías; con dispositivos que faciliten la manipulación y otras estructuras especialmente concebidas para transportar mercancías que, por su naturaleza o características, no pueden utilizarse en espacios cerrados, conforme a las normas técnicas reglamentarias.

VEHÍCULO: Cualquier medio automotor de transporte de personas, carga o unidades de transporte. Para los efectos de esta ley, un vehículo con compartimiento de carga se considerará como unidad de transporte."

- **Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, Decreto Ejecutivo 41212-MOPT de 10 de julio de 2018, publicado La Gaceta 130 de 12 de julio de 2018.**

Definiciones:

“Agente Naviero: Persona jurídica que por delegación de los armadores, propietarios u operadores es representante de los intereses del armador o empresa naviera y debidamente registrado y reconocido como tal por la autoridad competente.”

“Almacenamiento: son aquellos lugares físicos donde se guardan los diferentes tipos de contenedores por un tiempo determinado.”

“Amarre: es la operación que consiste en asegurar la nave al margen o puesto de atraque mediante espías, o cables, incluyendo todo (sic) los recursos y actividades terrestres necesarios para la provisión de tales servicios.”

“APM Terminals Moín S. A.: en Adelante denominado **APM Terminals, Concesionario, Prestatario del Servicio u Operador Portuario.”**

“Armador: La persona física o jurídica que ejerce actos de explotación de la nave.”

“Arribo forzoso: El arribo de un buque al Recinto Portuario como consecuencia de circunstancias ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada por la Autoridad Competentes.”

“Atraque: Operación mediante la cual se afianza una nave al sitio de atraque, instalando sus espías en las bitas de sujeción de muelle.”

“Autoridad Portuaria: Se considera tal a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 inciso c) de la Ley 3155 del 05 de agosto de 1963.”

“Buque: En todos los puntos de este Reglamento en que se mencione “buque”, se entenderá: Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con propulsión y bandera y está registrado como “fully cellular container ships” según la Organización Marítima Internacional.”

“Calado: penetración del casco del buque en el agua, medida verticalmente entre la quilla y la línea de flotación a proa y/o popa.”

“Capitanía de Puerto: Oficina regional marítima a cargo de un Capitán de Puerto establecida para ejecutar parte de las competencias asignadas a la División Marítimo Portuaria por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”

“Carga: todos los materiales de cualquier naturaleza, efectos o bienes que se movilizan en contenedores para su exportación o importación.”

“Carga de exportación: toda carga nacional que sale del país con destino a otro, y que cumple con los trámites correspondientes.

“Carga de importación: toda aquella carga que procede del extranjero y es nacionalizada en el país, o que también proceda de la zona franca, perfeccionamiento activo o por medio de otras modalidades contempladas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.”

“Carga de transbordo: toda carga (máximo 10% salvo autorización de la Administración Concedente) que es descargada provisionalmente a tierra y cargada nuevamente a otra nave o buque diferente, **sin que la carga salga de la terminal.**”

“Carga de tránsito: Toda carga que ingrese a territorio nacional por una aduana y salga del territorio nacional por cualquier otra aduana.”

“Carga especial: carga en contenedores que requiere la utilización de herramientas distintas a las que están instaladas en las grúas.”

“Carga marítima internacional: toda aquella carga que va o viene del exterior por vía marítima.”

“Carga peligrosa: aquella carga calificada como tal, según el Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMDG), de la Organización Marítima Internacional (OMI).”

“Carga refrigerada: mercadería que se moviliza en el puerto que necesita de un ambiente y temperatura controlada para su conservación.”

“Carga viva: es toda aquella carga de origen animal y que se encuentra con vida.

“Terminal Portuaria de Contenedores: es el espacio que ocupan las instalaciones administrativas y el recinto o área portuaria debidamente demarcada y estipulada en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, la Construcción, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.”

“COD: (Change of Destination) cambio de destino de la carga.”

“Consolidación: actividad que permite agrupar diferentes embarques (cargas) de uno o varios consignatarios en un mismo contenedor, para ser transportados bajo un solo documento de transporte.”

“COV: (Change of Vessel) cambio de barco de la carga.

COPRAR: (Container PRE-Arrival message): es un protocolo UN/EDIFACT usado por las compañías navieras para enviar las instrucciones de los contenedores que se van a cargar y descargar.

“Cut-off: Fecha y hora límite en que la carga puede ser recibida por APM Terminals Moín S. A. para ser embarcada en una nave específica.”

“Desestiba: manipulación de los contenedores desde el interior del buque o nave (cubierta o bodega) hasta que sea suspendida sobre la borda del buque o nave el cual es un sub-Proceso de la descarga de los contenedores.”

“EDI: (Electronic Data Interchange) intercambio electrónico de datos. La transferencia de documentos por medios electrónicos de una entidad a otra.”

“Estiba: es la técnica de colocar los contenedores a bordo del buque o nave (cubierta o bodega) el cual es un sub-proceso de la carga de contenedores.”

“ETA: (Estimated Time of Arrival) tiempo estimado de arribo.

“ETB: (Estimated Time of Berthing tiempo estimado de atraque.

“ETD: (Estimated Time of Departure) tiempo estimado de salida.

“FCL: contenedores con carga para un solo consignatario.

“Fuerza mayor: se entenderá que existe un evento de fuerza mayor cuando se produzca un hecho, acto o circunstancia, que por su producción o envergadura sea excepcional, o bien, sea imprevisible, entendido esto último como aquellas circunstancias que el Prestatario del Servicio no pudiese razonablemente anticipar, o que previstas, no han podido resistirse, mediante el ejercicio de un comportamiento razonable para dar cumplimiento a las disposiciones estipuladas en este Reglamento y del Contrato de Concesión.”

“LCL: (Less than Container Load). Contenedores con carga para varios consignatarios.

“Manifiesto de carga: es el documento extendido por la compañía naviera (porteador), o el agente naviero en el puerto o puertos de carga, el cual será entregado a la Autoridad Portuaria y al Prestatario del Servicio que contiene un resumen de la información de los conocimientos del embarque.”

“Nave: construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con propulsión y gobierno. Se incluyen sus partes integrantes y accesorios, tales como aparejos, maquinarias e instrumentos que sin formar parte de la estructura de la misma se emplean en su servicio tanto en el mar, río o lago, como en puerto.”

“OCMI: Organización Consultiva Marítima Internacional.”

“Peso Bruto Verificado (VGM por sus siglas en inglés): masa bruta total de un contenedor lleno, incluyendo el peso de la carga, el embalaje y el peso del contenedor.”

“Puerto: conjunto de obras, instalaciones, organizaciones, que permiten aprovechar un lugar de la costa favorable para realizar las operaciones de intercambio en el tráfico marítimo terrestre; así como atender las necesidades de los medios de transporte y facilitar el desarrollo de las actividades relacionadas con el transporte marítimo internacional.”

“Recinto portuario: zona delimitada y determinada por el MOPT y JAPDEVA, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones portuarias y a la prestación de servicios portuarios, marítimos y no marítimos establecidos en el Contrato de Concesión.”

“Tiempo de espera: comienza al arribo del buque o nave, a la zona de fondeo y termina cuando el práctico aborda el buque.”

“Visita Oficial: acto administrativo que se realiza a bordo del buque o nave, para conceder la libre plática, que permite a los funcionarios públicos determinar si la nave o buque, los tripulantes, los pasajeros y la carga a bordo, cumplen con los requerimientos establecidos en la normativa nacional e internacional, a efecto de autorizar su permanencia en aguas nacionales y el desembarque de tripulantes, pasajeros y carga.”

“Zarpe: Llevar anclas o desarmar y salir a la mar desde el lugar en el que estaba fondeado o atracado.”

“ARTICULO 108. Libre Plática

Toda nave o buque al arribar a la TCM, después de la correspondiente inspección sanitaria, tan pronto como el representante del Ministerio de Salud autorice la Libre Plática y antes de que se inicien las operaciones, debe ser visitada oficialmente por los funcionarios públicos que indica la ley, conjuntamente el Prestatario del Servicio. No se tendrá por recibida la nave o buque si no se han entregado a las Autoridades Nacionales pertinentes y del puerto los documentos requeridos incluyendo la inspección de seguridad del buque o nave, por lo tanto, tampoco se realizarán las operaciones portuarias

JAPDEVA = Autoridad Portuaria Ley 9764 publicada 17 octubre 2019, reforma Ley 3091, Ley Orgánica de JAPDEVA.

CAPÍTULO II COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS

ARTÍCULO 267.- Venta de servicios. La Dirección General de Aduanas podrá vender servicios a particulares, usuarios o auxiliares de la función pública aduanera, en campos propios de su área de especialización, **conforme a lo dispuesto en la Ley de la Contratación Administrativa.**

Concordancias

- Ver CAUCA III

RES-DGA-388-2020 a las 15:50 horas del 6 de agosto de 2020, “Por tanto”

1. “Mantener los servicios a particulares, usuarios y auxiliares de la función pública aduanera, entendidos como servicios de bodega o almacenaje en patios por parte de las aduanas del país, no obstante, desde la vigencia de la presente resolución, estos servicios serán gratuitos.

2. Suspender la venta de servicios a particulares, usuarios y auxiliares de la función pública aduanera, entendidos como emisión de certificados de análisis por parte del Departamento de Laboratorio Aduanero y Estudios Especiales de la Dirección de Fiscalización, por lo que no se brindará más dicho servicio.
3. Dejar sin efecto la resolución RES-SUB-DGA-270-2015 del 08 de setiembre del 2015 y la Circular DNP-048-96 del 03 de setiembre de 1996, así como cualquier otra disposición administrativa del Servicio Nacional de Aduanas que se oponga a lo resuelto en el presente acto administrativo.”

CAPÍTULO III

AGENTES ADUANEROS PERSONAS JURÍDICAS

ARTÍCULO 268 - Régimen jurídico. Las empresas que ostenten la condición de agentes aduaneros personas jurídicas en el momento de publicarse esta ley, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que esta ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al Título III, Capítulos I y II de esta ley, incluyendo las disposiciones relativas a la rendición de garantía.

Estas empresas deberán contar, **por lo menos, con un agente aduanero** en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones aduaneras. Estos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas.

CAUCA 94 a 98
LGA 33-225 b)-226

Artículo 269.- Responsabilidad. Las empresas asumirán, en forma solidaria, la responsabilidad por los hechos y actos de sus dependientes, cuando de ellos se derive un perjuicio tributario.

Una vez que la autoridad aduanera haya determinado el perjuicio tributario, la Dirección General de Aduanas procederá a efectuar el débito correspondiente de la cuenta corriente del agente aduanero persona jurídica, por el monto determinado.

La falta de pago tendrá como consecuencia la **imposibilidad de realizar operaciones aduaneras ulteriores**; lo anterior sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal. Los representantes legales de la persona jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir las obligaciones que no le correspondan al agente aduanero persona física por su relación laboral. *(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

CAUCA 97
LGA 33-226

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 269.- Responsabilidad. Las empresas asumirán la responsabilidad, en forma solidaria, por los hechos y actos de sus dependientes cuando se derive un perjuicio tributario.

Sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal, los representantes legales de la persona jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir con las obligaciones que no corresponden al agente aduanero persona física por su relación laboral.

Las sanciones previstas en esta ley se impondrán a la persona jurídica cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduanas acreditado.”

Artículo 269 bis.- Sanciones. Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a la persona jurídica, cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduanas acreditado. *(Adicionado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)*

CAPÍTULO IV

DEROGACIONES Y MODIFICACIONES

ARTÍCULO 270- Derogaciones. A partir de la vigencia de esta ley, se derogan:

- a) Los artículos 375 a 379 del Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964.
- b) Los títulos II, III, IV, V del Código Fiscal, Ley No. 8, del 31 de octubre de 1885.
- c) La Ley de almacenes de depósitos fiscales, No. 2722, del 20 de febrero de 1961.
- d) La Ley de Defraudación Fiscal, No. 1393, del 29 de noviembre de 1951 y sus reformas.
- e) El párrafo 4 del artículo 64 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988.

Artículo 271.- Modificación. Se modifica el inciso d) del artículo 1 de la Ley No. 6106, del 7 de noviembre de 1977, cuyo texto dirá:

“ (...)

- d) Cuando se trate de **efectos rematados en las aduanas** del país y que no fueron adjudicados, así como de **mercancías o vehículos caídos en comiso** por las autoridades de investigación criminal o de tránsito, la donación o entrega se efectuará por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), **en coordinación con las dependencias depositarias de esos bienes.**

(Reformado por Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.)

El texto original del artículo era el siguiente:

“ARTÍCULO 271.- Modificación. Se modifica el inciso d) del artículo 1 de la Ley No. 6106, del 7 de noviembre de 1977, cuyo texto dirá:

“...

d) Cuando se trate de efectos rematados en las aduanas del país, que no fueron adjudicados en segundo remate, y de mercancías o vehículos caídos en comiso por las autoridades de investigación criminal o de tránsito, la donación o

entrega se efectuará por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social, en coordinación con las dependencias depositarias de esos bienes."

ARTÍCULO 272.- Legislación supletoria. En defecto de norma expresa de la legislación aduanera, son de aplicación supletoria las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y demás legislación tributaria.

LGA 208

ARTÍCULO 273.- Carácter de la ley y vigencia. Esta ley es de orden público y entrará en vigor el mismo día en que entre a regir, para Costa Rica, el Protocolo de modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, del Tratado General de Integración Económica, aprobado mediante Ley No. 7485, del 6 de abril de 1995.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- I. Las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, ostenten la condición de auxiliar de agente de aduana, serán inscritas de pleno derecho como asistentes de agentes de aduanas. Una vez inscritas, quedan obligadas a recibir, anualmente, un curso sobre técnicas y legislación aduanera que impartirá la Dirección General de Aduanas.
- II. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de esta ley, los auxiliares de la función pública aduanera previstos en ella, deberán solicitar su inscripción ante la Dirección General de Aduanas. Transcurrido este plazo, la persona física y jurídica quedará impedida para gestionar ante el Servicio Nacional de Aduanas hasta tanto no tramite su inscripción.
- III. Las reclamaciones y los recursos interpuestos antes de la vigencia de esta ley, se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de interponerlos.

Dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor, deberá constituirse el Tribunal Aduanero Nacional. Hasta tanto, quedan vigentes las funciones del Comité Arancelario y del Comité Nacional de Valoración.

- IV. Los despachos, procedimientos, plazos y las demás formalidades aduaneras, iniciados antes de la entrada en vigencia de esta ley, se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de iniciarlos.

Los procedimientos de ingreso, despacho, depósito y salida de mercancías del Depósito Libre de **Golfito** deberán adecuarse a los procedimientos prescritos en esta ley. VER - Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), DE 42196-H de 12 de febrero de 2020, publicado en Alcance 22 a La Gaceta 30 de 14 de febrero de 2020, modificado por DE 42823-H-MEIC de 1 de febrero de 2021.

- V. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de seis meses contados a partir de su promulgación. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas tomarán las disposiciones administrativas necesarias para establecer los nuevos procedimientos aduaneros de conformidad con esta ley. Hasta tanto no se emitan las nuevas regulaciones, los procedimientos se regirán por las disposiciones vigentes hasta la fecha de promulgación de esta ley.
- VI. El funcionario que, a la fecha de publicación de esta ley, tiene en propiedad el puesto de Director General de Aduanas, conservará los derechos adquiridos hasta tanto finalice su relación laboral con el Estado.

- VII.** Mientras se mantenga vigente el sistema de ventanilla única de comercio exterior, previsto en el artículo 8 de la Ley No. 4081, del 27 de febrero de 1968 y sus reformas, la declaración aduanera a que se refiere el artículo 86 de esta ley será el formulario único de exportación o importación. Este y los demás formularios necesarios para el trámite ante las aduanas, serán emitidos y vendidos a los interesados por el Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 86.
- VIII.** Lo dispuesto en el inciso e) del artículo 247 de la presente ley no afecta las obligaciones ni los derechos adquiridos por los beneficiarios del régimen de admisión temporal. Sin embargo, deberán ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de esta ley, dentro del plazo de seis meses después de su vigencia, conforme a las normas reglamentarias que emita el Ministerio de Hacienda, previa consulta al Consejo Nacional de Inversiones y de Comercio Exterior.
- IX.** Mientras las empresas en la modalidad de tiendas libres de impuestos aludidas en los artículos 134 y 135 de esta ley sean administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, podrán actuar sin intervención de agente aduanero en el despacho de sus mercancías.
- X** Para adquirir los recursos materiales y humanos y contratar los servicios que se requieran para la conformación efectiva del Órgano Nacional de Valoración Aduanera, el Poder Ejecutivo deberá efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes y tomar las medidas necesarias para que, en un plazo de tres meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Órgano Nacional de Valoración Aduanera inicie su funcionamiento.

Asamblea Legislativa.- San José, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Antonio Alvarez Desanti, Presidente.- Alvaro Azofeifa Astúa, Primer Secretario.-Manuel Ant. Barrantes Rodríguez, Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Ejecútese y publíquese.

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.- El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero Acosta.

Dada en la sala de sesiones de la Comisión Permanente Especial de Redacción, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

MARÍA LUISA ORTIZ MESEGUER
PRESIDENTA A.I.
ALBERTO CAÑAS ESCALANTE

MARY ALBÁN LÓPEZ
SECRETARIA A.I.
MARLENE GÓMEZ CALDERÓN

TRANSITORIOS

De la Ley 8373 de 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta No. 171 de 5 de setiembre de 2003, rige a partir del 5 de marzo de 2004.

Transitorio I.—Los depositarios aduaneros tendrán un plazo de nueve meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para cumplir las disposiciones referentes a los medios de seguridad y de control de inventarios tecnológicos, que aseguren la custodia y conservación de las mercancías, los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, que puedan transmitirse remotamente a la aduana.

Transitorio II.—Los depositarios aduaneros tendrán un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para cumplir la obligación de mantener dentro de la bodega destinada a depósito fiscal, un área de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m²), como mínimo, que brinde las facilidades para realizar el examen previo y/o la verificación física de las mercancías.

Transitorio III.—Los consolidadores y transportistas aduaneros dispondrán de un plazo de tres meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para presentar a la Dirección General de Aduanas documento legítimo que compruebe la representación legal de la persona cuando, para efectos aduaneros, actúe a nombre del consolidador de carga y del transportista extranjero.

Transitorio IV.—Los depositarios aduaneros tendrán un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para ampliar a tres mil metros cuadrados (3.000 m²), el área mínima de la construcción destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, salvo si se demuestra de manera fehaciente que por razones de espacio físico, resulta materialmente imposible ampliarla.

Transitorio V.—En los procedimientos y reclamos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley, la fase recursiva se tramitará conforme a lo dispuesto en ella.

En los procedimientos y reclamos en los que se haya interpuesto el recurso de reconsideración o de revisión jerárquica antes de la entrada en vigencia de esta Ley, el recurrente podrá optar, por escrito, a que la tramitación se continúe conforme a lo dispuesto en ella, renunciando al recurso correspondiente.

Transitorio VI.—Los despachos, los procedimientos, los plazos y las demás formalidades aduaneras, iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley, se concluirán según las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados.

Transitorio VII.—Los auxiliares de la función pública aduanera tendrán un mes, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para presentar a la Dirección General de Aduanas la **declaración jurada**, rendida ante notario público, del lugar donde se custodian los documentos originales y la información fijados reglamentariamente, para los regímenes en que intervengan.

Transitorio VIII.—El Ministerio de Hacienda dispondrá de un plazo hasta de seis meses para sustituir a uno de los abogados miembros del Tribunal Aduanero Nacional por un técnico especialista en clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior, según el artículo 206 de esta Ley.